

A scanning electron micrograph (SEM) of coronavirus particles. The image shows several spherical particles with a distinct outer shell and a textured surface, characteristic of coronaviruses. The particles are arranged in a cluster, with some appearing to be attached to a larger, more complex structure. The color palette is primarily green and yellow, with some blue and purple highlights, giving it a scientific and somewhat abstract appearance.

QUINTA EDICIÓN
AMPLIADA

JUAN
TORRES
LÓPEZ

CORONAVIRUS Y ECONOMÍA

Recopilación de artículos
sobre los efectos
económicos de la
pandemia del coronavirus

JUAN TORRES LÓPEZ

Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Sevilla

www.juantorreslopez.com

[@juantorreslopez](https://twitter.com/juantorreslopez)

www.youtube.com/juantorreslopeztv

CORONAVIRUS Y ECONOMÍA

Recopilación de artículos
sobre los efectos económicos
de la pandemia del coronavirus

EDICIÓN GRATUITA

Se permite la reproducción total o parcial de este libro y se
autoriza y agradece que se difunda lo más posible

5ª Edición Ampliada, 24 de mayo de 2020

INDICE

Presentación.....	7
La crisis que viene	8
España, hacia el caos sin remedio (como el resto del mundo)	13
El virus y la economía (1): mucho peor de lo que parece.....	17
El virus y la economía (2): sin respuesta al problema de fondo	21
La Reserva Federal contra el virus: primero los ricos	30
Europa se pega tiros en los pies	33
No es lo que parece, ni tampoco suficiente. Pero había que empezar así	36
Por fin reacciona el BCE, aunque no de la mejor manera	40
Cerrar las bolsas y controlar los movimientos de capital. No hay otra	42
Ocho errores de la Unión Europea y sus soluciones.....	46
Hay alternativas. Pero queda poco tiempo para evitar una catástrofe.....	51
El virus no es nuestro único enemigo	55
De todas las opciones eligen la peor y más cruel: esto es Europa	59
Alemania no aprende de su historia	62
Salvar a las empresas pero garantizando el empleo.....	65
La patronal se equivoca y pone en peligro a las empresas	69
El virus y la economía (3): hacen falta luces largas	73
Como gatos de ocho vidas	79
Holanda, campeona mundial de la evasión fiscal, tiene por qué callar.....	82
Dinero hay, lo que falta es voluntad de salvar a las personas.....	87
Con una rueda no anda un carro: la renta básica no es la única solución	91
La intervención masiva de los bancos centrales tienen truco	94
Unidad y solidaridad.....	98
Improvisar ahora no es un defecto, es la virtud	101
¿Se habrá infiltrado Pablo Iglesias en los gobiernos de Francia y Alemania?	105
Hay que pensar en el pasado mañana	109

Deuda, la otra forma de la esclavitud	112
Europa no se cansa de equivocarse: ¡qué desgracia!	116
Coronavirus: lo que dijimos que iba a pasar ya está pasando.....	120
Nos obligan a preguntarnos si seguir en esta Unión Europea vale la pena	124
Italia, como ejemplo y como advertencia	129
De repente, lo despreciado es lo valioso.....	133
La propuesta de Garicano: más deuda y dar por hecho que España se viene abajo	137
¡Siéntense y hablen!.....	141
¿Quiénes son, de verdad, los adictos a la deuda?	144
Habló el FMI, experto en equivocarse.....	148
No se están haciendo los deberes.....	152
La izquierda y las empresas	155
El virus y la lucha de clases que dicen que ya no existe.....	159
Los obispos dan una patada al gobierno en el culo de los pobres	163
Una apuesta arriesgada que puede salir bien	167
¿Metedura de pata o vía libre para que otros metan la mano?.....	171
Controlar los precios es un arma de doble filo	174
Bienvenido el teletrabajo, cuidado con la explotación laboral	178
Inconscientes.....	182
La cultura, una industria y mucho más que hay que relanzar.....	186
Otra propuesta para financiar la deuda de la covid-19 sin hipotecar el futuro.....	190
Evasión fiscal en tiempos de emergencia: otra vergüenza europea.....	192
Trabajo decente: menos horas, para más gente, en mejores condiciones	195
La Covid-19 y la propiedad de las vacunas y medicamentos	198
Situación límite.....	201
La recuperación no será en "v", ni en "l", ni en "w".....	205
El Tribunal Constitucional alemán tira de la manta	209
La Autoridad no ha aprendido nada.....	213
La montaña del Eurogrupo parió un ratón.....	217
Von der Leyen recuerda a su país que la UE no es una democracia ...	221

Los multimillonarios, la pandemia y nosotros, los payasos	224
La Comisión Europea dinamita el mercado único.....	227
Les urge jugar al golf	230
No hagan caso a José Carlos Díez: recortar ahora el gasto es suicida.....	234
"Hay cosas más importantes que vivir"	238
Alemania y Francia salen de caza	242
Pensar mucho y de otra forma	246
Una modesta proposición al empresariado español.....	249
La gripe española de 1918 y el ascenso del nazismo: tomen nota.....	254

Pensando, sobre todo,
en María, en Juan y en Lina;
en todas las muchas personas más
a las que quiero y que me quieren,
en sus hijos
y en quienes vengan después:
"El futuro ya no es lo que era"
(Paul Valéry)

PRESENTACIÓN

Este es un libro singular. Hace veinte días no pensaba que iba a publicarlo. Contiene los artículos que he escrito en los dos últimos meses para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía mundial y la española. Al ser una recopilación de textos diversos que no han sido concebidos para constituir un libro como tal, tiene repeticiones y lagunas. He decidido, sin embargo, dejarlos tal como los publiqué, realizando tan solo correcciones de estilo y eliminando las erratas que he podido encontrar. Me ha parecido que era más importante ofrecer cuanto antes una publicación completa a quienes suelen leer lo que escribo que no esperar a tener un libro bien diseñado y completamente terminado.

De antemano pido disculpas por los errores o imprecisiones que pueda haber y que iré tratando de corregir en sucesivas entregas.

He decidido incluir al principio dos artículos que no tratan del virus porque los escribí antes de que apareciera. Me parece, sin embargo, que son fundamentales para entender el contexto en el que se produce la pandemia, en el mundo y en España. El primero, se refiere a la crisis que yo ya veía venir en septiembre de 2019 y el segundo a la situación en que yo creía que se encontraba España y el mundo en noviembre de ese mismo año.

Espero que mis reflexiones puedan ser de utilidad. En los momentos complicados, como los que vivimos, es fundamental estar bien informados, aunque no debemos olvidar lo que decía Gertrude Stein: "Todo el mundo recibe tanta información durante todo el día que pierde su sentido común". No lo perdamos y tengamos cuidado porque "la estupidez insiste siempre", como escribió Albert Camus en *La peste*, un libro ahora de desgraciada actualidad. Las palabras o frases subrayados contienen hipervínculos.

Juan Torres López, Sevilla, 24 de maYo de 2020.

Desde hace unos meses hay una convicción generalizada sobre la proximidad de otra crisis (un cambio en la senda actual de crecimiento económico seguido de inestabilidad) y quizá de una nueva fase de recesión económica (crecimiento negativo durante más de dos trimestres consecutivos) que conduciría a otra etapa posterior de nuevas dificultades.

Las diferencias de opinión tienen que ver sobre la fecha en que comenzará a producirse -en 2020 o 2021- pero se da por hecho que vamos a sufrirla, de modo que es muy conveniente estar al tanto y tratar de adelantarse a lo que ya parece inevitable.

A mi juicio, hay algunas señales que indican claramente que la crisis está muy cerca y razones de peso que llevan a pensar que va a ser inevitable y de relevancia, aunque de naturaleza diferente a la que vivimos a partir de 2007-2008. Las comento brevemente a continuación.

Las señales

La economía de China crece al ritmo más bajo de los últimos treinta años. Alemania sólo se ha salvado de entrar formalmente en recesión por unas décimas. La de Estados Unidos lleva el periodo más largo de crecimiento positivo de toda su historia pero, precisamente por ello, cabe esperar que se encuentra a las puertas de un frenazo inmediato; algo que ya anticipan muchos indicadores. El de actividad de la industria química, por ejemplo, está empeorando y eso significa que lo hace toda la economía estadounidense, puesto que los productos químicos se utilizan en todos los sectores. Por otro lado, la rentabilidad de los bonos a un año ha comenzado a superar a la del bono a diez años, y sabemos que cada vez que eso ha ocurrido se ha producido una recesión en Estados Unidos entre 9 y 25 meses después. Si tenemos en cuenta que esas tres economías representan alrededor el 55% del PIB mundial y que también están en una situación muy parecida a otras de las más grandes, como las de Japón o Italia, las de países de menor peso económico pero relevantes (como Argentina, Irán, Venezuela, Singapur, Brasil, México...) o, por otras razones, la de Gran Bretaña... parece claro que la desaceleración de la actividad económica en todo el mundo es un hecho indiscutible.

Las causas de la crisis

Constatar que la economía mundial se desacelera es importante pero lo que realmente puede darnos una idea precisa de lo que se nos viene encima son las causas que han provocado la situación en la que estamos

y las que hacen que la llegada de una nueva crisis sea ya inevitable a estas alturas. En mi opinión, las más importantes son las siguientes.

En primer lugar, la inadecuada resolución de la crisis anterior, provocada por los bancos y los grandes fondos de inversión al corromper el sistema financiero de todo el planeta. La mala costura dejó a la economía mundial “tocada” y registrando una recuperación que en realidad ha sido más aparente que real. En particular, el incremento de la desigualdad y la deuda ha debilitado la demanda de consumo y la de inversión y eso hace que la inmensa mayoría de las empresas, las que no disponen de poder de mercado, tengan más difícil obtener beneficios generando la producción y el empleo que son la base de la estabilidad económica.

En segundo lugar, las políticas de estímulo que hasta ahora han venido aplicando los gobiernos o los bancos centrales, según los casos, han sido insuficientes y ahora, además, están empezando a ser insostenibles. Por un lado, a consecuencia de la deuda, tanto pública como corporativa, está alcanzando niveles cada día más alarmantes. Y, por otro, porque con los tipos de interés prácticamente a cero o incluso negativos, es muy difícil poder utilizarlos con bajadas significativas para impulsar la actividad. En cuanto que el gasto y la financiación se han ido desinflado un poco, las economías se han desacelerado y, si disminuyeran muy significativamente, la situación se pondría todavía más fea.

En tercer lugar, los conflictos comerciales (China-Estados Unidos o Europa-Mercosur, entre otros) y el proteccionismo reaccionario de Trump que está produciendo efectos muy negativos, no sólo sobre las importaciones y exportaciones entre las superpotencias sino también sobre las de otros muchos países. Como no parece que la tensión se vaya a resolver a corto plazo, el daño irá a más; sobre todo, si Trump intensifica el conflicto para usarlo como arma electoralista dando pie a que se extienda a los mercados de divisas. En ese caso, sus efectos serían mucho más potentes, generalizados y dañinos.

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que los sistemas financieros de todo el mundo apenas si se han reformado después de la crisis de 2008 y que siguen en situación de gran fragilidad. Eso hace que su contribución para mejorar las cosas, proporcionando la financiación y apoyo necesarios, esté siendo más escasa justamente a medida que la situación se va complicando.

En quinto lugar, estamos viviendo tensiones geopolíticas que producen gran riesgo e incertidumbre porque pueden derivar inmediatamente en gravísimos problemas económicos y energéticos, algunos globales, si estallan: Brexit, Irán, Venezuela, Turquía...

La última razón pero quizá la más importante es la situación de las bolsas de todo el mundo, al borde de un colapso cuyos efectos serían

demolidores para muchas grandes empresas y para el sector financiero. Y todas las señales apuntan a que eso es lo que se va a producir sin remedio como consecuencia, entre otros factores, de la sobrecapitalización de las más grandes empresas del mundo que vienen utilizando sus beneficios para realizar compras multimillonarias de sus propias acciones; de la especulación a gran escala y a toda velocidad que domina los mercados; y de la gran inestabilidad que lleva consigo la incertidumbre y el riesgo provocados por la coincidencia de todos los factores anteriores que acabo de señalar.

Una crisis distinta a la de 2008

Cuando se oye decir que se aproxima ahora una nueva crisis es lógico que todo el mundo mire hacia atrás y recuerde la de 2007-2008 para preguntarse si será lo mismo. Sin embargo, esta será diferente.

Como se sabe, la anterior tuvo su origen en el sistema financiero que es quien proporciona el dinero, la financiación al resto de la economía. Y esta es como la sangre de un animal o la savia de una planta: si se bloquea, si se contamina o se corrompe, destruye a todo lo que vive de ellas. Cuando eso ocurre, como sucedió cuando los bancos de todo el mundo se dedicaron a producir productos e inversiones financieros que eran pura basura, se origina una crisis que, precisamente por esa razón, se dice que es sistémica, esto es, casi nadie se puede salvar de ella y afecta a todas las economías prácticamente sin excepción.

La crisis que viene ahora no será de este tipo. El estado del sistema financiero mundial sigue siendo muy frágil, como acabo de señalar y por razones que no tengo espacio para comentar aquí, y eso puede dar lugar a que explote en cualquier momento. Pero no parece que eso sea lo que vaya a ocurrir en los próximos meses. O, mejor dicho, me parece mucho más probable que las explosiones se produzcan primero en otros ámbitos del sistema económico.

La nueva crisis no tiene su origen en el sistema financiero sino en el mercado de bienes y servicios. Tampoco vendrá producida sólo por la escasez de demanda que viene dándose desde hace años como consecuencia de la caída de los salarios en todo el mundo (y que en condiciones normales se puede resolver inyectando gasto desde el Estado o medios de pago desde el banco central). En esta ocasión, la crisis es principalmente de oferta real y tiene que ver con dos factores que ya se han destacado y con uno que aparecerá a posteriori.

Los dos primeros son, por un lado, la guerra comercial que he mencionado y sus casi seguras consecuencias sobre los mercados de divisas; y, por otro, la lucha para lograr mejores posiciones en la próxima revolución tecnológica ligada a la robótica, la inteligencia artificial o los nuevos tipos de comunicaciones. El tercero tiene que ver con los problemas que

una crisis así termina siempre generando sobre las fuentes de energía y que ahora se verán agravados al encontrarnos en medio de un cambio climático de excepcional envergadura.

Los peligros que trae la crisis

La ventaja de una crisis de este tipo respecto a una financiera es que no suele ser sistémica y que, por tanto, es posible que algunas economías, sectores o empresas escapen de ella. Pero tiene otros peligros tanto o más letales.

El primero es que la crisis no es de gasto sino de oferta, es decir que parte de un problema en las empresas que no están en condiciones de producir bienes y servicios como requiere el mercado. Eso significa que no bastará para resolverla inyectar gasto. Por mucho que se inyectara no se resuelve nada porque las empresas no están en condiciones de ofertar.

El segundo peligro es que una crisis como la que viene no se puede resolver simplemente haciendo “transfusiones” de dinero desde los bancos centrales (como hizo, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos cuando en sólo seis meses de 2008 creó más dinero para inyectar a los bancos comerciales del que había creado desde 1945). Ni aumentando el gasto público, porque la deuda ya es muy elevada en la inmensa mayoría de las economías, además de que los problemas de la oferta empresarial -como acabo de señalar- no consisten sólo en que no tengan demanda suficiente.

El tercer peligro es que producirá caída de la producción y el empleo y, al mismo tiempo, aumento de precios, de modo que serán necesarias políticas de control justamente contrarias a las que habría que adoptar para reactivar la vida empresarial y la demanda.

El cuarto peligro es que, si la crisis que viene va acompañada, como yo creo que va a ocurrir, de un desorden grave en los mercados de capitales y en las bolsas, lo que sucederá es que un buen número de las mayores empresas del planeta tendrán dificultades que les van a obligar a modificar sus estrategias de todo tipo, produciendo así un incremento generalizado del desorden y de la inestabilidad y, como resultado, nuevos problemas financieros como consecuencia de la falta de liquidez en todos los mercados.

El quinto peligro que a mi juicio acompaña a la crisis que se aproxima es que no se le va a poder hacer frente recurriendo solamente a los instrumentos convencionales de la política económica. Es de nueva ola. Ni la política monetaria ni la fiscal tradicionales nos van a servir: mantener las actuales pautas de distribución que aumentan la desigualdad dificultará cada vez más que se recupere la oferta de las empresas; seguir dando completa libertad a los grandes operadores que acaban con la competencia en los mercados y los controlan a su antojo para primar la

especulación y el despilfarro de recursos producirá ineficiencia e inestabilidad crecientes; no actuar radicalmente sobre el cambio climático y sobre el deterioro ambiental traerá subidas de precios y escasez; y aceptar que la economía de nuestra planeta no tenga más gobierno que el de los intereses minoritarios de los más poderosos en un contexto político de democracias cada vez más debilitadas y vacías de contenido, nos puede sumir en un auténtico caos.

Nos encontramos, en resumen, a las puertas de una crisis que no va a ser sistémica y quizá ni siquiera global, sino que va a manifestarse en detonaciones sucesivas, en diferentes lugares y con magnitud muy diversa. Será una crisis de oferta en el mercado de bienes y servicios que no responderá a las terapias convencionales. Recurrir a los envejecidos paradigmas de conocimiento dominantes para diagnosticarla y aplicarle las medidas políticas de siempre mitigará alguno de sus efectos, pero seguirá dejando abiertas de par en par las ventanas por donde se colarán las siguientes y más peligrosas crisis del siglo XXI: la financiera, la de la deuda, la ambiental y la social. Sobre cómo desarrollar y aplicar un nuevo tipo de análisis y respuestas hablaremos otro día, aunque lo que acabo de señalar creo que da pistas sobre ello.

El titular de este artículo puede parecer exagerado si la palabra "caos" se interpreta en su sentido más coloquial. Pero yo la uso ahora como la utilizaba Immanuel Wallerstein para referirse a la situación en la que va a encontrarse dentro de poco el capitalismo de nuestra época.

El sociólogo estadounidense, fallecido por cierto el pasado mes de agosto, decía que nuestro sistema social y económico se dirige al caos porque desde la gran crisis de los años sesenta y setenta del siglo pasado se viene alejando constantemente de la "normalidad". Una deriva hacia la inestabilidad y el desorden que es consecuencia de la crisis estructural en la que se encuentra desde entonces y que se hace cada vez más visible a nuestro alrededor en conflictos de todo tipo: auge de los populismos, deterioro ambiental, crisis comerciales, de deuda y financieras, extensión de un auténtico imperio de la mentira, debilitamiento de las democracias y las libertades, desigualdad creciente y el clima general de desconcierto y falta de soluciones en el que vivimos últimamente, entre otras manifestaciones.

Curiosamente, son los propios capitalistas quienes más rápidamente se han dado cuenta de ello y los que reclaman con más urgencia medidas de reforma que puedan hacer frente al caos y al desorden generalizado para evitar el colapso del sistema. La declaración que hizo el pasado verano una organización tan a favor del capitalismo como la Business Roundtable, que reúne a los ejecutivos de las doscientas mayores empresas de Estados Unidos, es significativa: reconocía que el "sueño americano" se está "deshilachando" y, en lugar de seguir manteniendo la tesis tradicional de que la gestión empresarial debe tener como único beneficiario al accionista, afirmaba que las grandes empresas deben trabajar "para promover una economía que sirva a todos los estadounidenses". Puede parecer simple retórica, pero es un cambio muy significativo cuando en Estados Unidos se registra la etapa de crecimiento más larga de su historia mientras que la desigualdad, el empleo miserable, el deterioro ambiental y la pobreza crecen sin parar.

Lo que está ocurriendo en todo el planeta es una paradoja: el capitalismo neoliberal está entrando en crisis terminal como consecuencia de su propio éxito como sistema de dominación. Su problema es que ha garantizado la apropiación masiva del beneficio pero a costa de llegar a la exageración e incluso a la aberración, monopolizando la toma de

decisiones y convirtiendo al uso del poder y de la información en la fuente de la ganancia en detrimento de la actividad productiva.

Sin embargo, al concentrar en extremo el poder ha generado una correlación de fuerzas tan favorable a las grandes corporaciones que ha terminado destruyendo los equilibrios básicos e imprescindibles que precisa tener cualquier sociedad si no quiere arder en la hoguera que antes o después prenden quienes se quedan sin nada.

El capitalismo había conseguido mantener el orden social y la legitimación cuando permitía que una parte de los de abajo llegara arriba o, al menos, que se beneficiara también de buena parte de la riqueza que se creaba, y cuando permitió que existieran mecanismos de contrapoder. Ahora bien, asustado por la gran crisis de los años setenta del siglo pasado, apostó tan fuerte y con tanto éxito por el beneficio y la concentración del poder que ha creado un mundo en el que millones personas, o incluso naciones enteras, saben que ya nada tienen que perder porque nada hay que puedan ganar. El capitalismo neoliberal es el del todo o nada, el capitalismo sin ningún tipo de bridas, y eso es lo que ha producido la "anormalidad" creciente que le lleva sin remedio al caos y al colapso.

España está inmersa en esa misma crisis, aunque sus manifestaciones sean diferentes. Y no deja de ser curioso que la única persona que en periodo electoral está hablando de los males del capitalismo y de la necesidad de reformarlo sea la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín: "necesitamos un cambio. El capitalismo ha sobrevivido gracias a que ha sabido adaptarse a los cambios. Ahora debe volver a hacerlo. Y esta intención no debe quedarse en palabras" (aquí: <https://bit.ly/2TqBRoJ>).

Nuestro país, nuestra sociedad y nuestra vida política, también se vienen alejando progresivamente de la "normalidad" para dirigirse inevitablemente hacia el desorden y la inestabilidad permanente por una sencilla razón: las piezas que han venido sosteniendo al sistema dejaron de funcionar bien y son ya incapaces de mantenerlo en situación de equilibrio, mientras que todavía no hay otras de recambio que permitan devolverle el orden y la estabilidad.

En esta última etapa democrática en España, estos últimos se han basado en la existencia de dos grandes partidos, el PP y el POSE, que hace tiempo que perdieron la legitimidad y capacidad necesarias para mantener el sistema en equilibrio, el "orden de escuadra", por utilizar un término militar, que es preciso conservar para que las cosas no se desmanden y el sistema siga funcionando normalmente.

Cuando los dos grandes partidos entraron en crisis, transmitiéndola desde las más altas instituciones del Estado hasta la arquitectura

territorial en la que se basa la cohesión básica de una nación, la propia sociedad creó los antidotos en forma de nuevos movimientos y partidos, pero ninguno de ellos ha sido capaz de constituirse en el cemento de un nuevo estado de cosas. Y así es como, casi desde 2011 y sobre todo desde 2015, nos venimos encontrando en un va y viene continuo que no tiene solución posible porque se está intentando dar solución a los problemas con las mismas piezas, relatos y lógicas que los han provocado. Y es por ello por lo que ninguno de los escenarios posibles que puedan darse tras las elecciones va a poder proporcionar estabilidad.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de izquierda han creado un clima que hace extremadamente difícil, por no decir imposible, que se dé la armonía necesaria para gobernar bien y para poner en marcha con suficiente estabilidad y garantías un programa de transformaciones progresistas para España. Y, como la sociedad está rota y no cohesionada, si finalmente hubiera un gobierno de ese perfil, la derecha constituiría un frente de oposición brutal, dispuesto a incendiar lo que haga falta -incluido el conflicto civil como el que ha avivado irresponsablemente en Cataluña en los últimos años- para acabar con las políticas de izquierdas, por moderadas que sean. Y el posible triunfo del bloque de derechas (no se olvide que Andalucía siempre ha marcado la senda estratégica de la política española) no haría sino reforzar los procesos y problemas que he mencionado y que han provocado la crisis estructural en la que nos encontramos en España y en todo el mundo.

Las fuerzas que nacieron para regenerar la situación política (Ciudadanos y Podemos) han mostrado su total inutilidad. Las novísimas, o son puros embriones como Más País, o peligrosas variantes del fascismo neoliberal que ya proliferan en otros países, como Vox. Y una entente entre el Partido Popular y el PSOE no sólo podría llevar a este último partido a la irrelevancia en la que se encuentran los que hicieron lo mismo en otros países, sino que daría lugar a que el sistema se quedara sin reservas a la primera de cambio, siendo, al final, sólo un paso más y más rápido hacia el caos.

España no tiene arreglo con los actuales sujetos políticos ni con el discurso de espectáculo que se utiliza para plantear los problemas sociales, ni con la lógica de enfrentamiento cainita que se ha generado como subproducto de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, ni con una economía y unos medios de comunicación sometidos sin disimulo al dictado de los grupos oligárquicos.

Eso es grave porque los problemas que tenemos delante de nuestras narices no admiten soluciones de compromiso ni cogidas con hilo. Me refiero, entre otros, a desastres como la corrupción, la mentira generalizada, la ausencia de rendición de cuentas, la constante descalificación del adversario y la consideración como enemigo de quien simplemente no

piensa como nosotros, la venta de España a los grandes intereses económicos, el poder desnudo de las grandes empresas y de los bancos, la desindustrialización, el desmantelamiento de nuestro sistema de servicios públicos y de ciencia y tecnología, la manipulación mediática o, sobre todo, nuestra incapacidad para entender que tenemos algo en común que se llama España y que no puede ser sólo de una parte de los españoles sino de todos por igual.

Es ingenuo creer que las elecciones del 10N puedan proporcionar algún tipo de solución estable. Los problemas sistémicos, estructurales, como los que estamos viviendo, no generan pequeñas heridas sin importancia sino el colapso de los sistemas, y eso es lo que está comenzando a suceder en España y en el mundo. Las viejas orquestas dedicadas a difundir música de siempre no podrán evitarlo. Se necesitan otros proyectos.

Las reformas que anhelan Ana Botín y los grandes dirigentes capitalistas pueden darle de nuevo un aire diferente al capitalismo pero nada ni nadie puede ser contrario a sí mismo, así que están condenadas a dar el mismo tipo de problemas a medio y largo plazo. Hay que hacer frente al gran expolio, de riqueza y de derechos, que han llevado a cabo, al mundo digital que se abre paso, a una naturaleza destrozada y a una sociedad fragmentada, ensimismada y engañada. Y para eso hacen falta otros sujetos y un nuevo tipo de liderazgo, de lenguaje y de discurso político, nuevos mecanismos de representación y de control más genuinos y democráticos, nuevas formas de propiedad, de instituciones de gobierno y de relaciones sociales, liberarnos de la dictadura de la mercancía, una nueva cultura política y un nuevo ejercicio de la ciudadanía, un proyecto socialista, o llámese como se quiera llamar, que quiera y sepa ir más allá del capitalismo. Y, además, la capacidad de saber resolver con justicia y sostenibilidad los problemas del día, cada vez más difíciles de abordar en medio de tantas turbulencias.

EL VIRUS Y LA ECONOMÍA (1): MUCHO PEOR DE LO QUE PARECE

Publicado en LaPolíticaOnLine.es
el 12 de marzo de 2020

¿Un simple virus puede poner en solfa al mundo entero? ¿Una economía mundial tan potente y asentada pueda estar en peligro por esa causa? ¿Se pueden venir abajo las bolsas sólo por el efecto de la propagación de un virus? ¿Qué está pasando y qué puede pasar? ¿Por qué tanta alarma?

Es normal que la mayoría de la gente se haga este tipo de preguntas pero me temo que las respuestas que se están dando son confusas y que generan más dudas de las que resuelven.

Sobre la epidemia, lo cierto es que todavía no se sabe bien cuál puede ser su verdadera magnitud. Parece ser que si se aplican medidas de aislamiento e higiene que eviten su propagación, sobre todo a personas especialmente vulnerables, en muy pocas semanas se podría frenar su expansión sin que se produzca un efecto especialmente dramático. Eso es lo que parece que ha ocurrido en China, gracias a que allí hay un sistema de toma de decisiones muy centralizado, dictatorial, y en donde se han podido aplicar recursos millonarios para aislar a la población. Sin embargo, parece difícil que se pueda actuar del mismo modo en otros países, de modo que no se puede descartar un contagio exponencial que afecte a millones de personas en unas cuantas semanas.

Diferentes estudios realizados en los últimos años sobre los efectos económicos de este tipo de epidemias nos permiten saber algunas cosas. Primero, la seguridad de que lo que está pasando tendrá consecuencias y costes; segundo, su efecto final dependerá del tiempo que dure la alarma y del frenazo de la actividad que produzca; y, tercero, sólo si se actuara con gran ineficacia y se alcanzara un nivel de mortalidad ahora mismo posiblemente impensable (más de 15 millones de muertos al año), quizá se produciría un coste que comenzaría a ser más o menos equivalente al que supuso la última gran crisis.

A pesar de eso, a mí me parece que el peligro al que nos enfrentamos no es la difusión de un virus, ni aunque este fuese mucho más letal de lo que ahora podamos imaginar que llegue a ser el coronavirus en el peor de los casos.

El problema grave que tenemos delante de nuestras narices y al que no le estamos dando la importancia que tiene es la situación en la que se encuentra el sistema en el que vivimos, el capitalismo de nuestros días.

Un sistema complejo que tiene propiedades que le hacen funcionar de un modo muy específico.

Estos sistemas, como el capitalismo, son imprevisibles y permanentemente inestables, y de ahí que sea muy difícil predecir cuál será su evolución. Sí sabemos, sin embargo, algunas cosas importantes sobre su funcionamiento y evolución y, sobre todo, acerca de lo que puede hacer que colapsen.

Sabemos, por ejemplo, que los sistemas complejos como el capitalismo viven al borde o expuestos permanentemente al fallo sistémico y fatal, que tienden constantemente a la crisis y que están siempre en peligro de colapsar, precisamente porque su complejidad no es otra cosa que inestabilidad y desorden.

Al mismo tiempo, también sabemos que la gran probabilidad de fracaso, de fatalidad, que acompaña a cualquier sistema complejo hace que generen en su seno constantes y potentes elementos de protección. Por eso pueden resultar muy seguros a pesar de ser, al mismo tiempo, muy propensos al colapso. Precisamente por eso.

En segundo lugar, conocemos que los sistemas complejos casi nunca colapsan por el efecto de un solo fenómeno. Para que se produzca un fallo total, sistémico, fatal, para que colapsen, es necesario que concurran diferentes fallos al mismo tiempo.

Y es muy importante saber que estos sistemas funcionan siempre en condiciones degradadas, es decir, con muchos fallos latentes que es imposible erradicar, bien porque se desconocen, porque no compensa o porque no se quiere asumir el coste de eliminarlos en todo o en parte.

Las consecuencias de esto que sabemos sobre los sistemas complejos se pueden aplicar a lo que está pasando con la epidemia del coronavirus

En primer lugar, es muy difícil que resulte tan fatal como se está creyendo. El sistema se está defendiendo del “fallo” en su funcionamiento que supone el coronavirus con mecanismos del propio sistema que son seguramente mucho más potentes de los que serían realmente necesarios para evitar que se convierta en un peligro global o letal. Y, como he dicho, es altísimamente improbable, por no decir, imposible, que el sistema en su conjunto se vea afectado fatalmente por un solo fallo o factor.

En segundo lugar, hay algo que es mucho más preocupante.

La epidemia del coronavirus constituye un fallo añadido en el sistema que si se contempla linealmente puede parecer poca cosa, mas puede resultar de efectos muy graves si se tiene en cuenta que su presencia muta la condición del sistema en su conjunto porque interactúa con

otros de sus fallos latentes. Es decir, el coronavirus (la crisis sanitaria que provoca) es realmente peligroso no sólo por lo que supone en sí mismo sino porque aumenta mucho la degradación del sistema en su conjunto, en mucha mayor proporción de la que correspondería a su aislada naturaleza de epidemia sanitaria.

A mi juicio, la extraordinaria gravedad del coronavirus no es el daño que produciría una epidemia si se pudiera contemplar aisladamente, sino la aceleración del efecto degradante o destructor de los demás fallos que estaban más o menos contenidos hasta ahora.

Ya escribí hace unos meses que se estaba gestando una crisis de muchos frentes pero que -a corto plazo- tenía tres manifestaciones o vías de expansión principales: las bolsas, que han alcanzado una sobrevaloración disparatada que las lleva a estallar antes o después; la deuda en crecimiento insostenible; y el bloqueo de la oferta como consecuencia de la continua caída de la rentabilidad del capital material en favor del beneficio financiero.

Los problemas que puede traer ahora la propagación del coronavirus tienen que ver justamente con esa crisis de oferta que ya en los últimos meses se estaba produciendo en casi toda la economía mundial en forma de una desaceleración relativamente atenuada.

Ahora, las respuestas que inevitablemente van a tener que adoptar los gobiernos para evitar el contagio van a bloquear todavía más la oferta y sus consecuencias van a ser varias, aunque todas con algo en común: reactivar los fallos hasta ahora latentes o adormecidos.

En primer lugar, va a disminuir la producción, se van a desarticular los canales de suministro y distribución, van a producirse carencias de aprovisionamiento a escala global y la crisis empresarial va a generalizarse, disminuyendo mucho más la rentabilidad del capital que mueve los motores de la economía productiva. La crisis de oferta va a ser muy fuerte.

En segundo lugar, va a aumentar la deuda empresarial y la dificultad para hacerle frente por parte de miles de empresas, especialmente por las "zombis" que hasta ahora han estado manteniendo su actividad a base de más deuda, pero sin generar beneficio suficiente.

En tercer lugar, el cambio de expectativas, la posibilidad de que se produzcan quiebras en cadena y movimientos extremos por parte de las autoridades en materia de gasto e intervención financiera, van a producir un caos bursátil de la mano de las operaciones automatizadas, de los algoritmos que utilizan los grandes fondos especulativos. Las bolsas, como ya anticipé, son ahora mismo el eslabón más débil y volátil del capitalismo, están a punto de saltar y el virus va a hacer que estallen sin remedio.

En cuarto lugar, todo eso va a afectar al sector financiero que perderá negocio solvente y frenará la financiación, amplificando los problemas anteriores, cuando no sufriendo él mismo una nueva crisis financiera.

En quinto lugar, la intervención de las autoridades va a ser bastante complicada y poco efectiva porque ahora no se trata de impulsar la demanda inyectando capacidad de gasto (que hará falta) sino de poner en pie la oferta, y eso es mucho más difícil cuando las empresas cierran y las redes productivas se han bloqueado.

En sexto lugar, no descarto que, precisamente por el bloqueo de la oferta, se produzca un rebrote inflacionario que pondría a los bancos centrales ante un dilema terrible, pues estarían obligados a frenarlo. Y entonces estará por ver cómo podrán soplar y sorber al mismo tiempo, es decir, hacer política expansiva y contractiva a la vez.

Si no se toman medidas drásticas para evitar los contagios, si no se aísla a la población, la expansión de la pandemia es casi segura y esa expectativa de crisis paralizaría la actividad. Pero la cuarentena y el aislamiento también la frenará sin remedio. No hay salida. Porque el problema no es el virus, sino un sistema complejo en el que un fallo aparentemente sin demasiada importancia puede reactivar otros fallos hasta ahora latentes o medio controlados. Y es esa conjunción de factores lo que va a crear una situación nueva y que representa un peligro muy serio.

Si los fallos latentes diversos se hacen expresos y si su aparición coincidente los convierte en un fallo único y estructural, nos vamos a enfrentar a un problema económico hasta ahora desconocido en la época del capitalismo globalizado y neoliberal.

Y las recetas que los gobiernos y las autoridades monetarias han venido utilizando no les van a servir. Ahora tendrían que pensar “al revés” de como lo han hecho hasta ahora desde hace décadas y eso no les va a resultar fácil. No tienen soluciones porque ni siquiera se pueden imaginar cuál es la naturaleza del problema que tienen por delante. De ahí que estén desorientados y sin saber bien qué hacer.

El virus es la pequeña mariposa de la teoría del caos: el suave movimiento que producen sus alas en una esquina del planeta se está empezando a traducir en una tempestad a miles de kilómetros. La gente lo intuye con más sabiduría que los políticos y economistas que siguen creyendo que sólo se trata de tomar medidas sanitarias acompañadas de otras cuantas económicas convencionales, cuando el peligro verdadero está en otro lado, en los fallos estructurales del sistema que el virus puede haber reactivado ya.

Hablaré de alternativas en el siguiente artículo pero anticipo la principal: es obligado que vivamos de otro modo.

EL VIRUS Y LA ECONOMÍA (2): SIN RESPUESTA AL PROBLEMA DE FONDO

Publicado en LaPolíticaOnLine.es
el 15 de marzo de 2020

En un artículo anterior (El virus y la economía: mucho peor de lo que dicen) señalé que la pandemia a la que nos enfrentamos (ya reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud) tendrá efectos muy graves no sólo por lo que ella misma implica sino porque va a “despertar” otros fallos latentes o medio dormidos en nuestro sistema económico.

En este segundo artículo voy a exponer brevemente qué sabemos sobre los efectos económicos de la pandemia, luego las cuestiones económicas que hay a su alrededor, las circunstancias en las que se produce y que son las que van a complicarnos la situación en los próximos meses y, por último, las razones por las que creo que las respuestas que han empezado a darle los gobiernos y las autoridades internacionales son de momento bastante insuficientes y en algún caso muy inadecuadas puesto que pueden servir para agravar problemas estructurales de la economía mundial.

La pandemia

En este momento, parece que ya tenemos algunas certezas sobre la pandemia:

- Antes que nada, hemos de ser conscientes de que nos encontramos ante un problema sanitario. Deben ser los científicos y los técnicos de la salud lo que nos digan qué hay que hacer para acabar cuanto antes con ella.

- Parece ser que estos últimos nos dicen que esta pandemia producirá un caos sanitario si el número de infectados sigue aumentando exponencialmente como lo viene haciendo hasta ahora. Y que sólo es posible evitar que los contagios aumenten con medidas tajantes de cuarentena y distanciamiento social

Por tanto, lo primero y más importante que habría que hacer sería ayudar a que las autoridades, siguiendo los criterios de los expertos sanitarios, hagan lo necesario para garantizar que deje de extenderse cuanto antes.

Con independencia de ello, resulta que esta pandemia (como seguramente cualquier otra) tiene unos efectos económicos y, por lo tanto, requiere no sólo un tratamiento sanitario sino también económico.

En este artículo sólo me voy a referir a esos efectos económicos y financieros, dando por hecho que las autoridades van a adoptar las medidas sanitarias más oportunas para combatir la epidemia.

Pues bien, los efectos económicos inmediatos de la pandemia son de dos tipos:

a) Un shock de demanda bastante inmediato, es decir, un frenazo en el gasto privado como consecuencia del aislamiento, del posible aumento de despidos, de la caída de ventas de las empresas y del miedo o la reserva de la población ante el futuro.

Este efecto sobre la demanda se caracteriza por su inmediatez y por la rapidez con que se está dando, así como por la asimetría con la que se produce. Es decir, no afecta por igual ni a todas las personas o grupos sociales ni a todas las actividades económicas. Se da en mayor medida en las personas en situación económica más precaria, en las que pierdan el empleo, en las que no dispongan de ayudas específicas o colchones para este tipo de situaciones y también en los sectores o actividades vinculadas al consumo social, aquellos en los que el gasto se lleva a cabo en proximidad con otras personas.

El shock en el consumo de las familias puede durante el mismo tiempo que duren las medidas de aislamiento y el temor ambiental. La recuperación del gasto de las empresas está vinculada a la del consumo familiar pero también a que las empresas vuelvan a tener una percepción de que la situación va a mejorar efectivamente. Y esto, como ya he apuntado y comentaré después, es algo que desgraciadamente no tiene que ver sólo con la evolución de la pandemia.

No es posible saber si la pérdida de gasto que suponga el shock las semanas o meses en que se produzca se pueda recuperar. En una parte es posible que sí, pero lo más seguro es que la mayor parte de esa pérdida de gasto (ingreso) se pierda y origine un daño duradero y, en algunos casos, incluso irreversible en algunas empresas con menos capacidad de resistencia.

b) Un segundo efecto de la pandemia es el shock de oferta que se traduce en una caída en la producción de bienes y servicios como consecuencia de las bajas laborales, de la ruptura de las cadenas de aprovisionamiento y de la caída de ventas que lleva consigo menos pedidos subsiguientes.

Este shock (paralelo al anterior) se produce también muy rápidamente, aunque sus efectos pueden manifestarse con mayor retardo, quizá meses después, y puede que los costes que inicialmente genere sean más fácilmente recuperables.

Algún modelo econométrico que ha tratado de cuantificar las consecuencias de un shock de este tipo (aunque circunscrito al Reino Unido) señala que si el aislamiento y las paradas de producción no duran mucho (hasta un mes) la producción se puede recuperar con relativa facilidad, por ejemplo, mediante horas extraordinarias o nuevos contratos.

Si las cuarentenas durasen más de cuatro semanas su coste se multiplicaría por tres y si fuese por un trimestre o más, el daño sería seis veces mayor. En el peor de los casos, quizá podría producirse una caída del 6%, un coste realmente alto, pero no excesivamente dramático (el estudio aquí: <https://bit.ly/2zkQlQd>).

Hasta aquí los efectos en general previsibles de una pandemia como la que estamos viviendo. Sin embargo, el problema con la actual es que se está produciendo en una situación específica: en medio de una ralentización notable de la economía que venía de hace ya unos meses y de una serie importante de problemas económicos y financieros que afectan a ámbitos clave de la vida económica.

Eso es lo que explica que no estemos contemplando ni tengamos miedo tan sólo del daño sobre la salud de una pandemia o el de sus efectos económicos más o menos graves, aunque siempre manejables que acabo de mencionar, sino la posibilidad de una crisis económica y financiera mucho mayor.

En condiciones normales, una pandemia como la actual no tendría por qué hundir las bolsas ni paralizar en tan gran medida, como se teme, a la economía. Lo puede hacer porque, como he dicho, coincide con otras circunstancias. Y son estas otras circunstancias las que la hacen especialmente peligrosa la expansión del coronavirus y las que hemos de tener en cuenta a la hora de valorar la eficacia y los efectos de las medidas de todo tipo que se estén tomando.

El entorno de la pandemia

En otras condiciones, para evaluar los efectos de la actual pandemia bastaría con tener en cuenta las circunstancias anteriores. Pero, como señalé en el artículo anterior, resulta que la pandemia se está produciendo en un contexto específico que, a mi juicio, es auténtico determinante de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Concretamente, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Aunque se han adoptado medidas que sin duda han mejorado la situación, el sistema financiero no se saneó completamente después de la anterior crisis financiera. Muchos bancos siguen teniendo graves problemas de solvencia y, al haberse concentrado muchísimo más, el sector se ha hecho todavía más sistémicamente peligroso.

- Las bolsas han vivido un proceso de excesiva capitalización que ha provocado un desajuste estructural al alza de las cotizaciones. Su situación es muy inestable y volátil y desde hace meses están mostrando que su reajuste a la baja y en gran magnitud es completamente inevitable.

- De la mano del gran poder de la banca en todo el planeta, la deuda no ha parado de crecer en los últimos años. La global es ahora unos 70 billones de dólares más elevada que la de hace diez años y va acompañada de multitud de burbujas y del mantenimiento de miles de empresas zombis en todo el planeta.

- Como consecuencia de todo ello, en los últimos meses se venía produciendo una ralentización generalizada en casi todas las economías. Muy particularmente en la china y la alemana que actúan de motores de una buena parte de la industria y el comercio mundial, y también en la de Estados Unidos.

Es muy importante tener en cuenta que esta ralentización tenía su principal manifestación en la caída de la producción industrial y del comercio internacional asociado y, tal y como señalé en el artículo anterior, en una caída continuada de la rentabilidad del capital físico cuando el financiero que se invierte en operaciones especulativas proporciona beneficios menos problemáticos y mucho más rápidos y abundantes.

Además, tampoco puede olvidarse que estos factores de estabilización inmediata de todo el sistema económico se plantean en medio de otros trances no menos problemáticos y peligrosos, como el estar en la antesala de una nueva y profunda revolución tecnológica, el incremento continuado de la desigualdad, el cambio climático y, desde otro punto de vista, la pérdida de vigor de las democracias.

Las respuestas inadecuadas

Los gobiernos y las autoridades internacionales no fueron conscientes desde el primer momento de la trascendencia económica del coronavirus. Tardaron días hasta que reconocieron que se trataba de un problema extraordinario y entonces prometieron tomar medidas. Los ministros de economía del G7 y los responsables de los grandes bancos centrales prometieron el 2 de marzo pasado "todas las herramientas políticas adecuadas" aunque, eso sí, no dijeron entonces nada sobre cuáles podrían ser las que adoptarían.

Más tarde, y poco a poco, han ido tomando diversas medidas ante un escenario que, según la presidenta del Banco Central Europeo, "recordará a muchos de nosotros la gran crisis financiera de 2008".

Las medidas que han anunciado o han tomado hasta el momento pueden ser de dos tipos, de política monetaria y de política fiscal, y a mi

juicio van a ser inútiles o, en el mejor de los casos, muy insuficientes por las siguientes razones.

Medidas de política monetaria.

La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra han bajado los tipos de interés con el propósito de producir un impulso a la economía. Algo que se espera conseguir porque se supone que con tipos más bajos se puede incentivar el consumo y la inversión.

En mi opinión, los resultados de esta medida no van a ser efectivos por varias razones. En primer lugar, no ayudan selectivamente a la población sino que son de carácter general. Y ya he dicho que el shock de demanda se caracteriza porque se va a sufrir de modo muy asimétrico entre los consumidores y empresas.

En segundo lugar, porque una bajada de tipos siempre tarda en producir efectos (si los produce) y también he señalado que los dos shock de la pandemia son efecto muy inmediato.

En tercer lugar, porque los tipos ya están de por sí muy bajos y cuando no se ha incentivado el gasto a niveles tan reducidos no se va a conseguir hacerlo por más que se sigan reduciendo (algo, además, que ya casi no se podrá seguir haciendo porque están prácticamente en negativo).

En cuarto lugar, porque con tipos más bajos, los bancos se verán obligados a prestar más, aunque en condiciones de menor solvencia, creándose así un problema añadido.

En quinto lugar, la caída en el gasto no se ha producido sólo por razones de coste sino de expectativas, de temor o incluso de imposible presencia en los centros de gasto. Y, en sexto lugar, porque, como suele decirse, la política monetaria a través de cambios en los tipos de interés puede llevar el caballo al agua, mas no puede obligarle a beber. Es decir, puede abaratar el gasto, pero no obliga a gastar.

Para hacer frente a la caída de las bolsas, la Reserva Federal y otros bancos centrales están dedicando docenas de miles de millones de dólares a comprar acciones. Les hacen así un buen servicio a los tenedores de títulos, aunque a la vista está que va a ser muy difícil por no decir imposible que eso evite el derrumbe de las bolsas cuando éstas están en la estratosfera y sujetas a una capitalización artificialmente excesiva. Con muchos cientos de miles de millones de dólares se puede frenar durante algún tiempo la caída pero no que se vengam definitivamente abajo antes o después.

Por su parte, el Banco Central Europeo acaba de anunciar otras medidas que no sólo no van a resolver el problema sino que van a agravar otros fundamentales.

Se propone aumentar la compra de bonos en los mercados secundarios y subsidiar a los bancos que utilicen el dinero que les proporcione para dar más créditos a las pequeñas y medianas empresas. Pero el hecho de que tenga que subsidiar a quienes da el dinero es la prueba manifiesta de que ni el propio BCE tiene confianza en que sus medidas tengan los efectos que se propone; es decir, que el dinero que le da a los bancos se destine finalmente a incrementar la financiación a los sujetos económicos que la necesitan.

Lo que va a conseguir el BCE es lo mismo que viene consiguiendo hasta la fecha con su política de flexibilización cuantitativa: lavar los balances de los bancos quedándose con los títulos basura, rentabilizar la inversión de los grandes poseedores de fondos y títulos (a costa de aumentar la desigualdad) y, en suma, dar a los bancos más liquidez que ni mucho menos es seguro que vaya a ir destinada a las empresas que lo necesiten. Y es natural, los bancos no son una ONG que preste para hacer favores a empresas en apuros.

Incluso en el supuesto de que esa estrategia del BCE funcionara y los bancos pudieran incrementar su negocio prestando más a las pequeñas y medianas empresas, ¿qué se conseguiría? Simplemente drogar a más empresas porque lo que en realidad necesitan estas no es acumular deuda sino que se solucione el problema estructural de rentabilidad que las atena regularmente y no sólo en esta coyuntura. Está bien alargarles un poco la vida pero ¿no sería más lógico plantearse que vivan sin necesidad de la respiración asistida que significa su deuda creciente?

Por otra parte, el Banco Central Europeo le hace otro par de favores a la banca que para nada van a servir para mejorar la situación de las empresas y los consumidores afectados por el coronavirus: aplazar la realización de test de estrés y relajar los requisitos de capital de la banca. Es decir, el BCE va a permitir que aumente el riesgo sistémico de la banca sin que a cambio se garantice que las ayudas que pueda recibir se destinen efectivamente a financiar a quienes ahora puedan necesitar liquidez puntualmente. Y eso es sumamente chocante. Cuando las cosas se van a poner difíciles ¿no es cuando más debería cuidar el BCE de que los bancos sean más solventes y tengan mayor fortaleza de capital?

No diré que todas estas medidas no tengan efecto positivo alguno, que pueden tenerlo en algunas casos, pero sí que son completamente inútiles en comparación con la magnitud del problema que se tiene por delante.

Los gobiernos, por ejemplo, van a seguir teniendo un respiro con el programa de compra de bonos del BCE, aunque seguirá siendo a costa de aumentar su deuda y de quedar sometidos a la presión de los mercados

mientras no se tomen medidas complementarias para limitar el poder de los grandes fondos especulativos.

Medidas de política fiscal

Tanto el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, como los de otros países han anunciado rebajas de impuestos para hacer frente a los dos shocks de la pandemia.

Es evidente que eso reduce los costes de las empresas y la carga que soportan los consumidores, si bien en diferente medida, según cuáles sean finalmente los impuestos que desaparezcan. Y eso puede esconder (como casi siempre que se dice que bajan los impuestos) medidas que sólo benefician a los más ricos. Pero, incluso con independencia de esto último, reducir impuestos no es lo más adecuado para frenar los efectos tan problemáticos que va a tener la pandemia por varias razones.

Como he dicho, se necesitan medidas discrecionales y no generalistas puesto que esos efectos se manifiestan de modo muy diferente en los distintos grupos de población y actividades económicas.

Con carácter general, las recaudaciones impositivas ya actúan como estabilizadores automáticos, es decir, que reducen la carga fiscal cuando las cosas van mal sin necesidad de que se tomen medidas complementarias. Sin embargo, lo que puede ocurrir con estas bajadas de impuestos que se anuncian es que se produzcan efectos colaterales mucho peores.

Por ejemplo, la reducción de impuestos va a obligar a reducir gastos públicos (o a endeudarse más) lo cual es muy perjudicial cuando se está en medio de una pandemia y hay que reforzar la actuación de los servicios públicos (el más reciente informe –aquí– sobre los posibles efectos del coronavirus concluye diciendo que lo principal que hay que hacer en el futuro inmediato es fortalecer la sanidad pública).

Algunos países (Japón, Corea, Italia, por supuesto China, y España, aunque aquí sin demasiada concreción hasta el momento) han anunciado programas de gasto público inmediato pero estos programas, aunque imprescindibles, no son completamente efectivos en cualquier condición. Deben dirigirse exactamente a población y a las empresas más afectadas y, aunque son necesarios para paliar el daño del shock de demanda, no van a poder resolver los problemas del lado de la oferta. Además, se van a dar en países con un nivel de deuda ya elevada, de modo que desde el primer momento van a suponer un coste de financiación adicional para los gobiernos que puede ser muy peligroso a poco que se vaya saliendo de la pandemia.

Particularmente torpe y limitada en este aspecto es la medida anunciada por parte de la Unión Europea en el sentido de que va a aligerar o flexibilizar las condiciones de estabilidad presupuestaria. Si bien eso

puede posibilitar formalmente aumentar el gasto, es evidente que lo que no evita es que aumente la deuda y el peso que habrán de soportar los gobiernos. Como explicaré en el próximo artículo es algo muy diferente lo que se necesita en material de política de gasto.

En cuanto a las medidas de este tipo, también hay que subrayar que es evidente que no se encuentran al alcance de todos los países, de modo que se van a provocar nuevos desequilibrios financieros internacionales que van a dificultar la adopción de medidas justamente cuando lo que se tiene enfrente es el resultado de una globalización desgobernada, asimétrica y sin gobernanza que no sea la que imponen los intereses de los grandes grupos empresariales y financieros.

En el seno de la Unión Europea, en concreto, es impensable que puedan ser efectivos programas de gasto frente a la pandemia que no sean el resultado de una estrategia común y de la financiación del Banco Central Europeo.

También hay que señalar que incluso los programas de gasto a través de ayudas que estén bien dirigidos hacia quienes soporten la principal carga de la pandemia pueden ser, desgraciadamente, bastante ineficaces si lo que se ha producido es un cambio en el comportamiento de gasto como resultado no sólo de la carencia de ingreso sino de las expectativas o el temor. Con la actitud tan poco transparente y cómplice de los gobiernos, sin liderazgos democráticos potentes, sin credibilidad y con el rechazo actual de la población hacia la clase política ni siquiera con mayores ayudas públicas se va a recuperar la confianza necesaria para que aumente el gasto a cortísimo plazo, como sería necesario. Salvar las vidas es lo primero. Pero hay que evitar también el desastre económico y financiero

Cuando pasa lo que está pasando, cuando hay miles de vidas en peligro lo primero debería ser salvarlas. Y para ello lo principal, como dije al principio del artículo, es seguir las directrices de los expertos en medicina y epidemiología. Creo que es imperativo cerrar filas con los gobiernos que tratan de seguir sus instrucciones. Ahora bien, mi obligación como un modesto analista de la economía es señalar que la pandemia comporta otro peligro: el desencadenamiento de una crisis económica y financiera mundial que destruya miles de empresas, millones de empleos y riqueza en todo el mundo.

A mi juicio, eso es posible porque las autoridades vienen tomando medidas equivocadas desde hace años que han creado fallos muy peligrosos en el sistema económico. O, más que equivocadas, sólo beneficiosas para una minoría.

Ahora han empezado a ser conscientes de que la pandemia no es sólo un peligro sanitario sino también económico y financiero y están

tomando medidas. Mi tesis es que esas medidas, como he tratado de explicar, van a ser ineficaces para evitar esas consecuencias fatales de la pandemia sobre las economías. No digo que vayan a ser completamente inútiles, pero sí absolutamente insuficientes. Por razones muy sencillas de entender:

Si no hubiéramos estado en medio de una ralentización generalizada, el shock de oferta se resolvería en unas semanas.

Si las bolsas no estuvieran sobre una bomba especulativa no estaríamos corriendo el peligro de que la pandemia sea una chispa que las hace saltar llevando a la quiebra a miles de empresas e inversores.

Si no se hubieran producido los recortes tan nefastos en inversión pública los sistemas sanitarios no estarían tan al borde del colapso.

Si no se diera prioridad a la investigación militar o la vinculada con los grandes intereses comerciales o a la que es simplemente especulativa e inútil, tendríamos antes vacunas y medidas preventivas.

Si no hubiera aumentado tanto la desigualdad y no se hubieran casi desmantelado los sistemas de protección social no habría miles de personas sin poder estar en cuarentena o sin poder hacerse la prueba para saber si están infectadas.

Si no se hubiera dado privilegios fiscales y de todo tipo a las ganancias especulativas y financieras, la rentabilidad de las empresas que generan actividad productiva y empleo no habría caído, provocando la ralentización que veníamos sufriendo.

Si no se hubieran establecido políticas de austeridad tan nefastas, los gobiernos no estarían ahora la borde del precipicio por tener que hacer frente a gastos imprescindibles para salvar la vida de miles de personas.

Si no se hubieran consentido que los banqueros que provocaron la crisis anterior se salieran con la suya, ahora tendríamos un sistema financiero capaz de financiar a empresas y consumidores en apuros.

Que nadie se engañe. La expansión de un virus que contagia y enferma a cientos de miles de personas es siempre un drama, mas lo que está ocurriendo con el coronavirus y lo que va a ocurrir no es su consecuencia directa. Es el resultado de las políticas que se vienen aplicando en los últimos años. Es cierto que las medidas que se están anunciando comportan cierta excepcionalidad pero mientras no se reviertan la lógica dominante para aplicar otras sobre principios bien diferentes será imposible evitar el desastre que se avecina y los que vendrán después. Afortunadamente, hay alternativas y de ellas hablaré en el siguiente artículo.

LA RESERVA FEDERAL CONTRA EL VIRUS: PRIMERO LOS RICOS

Publicado en Público.es
el 16 de marzo de 2020

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer el plan más agresivo de estímulo financiero desde 2008, cuando comenzó la Gran Recesión. Por un lado, ha puesto los tipos de interés a cero y, por otro, realizará compras de activos en las bolsas por valor de 700.000 millones de dólares.

¿Para qué servirá esto y para qué no?

La nueva bajada de tipos de interés no aporta casi nada. Teóricamente, persigue que la financiación sea más barata para las empresas y hogares y que así no se derrumbe el gasto en consumo e inversión. Sin embargo, en las actuales circunstancias, y con los tipos ya por los suelos, será una medida bastante inútil.

Las empresas bajarán la inversión por la expectativa de caída de las ventas y de los beneficios en una posible nueva fase de recesión y por los efectos del coronavirus; los hogares, por la pérdida de ingresos, de movilidad y por el temor a que vengan tiempos peores.

Y con tipos más bajos, los bancos deben dar más créditos para obtener la misma rentabilidad y eso, si es que ocurre, empeorará su solvencia.

Y, en todo caso, hay que tener en cuenta que los tipos a cero son los de referencia, los que aplique la Reserva Federal a sus operaciones con la banca privada; pero esta última luego presta a los tipos de mercado que son bastante más elevados. Sobre todo, los de operaciones que dirigidas a las empresas y hogares en mayores dificultades y, por tanto, con más riesgo de provocar fallidos.

Poner a cero los tipos de referencia en medio de una emergencia sanitaria y cuando no se tiene seguridad de que los bancos trasladen la mayor liquidez a la economía productiva, sino a mejorar su balance, es como tratar de empujar con una cuerda o tratar de salir uno mismo de un hoyo tirándose de los pelos. Es imposible.

Por otro lado, gastarse 700.000 millones de dólares en comprar activos sí va a tener efectos inmediatos y muy claros: salvar el patrimonio de los grandes poseedores de acciones y bonos, es decir de las grandes empresas y de las personas más ricas del planeta.

Desde 2008, realizando periódicamente estas compras, la riqueza del 10% de los hogares más ricos ha subido unas 115 veces más que la del 10% más pobre. Y es lógico.

En los últimos años, las grandes empresas han obtenido beneficios extraordinarios que han dedicado en buena parte a comprarse sus propias acciones o activos financieros de todo tipo, y los bancos centrales han ido comprando títulos sin parar. Los algoritmos que dominan casi el 70% de las operaciones de compra y venta y que están programados solo para lograr ganancias especulativas han hecho el resto. La consecuencia de todo eso ha sido que las cotizaciones se hayan disparado. Cuando las cosas han empezado a cambiar y las burbujas se desinflan, el pánico hizo de las suyas y los inversores han reclamado que la Reserva Federal intervenga para evitar el derrumbe.

Mi previsión es que esta intervención y las que seguirán van a producir efectivamente una recuperación de las bolsas. Incluso es posible que una nueva onda súper alcista. Pero si en el futuro inmediato reaparecieran nuevas chispas de inestabilidad (¿alguien se atreve a descartar algo así?), el remedio será peor que la enfermedad y se produciría un cataclismo histórico.

Es verdad que las medidas de ayer no son las únicas excepcionales. El gobierno de Trump había reducido el presupuesto dedicado a combatir pandemias y en Estados Unidos hay 34 millones de personas que no cobran si se dan de baja, otros 30 millones sin seguro médico, 500.000 sin hogar y 2,2 millones en cárceles con condiciones higiénicas regulares. Eso hace que la extensión de la pandemia pueda ser allí extraordinaria y mucho peor de lo que se está diciendo. De ahí que se haya tenido que anunciar que se multiplicarán gratuitamente las pruebas y algunas ayudas a las personas y empresas, pero es tarde y las ayudas son de momento insuficientes. Desde luego, mucho menores que las que van a recibir los grandes inversores y los bancos.

Para evitar el desplome de las economías se necesita poner selectivamente el dinero en los bolsillos de la gente afectada y en la caja de las empresas, y recuperar el flujo en los procesos económicos básicos, en la producción, la distribución y el consumo. Y eso ni lo van a hacer bancos que lógicamente buscan su propia rentabilidad, ni los grandes inversores que van a recuperar su riqueza cuando le compren sus activos depreciados.

Hace faltan ayudas directas, hace falta una banca pública que se encargue de proporcionar esa financiación extraordinaria en situaciones de emergencia y hace falta un estímulo fiscal y productivo gigantesco, de la misma proporción del desastre que se avecina.

La Reserva Federal lo ha dejado claro, como ya pasó en la Gran Recesión: la bolsa es antes que la vida y los ricos van primero.

Lleva razón el presidente Trump cuando, después de anunciarse estas medidas, dijo que “Los mercados deben estar muy contentos”. Los mercados sí, la gente normal y corriente no.

En Europa, mientras tanto, se reúne hoy el Eurogrupo. Mañana comentaremos lo que se acuerda, aunque lo que se sabe no nos permite ser optimistas.

EUROPA SE PEGA TIROS EN LOS PIES

Publicado en Público.es
el 17 de marzo de 2020

La reunión que celebró ayer el Eurogrupo fue otra decepción. Después de cinco horas y en medio de una catástrofe de perspectivas cada vez más negras, los ministros de economía y finanzas fueron incapaces de llegar al único acuerdo que hoy día cabe alcanzar: ante una situación de emergencia sanitaria y de consecuencias económicas funestas que afecta a todos los países de la Unión Europea, es imprescindible poner sobre la mesa recursos extraordinarios, urgentemente y en común. No hay otra.

En lugar de eso, los dirigentes europeos han caído en la misma torpeza con la que actuaron en la crisis de 2008.

En aquella ocasión, para disimular que Alemania y los países de su entorno iban a lo suyo, se estableció el principio de que la austeridad era el único remedio posible. Se dijo que era la única forma de hacer frente a la deuda y al desempleo, pero el resultado fue otro y lo sabemos: los pueblos y los países de la periferia salvaron a los bancos y a los países centroeuropeos y la deuda se multiplicó, en lugar de disminuir.

Ahora -cuando están muriendo miles de personas- ya no pueden recurrir al mismo argumento y han tenido que ser más explícitos: que cada uno se resuelva el problema como pueda. O dicho más elegantemente -tal y como están diciendo los líderes alemanes y los de las instituciones europeas-: la situación es muy difícil y puede traer consigo problemas muy grandes, pero la solución es que cada país adopte sus propias políticas fiscales para arreglarlos.

Es el colmo del cinismo.

La Unión Europea lleva años poniendo grilletes fiscales a los países socios para favorecer el negocio bancario que crece a medida que aumenta la deuda pública. De facto, los países de la UE no tienen soberanía sobre sus propios presupuestos. Y mucho menos desde que se obligó a incluir en nuestras constituciones que el pago de la deuda es prioritario, como ahora, ante cualquier otra necesidad. Las políticas y las normas que viene imponiendo la propia Unión Europea ha generado una deuda grandísima en casi todos ellos, lo que les impide incrementar el gasto cuando es preciso, como ahora. Y no han llegado a esa deuda porque se hayan excedido en el gasto. No. Es una deuda en su inmensa mayor parte (o incluso en toda en algunos casos) producida por tener que recurrir a la financiación bancaria privada, al prohibir los tratados europeos que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos. Los datos son

indiscutibles: de 1995 a 2018, la deuda pública europea creció en 5,8 billones de euros y los intereses pagados por los gobiernos en 6,1. Es decir, que estos últimos representaron el 106% del incremento de la deuda. En el caso de la eurozona ese porcentaje fue del 99%.

El Banco Central Europeo ha sido quien ha impuesto la doctrina. Como digo, cuesta trabajo creer que proponga eso cuando él mismo y la Comisión han dejado a los países sin apenas capacidad fiscal y han impedido que se constituya una hacienda europea que disponga de un presupuesto capaz y operativo. Por su parte, el BCE se ha limitado a anunciar un amplio programa de compra de bonos y a relajar las exigencias de solvencia a las entidades. Algo que, como he explicado en mi artículo anterior *El virus y la economía (2)*: sin respuestas al problema de fondo, sólo va a servir para enriquecer aún más a los más ricos y para debilitar la solvencia de los bancos, justo cuando se avecina una tormenta financiera y hará más falta que nunca que los bancos sean solventes.

Muy pocos países de la UE pueden adoptar por sí solos las medidas del impulso fiscal que ahora se necesitan. Sencillamente, es imposible que los países europeos puedan hacer frente a la pandemia cada uno por su cuenta. Aunque se relajen o incluso desaparezcan las restricciones y normas de estabilidad presupuestaria, que es lo que se está ofreciendo, los gobiernos tendrán que endeudarse más y esa mayor deuda estará ahí, pesando como una losa, ahora quizá no mucho por los tipos de interés tan bajos, pero sí en el futuro. De hecho, la prima de riesgo ya está subiendo en algunos países y sus gobiernos tendrán que pedir prestado en condiciones cada vez más onerosas a los bancos privados para hacer frente a los gastos excepcionales. Y, como no se hace nada para evitar los zarpa-zos de los grandes fondos especulativos, será inevitable que ese mayor volumen de deuda dé problemas inmensos a las economías, antes o después.

Los líderes alemanes y quienes siguen sus propuestas están volviendo a demostrar que Europa sólo les importa y la desean como un mercado pasivo para sus empresas. Son todo lo contrario de líderes de un proyecto común. Cuando Merkel y otros dirigentes dicen que en su país hay que hacer todo lo necesario y que ya se verán después los efectos sobre el déficit y se olvida de los demás países, lo que está haciendo no es sólo condenar al resto sino hundir el proyecto europeo.

Cuando surge un problema tan extraordinario y que afecta a todos los miembros de un club hay que ser o muy torpe o cínico para decir que cada uno actúe por su cuenta. Y eso es lo que está haciendo la Unión Europea por imposición alemana. En lugar de poner en marcha la artillería pesada con la que podría contar si quisieran, sus líderes han tomado unas escopetas de otra época y lo único que hacen es pegarse tiros en los pies. No hay mejor prueba de ello que la prohibición alemana de exportar

mascarillas y otro material sanitario a Europa, algo que ni siquiera ha sido censurado por los demás países. ¿Qué italiano con dignidad querrá seguir siendo socio de países que actúan así cuando están muriendo miles de sus compatriotas? Y nadie podrá extrañarse si eso también pasa en el futuro con los ciudadanos de los demás países de la periferia.

La Comisión anunció que repartirá fondos por valor de 37.000 millones para hacer frente a los problemas que se nos presentan sobre la mesa. Pero hace falta mucho más y por más tiempo. Compárese esa cantidad para todos los países de la UE con el plan de 13.000 millones de Alemania o con el del Reino Unido, de 34.000. Y teniendo en cuenta, además, que esos 37.000 millones ni siquiera son nuevos, sino que provienen de los fondos estructurales, o sea, que dejarán de percibirse por ese concepto en el futuro inmediato.

La Unión Europea se está volviendo a equivocar lo mismo que lo hizo en la crisis de 2008. Sólo que ahora su equivocación, su falta de liderazgo, su incapacidad para proporcionar respuesta a la emergencia sanitaria y a la muerte de millones de personas va a ser mucho más visible, de modo que va a ser más difícil que se pueda disimular la responsabilidad de sus dirigentes. Una responsabilidad que debería empezar a ser criminal si se reconociera de una vez que hay crímenes económicos contra la humanidad.

Seamos justos. No podemos echar la culpa a Europa en abstracto. La Unión Europea que apenas responde a los insultos de Trump, la que se rinde ante los poderosos y es incapaz de defender a los más débiles... somos todos los europeos. Y, en particular, todos los gobiernos de los países que se callan y se rinden. El Presidente Macron ha tenido al menos la vergüenza de hablar claro y de reclamar lo que en estos momentos conviene reclamar a su país y a toda Europa. Por lo que sabemos, sin embargo, el gobierno español se ha traicionado y nos ha traicionado cuando se ha alineado con Alemania y los demás países que se oponen a la inmediata puesta en marcha de un programa europeo de potente impulso fiscal. Es una torpeza que nos va a costar muy cara.

La Unión Europea se está disparando en el pie. Se está condenando a muerte ella misma. Ha traicionado una vez más a los ideales que la vieron nacer y, como dice un viejo refrán, una cuerda que se rompe por traición puede volverse a atar, pero nunca será una entera. Y que nadie tenga la ingenuidad de creer que todo esto es una buena noticia. A pesar de todo, Europa es en términos generales el espacio más avanzado política y socialmente del planeta. Si formando una unión predominan los comportamientos egoístas, es fácil imaginar (porque ya lo vivimos en otras épocas de nuestra historia) lo que tendríamos sin ella, más conflictos y quién sabe si nuevas guerras.

NO ES LO QUE PARECE, NI TAMPOCO SUFICIENTE. PERO HABÍA QUE EMPEZAR ASÍ

Publicado en Público.es
el 18 de marzo de 2020

Lo que se está diciendo sobre el decreto de medidas económicas del gobierno contra la pandemia puede dar una idea equivocada de su alcance.

El propio presidente afirmó que se van a movilizar recursos por un valor de 200.000 millones de euros y eso puede parecer que se trata de dinero contante y sonante que irá inmediatamente al bolsillo de las empresas y familias. Aunque no es exactamente así.

El decreto contempla varios tipos de medidas que se unen a las que ya se habían adoptado la semana pasada. Unas son de ayudas directas a las personas y empresas afectadas y me atrevería a decir que todas ellas son estrictamente imprescindibles. Ninguna sobra y todas pueden ayudar a mitigar los efectos tan graves que tiene la paralización de la vida económica que se está produciendo.

Es imprescindible, como se ha previsto en los dos paquetes de medidas, evitar que pierdan sus empleos personas sin capacidad previa de ahorro -aunque sea temporalmente-, que dejen de pagar servicios básicos o sencillamente que no puedan cubrir sus necesidades más elementales. Proporcionarles ayuda en efectivo y permitir que demoren pagos es fundamental. Y al respecto quizá sólo se eche en falta que no se hayan adoptado ya medidas en relación con alquileres y otras para agilizar los pagos al máximo. No se trata sólo de una medida, ya justificadísima por esta razón, de solidaridad, sino necesaria también para evitar que ahora o en las semanas siguientes a la inactividad se paralice el flujo de ingresos y pagos.

Adicionalmente a las medidas tomadas ahora con urgencia es también fundamental que el gobierno prepare junto a las comunidades autónomas y ayuntamientos (a estos debería darse un papel fundamental en este aspecto por su proximidad) una estrategia específica de prevención y lucha contra la pobreza, y especialmente la infantil. La anterior crisis produjo un incremento muy grande en España y hay que evitar que eso ocurra de nuevo.

Para ello, sería necesario así mismo que se adopten ya medidas especiales de evaluación de la desigualdad. Prevenir en este campo es mejor y más barato que curar.

Creo que a estas alturas todo el mundo es consciente de que uno de los principales problemas que provoca una epidemia tan generalizada es la parálisis en los procesos de producción, bien como consecuencia de la caída de ventas -algo inmediato- como por la falta de aprovisionamiento que vendrá seguramente con algo más de retraso. Su principal consecuencia sería que muchas empresas se verían obligadas inmediatamente a cerrar y, si la situación se prolonga, quizá a desaparecer para siempre, como ya ocurrió en la anterior crisis.

Las medidas que va adoptando el gobierno para evitar que eso ocurra creo que van en el camino adecuado, aunque habrá que ir ampliándolas en los días y semanas siguientes. Antes que nada, es preciso que los trabajadores autónomos -de muchos de los cuales también dependen una buena cantidad de empleo-, los microempresarios y los pequeños y medianos se sientan de verdad protegidos. Deben saber que no se les va a dejar caer y que eso se empieza a ver con hechos. Sólo así podrán sacar fuerza de flaqueza para aguantar los malos tiempos que vienen. Las palabras del presidente del gobierno fueron ayer más reconfortantes y prometedoras. Y las primeras medidas, como digo, ya permiten saber que se va a hacer todo lo que se pueda para protegerlos.

Pero esa protección no puede ser simplemente la que ofrece el decreto.

La enorme cantidad de dinero destinado a proporcionar avales a las empresas es mucho, es necesario y es bienvenido, pero ni mucho menos es suficiente. Y hay que decirlo.

Lo que ha hecho el gobierno es lo que estaba en su mano: acercar el caballo a la fuente, en este caso de la financiación. Ahora, la fuente debe funcionar y el caballo debe querer o poder beber el agua.

Lo que necesitan las empresas es reducir sus costes para poder sobrevivir a un periodo sin ingresos que no sabemos cómo será de largo. Y lo que realmente produce recurrir a la deuda es que aumenten los costes. Mucho más cuando la financiación la va a proporcionar la banca privada que va a hacer lo que le corresponde: negocio para lucrar en la mayor medida de lo posible a sus accionistas.

A mi juicio, es mucho mejor apoyar a las empresas en forma (como se ha hecho) de prórrogas fiscales, crediticias o de otros pagos, pero también en forma de ayudas directas, como a los hogares. Su coste sería mucho menor, porque se evitaría el pago de intereses, y no se generaría una losa de deuda quizá muy difícil de soportar si los problemas se alargan, como desgraciadamente no cabe descartar. Y esto, sobre todo o al menos, debería hacerse en los sectores o con las empresas especialmente afectadas porque no hay que olvidar que, como en el caso de las personas, no

todas ellas sufren por igual la pérdida de ingresos y hay que ser capaz de poner el dinero allí donde realmente se necesita.

En particular, yo echo de menos medidas que garanticen que la banca no se aproveche más todavía de la situación. Va a dar préstamos con un dinero que ha recibido al 0% o que directamente crea de la nada, sin correr ningún riesgo puesto que los avala el Estado, se le han establecido nuevas condiciones patrimoniales más favorables y además recibirá subsidios por concederlos: ¿no estaría justificado entonces que el Estado se asegure que esos préstamos van a ser rápidos, casi inmediatos, muy baratos (yo diría que sin interés) y en condiciones excepcionales? Con la banca debería haberse hecho lo mismo que con la sanidad privada: ponerla estrictamente al servicio de los intereses públicos.

Como he dicho, endeudar más a las empresas no es una alternativa sostenible. Hay que proporcionarles nuevas ayudas directas si no queremos que la pérdida de tejido empresarial y de empleo sea desastrosa en los próximos meses. Y sobre la previsión de evitar mayor penetración de capital extranjero en empresas “españolas” creo que se debe ser muy cauto. Puestos a gastar dinero, quizá valdría más la pena aprovechar la coyuntura para recuperar todas o parte de las que se perdieron por la nefasta gestión de gobiernos anteriores que proteger a los accionistas de algunos bancos o grandes empresas que hoy día, salvo el nombre, tienen en realidad muy poco de “españolas”.

Y una cuestión principal de todas las medidas aprobadas, como he anticipado, es que se deben de adoptar con extraordinaria urgencia. El gobierno debería adoptar también -e imagino que así lo hará- medidas complementarias para garantizar que el dinero que va a movilizar no tarde en llegar a quienes van a recibir las ayudas porque los retrasos limitan extraordinariamente su eficacia. Por esa razón, yo creo que sería una buena medida establecer algún tipo de renta garantizada urgente, tanto para personas como para empresas, que se reciba en forma de crédito fiscal, de modo que quienes no hubieran cumplido con los niveles exigidos para la ayuda las devolvieran al liquidar sus impuestos.

Naturalmente, esto último requiere una disposición inmediata de liquidez mucho mayor pero que sería recuperable y que podría evitar mucho mejor la parálisis en el flujo de ingresos; además de ahorrar mucho tiempo y dinero en la gestión.

Sin embargo, la principal objeción que se puede hacer al plan del gobierno es que se basa en una premisa que el presidente Sánchez repitió ayer varias veces: el carácter temporal de la crisis.

Si fuese así, si la parálisis de la actividad durase tres o cuatro semanas y eso supusiera una caída de la actividad de entre un 25% y un 50% respecto a la normal, ya nos encontraríamos ante un shock de emergencia,

pero efectivamente superable en unos meses, quizá en un año. Me temo, sin embargo, que eso no es lo más probable. Primero, porque no estamos seguros de que el problema sanitario vaya a durar poco tiempo. Segundo, porque la economía mundial ya venía sufriendo una desaceleración que va a hacer muy difícil que la recuperación sea tan rápida, puesto que no vamos a tener que recuperarnos solo del shock del virus. Y tercero, porque la pandemia ha despertado otros fallos del sistema que estaban más o menos latentes y que nos van a hacer mucho daño: la locura de las bolsas, el comportamiento criminal de los fondos de especulativos, la baja rentabilidad del capital productivo en comparación con el financiero que no crea empleo ni riqueza, la espiral de la deuda, la desigualdad y el cambio climático.

Y si eso fuese así, la conclusión es que las respuestas del gobierno van a ser desgraciadamente insuficientes. Se va a necesitar mucha más munición, más dinero. Y lo cierto es que España (como otros países europeos) no puede ponerlo por sí sola en las condiciones establecidas por la Unión Europea que sólo buscan propiciar el negocio de los bancos aumentando continuamente la deuda.

Las medidas que ha anunciado el gobierno ya van a suponer de por sí un incremento muy peligroso de nuestro endeudamiento, no sólo público sino también privado. Tan peligroso que, si no se toman medidas complementarias de control de capitales y de mutualización, será inevitable que a corto plazo tengamos problemas quizá más graves que los actuales y que España no pueda hacer frente a los pagos, requiriendo un rescate mucho más fuerte que en la crisis anterior. No nos engañemos: el esfuerzo financiero que realmente se necesitaría para evitar el colapso de nuestra economía o la quiebra no podemos hacerlo solos en el seno de la Unión Europea.

Si no conseguimos forzar un cambio de actitud de Alemania y de las autoridades europeas las medidas que ha aprobado el gobierno -imprescindibles- serán pan para hoy y gravísimos problemas de solvencia para mañana. Ya se están haciendo cuentas sobre cómo será el rescate de Italia, porque no podrá salir por su cuenta del problema en el que se encuentra. Y nosotros podríamos ir detrás.

Ahora, lo principal es poner en marcha cuanto antes las medidas de emergencia, pero el gobierno no debería equivocarse: debe resolver los problemas inmediatos tal y como está haciendo, pero ha de poner las luces largas porque los problemas se pueden extender por más tiempo del que desgraciadamente parece haberse contemplado. En cualquier caso, en momentos tan difíciles y dolorosos como los de ahora, no hay mejor forma de asegurar que un gobierno acierte que la de mantener un control ciudadano constante de lo que hace y proporcionarle, eso sí, el mayor apoyo posible con la máxima unidad y complicidad ciudadanas.

POR FIN REACCIONA EL BCE, AUNQUE NO DE LA MEJOR MANERA

Publicado en Público.es
el 19 de marzo de 2020

De forma completamente imprevista, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo tomó anoche la decisión de destinar 750.000 millones de euros a comprar activos públicos y privados en los mercados.

Lo que se busca es asegurar que los títulos que tendrán que emitir los gobiernos para financiar sus planes de actuación frente al coronavirus y de estímulo para frenar la crisis posterior tengan su compra asegurada y que ésta no provoque una subida peligrosa en las primas de riesgo.

Esto último se produciría (como ya pasó en la crisis de 2008) si los prestamistas aprovechan la situación de necesidad para encarecer extraordinariamente la financiación, produciendo dificultades añadidas a la economía que pueden llegar a ser extremas.

La medida proporciona sin duda una gran tranquilidad porque la presidenta Lagarde había venido a decir en su anterior intervención que su preocupación no iba a ser evitar que aumentaran los diferenciales de riesgo. Una auténtica barbaridad que se corrige con esta decisión. Ahora se puede esperar que, al menos, los fondos especulativos no abalancen sobre los gobiernos de Italia o España, primero y luego otros, cuando salgan a los mercados.

Hay que dar la bienvenida a esta medida y mucho más cuando se trata de un nuevo reconocimiento en la práctica de lo profundamente erróneo que fue establecer en su día que el banco central no pueda financiar a los gobiernos. Tuvo que hacerlo Draghi (afortunadamente) y vuelve a hacerlo su sucesora.

El problema de esta medida es que el Banco Central Europeo de nuevo va a financiar a los gobiernos por la puerta de atrás. Es decir, que primero da dinero a los bancos privados al 0% y luego son estos los que financian (lógicamente lo más caro que puedan pues ese es su negocio) a los gobiernos o empresas. Y en medio quedará una impresionante factura de intereses que irá a la caja de los bancos. Casi 4 billones de euros han pagado en intereses a los bancos los 28 países de la UE desde 2008 a finales de 2019: ¿se imaginan lo que se podría haber hecho con ellos si el BCE hubiera financiado a los gobiernos con la misma generosidad que a los bancos?

No se puede bajar la guardia. La tranquilidad e incluso la tranquilidad con la que, sin duda y justificadamente, se va a recibir el anuncio de intervención del Banco Central Europeo no pueden ocultar que todavía

se está muy lejos de hacer lo que es razonable que se haga. Los bancos centrales, y el europeo en particular, deben financiar directamente a los gobiernos, con responsabilidad, con máxima exigencia, con control, con sentido de la necesidad y sin despilfarro ni corruptelas, por supuesto.

Mientras tanto, tampoco se puede olvidar que hay vías que pueden aligerar la carga que se va a generar para los estados y que se podrían poner en marcha ahora mismo. Si el endeudamiento es mancomunado, por ejemplo, es mucho más barato. Y el Banco Central Europeo podría empezar a comprar ya una proporción de la deuda pública de los países (por ejemplo, la superior al 60%) para transformarla en otra a largo plazo o perpetua. Eso dejaría mucho más libres sus manos para llevar a cabo los programas que habitualmente son imprescindibles para garantizar el bienestar, los servicios públicos y las mejores condiciones posibles para que las empresas privadas creen empleo y riqueza.

Se sigue yendo por el camino inadecuado de aumentar la deuda y la factura de los intereses (aunque ahora mismo sean bajos y no supongan la carga de fases anteriores). Es el único camino que sabe recorrer el capitalismo neoliberal de nuestros días, completamente plegado a los intereses de la gran banca. Al menos, el hecho de que tenga que saltarse estas normas cuando hay problemas de verdad muestra a quien quiera verlo que es imprescindible dejar de ser cínicos y comenzar a establecer principios de actuación razonables que no sigan provocando los problemas financieros que vivimos constantemente.

La vida de los seres humanos y la conservación del planeta son los bienes más preciados que hemos de cuidar y conservar y para eso está demostrándose estos días que es imprescindible que existan servicios públicos potentes y bien dotados. Su desmantelamiento más o menos inmediato, impuesto de facto por los criterios prevalecientes de financiación, es una aberración que pagamos cara y ahora es el momento de empezar a evitar que siga ocurriendo en el futuro.

En todo caso, no se puede olvidar tampoco que la compra de deuda gubernamental o empresarial no es la única medida que puede o debe tomar el Banco Central Europeo. Ahora es el momento de avanzar también en la adopción de fórmulas más valientes y novedosas, en la puesta en circulación de monedas digitales o en llevar estas inyecciones masivas de liquidez directamente, y no mediante intermediarios costosos, al bolsillo de los hogares, de los autónomos o de las micro y pequeñas y medianas empresas.

El BCE ha despertado y ha corregido el error de principiante de Lagarde pero la medida anunciada ni es la mejor ni es todo lo que puede hacer.

CERRAR LAS BOLSAS Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL. NO HAY OTRA

Publicado en Público.es
el 20 de marzo de 2020

Las bolsas de valores nacieron para desempeñar funciones esenciales en las economías de mercado: canalizar el ahorro hacia la inversión que necesita la actividad productiva, proporcionar liquidez a quienes venden títulos de cualquier tipo (empresas, Estado o individuos), fijar el precio de los activos financieros y, como éste se establece en función del beneficio esperado de los títulos que a su vez depende de cómo marchan las economías, actuar como una especie de termómetro de lo que ocurre en todas ellas, en las empresas e incluso en la acción de los gobiernos.

Sin embargo, en las últimas décadas las bolsas se han desnaturalizado. En lugar de servir de instrumento para que el "papel" (los títulos financieros) financie y proporcione recursos que pongan en marcha la actividad productiva, éste se ha convertido en objeto mismo de las compras y ventas. Por ejemplo, la gran mayoría de las divisas que circulan no se adquieren para ir de viaje, para comprar productos o para invertir en otros países, sino para tratar de obtener ganancias con el cambio de sus cotizaciones. Y lo mismo ocurre con una acción: no se compra en función de que la empresa que la emitió vaya a ir bien y proporcione buenos dividendos, sino para obtener rentabilidad vendiéndola en cuanto suba un poco su precio. O, lo que es peor, para generar a partir de ahí un "producto derivado", un seguro o algo parecido, pero mucho más complejo, que igualmente se vende y compra tratando de sacar rentabilidad puramente especulativa.

Hace cuarenta o cincuenta años ese tipo de operaciones no valía la pena realizarlas porque eran lentas, los intercambios costosos y las cantidades que se podían vender o comprar no muy grandes. Pero la llegada de las tecnologías de la información cambió todo. Con ordenadores, fibras y algoritmos que toman las decisiones automáticamente, se pueden realizar miles de operaciones en milisegundos. Así se obtiene una ganancia muy pequeña en cada operación, mas como se hacen millones y millones al cabo del día sin parar (las máquinas van enganchando una bolsa con otra alrededor del planeta) los beneficios son muy grandes. Los bancos (que ganan dinero prestando, es decir, generando deuda) vieron una oportunidad de oro en este tipo de negocios y se dispusieron a prestar todo lo que hiciera falta para financiarlas. Y así es posible que cuando alguien se dispone a invertir, por ejemplo, 1.000 euros, disponga desde el principio y automáticamente de 1.500 o 2.000 o incluso 3.000, que se le prestan para que multiplique el volumen de operaciones, siendo ésta

una de las causas del crecimiento exponencial de la deuda en nuestras economías.

Las consecuencias de todo ello han sido muy claras. En primer lugar, los negocios financieros especulativos son mucho más rentables que los que proporcionan ganancias produciendo bienes o servicios, vendiéndoles, cobrándolos, contratando trabajadores, luchando y sufriendo todo tipo de vicisitudes... de modo que estos últimos cada vez tienen menos rentabilidad relativa y son menos atractivos. La actividad financiera absorbe los recursos que necesitaría la realmente productiva y esa "financiarización" destruye empleo y produce la ralentización económica no virtuosa de las últimas décadas. En segundo lugar, se producen muchas crisis y pánicos, porque los negocios especulativos son muy volátiles, ya que en gran medida dependen de decisiones que apenas tienen que ver con las condiciones objetivas de las empresas y de la economía en general. En tercer lugar, se provoca un extraordinario incremento de la deuda. Por último, todo eso condiciona de un modo muy perverso la actividad de las empresas: si quieren financiación no será necesario que proporcionen buenos dividendos, sino que las cotizaciones de sus acciones sean lo más altas posibles. Esto ha dado lugar, por ejemplo, a que en los últimos años un gran número de las mayores empresas del planeta no hayan dedicado sus beneficios y ahorro a la actividad productiva sino a comprar sus propias acciones o las de otras empresas. Y eso ha provocado una onda alcista tremenda que no tiene otro fundamento que la mera especulación.

Así, como he dicho, las bolsas se han desnaturalizado. No se dedican a desempeñar las funciones para las que nacieron y que son efectivamente necesarias. Como escribió el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, se han convertido en "casinos reales donde se juegan gigantescas partidas de póker" (aquí: <https://bit.ly/2zi4pdl>). Ahora, los productos financieros, las operaciones especulativas sobre ellos y la deuda anexa crecen sin cesar y sin relación con el desarrollo de la actividad productiva. Un ejemplo: la circulación de divisas que teóricamente sirve como instrumento del comercio internacional es hoy día unas 21 veces mayor que el PIB mundial y 65 más que el volumen del comercio internacional de bienes y servicios. Un sinsentido.

Las bolsas son la expresión de una locura insostenible incluso para la economía capitalista. Esta funciona gracias a que los mercados determinan los precios que sirven de referencia para la toma de las decisiones, se supone que eficientemente. Pero si las bolsas sólo siguen lógicas especulativas y sus vaivenes enloquecen, los precios lo hacen también e inevitablemente se arrastra a la crisis al sistema productivo porque sus referencias, los precios, son inadecuadas. No es casualidad, sino todo lo contrario, que de 1970 (cuando comienza la desnaturalización de las

bolsas) a la actualidad, se hayan producido 107 crisis bancarias, 177 de divisas y 42 de deuda en todo el mundo, según un estudio del Fondo Monetario Internacional.

La especulación y la locura de las bolsas son peligrosas siempre, mas cuando se desatan en medio de una tormenta sus efectos pueden ser catastróficos. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Cuando la vida de millones de personas está amenazada y los gobiernos luchan para tratar de poner orden en las economías, los fondos especulativos se comportan como auténticos buitres carroñeros que trasladan la inestabilidad extrema de las bolsas al resto de la economía (e incluso al conjunto de la sociedad, porque producen miedo). En las llamadas operaciones a corto, por ejemplo, toman prestado un título (ni siquiera es suyo, de modo que le dará igual lo que ocurra con él), hacen un seguro apostando a que su cotización va a bajar y luego hacen todo lo posible para que baje, algo que les resulta bastante sencillo gracias a que manejan fondos millonarios y a que tienen gran poder político y mediático. Cuando lo han hecho caer, lo devuelven, cobran la prima del “seguro” y recogen los beneficios. Eso lo pueden hacer 7.000 u 8.000 veces en el tiempo que se tarda en parpadear y así no sólo pueden hundir la cotización de cualquier título financiero sino a un Estado, arruinándolo por completo, tal y como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

Mantener en funcionamiento esa locura en medio de una crisis global como la que estamos empezando a vivir, cuando una pandemia está paralizando las economías con efectos imprevisibles, en cualquier caso muy graves, es una barbaridad. Hay que cerrar las bolsas para evitar que su locura especulativa destruya el sistema financiero, que ponga al borde del precipicio las economías nacionales y que imposibilite la recuperación de la actividad productiva de las empresas justo cuando más se necesita.

Las bolsas se han cerrado ya en otras ocasiones y no solo no ha sucedido nada, sino que el cierre devolvió la calma a los mercados y la razón a las empresas, evitándose pánicos y quiebras generalizados. En la situación actual sólo las empresas de comportamiento menos correcto y los fondos especulativos más poderosos, ni siquiera todos y mucho menos los ahorradores pequeños, son los que se benefician de lo que está ocurriendo. Hay que cerrarlas y tengo la seguridad de que se van a cerrar antes o después en esta crisis (Wall Street ya se ha tenido que detener tres veces en las últimas dos semanas). Pero es necesario que eso se haga cuanto antes, y como resultado de una decisión global que debería tomar un G7 ampliado. Quien, además, debería asumir la necesidad de impulsar y garantizar la reforma de su funcionamiento en todo el mundo, una vez que pase la tormenta. Que nadie tenga duda: si se deja que las bolsas sigan

funcionando como hasta ahora, será imposible evitar que se produzca una debacle financiera catastrófica, más pronto que tarde.

Ahora bien, el imprescindible cierre de las bolsas mientras dure la situación de crisis servirá de poco ante las convulsiones que nos esperan en las próximas semanas y meses si al mismo tiempo no se establecen controles sobre los movimientos del capital especulativo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la especulación extrabursátil (en mercados no regulados ni supervisados) es cada día mayor y también más peligrosa.

No estoy proponiendo una barbaridad. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que estos controles son necesarios cuando se producen flujos de entrada o salida "disruptivos" (aquí: <https://bit.ly/2XjTyrg>). Como ya están empezando a ser y como lo serán mucho más cuando países grandes, como Italia o España sin ir más lejos, tengan que acudir a los mercados a financiarse si no reciben el apoyo (ojalá no la sogá) de la Unión Europea.

Mantener abiertas las bolsas, tal y como están funcionando, y dejar en libertad a los movimientos especulativos de capital es como meter un perro rabioso en el quirófano donde se lucha a vida y muerte para salvar al enfermo. Es una gravísima irresponsabilidad y nadie podrá extrañarse si no tomar esas medidas ya nos lleva a la catástrofe.

OCHO ERRORES DE LA UNION EUROPEA Y SUS SOLUCIONES

Publicado en Público.es
el 21 de marzo de 2020

Estoy completamente seguro de que todas las autoridades europeas están haciendo un esfuerzo inmenso para tratar de dar la mejor respuesta posible a la crisis en la que estamos. Sin embargo, los hechos muestran, a mi juicio, que no están acertando con las medidas que toman.

En artículos anteriores me he referido a lo que creo que se viene haciendo mal pero, como se siguen cometiendo errores de envergadura, voy a insistir de nuevo en ellos de forma algo más detallada.

Primer error

Esta crisis no se puede enfrentar como si fuera la de 2008. Entonces se produjo una paralización de la economía que debía resolverse inyectando dinero para que las empresas y los consumidores siguieran produciendo y consumiendo. Ahora, las medidas inmediatas no deben buscar eso. El problema que tenemos es otro: durante un tiempo que puede ser largo, muchas empresas y consumidores no van a poder producir ni consumir, aunque dispongan de dinero suficiente para ello, porque estamos en una crisis sanitaria que obliga a paralizar la vida económica. Por tanto, no se necesita estimular, sino mantener en hibernación a las empresas y a las personas, puesto que si mueren en el periodo de inactividad, lo que tendremos después no será una recesión sino una depresión muy larga.

Segundo error

Por la razón anterior, no vale con proporcionar alivio venidero en forma de préstamos sino evitar desde este mismo momento que las empresas tengan que cerrar en unas pocas semanas y que haya personas que se queden completamente sin ingresos.

Por tanto, lo que se necesita son ayudas inmediatas de dinero en los bolsillos y en las cajas de las familias y las empresas. Y no es necesario darlo a todas sino a las que efectivamente lo necesitan para sobrevivir (una cuestión técnica secundaria que no puedo tratar aquí es cómo lograrlo). Una parte muy considerable del que diésemos a quienes no están perdiendo ingresos no se iba a poder gastar en una situación de catástrofe sanitaria.

En este sentido van, correctamente, las medidas que están tomando los gobiernos como el español, pero es necesario que se extiendan, que se agilicen y que proporcionen más recursos. No basta con que las empresas se mueran sólo un poco, sino que hay que evitar que desaparezcan ahora o unas pocas semanas o meses después de que pase la emergencia

sanitaria. Si queremos que no cierren miles de empresas, no basta con retrasar pagos de impuestos, sino que hay que eliminarles la carga que no puedan soportar durante el tiempo que dure su inactividad. La única solución posible es que los gobiernos garanticen que las empresas y los hogares sigan manteniendo -al menos en la mayor parte- su flujo de ingreso durante este primer periodo de inactividad.

Tercer error

Hace falta más dinero con carácter inmediato. Es verdad que eso lo reconocen las propias autoridades, pero no llevan a la práctica lo que dicen.

En estos momentos no puede haber limitación alguna a la hora de proporcionar el dinero que necesita el sector sanitario, el de cuidados, el mantenimiento de las condiciones de vida digna de las personas y la supervivencia de las empresas cuando, como he dicho, aunque quisieran no pueden realizar actividad alguna.

En realidad, el error que cometen las autoridades europeas no es que no quieran poner más dinero, sino que están recurriendo a una fuente para ponerlo que no puede dar el que se necesita; bien porque es un mecanismo lento y no es seguro que funcione (préstamos de los bancos), bien porque se tiene miedo a que, si lo ponen los propios gobiernos endeudándose, tengan que asumir el riesgo de no poder soportar la carga financiera poco tiempo después.

Se equivocan porque existe la posibilidad de disponer de todo el dinero necesario, sólo que se debe acudir a la fuente adecuada, que no es otra que la que en última instancia crea el dinero que hay en la economía: el banco central que puede darle a los gobiernos y a la economía en general lo que nadie más puede proporcionarle de un día para otro: todo el dinero que necesiten (los bancos privados también crean el dinero de la nada aunque haciendo negocio con ello).

Recurrir a los bancos comerciales para financiar a los gobiernos y a las empresas en medio de una emergencia sanitaria es una barbaridad y una irresponsabilidad histórica (si no algo peor) puesto que retrasa la financiación, la hace más cara y convierte la ayuda de hoy (o, mejor dicho, la que se recibirá pasado mañana) en una carga más que solo retrasará el cierre de miles de empresas.

Cuarto error

Mucho peor que el de recurrir a los bancos comerciales en una emergencia es el error de utilizar, como ya se está barajando, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, es decir, esperar a que los países caigan para levantarlos después mediante rescates que estarían vinculados a

condiciones sociales y económicas draconianas. Algunos lo están pensando, es la solución fácil, la del matarife, y esto es mucho peor que un error.

Quinto error

La Unión Europea se equivoca también limitándose a anular las reglas fiscales de contención como hará la semana próxima anulando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y permitiendo que los gobiernos escapen del corsé fiscal que les impone.

Se trata de una medida necesaria e inevitable pero completamente insuficiente: es como si las autoridades de una ciudad en donde está prohibido que las calles se mojen, cuando se produce un tsunami lo que dicen es que se permite que se mojen. ¡Pues claro que los gobiernos se van a saltar esas reglas! (salvo que estén en manos de irresponsables dispuestos a que sus compatriotas mueran por falta de recursos sanitarios y a que su economía se hunda irremisiblemente más tarde).

No basta con eliminar esas reglas que cualquier gobierno sensato se iba a saltar de facto, sino de establecer al mismo tiempo en qué condiciones podrán gastar ahora, en medio de la emergencia, más de lo que se puede gastar con esas normas. Es decir, lo que tendría que hacer Europa es establecer las condiciones necesarias para que este gasto extraordinario y el incremento de deuda que va a producir no lleve consigo después un daño económico (y político) incluso peor del que ahora estamos viviendo.

Para evitar este error lo que se necesita es que la financiación extraordinaria a la que han de recurrir inevitablemente los gobiernos no esté sometida a la amenaza de “los mercados” (en realidad personas individuales o societarias con nombres y apellidos). Y eso es algo que se puede conseguir fácilmente, como digo, si el Banco Central Europeo es quien actúa como prestamista directo de los gobiernos o garante de esa financiación, y no sólo como el que paga el banquete de la banca.

Sexto error

Si se leen las declaraciones de los dirigentes de los bancos centrales o de la Comisión (véase, por ejemplo, el artículo que hoy mismo publica el gobernador del Banco de España en el diario El País) es fácil observar que se hablan dándose orientaciones uno a otro, como si fueran (en realidad lo están siendo) dos polos diferentes del problema, dos fuentes distintas e independientes de decisión. Eso es un error porque de lo que se trata ahora es de utilizar una tijera que, como he dicho, corte por lo sano. Pero esa tijera, como todas, tiene dos hojas, la de quien pone el dinero (el banco central) y la de quien lo gasta (los gobiernos). Y ninguna tijera puede funcionar actuando cada hoja por su lado. Es algo que sabemos desde hace mucho tiempo y la metáfora se la debo al premio Nobel James

Tobin: “La idea de que el dinero y los precios pueden separarse y delegarse al banco central mientras que el Congreso y el Ejecutivo se ocupan por su cuenta del presupuesto, los impuestos, el empleo y la producción es una falacia”.

Es un trágico error que en medio de una catástrofe se siga actuando bajo esa engaño, haciendo creer que lo mejor es que el Banco Central Europeo actúe sin ponerse de acuerdo con los gobiernos. En estos momentos de emergencia extraordinaria todas las autoridades deben sentarse y actuar al unísono, adoptando medidas acordadas entre todas y ayudándose una a otra a resolver el problema gravísimo al que se enfrentan las personas y las economías.

Séptimo error

Los gobiernos europeos, y en particular el alemán y el de Países Bajos, están cometiendo un error de dimensiones históricas imponiendo la idea de que cada país debe actuar por su cuenta para hacer frente a la pandemia. Un error al que, en menor medida, ha contribuido también el Banco Central Europeo cuando dijo que no podía hacer más y que la solución era fiscal y que dependía de los gobiernos, de unos gobiernos que hoy día no disponen ni de recursos propios, ni de moneda propia, ni de una hacienda común.

Alemania, sobre todo, se equivoca por dos razones. La primera, porque es estúpido dar respuestas locales a una crisis sanitaria y después económica que es intrínsecamente propia de la sociedad interrelacionada y globalizada en la que vivimos. Y la segunda, porque está quemando sus propias naves. La gente que va a sufrir de nuevo por el empeño ultramontano alemán, o por su inconfesable voluntad de seguir dominando a toda Europa por cualquier medio, terminará viendo lo que hay detrás de la falta de respuestas mancomunadas: ética supremacista, egoísmo y ánimo de dominar.

Es verdad que Alemania ha podido acumular superávits comerciales gigantescos gracias al diseño actual del euro, pero también lo es que necesita a sus socios y que si ella misma genera un profundo sentimiento anti alemán y antieuropeo lo que hace es matar a la gallina que le pone huevos de oro.

Octavo error

Se equivocan también las autoridades si confían preferentemente, tal y como expresamente se decía en el comunicado del Eurogrupo, en los llamados estabilizadores fiscales automáticos, es decir, en la bajada de pagos fiscales o en el aumento de los subsidios que se ponen en marcha automáticamente cuando baja la actividad.

El tipo de impacto que estamos sufriendo requiere mucho más. Y, repito, no sólo impulso económico puesto que en medio de una sociedad obligadamente paralizada por razones sanitarias no basta con poner gasolina al motor, sino que se trata de evitar que no se eche a perder por no utilizarla.

Son demasiados errores y que además están costando muy caros porque se refieren a actuaciones inmediatas que van a ponernos en peligro cuando salgamos de la crisis sanitaria, si se siguen cometiendo.

¿Cómo no está claro que si se sale de esta con las empresas cerradas vamos directos a un problema subsiguiente de nuevas y terribles consecuencias? ¿Cómo no se entiende que una emergencia sanitaria global no se soluciona con el vaso medio vacío sino con todos los recursos disponibles y creando otros nuevos, como pueden hacer los bancos centrales? ¿Cómo no perciben que una cuarentena que se alargue significa el cierre inevitable de empresas y la ruina de las personas si no se les garantiza un flujo mínimo de ingresos? ¿Cómo no se dan cuenta de que eso no se está consiguiendo ni se va a lograr con las medidas que están tomando hasta la fecha?

La Comisión Europea debe sentarse con el Banco Central Europeo, poner sobre la mesa todo el dinero necesario y permitir que los gobiernos garanticen inmediatamente el flujo de ingresos que están perdiendo las empresas y las familias. Sea como sea, sea la cantidad que sea y sean cuales sean mañana las consecuencias de esa actuación de ahora porque, en cualquier caso, no serán peores de las que tiene equivocarse y no hacer ya lo que se debería haber hecho.

HAY ALTERNATIVAS. PERO QUEDA POCO TIEMPO PARA EVITAR UNA CATASTROFE

Publicado en Público.es
el 23 de marzo de 2020

El Gobierno ya ha anunciado que propondrá al Congreso de los Diputados que se prolongue por quince días el estado de alarma y eso quiere decir que ya sabemos con seguridad el problema económico al que se enfrenta España.

Es muy fácil de entender. Según un estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del año pasado, en nuestro país hay aproximadamente 2,9 millones de empresas, de las cuales:

1 millón son microempresas (1-9 empleos) que ocupan en total a 3,5 millones de trabajadores.

160.000 son medianas empresas (10-49) que emplean a 3 millones de trabajadores.

26.000 son medianas empresas (50-249) que proporcionan empleo a 2,5 millones de trabajadores.

Algo menos de 5.000 son grandes empresas (más de 250) que ocupan a 5,6 millones de trabajadores.

Y, en total, en España hay unos 3,2 millones de personas que trabajan como autónomos

Las preguntas que hay que hacerse son elementales y creo que no hace falta tener doctorados en economía para contestarlas, ni las responderán de una manera diferente quienes sean de derechas o de izquierdas, ni quienes sean ricos o pobres:

¿Cuánto pueden aguantar las microempresas, las pequeñas y medianas empresas o los autónomos cuando dejan de recibir ingresos durante cuatro semanas o más porque se paraliza su actividad para evitar la propagación del virus, o incluso las empresas más grandes?

¿Qué pasará en España si una buena parte de esos millones de trabajadores que emplean dejan de recibir sus salarios?

Las respuestas creo que son evidentes y se pueden resumir en una sola conclusión: si no se compensa en todo o en buena parte y con dinero efectivo a las empresas, a los trabajadores autónomos y a los asalariados que ahora dejan de tener ingresos mientras deben seguir haciendo frente a los pagos de su día a día, la economía española va directa a la catástrofe y se dispararán la pobreza y los problemas sociales de todo tipo. Se pueden hacer cálculos y poner números pero el resultado será siempre el mismo, una catástrofe.

En estos momentos, no hay otro problema económico por delante sobre la mesa y no hay otra solución que no sea garantizar ese flujo de ingresos a la totalidad de las empresas, los hogares y las personas que los pierdan como consecuencia de la cuarentena o del bloqueo productivo. Y es urgente hacerlo.

El gobierno español ya ha tomado medidas para tratar de hacerlo mediante ayudas de diferente tipo. Mas no queda más remedio que decir que son insuficientes y que no se van a dar por el camino adecuado.

No basta con que esas ayudas sean parciales. Deben llegar a la totalidad de las empresas, trabajadores y familias que se quedan sin ingresos y de la manera más rápida.

Es posible que para las empresas más grandes o en mejor situación económica sean suficientes los créditos con los avales anunciados, aunque esa no es la situación de la inmensa mayoría de las empresas españolas que suelen estar en la cuerda floja. E igual ocurre con las familias.

La ayuda debe llegar en efectivo y no como deuda.

Hay que tener en cuenta, además, que se trata de llevar la ayuda a todos los rincones de la geografía española, a millones de trabajadores autónomos y microempresas que en los últimos tiempos han comenzado a estar en muchos casos financieramente desatendidos.

Las ayudas fiscales, las subvenciones finalistas, incluso los créditos para reincorporarse a los mercados y, en general, las medidas de estímulo a la economía serán necesarias más adelante pero no son lo imprescindible en este momento. Harán falta para la reactivación mas ahora se trata de no morir. Por mucho que se quiera, ahora solo se consumirán los productos básicos para los que se puede salir a la calle porque no todo el mundo usa el comercio electrónico, ni tampoco ese puede ser la solución porque la mayor parte de sus ganancias se derivan a grandes empresas que generan poco trabajo y de calidad en España.

La cuestión es muy clara: se trata de que los responsables de las empresas y los trabajadores se puedan quedar en sus casas (como es imprescindible para frenar la propagación del virus) con la seguridad de que no van a perder ni sus negocios ni sus empleos una vez que se acabe con la epidemia.

No vale tampoco con establecer simplemente una renta básica universal. Por muchas que sean sus ventajas en algunos aspectos, ahora no sirve: no sería suficiente en la mayoría de los casos en que se pierde el salario y sobraría en los demás y, sobre todo, no da respuesta a la otra cara del problema, la supervivencia de las miles de empresas que no pueden desarrollar su actividad.

Es difícil de calcular. Siguiendo la experiencia china y dependiendo de lo largo que sea el periodo de cuarentena sin ingreso, algunos economistas han estimado que una compensación total de la pérdida de ingresos podría costar entre un 7-8% y un 25% del Producto Interior Bruto, es decir, entre 85.000 y 300.000 millones de euros en España. Y una cantidad menor, lógicamente, si la compensación no cubre la totalidad de los ingresos.

Es mucho dinero y es evidente que el Estado no lo tiene disponible. Debe recurrirse a financiación externa. Lo ideal y lo lógico sería, como he explicado en otros artículos anteriores, que la proporcionara el Banco Central Europeo en cooperación con las demás instituciones de la Unión Europea. Pero los costos tienen que hacerse con el mimbres disponible. Por tanto, y mientras Europa no rectifique, no hay otra posibilidad que actuar con independencia del BCE, aunque se deba seguir presionando para que en la Unión Europea se imponga la cordura.

En consecuencia, la única alternativa posible para evitar una catástrofe económica en nuestro país es recurrir al endeudamiento que haga falta. Sin límites.

Además de recurrir a la banca privada (ya llegará la hora de pedir cuentas a quien haya que pedírselas por el sobrecoste que eso supone) hay otras vías que se podrían explorar con urgencia. Se me ocurren tres:

* Emisión de Deuda Patriótica a largo plazo suscrita por los españoles que podamos tener una mínima capacidad de ahorro. Es verdad que pasamos una carga a las generaciones futuras, aunque en este caso por una razón de supervivencia y teniendo en cuenta que no podremos salir bien de esta coyuntura si no ponemos las luces largas y nos replanteamos nuestro modo de vida, ofreciendo, a cambio, mejores condiciones de vida a nuestros hijos y nietos.

* Creación de un Fondo de Emergencia Solidario, una especie de crowdfunding nacional para proporcionar liquidez a las empresas que se comprometan a mantener sus puestos de trabajo, a no recurrir a paraísos fiscales y a poner en marcha lo más pronto posible estrategias de sostenibilidad y de contribución a la economía del bien común.

* La asunción de algún tipo de recorte temporal y ponderado en el sueldo por parte de los empleados públicos o de cualquier otro colectivo profesional que goce de una mejor situación económica.

Para aliviar el peso de la deuda que haya que echarse encima a causa de la epidemia, también será necesario actuar en la línea anunciada por el gobierno, aunque complementando sus medidas: paralizando el pago de alquileres para quienes vean reducidos sus ingresos, tarjetas de crédito y otros gastos, quizá obligando a prorratear en el resto del contrato las cantidades postergadas, y, como se está anunciando, el de los impuestos.

Y, por supuesto, tratando de recuperar en la mayor medida de lo posible y cuanto antes la ayuda que ahora se preste.

El gobierno debe tomar la decisión de proporcionar esta garantía de ingresos a empresas y familias inmediatamente y, lo que es muy importante, comunicar cuanto antes a la sociedad que va a hacerlo, para que cunda la tranquilidad y se pueda aguantar el tiempo que haga falta con la seguridad de que habrá compensación suficiente. Otros países con menos fortaleza económica que nosotros lo están haciendo y cada día que pase sin tomar esa decisión es un paso que damos hacia el abismo.

Algunos medios informan de que dentro del gobierno español hay algunos ministerios más favorables que otros a poner en marcha las medidas que impliquen incrementar el gasto y la deuda.

No sé si eso será cierto y, en todo caso, mi influencia al respecto es nula pero no puedo mantenerme callado y pido al resto de los españoles que tampoco se queden para presionar conjuntamente.

Apelo a la responsabilidad de este gobierno, a la de todos los partidos y responsables de las instituciones públicas. No pueden caer en el error de creer que esto es una situación temporal. El periodo de inactividad que ya se ha anunciado es letal con toda seguridad. Cuatro o cinco semanas de inactividad, sin ingresos, son demasiadas para docenas de miles de empresas y trabajadores.

Hay que actuar con valentía y poner el dinero que haga falta en sus bolsillos sin mirar en estos momentos a cualquier otra consecuencia. Los españoles sabremos estar a la altura a la hora posterior de hacer cuentas y de asumir las medidas que sea necesario adoptar ante una calamidad como la que estamos viviendo y vamos a vivir, siempre y cuando se adopten con equidad, repartiendo las cargas conforme al sacrificio realizado y a nuestra diferente capacidad de pago.

No se puede anteponer la ideología fiscal a las necesidades de sentido común de los españoles en un momento de emergencia. En estos momentos, el “santo temor al déficit” del Ministro de Hacienda y Premio Nobel de Literatura José de Echegaray puede destruir a España. Ahora que hay que tomar medidas excepcionales, el miedo al peligro, como dijo Daniel Defoe, es diez mil veces más terrible que el propio peligro. Más nos vale pasarnos que no quedarnos cortos.

EL VIRUS NO ES NUESTRO UNICO ENEMIGO

Publicado en Público.es
el 24 de marzo de 2020

El presidente del gobierno y otras muchas autoridades hablan continuamente de guerra para referirse al problema que estamos viviendo. Y es verdad. Seguramente no hay mejor forma de expresar la situación actual, con un enemigo al que hay que combatir y vencer, el virus, en este caso encerrados, poniendo a máxima potencia nuestros recursos sanitarios, científicos o de seguridad, y con toda disciplina y colaboración ciudadana.

Pero, precisamente porque es esto último lo que necesitamos, me parece que esta situación dramática también está poniendo de manifiesto que los españoles no hemos de vencer solamente al virus para salir adelante, no solo en estos momentos de propagación de la epidemia sino también cuando se acabe.

Me temo que tenemos otros enemigos.

Hemos de enfrentarnos al enemigo desgraciadamente invisible para muchos compatriotas que ha ido minando en los últimos años los recursos e instituciones públicos que ahora nos resultan imprescindibles. Y muy en particular los de la sanidad que se han ido traspasando al sector privado, que tiene un alcance y unos objetivos legítimos, pero obviamente distintos y que no son los que permiten hacer frente mejor a calamidades como la que estamos viviendo. Así lo está poniendo de relieve Carlos E. Bayo (aquí: <https://bit.ly/2zZXaXj>)

Ahora necesitamos que nuestro personal sanitario trabaje a pleno rendimiento, y desde luego que lo está haciendo así, pero antes no se tuvo miramiento a la hora de despedirlo o de mantener su situación laboral en precario.

Y eso no sólo ha ocurrido desgraciadamente en la sanidad. Hemos dado también miles de millones al sector bancario, supuestamente para rescatarlo y fortalecerlo, pero ahora que lo necesitamos con urgencia carece del personal y de las oficinas necesarias. Hay que darle todavía más recursos y facilidades y aliviarle las exigencias legales de seguridad para que pueda actuar (en realidad, para que pueda seguir haciendo beneficios), y por desgracia sus dirigentes no paran de poner pegas para proteger sus privilegios.

Nuestro enemigo también es quien antepuso otros intereses a los nacionales, dando lugar a las carencias que ahora sufrimos. Como también lo es el hacer que mucha gente necesitada de servicios públicos se crea el mantra de que lo bueno es que haya menos impuestos, cuando con ello

sólo se consigue dejar morir por inanición a los servicios o pensiones públicas para que los privados puedan entrar por la puerta de atrás, o que el Estado no pueda redistribuir más justamente la riqueza para impedir que se siga concentrando sin límite en quienes más tienen.

Ahora necesitamos con toda urgencia una vacuna y que los investigadores actúen a toda velocidad, pero resulta que otro enemigo de España había dejado en mantillas los recursos de investigación, permitiendo que se desmantelaran equipos de primera línea mundial y dejando que nuestros mejores cerebros emigraran a otros países.

Tenemos estos días a los niños en nuestras casas y nos damos cuenta del valor tan extraordinario que tienen los maestros, pero otro enemigo invisible de los españoles ha mantenido al magisterio como una profesión de segunda fila, en la precariedad y en el abandono, casi en el desprecio.

Es verdad que la inmensa mayoría de los españoles está respondiendo en estos momentos con disciplina y unidad. Sin embargo, no es menos cierto que otro de nuestros enemigos invisibles pone continuamente en marcha resortes de incivismo y desobediencia y que constantemente hemos de comprobar que las fuerzas de seguridad (cuya labor, por cierto, tampoco apreciamos en lo que vale para mantener la seguridad y normalidad de nuestra vida cotidiana) tienen que perder tiempo tratando de controlar lo que un mínimo de respeto y cordura debería hacer innecesario.

También es nuestro enemigo la corrupción y no sólo el virus. La corrupción que ha hecho que los españoles apenas confíen en sus representantes o que impide que el Jefe del Estado se pueda presentar día a día con la cara alta ante su pueblo para darle ánimo y confianza en el dolor - como cabría esperar - porque debe sentirse avergonzado al estar descubriéndose al mismo tiempo el corrupto comportamiento de su padre, nuestra anterior máxima autoridad nacional.

Hemos de combatir, pues, no solo al virus sino también al enemigo que ha debilitado o despilfarrado los recursos que ahora necesitamos y al enemigo que impulsa la falta de espíritu ciudadano, el individualismo y el desprecio hacia lo mejor que tenemos. Ahora bien, si hubiera que mencionar otro enemigo quizá aún más peligroso al que apenas le estamos haciendo frente a pesar del daño que va produciendo es nuestro cainismo, nuestra incapacidad para asumir como propio un proyecto nacional ni siquiera en medio de una emergencia sanitaria.

No soy ingenuo. Sé perfectamente que nuestra sociedad es desigual y que en ella laten intereses de clases y grupos muy diferentes y que cada uno tiene un poder muy distinto. Es más, hace unos meses prologué el libro *Las redes de poder en España: Élite e intereses contra la democracia* de Andrés Villena, en el que se muestra que un grupo bastante

reducido de personas y grupos es el que teje y maneja casi a su único antojo lo que ocurre en nuestro país desde hace mucho tiempo. Por eso sé que esa enorme y muy oculta concentración del poder de decisión es un enemigo terrible. Sin embargo, ni siquiera creo que sea el peor que tenemos.

Mucho más peligroso es el enemigo que está dentro de nosotros mismos y que nos impide el ser capaces de vencer a todos los demás forjando un proyecto de interés y unidad nacional, no nacionalista o excluyente sino integrador y conciliador de todas nuestras diferencias, al menos, para las cuestiones esenciales de nuestra vida o en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo.

Es desolador comprobar en estos días cómo en las redes no se para de propagar insultos de unos contra otros por el simple hecho de defender posiciones diferentes. Y que eso no solo lo hace el pueblo llano, sino los políticos de primera línea o los máximos referentes mediáticos de la opinión pública. Ni siquiera una epidemia que puede matar a cualquiera de nosotros por igual, sin distinción alguna, es capaz de frenar el desprecio y la agresión por razones de opinión incluso entre los grupos familiares. Es el enemigo que impide hacer callar al totalitarismo que hay dentro de quienes creen que la única verdad es la suya, incluso cuando puede ser que en unas horas cualquiera de nosotros ingrese a pasar sus últimas horas en una UCI abarrotada.

Nuestro enemigo es quien nos lleva a informarnos solo a través de las fuentes que sólo corroboran nuestro pensamiento o nuestras preferencias, en lugar de comprobar que hay diferentes puntos de vista y que la verdad no suele encontrarse en un solo lugar sino esparcida, como el viento, entre todas las personas y grupos de opinión. Y el que nos hace creer que lo que nosotros sabemos es todo lo que hay que saber para conocer la verdad. El enemigo es el que lleva a creer que lo que uno conoce una semana después ya lo sabían antes los demás o el gobierno y se basa en eso para criticarlos con saña.

En lugar de actuar como una piña, defendiendo y apoyando a quien tiene la responsabilidad democrática de dirigir nuestros destinos en un momento de peligro, porque así lo han querido legítimamente nuestro voto y nuestras instituciones, y aunque fuese esperando a quitarlo cuanto antes a través de nuevo de las urnas, en lugar de eso, se aprovecha la situación para hacer caceroladas contra el gobierno y para difundir todo tipo de rumores, de mentiras y de infamias para debilitarlo a base de calumnias. Y nuestro enemigo es el que hace que eso lo practiquen incluso nuestros líderes o representantes políticos y que encima se le siga votando.

Nuestro mayor enemigo es el que logra que media España siga creyendo que la otra es la culpable de todo lo que nos pasa. El que nos hace apreciar o defender no a intereses comunes sino tan sólo a los de quienes son o piensan como nosotros. El que nos hace creer que es posible ser patriota o defender los intereses del pueblo creyendo que solo nosotros somos sus intérpretes o que sólo nosotros sabemos lo que toda España o los demás necesitan. El enemigo es quien lleva a unos españoles a creerse dueños de la bandera de todos e incluso -en el colmo de todo colmo- a decir que nuestros representantes legítimos no tienen el derecho a utilizarla. El enemigo es quien hace creer que España es sólo una parte de ella, la propia.

El enemigo no es el virus sino el que en estos momentos está impidiendo que todos los españoles sin excepción actuemos unidos contra una amenaza sanitaria.

Desde luego que no tengo la solución para combatir a este tipo de enemigos, pero tengo la seguridad de que sin vencerlos no será posible salir con bien ni de esta epidemia ni de otros problemas o crisis que vengan en el futuro, sean cuales sean.

DE TODAS LAS OPCIONES ELIGEN LA PEOR Y MÁS CRUEL: ESTO ES EUROPA

Publicado en Público.es
el 25 de marzo de 2020

A última hora de la noche de ayer martes 24 de marzo, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proponer al Consejo Europeo que la respuesta financiera a la catástrofe de la Covid-19 sea que los países que lo necesiten recurran a un préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

De todas las alternativas posibles es la peor, la más insuficiente y cruel. Explico por qué.

El MEDE es una entidad financiera creada por los diecisiete estados miembros de la zona euro en 2012 con el propósito general de proporcionar ayuda financiera mediante préstamos a los gobiernos que lo necesitan.

La ayuda que presta el MEDE se considera un "rescate" porque no se da en cualquier circunstancia ni para cualquier fin, sino sólo cuando lo pide un país que experimenta graves problemas de financiación y bajo condiciones muy estrictas.

El préstamo puede ser con interés por debajo de los del mercado y con un plan de amortización suave que puede variar según los casos, de modo que puede resultar, ciertamente, más barato que acudir a la banca privada en una situación apurada.

Sin embargo, esta ayuda no es automática ni incondicional. La solitud del país rescatado deber ser evaluada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y si es posible también por el Fondo Monetario Internacional. Se recibe en forma de préstamo y se formaliza mediante el llamado MoU (Memorandum of Understanding o Memorandum de Entendimiento) que es un documento en el que se imponen al país una serie de condiciones de obligado cumplimiento en materia de política económica y fiscal.

Las razones por las que me parece que este mecanismo es indeseable para hacer frente a los problemas económicos gravísimos que va a producir la pandemia que sufrimos son varias.

En primer lugar, se quiera o no, recibir un préstamo del MEDE es un estigma. Significa que un país es rescatado y, por tanto, que de alguna manera ha fracasado en su política de estabilización macroeconómica.

Es evidente, sin embargo, que las necesidades financieras que plantea una emergencia sanitaria no son iguales que las derivadas de una mala gestión macroeconómica (suponiendo que entonces estuviera justificado

aplicar un mecanismo como este que sacrifica y humilla a quien lo recibe).

Que no se engañe nadie: lo que hay detrás de esta propuesta que parte de los países de centro y norte Europa es aprovechar la ocasión para mostrarse superiores a los de la periferia, haciendo creer que las consecuencias letales de la epidemia son debidas a nuestra condición inferior y de nuestra incapacidad para gobernarnos con eficacia y sin despilfarro. Quieren castigarnos de nuevo para disimular que todo el entramado del euro está pensado y diseñado para que esos países absorban la mayor parte del valor y los beneficios que generamos los demás.

En segundo lugar, establecer que cada país acuda al MEDE por su cuenta para hacer frente a una emergencia sanitaria que afecta a todos los países es renunciar a principios elementales de cooperación y solidaridad, al esfuerzo común y a la complicidad que se supone que deben sostener a los estados miembros de una unión económica y política como la europea (e incluso más una unión monetaria como la eurozona). Recurrir al MEDE no sólo es ofensivo sino que traiciona el espíritu europeo y proclama de facto que Europa se construye a partir de ahora a base del "sálvese quien pueda". Si no hay esfuerzo mancomunado ni apoyo mutuo en medio de una emergencia que provoca la muerte de miles de europeos ¿cuándo los habrá?

En tercer lugar, el MEDE no puede proporcionar toda la financiación que sería necesaria para que una crisis sanitaria, humana, y económica como la que estamos viviendo se resuelva suficientemente bien.

Los ministros de Economía y Finanzas han propuesto utilizar unos 238.000 millones de euros para ofrecer líneas de crédito preventivas de hasta un 2% del PIB de cada país (algo menos de 25.000 millones en el caso de España).

Su insuficiencia es patente si se tiene en cuenta que sólo el plan de apoyo inmediato de Inglaterra es de 400.000 millones, que el de Dinamarca representa el 13% del PIB o que Estados Unidos acaba de aprobar una intervención de 2 billones de dólares. Un grupo de expertos españoles valoraba ayer mismo como muy positivo que España recurriera al MEDE si la ayuda que recibiera fuese de 200.000 millones, casi todo lo que ha propuesto utilizar el Eurogrupo para todos los países.

En cuarto lugar, la alternativa del MEDE es la más cruel de todas las posibles por una razón muy sencilla. El Memorándum de Entendimiento sería sin lugar a duda la vía torticera que obligaría a España a aplicar de nuevo las políticas de recortes y desmantelamiento que son justamente las que han ocasionado que nuestros servicios públicos tengan ahora tantas dificultades para enfrentarse a la emergencia sanitaria. O digámoslo claro, las que han condenado a muerte a muchas personas y las que

seguirían haciéndolo con el único objetivo de que el capital privado siga multiplicando sus beneficios.

Naturalmente, se me puede decir que los líderes europeos pueden ahora saltarse el Tratado del MEDE y dar los préstamos sin condiciones pero, si se pueden saltar los tratados, como de facto está ocurriendo cuando el Banco Central Europeo financia por la puerta de atrás a los gobiernos, ¿por qué no saltárselos entonces para que sea el BCE quien financia directamente en esta situación de emergencia?

El acuerdo del Eurogrupo es una auténtica vergüenza para Europa, un verdadero escándalo que la puede hacer saltar por los aires.

Hay otras posibles medidas que son menos costosas económicamente, más seguras, más solidarias y coherentes con el espíritu europeo y más respetuosas con la dignidad, con la soberanía y con el bienestar de las naciones europeas.

La exigencia de contar ahora con financiación extraordinaria no es el resultado de un derroche ni de un incumplimiento de normas previas sino de una emergencia que está matando a miles de personas. Actuar como están haciendo los líderes europeos, con egoísmo y sin diligencia, debería considerarse como algo peor que un simple escurrir el bulto. Su comportamiento comienza a parecerse a un crimen económico contra la humanidad. La austeridad que impusieron en la anterior crisis mató a miles de personas y parece que siguen dispuestos a que eso vuelva a ocurrir.

Espero que se imponga la razón y que los Jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen mañana jueves vayan más lejos, rompan los grilletes de la insolidaridad que está atenazando a Europa y que corrijan este acuerdo. La emisión de eurobonos en mucha mayor cantidad de la prevista por el Eurogrupo o la intervención directa sobre empresas y familias del Banco Central Europeo son las alternativas únicas y urgentes. El MEDE no lo es.

Salvo que afortunadamente se produzca un cambio radical de última hora, la presidenta Ángela Merkel impondrá hoy jueves al resto de los gobiernos europeos su tesis sobre la forma de abordar el problema económico que plantea la propagación de la Covid-19. Tendrá el apoyo de otros países del centro y el norte de Europa y muy especialmente de los Países Bajos, todos los cuales vienen defendiendo desde hace años que la mejor forma de resolver las crisis económicas en Europa es la aplicación de políticas de recorte de gasto que reduzcan la deuda, a pesar de que estas políticas de austeridad no han hecho sino que aumente sin parar.

En esta ocasión, lo que plantean estos países liderados por Alemania y Países Bajos no es exactamente que se actúe con frugalidad, una auténtica barbaridad en medio de una emergencia sanitaria, sino que cada país actúe por su cuenta y que los problemas de financiación que puedan producirse se resuelvan a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Un procedimiento concebido para rescatar a los países que se encuentren en situación de profunda inestabilidad financiera y a cambio de aplicar las políticas que le convienen a Alemania y a los grandes capitales privados y financieros y que producen un gravísimo daño al bienestar de los pueblos.

Es una pena que un gran país como Alemania, que podría ser la cabeza del proyecto europeo de auténtica integración, de estabilidad y de paz que todo el planeta necesita, se olvide constantemente de su historia y vuelva a reproducir errores que tuvieron en el pasado consecuencias trágicas.

Alemania parece olvidarse de que su ansia de dominio y control y su afán por mostrar su superioridad y su expansionismo de tintes imperialistas provocó dos guerras mundiales en las que murieron millones de seres humanos. Se olvida Alemania de los efectos dramáticos que produce la avaricia de las grandes potencias cuando lo quieren todo para ellas y cuando se empeñan en imponer condiciones draconianas a los vencidos o más débiles, como hicieron con ella los ganadores de la primera guerra mundial. Las brutales reparaciones de guerra que le impusieron, sabiendo que no iban a poder pagarse nunca, hundieron a Alemania, provocaron su ruina y la indignación de su pueblo y sembraron la semilla del odio y de la sinrazón que llevaron a Hitler al poder.

La Alemania de hoy también se olvida de que aplicar políticas de austeridad cuando no conviene aplicarlas y sólo en favor de los más ricos trae consecuencias nefastas. Tal y como ocurrió con el paquete de fuertes

recortes de gastos y aumentos de impuestos que llevó a cabo el canciller alemán Heinrich Brüning de 1930 a 1932. Hoy día sabemos, por los estudios de diversos economistas e historiadores, que la austeridad mal aplicada fue otro de los desencadenantes del descontento y de la crisis social que llevaron al ascenso del nazismo.

Ahora que es tan exigente con la deuda de los demás, Alemania también se olvida de que es precisamente el país europeo que más deuda ha dejado de pagar, al que más se le ha perdonado. En 1930, 1931 y 1932 se le concedieron moratorias y reestructuraciones que dejaron reducida al 2% su deuda original de la primera guerra mundial. En 1939 Hitler dejó de pagar todas las deudas pendientes (incluido ese 2%), y de nuevo en 1953 -cuando debía dinero a más de 70 países- el Tratado de Londres volvió perdonarle el 62% pendiente de la primera guerra mundial, de la segunda y de la postguerra. Se olvida, pues, Alemania, de que ha podido llegar a ser una potencia de nuestra era gracias a la generosidad y el sentido común de los demás países que le han perdonado la mayor parte de sus deudas. Entre ellos, por cierto, Grecia, a quien los dirigentes alemanes trataron, sin embargo, con superioridad y saña injustificada en la crisis de 2008.

Se olvida Alemania, por ejemplo, de que se benefició de la generosidad de sus acreedores cuando, después de la segunda guerra mundial, le permitieron que sólo dedicara un 5% de sus ingresos por exportaciones a pagar deuda. Mientras que los líderes alemanes obligaron a Grecia a dedicar casi el 40% de su PIB a pagarla en la última crisis económica.

En nuestros días, parece olvidarse Alemania de que forma parte de una zona monetaria y, por tanto, de que los déficits que generan unos países no son casuales ni fruto exclusivo de su propio comportamiento, sino justamente lo que se produce cuando otros (como Alemania) tienen superávits. Y se olvida igualmente de que tan malos son los unos como los otros. Es decir, que tan obligados están a adoptar medidas de ajuste los países que tienen déficit, como los que tienen superávits. Y Alemania nunca ha hecho esto último sino todo lo contrario. En concreto, muchos estudios han demostrado que el desequilibrio que se produce en la eurozona y la ventaja que saca de él Alemania no se debe, como suele decirse, a que los salarios españoles y los de otros países de la periferia sean altos, sino a que los alemanes son demasiado bajos en relación con la norma de inflación establecida (lo explico aquí: <https://bit.ly/3e3wKmv>).

Parece que Alemania se olvida demasiado a menudo de que pertenecer al euro no es una bicoca para países como España, sino todo lo contrario. Entramos por la complicidad de nuestras élites con las europeas, pero esa no ha sido nunca la mejor opción que ha tenido ni la economía española ni otras muchas, como la italiana que ahora también sufre especialmente. Está demostrado, por ejemplo, que pertenecer al euro ha

supuesto una penalización en términos de crecimiento económico a las economías que forman parte de la unión monetaria de 1,5 puntos porcentuales en la fase de expansión y de 1,1 puntos en la de crisis (lo explico [aquí](#)).

Y precisamente olvida Alemania, o al menos sus principales dirigentes, que las enormes ventajas que su economía obtiene de las demás en la Unión Europea y en el euro no se convierten preferentemente en beneficios para los alemanes que más lo necesitan. O sea, que no es precisamente un ejemplo para el resto de Europa desde el punto de vista de la justicia y el progreso bien entendido. La concentración de la riqueza en Alemania (donde el 1% más rico recibe tanto como el 50% más pobre) es una de las más altas de la OCDE. Y aunque sus dirigentes se precian del alto nivel de empleo alemán, no se puede olvidar que sólo el 40% lo es a tiempo completo y que la mitad de los trabajadores están a tiempo parcial, subcontratados, son falsos autónomos o tienen remuneraciones muy bajas (un tercio de los pobres alemanes tienen empleo). También son especialmente grandes las diferencias entre mujeres y hombres en Alemania y los impuestos sobre el trabajo representan los dos tercios de los ingresos fiscales, mientras que los que recaen sobre el capital solo aportan el 13% (todos estos datos de un reciente informe sobre la desigualdad en Alemania están aquí: <https://bit.ly/36gQ25d>). Y se olvida Alemania que, en lugar de utilizar el excedente que obtiene gracias a las ventajas que le proporciona una zona euro diseñada en su interés, sus dirigentes han permitido que se utilice para crear problemas fuera. De los 1,62 billones de euros que generó de 2002 a 2010 solo 554.000 millones se aplicaron en su propio mercado interno para mejorar su dotación de capital o las condiciones de vida de su población. Los bancos alemanes dedicaron el resto a hacer negocio fuera financiando, principalmente, burbujas inmobiliarias

Alemania no debería olvidar su propia historia ni las causas verdaderas de su situación de privilegio. Ahora tiene el poder suficiente para imponer lo que le conviene a los demás, pero el poder mal utilizado produce siempre efectos de rebote. Alemania ha diseñado en los últimos tiempos planes de desarrollo industrial y de seguridad nacional encaminados a consolidarla como "nación-líder" o nación-marco de Europa. Sería un empeño noble si eso se pretende conseguir con cooperación y solidaridad. Sin embargo, si sigue empeñada en hacerlo como hasta ahora, se encontrará cada día con más reticencias que, como sucediera en otros momentos históricos, pueden terminar mal y, desde luego, en su propio perjuicio. El viejo profesor Tierno Galván siempre decía que "el poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla".

SALVAR A LAS EMPRESAS PERO GARANTIZANDO EL EMPLEO

Publicado en Público.es el 27 de marzo de 2020
Escrito con Adoración Guamán Hernández.
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

Como es sabido, si a partir de 2008 el desempleo se disparó en España, en 2012 se echó gasolina en el incendio.

Este último año se promulgó la bien conocida reforma laboral de Rajoy que optó, entre otras vías de precarización del empleo, por incentivar el uso del despido, en todas sus modalidades, como vía principal para proteger el tejido económico-empresarial. El primer golpe fue durísimo e inmediato: en el mes de febrero del año 2013 se alcanzaba en España un máximo histórico en las cifras de desempleo, 5.040.222 personas. El segundo golpe, sostenido en el tiempo, provocó una mutación en el modelo de relaciones de trabajo, instaurando la precariedad como norma.

Esa reforma laboral nos pasa factura ahora que una emergencia sanitaria se traduce en obligada inactividad productiva, lo mismo que las demás reformas llevadas a cabo en otros campos durante la pasada crisis y en los años sucesivos.

Si no se hubiera recortado el gasto sanitario y dado alas a la privatización del sistema, no estaríamos sufriendo ahora tantos problemas de saturación como los que tenemos. Si no se hubieran precarizado las pensiones ni se hubiera frenado la extensión del sistema de cuidados, nuestros mayores (y la población en general) no estarían sufriendo como sufren ni morirían tantos en las condiciones en que muchos están muriendo, desatendidos en residencias que son sólo puros negocios. Y sin la reforma laboral, no correríamos el peligro de que muchas empresas que van a recibir ayudas del Estado para que no cierren por causa del confinamiento de la población, aprovechen la coyuntura para realizar ajustes de empleo oportunistas. Algo que es imprescindible evitar para que, una vez que pase la inactividad forzada, nos encontremos con un problema laboral tan terrible como injustificadamente sobrevenido.

Las medidas iniciales del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la epidemia son bienvenidas puesto que evidencian una voluntad clara de orientar la intervención del Estado hacia la protección de las clases trabajadoras en unos momentos especialmente difíciles. Sin embargo, el avance de la pandemia y las previsiones actuales exigen una intervención en la economía de carácter más contundente. Más concretamente, es imprescindible que el gobierno garantice que las empresas que

entran en inactividad a causa del confinamiento generalizado no realicen los despidos que en este momento se siguen produciendo. Hay que salvar a las empresas, desde luego, pero no al precio de que aprovechen la situación para realizar ajustes oportunistas de empleo.

Una mirada rápida a nuestro entorno nos confirma que hay diversas fórmulas para mitigar el impacto social de la crisis y reducir el número de despidos, unas con mayor alcance que otras.

Por un lado, destacan sin duda las medidas orientadas a compensar los salarios dejados de percibir por las y los trabajadores cuando las empresas paralizan su actividad. El ejemplo de España, con la activación del instrumento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) transita por esta senda. Y en un sentido similar se sitúan Bélgica, Francia o el Reino Unido, cada uno con los matices propios de los distintos sistemas.

En España, el ERTE vinculado al coronavirus conlleva una protección amplia, eliminando los requisitos ordinarios para que no existan condiciones de entrada ni se consuma desempleo. La prestación la asume la seguridad social y los porcentajes y topes a la percepción que van a recibir los trabajadores se mantienen, es decir, el 70% de la base reguladora, teniendo claro que la cuantía máxima es de 1.411,83 cuando se tienen dos o más hijos a cargo. La nueva regulación también exonera a las empresas del pago del 100% (o del 75% si tiene 50 o más trabajadores) de las cuotas a la seguridad social.

En Bélgica se ha establecido un modelo similar, con pago directo por parte de la seguridad social del 70% del salario y un tope de 2,754.76 al mes, más una asignación extra.

En Francia se ha reformado el “desempleo parcial”, de manera que la empresa que suspende la actividad paga una compensación equivalente al 70% del salario bruto (alrededor del 84% del neto) a sus empleados. Los empleados con salario mínimo o menos deberán ser remunerados al 100%. En todas las situaciones, el Estado reembolsa a la empresa estas cantidades, cubriendo salarios brutos de hasta 6.927 euros. Este “desempleo parcial” se extenderá a las personas que trabajan en el servicio doméstico.

Por su parte, el renuente Reino Unido, cuyo Primer Ministro empezó la pandemia “asumiendo el coste social”, ha establecido un mecanismo llamado “Sistema de Conservación del Empleo Coronavirus”. Según este mecanismo, cuando el empresario no pueda asumir los salarios y siempre que mantenga al trabajador contratado, el Estado se hará cargo del 80% de los salarios, con un límite de 2.500 libras. El empresario puede complementar hasta el 100% si así lo desea (algo similar está previsto en Francia).

Todas estas fórmulas conllevan incentivos para mantener el empleo aunque nos parece que no son suficientes si se quiere evitar que se produzcan despidos. Se centran en actuar frente a la obligada paralización inmediata de la actividad productiva y laboral, compensando en mayor o menor medida la carga salarial de las empresas que voluntariamente opten por los mecanismos de suspensión temporal, pero no contemplan la prohibición de despedir en este momento. Una laguna que podría llevarnos a una situación socio-laboral muy crítica, de magnitudes ahora mismo incalculables, cuando termine esta primera fase de inactividad por el confinamiento.

Es cierto que la solución española apunta tímidamente a esta cuestión, pues el Real Decreto Ley 8/2020 contiene en una disposición adicional (la sexta) que bajo el título de “salvaguarda del empleo” establece que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Sin embargo, esta previsión, a modo de incentivo, queda abierta a múltiples interpretaciones.

Por un lado, parece claro que, si las empresas no mantienen el nivel de empleo tras reanudar la actividad, deberían pagar las cuotas a la seguridad social de las que fueron exoneradas. Mas este pago no parece un incentivo de suficiente cuantía para mantener el empleo. Por otro, podría pensarse que es posible una interpretación amplia que obligue a las empresas a devolver el conjunto de ayudas si optan por despedir, pero esto parece que supera la intención del legislador. Por tanto, habrá que esperar a la concreta aplicación de la norma, cuando se renueve la actividad.

Más allá de lo ambiguo de esta disposición y de cómo deba de utilizarse para paralizar despidos futuros, lo que está claro es que la norma actual no impide los despidos que se están produciendo en estos días. Y esto es ahora lo más preocupante, porque el número de personas que están perdiendo su puesto de trabajo aumenta.

En definitiva, estamos de acuerdo en que se proteja al máximo a las empresas en esta coyuntura tan difícil y defendemos que se garantice que no tengan que cerrar en el periodo de inactividad, bien retardando pagos, bien compensando su carga salarial, bien aportándoles ayudas, bien facilitándole el crédito. Pero, a cambio, consideramos igualmente indispensable que el Estado tenga la garantía de que, ahora y una vez que se supere esta primera fase de confinamiento, no se van a producir despidos justificados formalmente por la dificultad objetiva de la pandemia pero en realidad orientados a ajustar más cómodamente los costes salariales en favor exclusivo de los beneficios.

Lo que proponemos ya se ha establecido en otros países. Italia, epicentro de la crisis, decretó la prohibición del despido durante 60 días (desde el 23 de febrero de 2020) impidiendo la extinción de contratos por causas objetivas (principalmente, motivos inherentes a la actividad empresarial). Y Dinamarca aporta otro ejemplo quizá más digno todavía de seguir.

Allí, el importante desembolso de fondos públicos (13% del PIB) se orienta, entre otras medidas y previo acuerdo entre los agentes sociales y todos los partidos políticos del arco parlamentario, a cubrir los costes salariales de las empresas privadas (hasta el 75% de los salarios) que acrediten causas económicas para despidos colectivos, y siempre que las mismas se comprometan a no despedir con una duración de tres meses. Allí hablan de "congelar" la situación de las empresas mediante estas ayudas para que no se vean obligadas ni a despedir ni a cerrar a pesar de que no tengan actividad productiva o comercial mientras dura la crisis inmediata.

Somos conscientes de que ningún modelo es perfecto y que incluso estos dos últimos que van más allá que los anteriores dejan el espacio a la crítica, por ejemplo, porque dejan fuera a distintos colectivos.

El peligro que corremos en España es que sin un mayor compromiso normativo la epidemia se convierta a la postre en una puerta falsa para los reajustes de plantillas. Hay que tener muy presente que arrastramos una regulación del despido que incentiva su uso y que la reforma laboral prevista (prometida) para eliminar los errores de Rajoy no se llegó a culminar. Nos parece, pues, que ahora hay que ser especialmente prevenidos. A cambio de la imprescindible máxima generosidad del Estado con las empresas, y muy especialmente con las de menor dimensión y más débiles, creemos que hay que garantizar que va a darse un compromiso paralelo por su parte para evitar que se produzca un oportunismo empresarial que podría provocar una verdadera catástrofe sociolaboral en poco tiempo.

Las organizaciones patronales CEOE y CEPYME emitieron ayer un comunicado en el que critican la medida recién adoptada por el gobierno que prohíbe a las empresas despedir trabajadores mientras dure la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

Según el comunicado, las medidas del gobierno "serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país".

Sin embargo, en su comunicado no se da ni una sola razón que justifique este augurio. Ni una sola. Ni una. Se limita a decir que el gobierno "trata de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado".

Es lamentable decirlo, pero de esa forma, criticando sin argumentos, la patronal española demuestra su irresponsabilidad e incompetencia para defender los intereses de las empresas españolas en su conjunto.

Es una irresponsabilidad hacer pública una crítica de ese tipo, tan radical y negativa porque, sin aportar razón alguna que justifique lo que se afirma, sólo se genera temor, incertidumbre y pesimismo entre el empresariado. Con su declaración, lo único que consigue la patronal española es crear un clima económico y social todavía más desfavorable para las empresas y, en consecuencia, que muchos empresarios se planteen tirar la toalla cuanto antes.

Es una irresponsabilidad que la patronal española no se dé cuenta de que ahora no hay un problema económico más importante para España que evitar el colapso y que eso pasa por garantizar que no cierren las miles de empresas que, sin la ayuda del Estado, no podrían hacer frente a sus costes y gastos cuando la actividad económica está obligadamente paralizada para evitar la propagación del virus.

El gobierno está tomando medidas para que el Estado garantice la vida de las empresas en este periodo de ausencia total de ingresos para muchísimas de ellas, mediante los ERTE, haciéndose cargo de los salarios que lógicamente no van a poder pagar las empresas, permitiéndoles retrasar pagos fiscales, con otras medidas de apoyo directo, o avalando los préstamos que reciban de la banca para hacer frente de la manera más inmediata posible a las consecuencias de la paralización forzosa de su actividad.

Estas medidas van a suponer un coste extraordinario para al Estado, que tendrá que endeudarse para sufragarlo, pero todos sabemos que esto es imprescindible para salvar a las empresas y los empleos que crean, proporcionándole ingresos a millones de trabajadores españoles. Y siendo así, es una vergonzosa irresponsabilidad que, cuando el gobierno y los españoles nos estamos disponiendo a asumir una carga adicional para ayudar a nuestras empresas, los dirigentes de la patronal critiquen al gobierno diciendo que esas medidas van a subir el déficit. Hay que ser muy irresponsable o tener muy poca vergüenza para criticar eso.

Como he explicado en artículos anteriores, y creo que en esto coincidimos economistas de todas las tendencias ideológicas que seamos mínimamente sensatos, ahora nos nos queda más remedio que sacar dinero de donde sea para mantener a las empresas "congeladas", hibernadas, o "en coma inducido", como dice mi colega José Ignacio Castillo, para que no cierren en esta fase en la que el confinamiento paraliza una parte tan grande de la actividad económica. Podemos diferir en la forma en que eso se puede conseguir, pero me atrevería a decir que cualquier vía sería buena con tal de que las empresas no cierren en esta fase inmediata de inactividad y que las todas las familias puedan seguir haciendo frente a sus gastos esenciales (entre otras cosas, porque esos gastos son ingresos de las empresas, que dejarían de recibirlos si las finanzas familiares colapsan).

A la salida de esta primera fase de inactividad habrá que ver los daños y cómo reactivamos la economía de la mejor y más rápida forma posible, pero si para entonces han cerrado miles de empresas ya no habrá nada que resolver, iremos de boca a una depresión quizá sin precedentes en nuestra historia.

Ese comunicado de la patronal es, por tanto, muy irresponsable. Ataca a la mano que da de comer a las empresas que dice defender, justo en los momentos económicos más difíciles que haya podido vivir el empresariado español en nuestra era. Porque la anterior crisis fue muy dura, pero se manifestó a lo largo de algún tiempo, mientras que esta es un shock de impacto inmediato y total.

La medida que ha adoptado el gobierno español sobre despidos no es solo nuestra. La han tomado otros países como Italia o Dinamarca y con algo menos de contundencia Francia o el Reino Unido, tal y como Adoración Guamán y yo mismo explicábamos en el artículo anterior.

Por tanto, es una temeridad, o una simple e inaceptable maldad, decir que el gobierno trata de arrojar sospechas sobre el empresariado. No. Simplemente hace lo que tiene obligación de hacer: evitar que en medio de una emergencia sanitaria y económica se produzcan comportamientos

oportunistas que lleven a disfrutar de ayudas del Estado mientras que se destruye empleo injustificadamente.

Hay miles de empresas y empresarios que están haciendo frente a la situación con enorme responsabilidad, con gran valentía, con estrategia, con inteligencia y hasta con patriotismo, haciendo gala de una generosidad y de una capacidad de sacrificio que cuando todo esto pase se debería de poner como ejemplo al resto de los españoles. Sin embargo, como también puede haber algunas empresas tentadas de actuar con oportunismo, el gobierno tiene la obligación de impedirlo con la medida que acaba de aprobar.

Si el Estado asume en una parte tan considerable de los costes de las empresas (insisto, la que haga falta para que no tengan que cerrar y eso es lo que hay que reclamar), no debe haber razón alguna para que una empresa despidiera trabajadores, salvo casos excepcionales, lógicamente. Debe dejar en suspenso la relación laboral, de eso se trata, y esperar a que la situación de inactividad concluya. Pero si no se hace así, si en estos momentos se deja que se pierda injustificadamente el empleo, se producirá el mismo efecto que si el Estado no interviene garantizando la vida de las empresas: a la vuelta, dentro de unas pocas semanas, nuestro tejido empresarial será un desierto e iremos sin remedio al desastre.

La patronal demuestra una vez más que no sabe defender los intereses de la inmensa mayoría de las empresas. En lugar de atacar al gobierno sin aportar, repito, ni un sólo argumento, tendría que estar pidiendo que se extienda la intervención para que el gobierno proporcione la mayor garantía posible a las empresas, para que queden a salvo con total seguridad durante el periodo de inactividad. Cueste lo que cueste y sea como sea.

No hace falta ser un lince de las finanzas para saber que una operación de salvamento tan grande como la que es absolutamente imprescindible para evitar que docenas de miles de empresas españolas cierren por el confinamiento es muy, muy costosa. Es evidente que nuestra deuda va a aumentar por esa causa, sobre todo, cuando países como Alemania y Holanda se niegan a que Europa dé una respuesta mancomunada al problema. Pero la alternativa es el colapso. No hay más remedio que asumir el coste de salvar a las empresas y a las familias porque el de no hacerlo sería muchísimo más elevado.

No me importa repetirlo, si no asumimos ahora todo el gasto necesario para salvar a las empresas y a los hogares, vamos a ir a una catástrofe sin precedentes.

El gobierno está dando pasos en esa dirección, aunque no estén siendo tan rápidos como a mi me parece que tendrían que haber sido ni tan largos como creo que debieran ser (por ejemplo, creo que es una

barbaridad que no se haya contemplado qué hacer con los despidos que ya se han producido y espero que eso se resuelva con urgencia). Lo que debería hacer la patronal es arrimar el hombro e incluso animar y apoyar al gobierno para que vaya todo lo lejos que se deba ir para que ni una sola empresa desaparezca en este periodo.

A la salida, como he dicho, será el momento de reclamar nuevos planes de estímulo y de reactivación y de criticar todo lo que haya que criticar. Ahora se trata simplemente de impedir que todo se venga abajo.

No parece que los dirigentes de la patronal sientan como los empresarios y empresarias de a pie. Lo que estos necesitan es que les llegue cuanto antes la ayuda y que el gobierno se haga cargo enseguida de una parte suficiente de sus gastos mientras dure la inactividad. En lugar de ayudar para conseguirles eso, la patronal se dedica a hacer retórica ideológica y a apuntarse al carro de quienes sólo tratan de aprovechar la ocasión para debilitar al gobierno.

Hay que dedicarse (y sobre todo la patronal) a ayudar a las empresas españolas y a las familias y no a echar más leña en el fuego de la política española.

EL VIRUS Y LA ECONOMÍA (3): HACEN FALTA LUCES LARGAS

Publicado en LaPolíticaOnLine.es
el 1 de abril de 2020

Dando por hecho el confinamiento obligatorio de la población, la cuestión económica que se plantea con carácter inmediato en esta pandemia es bastante clara: miles de empresas perderán ingresos y, si el Estado no les garantiza o compensa por esa pérdida, tendrán que ir despidiendo a trabajadores o desaparecerán y, paralelamente, miles de personas se quedarán sin empleo e ingresos.

Por tanto, desde el punto de vista económico es imprescindible actuar con carácter inmediato en tres direcciones:

- Proporcionar al sector sanitario todos los recursos materiales y humanos necesarios para combatir de la mejor forma posible la propagación del virus y sus efectos.

- Garantizar, en la mayor medida a nuestro alcance, los ingresos que empresas y trabajadores van a dejar de recibir, y

- Tratar de que ni a corto ni a medio plazo se interrumpan las cadenas de suministro que son necesarias para disponer de bienes y servicios básicos para la población.

Esas tres actuaciones pueden llevarse a cabo mediante la aplicación de medidas de diferente tipo, aunque no todas ellas sean igual de efectivas: retrasando los gastos a los que familias y empresas tienen que hacer frente en el día a día (impuestos, suministros, alquileres...), proporcionándoles dinero en efectivo para que puedan seguir haciendo o facilitándoles el acceso al crédito. Las tres vías se complementan y son seguramente imprescindibles y las están adoptando en distinta medida o forma.

Sin embargo, ahora quiero introducir una nueva reflexión sobre el tema que me parece fundamental. Ese tipo de medidas inmediatas, de emergencia y salvación, son imprescindibles mas no podemos perder de vista ni el entorno en el que se desencadenó, que ya analicé en los primeros artículos ni el futuro que tenemos por delante.

Si no queremos estrellarnos, no sólo hay que actuar con acierto en el cortísimo plazo sino que, al mismo tiempo, hay que encender las luces largas para no perder de vista el horizonte. Y en esa perspectiva creo que hay algunas reflexiones que me parecen esenciales que deberíamos realizar. Ofreceré las mías en forma de pregunta.

¿Se va a seguir insistiendo en que el Estado es el problema, después de haber comprobado que, si no es por la intervención estatal, la economía de prácticamente todos los países del mundo se vendría abajo sin

remedio y que precisamente el debilitamiento de sus servicios y recursos es lo que más dificultades está suponiendo para hacer frente a la pandemia?

¿Nos seguirán diciendo que la economía capitalista funciona perfectamente sólo dejando actuar a los automatismos del mercado y que, por tanto, no es necesario prevenir o planificar para hacer frente a los riesgos inesperados, a las crisis o a los momentos de perturbación, como el de la pandemia? ¿De verdad alguien se cree que hubiéramos salido mejor de la situación en la que estamos o de otras anteriores dejando que el mercado proporcionara sus soluciones, es decir, poniendo los recursos necesarios únicamente en manos de quien tuviera dinero para comprarlos?

¿Se va a seguir insistiendo en que lo mejor es que no haya impuestos, que no son necesarios y dejar sin financiación a los servicios públicos, como la sanidad, la seguridad, el cuidado o la enseñanza que ahora contemplamos como lo máspreciado que tenemos para salvar vidas humanas y para que todo funcione de la mejor manera posible?

¿Se seguirán traspasando recursos del sector público al privado en servicios esenciales cuando acabamos de ver que es el primero quien resuelve el problema y que el capital sólo se orienta, legítimamente, a proporcionar lucro a sus propietarios sin preocuparse si así da la cobertura que necesita la sociedad en su conjunto?

¿Vamos a dejar que el desarrollo de las medicinas, de las vacunas, de las técnicas que salvan vidas y son imprescindibles para garantizar el bienestar esencial de los seres humanos esté condicionado por el lucro privado? ¿que el derecho de patentes y la apropiación privada del conocimiento sigan retrasando el uso de todo lo que no sea rentable para el capital privado pero sí esencial para dar satisfacción a las necesidades colectivas?

¿Seguiremos sin dar prioridad a la investigación básica y a la aplicada al bienestar humano? ¿Reduciremos todavía más la inversión en educación y en formación que son los pilares del conocimiento, de la productividad y de la tecnología que nos permite vivir bien y proporcionar cuidado a los demás seres humanos y a la naturaleza?

¿Vamos a creernos la farsa de una globalización que solo globaliza el afán de lucro y el comercio pero que nos impone dependencia, inseguridad alimentaria y el destrozo de los recursos naturales centenarios? ¿Vamos a renunciar a la agricultura autóctona, al consumo de cercanía, a la utilización sostenible de la tierra para ponernos en manos de grandes multinacionales?

¿Seguiremos creyendo que es posible lograr estabilidad económica y progreso sin industria propia?

¿No nos vamos a dar cuenta a partir de ahora de que es un sinsentido consumir productos que llevan detrás miles de kilómetros de desplazamiento, con un gasto desorbitado de dinero, de energía, de residuos y de esfuerzo humano y que, para colmo, se hace a base de destruir los sistemas productivos de los países exportadores, cuyas economías se convierten en monocultivos para la exportación que no dejan allí los beneficios que generan?

¿Vamos a continuar permitiendo que las reglas del comercio internacional concedan el privilegio de protegerse sólo a los países ricos mientras condena a la indefensión a los más pobres? ¿Se seguirá permitiendo que Estados Unidos, Japón, la Unión Europea... las grandes potencias, puedan subvencionar sus productos (mucho más caros y menos competitivos), penalizar los de países más pobres para dominar los mercados y cerrarles las puertas, o castigarlos si tratan de hacer algo parecido para defender sus economías, como hacen sólo los ricos?

¿Vamos a seguir confiando las cadenas de distribución a grandes corporaciones que encarecen artificialmente los precios, que imponen condiciones draconianas a las pequeñas y medianas empresas nacionales, y que nos obligan a depender de ellas para el suministro de productos básicos?

¿Se seguirá permitiendo que las empresas multinacionales coloquen sus beneficios, mediante trucos contables, allí donde no paguen impuestos cuando se benefician de las infraestructuras, de los servicios y del capital que les aportan los estados y los productores de los países donde realmente los obtienen?

¿Vamos a dejar de ser falsos y no decir más que combatimos los paraísos fiscales, donde se esconde casi la tercera parte de la riqueza monetaria del mundo, cuando en realidad sólo les estamos cambiando el nombre? ¿Acabaremos con estos criminales que, con tal de proporcionar seguridad a las grandes empresas y fortunas, son los medios que utilizan los traficantes de personas -sobre todo mujeres-, de armas o de drogas para emponzoñar al mundo?

¿Se seguirá consintiendo que la especulación se adueñe de las economías? ¿que las bolsas sigan siendo un casino que en lugar de ayudar a que las economías funcionen bien las ponen constantemente en peligro porque están dedicadas a vehiculizar operaciones financieras especulativas muy arriesgadas y en donde ganan los grandes fondos financieros?

¿Vamos a seguir permitiendo que los capitales tengan en nuestro planeta más libertad que los seres humanos, a pesar de que es una evidencia empírica que su mayor libertad va asociada a más desigualdad, a más crisis económicas y a peores condiciones de la actividad productiva?

¿No vamos a hacer frente a la desigualdad que debilita o incluso destruye el tejido productivo porque genera una concentración del ingreso que hace que cada vez vaya más dinero a los fondos financieros en detrimento de la actividad productiva?

¿Seguiremos sin establecer algún tipo de tasas sobre las transacciones financieras a pesar de que sabemos que una minúscula, de menos del 0,2-0,3%, sería suficiente para financiar sobradamente todas las necesidades del conjunto de los seres humanos del planeta sin necesidad de establecer ni un solo impuesto adicional?

¿No vamos a establecer ya, porque hay dinero para ello, ingresos mínimos de garantía para las personas y para las microempresas y pequeñas y medianas empresas que crean empleo y riqueza productiva? ¿Vamos a seguir permitiendo que los gobiernos en manos de los siervos de los grandes capitales les sigan dando más a quienes ya más tienen?

¿Acaso no ha llegado la hora de que nos demos cuenta de que no puede ser que la creación de algo vital para las economías, el dinero, esté en manos de los bancos privados? ¿Se va a continuar aceptando que el mayor negocio de la humanidad sea que los bancos creen deuda carísima e innecesaria, cuando se podría financiar la creación de riqueza y de actividad económica de una manera mucho más racional, más equitativa, más sostenible y mucho más barata?

¿Para cuándo vamos a dejar el jubileo universal de la deuda? ¿Vamos a seguir siendo tan estúpidos de creer que algún día se podrá pagar la deuda mundial hoy día existente? ¿No vamos a ser capaces de comprender que ésta no es sino una esclavitud impuesta por el capital bancario al resto de la humanidad y que hay que liberar ya para siempre a los seres humanos de ese yugo tan injusto como innecesario?

¿No vamos a abrir todavía los ojos para reconocer que el sistema bancario está en quiebra y que por eso tiene que andar siempre con las muletas que le presta el Estado? ¿Que es necesario un nuevo tipo de sistema financiero, con bancos centrales al servicio de la economía, con bancos privados que actúen con lógica de servicio público esenciales, y con una banca pública bien gestionada y dedicada a financiar lo que sea imprescindible para la economía y las empresas pero no rentable para el capital privado?

¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que las empresas que funcionan mejor son aquellas en las que los trabajadores se sienten parte de ellas, están en sus órganos decisorios y sus representantes generan así equilibrio de poder?, ¿cuándo reconoceremos que las empresas que tienen menos desigualdad salarial en sus seno y promueven la cooperación, huyendo de una explotación pura y dura del trabajo, son las más productivas y las que obtienen mejores resultados?

¿Vamos a quedar impasibles observando cómo aumenta la concentración de la riqueza en todo el mundo y se limita la capacidad de los gobiernos para redistribuir la renta y la riqueza de una manera más justa?

¿De verdad que vamos a seguir sin dar respuestas urgentes al cambio climático, sin someter nuestra actividad económica a las leyes de la naturaleza y no al revés?

¿Seguiremos siendo tan tontos como para creer que los problemas que estamos viviendo y los que vamos a vivir en el futuro inmediato, problemas globales y de naturaleza multipolar, pueden resolverse sin instituciones que actúan coordinada y democráticamente a escala internacional? O, lo que es peor, ¿no haremos nada para evitar que las grandes corporaciones utilicen su poder económico y financiero para influir o tomar ellas directamente las grandes decisiones que afectan a nuestras vidas?

¿Ni siquiera una pandemia que nos mantiene encerrados en nuestras casas, sorprendidos y asustados, que nos puede matar en cualquier momento a cualquiera de nosotros o a nuestros seres más queridos o cercanos, nos va a hacer tomar conciencia de que hemos de vivir de otro modo?

¿Seguiremos creyendo cuando esto acabe que lo que han de hacer las economías es crecer, crecer, crecer y crecer en lugar de organizarse para perseguir como objetivo el sustento adecuado y sostenible de todos los seres humanos? ¿Todavía no nos hemos dado cuenta de que nos han hecho navegar constantemente en lo innecesario y superfluo, incluso a quienes no tienen ni siquiera donde caerse muertos; que nos han despojado de nuestra humanidad para convertirnos en consumidores, en agentes pasivos de una máquina infernal que sólo busca el beneficio y la satisfacción artificial?

Ahora, en soledad, viendo las calles desiertas desde detrás de nuestras ventanas, ¿todavía no nos enteramos de que hemos creado bajo nuestros pies una amenaza global, una bomba que va a estallar, si no tomamos medidas, llevándose por delante todos nuestros sueños y nuestras vidas?

¿No nos damos cuenta de que nos manipulan, de que la mayoría de los medios están controlados por los mismos financieros y por las corporaciones que han creado este mundo absurdo y que es preciso informarse bien, recurriendo a fuentes independientes y plurales?

¿Vamos a seguir pendientes de lo accesorio, de los señuelos que nos lanzan constantemente para que no percibamos nuestros verdaderos problemas, para que no seamos conscientes de que, pesar de disponer de más recursos que nunca a lo largo de la historia de la humanidad, todavía mueren de hambre unas 25.000 personas al día o que casi la tercera parte de la humanidad no tiene acceso a agua limpia o potable o al saneamiento básico?

¿Somos tan ingenuos de seguir pensando que lo que más nos conviene es actuar individualmente en lugar de ir de la mano de quien tiene nuestros mismos problemas? ¿vamos a seguir creyendo que si nosotros o nuestros hijos o hijas no tienen empleo o lo pierden ahora por su insuficiente "empleabilidad", es decir, por culpa suya y no porque se vienen aplicando políticas que para darle todo a los de arriba, a los grandes capitales y a los financieros, destrozan la actividad económica que crea riqueza productiva?

Comprendo que ahora es el momento de tomar medidas de muy corto plazo, muy inmediatas, para salvar la vida de miles de personas y, en otro orden, para evitar un colapso económico pasado mañana. Si no lo hacemos al mismo tiempo que nos planteamos cuestiones como las que acabo de señalar me temo que nos espera un futuro terrorífico.

COMO GATOS DE OCHO VIDAS

Publicado en Público.es
el 29 de marzo de 2020

En las economías capitalistas, como en cualquier otro sistema complejo en el que hay una gran interacción entre todos sus elementos, se vive siempre en peligro constante de que se produzcan fallos, crisis y rupturas de todo tipo.

La interrelación continua y muy estrecha entre todos los elementos que la componen o que influyen en ella (no sólo económicos sino políticos, sociales, psicológicos, morales, ambientales... y ahora vemos que incluso biológicos) hacen que cualquier fallo en uno de ellos afecte de modo muy problemático a todos los demás y al conjunto.

Sin embargo, el estar en constante peligro de fallo sistémico hace que esos sistemas complejos generen continuamente mecanismos de defensa muy potentes.

Un análisis correcto de la economía, esto es, que la conciba como un sistema complejo y no como una especie de suma de cajones estancos, no tendría que limitarse a advertir de los peligros que se avecinan, sino que también podría asegurar que se puede salir siempre de ellos, que es cierto el verso de Shakespeare: "Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan".

También en estos se han empezado a manifestar las defensas del sistema.

En cuanto los problemas han comenzado a mostrarse, en cuanto se han manifestado los fallos del sistema, multitud de operadores se han puesto a tratar de resolverlos, bien en el sentido de reproducir las lógicas anteriores, bien tratando de descubrir y poner en marcha otras diferentes y transformadoras. Y no crean que me refiero solamente a los operadores convencionales, a los políticos, a las autoridades o a los economistas que toman las grandes decisiones institucionales. Me refiero, sobre todo, a la gente corriente.

Es verdad que debe haber muchos trabajadores, autónomos, empresarios de todo tipo, empleados públicos... que simplemente se estén dejando llevar por la comodidad, por la desolación o por la inercia del tiempo que pasa. Esos son una de las partes del problema, mas junto a ellos, la mayoría, miles y miles, han afrontado la situación desde el primer momento diseñando nuevas estrategias, tratando de encontrar nuevas fuentes de negocio, nuevas habilidades, desarrollando capacidades que hasta ahora quizá ni sabían que tenían, inventando formas novedosas de generar ingreso, o simplemente tomando conciencia de la forma en que

vivían hasta ahora y reflexionando sobre la necesidad de vivir, de convivir y relacionarse de otro modo con los demás seres humanos y con la naturaleza en el futuro.

El ingenio y la innovación frente a la tentación de la parálisis y contra la inercia, la valentía superpuesta al conservadurismo, la osadía que vence a la resignación, el empuje e incluso la indignación y el coraje ante lo viejo y corrupto, la complicidad y la cooperación, la solidaridad y el amor antes que el sálvese quien pueda, la unión y el repudio expreso de la negatividad y del egoísmo, el cuidado, los afectos y la generosidad, esos son los resortes, y no sólo las imprescindibles macropolíticas, que nos permiten salir con éxito de una crisis, de un fallo, de un colapso.

Hace unos días, un amigo empresario, constantemente emprendedor, cultivado y vitalista me pedía que escribiera sobre los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas y sobre sus responsables que no se están dejando amilanar ante una dificultad tan extrema como la que han empezado a sufrir. Y me decía: "Cuando lo escribas ponle de título que somos gatos de ocho vidas".

De eso se trata, de ser conscientes de que esto que nos está sucediendo es la vida que pasa por nosotros, destruyendo a una parte de ella, pero creando al mismo tiempo las condiciones para que emprendamos otra diferente. "No hay árbol que el viento no haya sacudido", dice un viejo proverbio hindú, así que no debemos tener miedo a la tormenta sino, en todo caso, a no estar espabilados y bien dispuestos cuando pase.

Esta pandemia nos está hablando. Nos ha dado un golpetazo en la cara para decirnos que estábamos viviendo de forma arriesgada e irracional, que no podemos seguir jugando a convertir las leyes de la vida en monigotes a nuestra disposición, que hay cosas más importantes que ganar dinero porque puede llegar de pronto un virus y paralizarlo todo, que tenemos un oikos (una palabra griega de donde viene el término "oikonomía-economía" que se refiere a todo lo que hay cerca de nosotros para proporcionarnos cobijo y sustento y), que es más valioso de lo que creíamos porque constituye nuestro auténtico espacio protector y lo que de verdad nos da seguridad, satisfacción y consuelo. Allí donde nos refugiamos en el peligro, como ahora.

Cuando de jovencillo comencé a subir las cuestas de Sierra Nevada, alguien que me guiaba me enseñó un refrán inglés que nunca olvidé: "Cuando el camino se hace duro, los duros se ponen a caminar".

Miles, millones de personas se han puesto a caminar en España para hacer frente a la desgracia que estamos viviendo. Los sanitarios, docenas de miles de trabajadores, comerciantes y empresarios, transportistas, vendedores, personal de limpieza (¡tan modesto, tan esforzado, tan cercano, tan necesario!), fuerzas de seguridad, todos quienes nos proporcionan los

bienes y servicios básicos a costa de su propia salud, profesoras y profesores que siguen atendiendo a nuestros hijos, periodistas, las mujeres y hombres sencillos que se cuidan entre ellos -y ellas- en el interior de sus casas y reflexionan tomando conciencia de lo que pasa... tantos y tantas... que son, como mi amigo, un gato de ocho vidas que saca fuerza, ánimo, recursos e ingenio hasta de donde no los hay para salir adelante.

Esa es la otra cara, la otra actitud que brota en todas las crisis. La que hay que tener para poder superar una emergencia como la que vivimos.

Convertidos en gatos de ocho vidas, como mi amigo el empresario, cooperantes, solidarios, de la mano, podremos pasar de una vida a otra, de lo viejo a lo nuevo, superando el dolor y el sufrimiento. Podremos conseguir que sea verdad lo que decía Lao Tsé: "Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo lo llama mariposa".

Claro que hay entre nosotros demasiados matagatos empeñados en que consumamos las vidas una tras otra cuanto antes. Quienes a toro pasado lo saben todo y no paran de criticar lo que se hizo ayer con los datos de hoy; quienes anteponen sus intereses de partido y, en concreto, el derribar al gobierno a cualquier otro, aunque ahora todos sin distinción nos juguemos la vida de nuestros seres queridos; quienes no paran de culpar de todo a quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones difíciles; quienes se dedican a difundir bulos y a mentir sin descanso y con descaro; quienes creen que España es suya; quienes no hacen sino indisponer a unos españoles contra otros. En fin, quienes no entienden que hay momentos en la vida en que las diferencias se deben aparcar para tratar de salir adelante apoyando a quien tiene el liderazgo por expreso mandato, como en nuestro caso, del voto popular y de las instituciones democráticas.

Es normal que, en los momentos complicados, como el de ahora, estos comportamientos malvados se hagan notar y que nos acosen. Es el mejor caldo de cultivo de la maldad y ésta es seguramente inevitable entre los seres humanos. Pero no nos equivoquemos. Como dijo Albert Einstein, "el mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad". No la permitamos, ni tampoco el desánimo, ni la rendición, ni el individualismo, ni la irreflexión. Convirtámonos, como mi amigo empresario y como tantos otros millones de compatriotas heroicos de estos días, en gatos con ocho vidas.

HOLANDA, CAMPEONA MUNDIAL DE LA EVASIÓN FISCAL, TIENE POR QUÉ CALLAR

Publicado en Público. es
el 29 de marzo de 2020

Tal y como se está informando ampliamente estos últimos días, Holanda y Alemania encabezan el grupo de países que se niegan a que la Unión Europea haga frente mancomunadamente a los efectos del coronavirus sobre la economía europea. Están en su derecho, pero no parece que eso sea muy coherente con la pertenencia a una unión económica y monetaria. Tampoco son muy de recibo los argumentos con que justifican su posición

Las declaraciones del ministro de finanzas holandés, Wopke Hoekstra, han sido especialmente duras. Por un lado, argumenta que si se emitiera deuda común, suscrita por todos los países (eurobonos), los países del sur que, en su opinión, no han hecho bien los deberes financieros, generarían un problema de riesgo moral para los del norte que sí han cumplido con todas sus obligaciones.

Los economistas llamamos "riesgo moral" a la situación que se produce cuando un agente tiene información, sabe las consecuencias sobre otros de sus acciones y a pesar de ello las lleva a cabo para aprovecharse. Es decir, el ministro holandés considera que si España, Italia, o Portugal saben que el resto va a asumir mancomunadamente sus deudas lo que harán será endeudarse más de lo debido.

Eso es algo que evidentemente podría ocurrir (y que yo creo que se debe evitar en una unión económica) pero traer este argumento a colación cuando el problema que podría ocasionar la deuda de los países de la periferia ha sido ocasionado por una emergencia sanitaria que también afecta a los países del norte es, cuanto menos, una clara muestra de cinismo.

Está por ver si finalmente el coste de la pandemia es más elevado en unos países que en otros y habría que analizar en su momento las razones de las disparidades que pudieran producirse y actuar en consecuencia. De antemano, no parece riguroso considerar que el gasto de unos vaya a ser más ineficiente que el de otros. Y si de momento es diferente, no creo que se pueda decir que se deba a una cuestión de eficiencia o capacidad para gastar bien, como dice el ministro holandés.

De hecho, parece inevitable que en países como Italia o España se necesite más dinero para la pandemia si se tiene en cuenta que aquí se está hospitalizando a las personas mayores, mientras que en Holanda se las considera ya desahuciadas y se las deja morir en casa. O porque la

estrategia que allí se está siguiendo es la de conseguir "inmunidad de rebaño", lo que implica realizar un porcentaje muchísimo menor de pruebas sobre la población total, una alternativa que no sabemos qué coste tendrá, no sólo económico sino en términos de vidas humanas, a medio y largo plazo.

Francamente, no estoy seguro de que gastar menos porque no se lucha para salvar vidas humanas de los abuelos sea una forma superior o más ejemplar de utilizar los recursos.

Un segundo argumento que utiliza ahora el ministro holandés es ya un viejo conocido del relato que domina la política europea: los países de la periferia, los "cerdos" (PIGS en inglés, en referencia a Portugal, Italia, Grecia y España) son intrínsecamente corruptos y malgastan el dinero de los contribuyentes. Otro ministro holandés de finanzas, Jeroen Dijsselbloem, dijo en marzo de 2017 que los países del sur nos gastamos todo el dinero "en copas y mujeres para luego pedir que se nos ayude" (aquí: <https://bit.ly/2XhwJEH>). Y eso lo dice el ministro de un país que exhibe a las mujeres prostituidas en escaparates.

Yo no voy a negar que en España hay corrupción porque llevo toda mi vida avergonzado tratando de luchar contra ella. Pero eso es una cosa y otra el admitir que sólo existe en nuestros países del sur.

En España hay corrupción, por supuesto. Una es la corrupción "al menudeo", la que se da entre la clase política y sabemos que hasta el anterior Jefe de Estado era un vulgar comisionista. Sin embargo, la importante no es esa. Si se habla tanto de la corrupción política, como si fuese la única, es para ocultar la más onerosa. Los políticos corruptos se quedan, en realidad, sólo con la calderilla, con la propina, porque los grandes ingresos que genera la corrupción, la construcción de los aeropuertos donde no hay aviones, las autopistas por donde apenas pasan coches, los puertos faraónicos innecesarios, las operaciones de ingeniería financiera... se los llevan las grandes empresas, los bancos y los fondos de inversión, y una buena parte de ellos proceden precisamente de países del norte de Europa, como Alemania y Holanda. Las burbujas especulativas de Europa las han financiado principalmente los bancos alemanes y holandeses; por cierto, a costa de no utilizar esos capitales en el desarrollo de sus economías. Y la corrupción a lo grande está presente en países como Alemania o los Países Bajos desde hace tiempo.

Alemania ha podido llegar a ser una gran potencia exportadora, entre otras cosas, gracias a los sobornos, una práctica tan habitual de sus grandes empresas que, hasta hace pocos años, incluso se podían deducir de impuestos. Solo a su gigante Siemens se le han descubierto operaciones irregulares por valor de unos 420.000 millones de euros. Volkswagen ha engañado a millones de clientes con el escándalo de los motores diésel;

muchas grandes empresas alemanas como Deutsche Bank, Vodafone, Deutsche Telekom o Deutsche Post, entre otras, han protagonizado también grandes escándalos y el considerado mayor fraude fiscal de la historia europea, el caso Cum-Ex, se organizó en Alemania.

¿Y qué decir de Holanda, aparte de que su gran banco ING ha tenido que pagar multas multimillonarias por blanqueo de capitales? ¿No es eso otra forma de corrupción, más elegante si se quiere, aunque de consecuencias igual o incluso más dañinas en otros aspectos? ¿Y lo que hicieron algunas de sus grandes empresas multinacionales en la Sudáfrica del apartheid no fue corrupción de la más criminal?

¿Acaso no es corrupción el haberse convertido en un auténtico paraíso fiscal para permitir que las grandes empresas no paguen impuestos en los países donde realmente operan?

¿Se puede decir que en los Países Bajos no hay corrupción y que allí se utilizan los recursos públicos con honestidad cuando el país se ofrece como soporte de la ingeniería financiera que mina las arcas de otros Estados? ¿Robar los recursos propios es corrupción y permitir que se roben los de otros, como hace Holanda, no?

Un estudio reciente publicado en una revista del Fondo Monetario Internacional reveló que Holanda y Luxemburgo acogen la mitad de la inversión ficticia mundial, es decir, la que no se realiza realmente, sino que sólo está en las cuentas de las empresas para evadir impuestos. En España se calcula que las grandes empresas multinacionales dejan de pagar unos 13.500 millones de euros en impuestos gracias a la existencia de países como Holanda, que proporcionan la posibilidad de eludirlos.

¿Con qué derecho y fundamento puede descalificar el ministro holandés a los países del sur de Europa por tener más deuda, cuando su país es uno de los grandes mamporreros al servicio de la evasión fiscal que destroza las arcas de esos estados, cuando Holanda es el mayor proveedor mundial de servicios de evasión fiscal del planeta, según un informe de 2017 (Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network)?

¿Con qué fuerza moral puede hablar a otros de eficiencia en el uso de los recursos públicos un país que incluso da nombre al "bocadillo holandés", que no es precisamente una delicia culinaria sino una de las prácticas más sofisticadas para blanquear dinero?

¿Cómo pueden dar lecciones sobre administración de recursos los dirigentes de un país que es la pasarela necesaria para que se practique el terrorismo financiero de nuestros días que arruina a países y a empresas, a la economía productiva del planeta?

Y se olvida el ministro holandés de que si los países del norte pueden acumular grandes excedentes es debido a la imposición en la zona euro de un sistema de funcionamiento perverso, que no cuenta con mecanismos adecuados de ajuste, de modo que unos países, como el suyo o Alemania, pueden acumular superávits no sólo porque son más ricos y quizá más eficientes sino también por jugar con la ventaja de haber montado un club en donde las normas tratan por igual a los desiguales.

Los países del norte de Europa, con Alemania y Holanda ahora a la cabeza, están haciendo trampas. Se benefician del euro al haberlo establecido sin una hacienda europea, sin normas que impidan el ajuste efectivo de los desequilibrios y sin mecanismos de protección ante shocks, como una pandemia sin ir más lejos, que produce efectos asimétricos entre los países miembros. Han comprado a precio de saldo las principales empresas de la periferia europea, viven de colocar en esta última sus exportaciones, financiaron y se aprovecharon de burbujas como la inmobiliaria en España y, encima, nos acusan de derrochadores.

El ministro holandés ha pedido a la Comisión Europea un informe sobre por qué algunos países de la Unión han acumulado reservas financieras en los últimos años, mientras que otros no lo han hecho. Algo que parece mentira, pues cualquier estudiante de tercero de Económicas sabe perfectamente que eso es inevitable que ocurra cuando una unión monetaria, como el euro, está intencionadamente mal diseñada. A Robert Mundell le dieron el Premio de Economía del Banco de Suecia (equivalente al Nobel) por haberlo demostrado hace ya casi sesenta años, en 1961, y cuesta creer que un ministro de finanzas no lo sepa y tenga que pedir que le digan la respuesta.

Le faltó al ministro decir esta vez que los españoles, como toda la población de los demás países del sur de Europa, somos unos vagos y que no nos gusta sino la juerga y la siesta, a pesar de que trabajamos 272 horas más de media al año que los holandeses.

Los dirigentes holandeses, como los alemanes, tienen por qué callar. Los españoles no debemos ocultar nuestros defectos que son muchos. Entre ellos, el haber permitido que nuestras élites corruptas hayan entregado o malvendido tanta de nuestra riqueza a empresas alemanas y holandesas, o que nos incorporaran al euro sin hacer una valoración objetiva, ni facilitar el debate de sus ventajas e inconvenientes. Mas lo que no podemos consentir es que los dirigentes de esos países nos insulten de la manera en que lo han hecho. El presidente de Portugal, Antonio Costa, lo ha dicho con toda claridad: las declaraciones del ministro neerlandés son "repugnantes". Lleva toda la razón.

Los Países Bajos tienen, como Alemania, muchas cosas ejemplares de las que debemos aprender los demás países europeos. Su

supremacismo y prepotencia de los últimos tiempos son, sin embargo, inaceptables y, como dije, yo creo que injustificados. Es muy chocante que se quieran convertir en la guía moral de Europa dando lecciones de honradez a los demás siendo un país que deja morir a sus mayores sin atención hospitalaria porque ya son demasiado viejos, que es de facto un paraíso fiscal, o que permite que mujeres exhiban su cuerpo como mercancías en escaparates. Significa que la Unión Europea tiene un problema serio y que vamos a tener que plantearnos si vale la pena ser socios de quienes no saben pronunciar palabras como cooperación o solidaridad.

El primer caso de coronavirus se detectó el 1 de diciembre de 2019 en Wuhan. Han pasado, por tanto, 120 días y, según las estadísticas internacionales que acabo de leer cuando escribo estas líneas, desde entonces han muerto en el mundo 37.091 personas. Es seguro que muchas más, ya que en algunos países no se están contabilizando, por ejemplo, a quienes mueren en sus casas o en residencias de ancianos.

Desde hace semanas, docenas de hospitales están saturados y el personal sanitario está sobrecargado porque en casi todos los países del mundo se han realizado recortes de gasto en los últimos años, sobre todo durante y después de la pasada crisis. Aunque los medios no suelen incidir en las circunstancias más escabrosas, todos sabemos que la situación es muy difícil. Se han encontrado ancianos muertos desde hacía días en residencias y las morgues empiezan a no poder acoger más cadáveres...

Esto ocurre en los países más avanzados, mientras que en otros más pobres donde comienza a propagarse el virus, ni siquiera hay posibilidad de recibir atención médica de la sanidad pública. En Estados Unidos hay alrededor de cuarenta millones de personas sin seguro, lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas para evitar una propagación fatal del virus, garantizando que se hagan las pruebas de detección también a quienes se encuentren en esta situación. En Italia, nos cuentan que en muchos hospitales tienen que elegir a qué enfermo colocan un respirador dejando morir a otro.

Es un drama, pero no es el único que se está produciendo en el mundo. En el mismo periodo en el que, según las cifras oficiales, han muerto esas 37.091 personas por el coronavirus, también han fallecido 2,95 millones (80 veces más) por hambre (dato aquí: <https://bit.ly/2zhFCpP>); 1,2 millones (33 veces más) por no haber podido recibir atención médica (dato aquí: <https://bit.ly/3bKLtBe>); 720.000 (20 veces más) por accidentes laborales; 96.000 mujeres (2,5 veces más) por no tener suficiente atención médica en el embarazo (datos aquí: <https://bit.ly/2Zpufa7>) y 672.000 niños (18,1 veces más) han nacido muertos por esa misma razón (datos aquí: <https://bit.ly/2WOq85F>). Y tantas muertes de seres humanos por estas causas evitables se vienen produciendo todos los años

Cuando los estudiantes entran en las facultades de ciencias económicas lo primero que aprenden es que todo eso, la insuficiencia de medios como la que ahora tenemos para afrontar la pandemia, se produce porque

los recursos son escasos. Les enseñan que, por esta razón, hay que elegir. Sí, exactamente lo mismo que tienen que hacer los sanitarios en algunos hospitales cuando no disponen de respiradores para todos los infectados por el coronavirus que lo necesitan.

Pero eso es mentira.

En nuestro planeta no hay escasez de recursos, no falta dinero, sino que hay un orden de prioridades que antepone el beneficio, el armamento, el despilfarro o su concentración en pocas manos a la satisfacción de las más básicas necesidades humanas. Eso es lo que de verdad explica que los recursos y el dinero que hay de sobra en nuestro planeta para proporcionar una vida digna a todos los seres humanos no se utilicen para ello.

Tengo entendido que un respirador homologado de los que se usan contra el coronavirus cuesta unos 15.000 euros. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero a veces nos sirven para hacerlos una idea de las magnitudes que utilizamos para una y otra cosa. Por ejemplo, con lo que ha cobrado cualquiera de las grandes figuras del fútbol europeo en estos últimos cuatro meses se podrán comprar unos 2.000 respiradores (el doble de los que parece que ahora parece que va a comprar España con urgencia); con el presupuesto anual del Barcelona FC unos 45.000; o 140.000 con el presupuesto de los 346 carros blindados que va a adquirir el ejército español de aquí a 2030.

Los gastos de todos los gobiernos del mundo suman unos 20 billones de dólares. Si se tiene en cuenta que, según los datos que proporciona el Banco Internacional de Pagos, en todo el mundo se mueven cada año unos 14.900 billones (millones de millones) de dólares, resulta que, con una tasa de menos de 15 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera, y sin necesidad de pagar ni un solo impuesto más en ningún lugar del mundo, se podría sufragar todo ese gasto público. Y cubrir la satisfacción adicional de las necesidades básicas y dignas de toda la población mundial costaría unos pocos céntimos más, en términos porcentuales, de todo ese astronómico volumen de transacciones, la mayor parte del cual no paga impuesto alguno.

Sin necesidad de recurrir a esa tasa, hoy día no muy difícil de establecer porque la gran mayoría de esas transacciones dejan huella digital, hay otras fórmulas quizá más inmediatas de obtener dinero: según el Fondo Monetario Internacional, en los paraísos fiscales se ocultan unos 7 billones de dólares de las grandes empresas y fortunas; lo escondido allí por españoles supondría unos 140.000 millones de euros y la evasión fiscal anual en España entre 40.000 y 70.000 millones, según las estimaciones. Si todas las grandes empresas y bancos cumplieran con sus obligaciones fiscales (se calcula que evaden un 30% de sus ingresos) y se prohibieran de verdad los paraísos fiscales, habría bastante dinero para

resolver una buena parte de las principales carencias del mundo de nuestros días.

Ahora bien, ni siquiera combatir la elusión fiscal y generar nuevos tipos de impuestos (que podría permitir que la presión fiscal fuera 200 veces más baja que la actual) son la única fuente de creación de dinero. Si se necesita con mayor urgencia, los bancos centrales pueden proporcionar todo el que sea necesario de un día para otro.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció hace unos días que realizaría "compras ilimitadas de títulos" para evitar que su precio se desplome. Eso significa que se va a crear dinero sin límite para comprar, entre otras, las acciones de empresas que durante años han estado dedicando miles y miles de millones a comprar sus propias acciones. Así las revalorizaban y sus propietarios aumentaban su capital. Y ahora que sus cotizaciones se vienen abajo la Reserva Federal pone dinero sin límite para evitar que se arruinen.

El actual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, solicitó en 2011 una auditoría de la Reserva Federal y al realizarse se encontró con que ésta había gastado en secreto, sin dar ningún tipo de información, 16 billones de dólares en dar préstamos sin interés a las mayores empresas y bancos del planeta (los datos aquí: <https://bit.ly/3gkiDLA>). Para ellos tampoco hubo escasez cuando necesitaron ayuda y la recibieron prácticamente regalada: el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, creó dinero de la nada para sacar a flote a quienes habían provocado la crisis.

Ahora, asustados por la enorme tragedia económica que puede suponer la pandemia del coronavirus, los bancos centrales vuelven a poner dinero aunque, como acabo de decir, para comprar acciones o dando dinero al 0% a la banca privada para que ésta haga negocio prestando a tipos de interés bastante más altos a los gobiernos y a las empresas.

Y mientras tanto, los hospitales se saturan careciendo de medios, muchas personas mueren por falta de recursos materiales y de personal, miles de empresas están a punto de cerrar por la inactividad forzada y millones de personas se van al paro.

Es una doble tragedia. La del virus y la del comportamiento criminal -vamos a llamar ya a las cosas por su nombre- de quienes pueden disponer de todo el dinero necesario para afrontar con medios suficientes la emergencia sanitaria y, sin embargo, prefieren crear artificialmente la escasez, la que produce el miedo con el que se favorece el sometimiento y la carencia que mata a millones de seres humanos.

No estoy reclamando que los bancos centrales despilfarran el dinero, ni que los gobernantes puedan disponer de él a sus anchas para malgastarlo. Hay multitud de vías para establecer controles que garanticen su

buen uso. Se trata, simplemente, de ponerlo allí donde ahora mismo es imprescindible que esté para evitar una catástrofe humana y económica.

Nos están engañando cuando dicen que no hay más recursos.

No es que falte el dinero sino que sobran la maldad, la avaricia y la mentira, "los tres monstruos -como dijo Máximo Gorki- que han socavado y amedrentado al mundo con la fuerza de su cinismo".

En los últimos años, el panorama de lo que podría llamarse el pensamiento progresista se ha convertido en algo parecido a un supermercado. En lugar de haberse generado una propuesta omnicompreensiva para una sociedad compleja como la del capitalismo de nuestros días, han proliferado multitud de respuestas parciales, especializadas y centradas en dimensiones concretas de los problemas comunes. En cada "departamento" del supermercado ideológico progresista se produce un artículo determinado: el decrecimiento, la renta básica, diferentes tipos de feminismos a elegir, ecologismos igualmente envueltos con diversos matices y formatos, animalismo, economía del bien común, por no hablar de las diversas interpretaciones del marxismo... Los productores o consumidores de cada una de ellas se comportan como fieles de una iglesia civil, de quien suponen que posee en exclusiva la propuesta que puede resolver los problemas de todos.

Sin haber sido capaces de generar un pensamiento alternativo omnicompreensivo y completo capaz de dar soluciones a los problemas complejos y globales de nuestro tiempo y no sólo a algunos concretos, las izquierdas se han dividido en multitud de corrientes que, a su vez, se reproducen como las estrellas de mar, por fragmentación, y que marchan cada una por su lado abrigándose intelectualmente con un ropaje ideológico hecho a su medida y particular, de modo que únicamente puede utilizarlo quien tenga su propia y exclusiva hechura.

Viene esto a cuento porque ahora que nos encontramos ante un nuevo problema económico complejo, a las puertas de una crisis nacional y mundial de dimensiones todavía imprevisibles, como resultado no sólo de la pandemia sino del contexto en el que se produce, se vuelve a caer en el error de creer que soluciones segmentadas y parciales, singulares, pueden resolver los problemas complejos y multidimensionales como el que tenemos por delante.

En concreto, me refiero ahora a la idea, cada vez más difundida, de que la puesta en marcha de una renta básica -universal o no- es la solución a todos los problemas que plantea la crisis económica que ya ha empezado a producir la pandemia.

No he parado de decir, desde que se advirtió la gravedad del problema, que es fundamental que se garantice cuanto antes el ingreso que miles de personas están perdiendo o van a perder en cuanto que se ha decretado el confinamiento y, por tanto, la inactividad productiva.

Si se permite que se queden sin ingreso suficiente, no sólo sufrirán carencias vitales inadmisibles al no poder adquirir bienes esenciales para su supervivencia (algo ya de por sí inaceptable) sino que eso se traducirá, a su vez, en pérdida de ingreso de las empresas que los producen o distribuyen, creándose así un círculo vicioso infernal.

Para evitar esa situación sólo hay dos soluciones posibles: que se suspenda el pago de algunos de los gastos a los que han de hacer frente (aunque eso deja sin ingreso a empresas, como acabo de decir) y que el Estado les compense la pérdida de renta que hayan sufrido.

En una situación de emergencia como la que vivimos, creo que la forma de realizar esa compensación es lo de menos, con tal de que sea la más rápida, la que garantice que llega realmente a quien lo necesita y que lo haga con la menor exigencia de liquidez posible puesto que, como diré enseguida, hay otros problemas que atender. Entrar en una discusión sobre el nombre que tenga la medida me parece sencillamente irresponsable.

Dado que determinar quién necesita y quién no esa ayuda lleva un tiempo y obliga a poner en marcha un aparato administrativo engorroso y muy difícil de movilizar en situación de confinamiento, quizá lo mejor sería que el Estado entregase una cantidad determinada a todas las personas y que en unos meses se saldara esa entrega, reclamando la devolución a quien tuviera una renta o riqueza superior al estándar establecido. Varios economistas de diferentes corrientes están planteando diversas fórmulas en esta línea.

Lo importante es no caer en el error de creer que de esta manera se resuelve todo el problema económico que plantea esta crisis.

Garantizar la renta de las personas es fundamental como vengo diciendo, pero es solo una rueda del carro que hemos de poner de nuevo en movimiento cuando acabe esta fase de confinamiento.

Si ponemos dinero en el bolsillo de la gente estaremos garantizando que mantenga su capacidad de compra, mas resulta que el problema que tenemos ahora es que, aunque tuvieran garantizada esa renta, la mayor parte de las empresas en donde podrían gastarla no están en funcionamiento. Y lo grave es que, si esta situación de cierre de empresas obligado por el confinamiento se prolonga durante unas semanas más, miles de ellas van a cerrar para siempre, provocando un desempleo masivo y en tan poco tiempo que hundirá nuestra economía en una depresión quizá nunca vista en nuestra historia.

Por lo tanto, es imprescindible que nos demos cuenta de que no basta con una renta garantizada, básica o como se la quiera llamar, para las personas, sino que es igualmente necesario garantizar la renta que

perciban las empresas y los trabajadores autónomos para que puedan sobrevivir en este periodo de cierre.

El mecanismo utilizable para ello ha de tener las mismas características que el de la renta garantizada para las personas. Debe ser lo más inmediato posible, debe ser cierto, llegar a todas las empresas que lo necesitan y consumir la menor liquidez posible.

El gobierno está yendo en esa línea, pero no avanza todavía con la certeza, con la rapidez y con la cuantía que son imprescindibles, sobre todo, porque no cuenta con la ayuda necesaria de las instituciones europeas.

Leemos que en Italia ya hay alrededor de tres millones de personas con problemas para alimentarse. En España tenemos docenas de barrios con rentas ínfimas, vamos a tener miles y miles de personas que van a quedarse sin ingresos y ya hay muchísimos empresarios o trabajadores autónomos que están empezando a encontrarse literalmente en las últimas, al límite.

No se trata de agobiar, como coloquialmente se dice, al gobierno. Sólo quiero llamar la atención sobre la urgencia y la imperiosa necesidad de ser ejecutivos y, sobre todo, de transmitir con hechos la seguridad de que no se va a dejar caer a nadie, algo que hasta ahora desgraciadamente no se está consiguiendo.

Soy plenamente consciente de que poner en marcha fórmulas de apoyo a las personas y a las empresas y autónomos del tipo de las que he comentado cuesta mucho dinero. Ahora bien, una vez más hay que decir que todo el que gastemos ahora en esto será mucho menos de lo que nos costaría pasado mañana no haberlo gastado en estos momentos. Si Europa no ayuda, porque es esclava de la insolidaridad y el cinismo de Alemania y Holanda y del fundamentalismo ideológico de sus dirigentes, tendremos que salvarnos por nuestra cuenta. Sea como sea y cueste el dinero que nos cueste. La alternativa de no hacerlo o de dejar pasar el tiempo es peor y mucho más cara.

En el año 2001 la economía japonesa se encontraba por los suelos y el Banco de Japón respondió poniendo en marcha un plan de acción billonario con el fin de impulsarla. Consistía en realizar compras masivas de activos financieros (acciones, bonos privados o públicos...) que estaban en poder de los bancos comerciales. La actuación se denominó Quantitative Easing (QE) o Expansión Cuantitativa, aunque también se la conoció después como Flexibilización Cuantitativa. Tras ganar las elecciones en 2012, el primer ministro Shinzo Abe ordenó al Banco de Japón que las volviera a llevar a cabo.

La Reserva Federal inició su Expansión Cuantitativa en 2008, con un programa de compras verdaderamente colosal. Sólo en los primeros ocho meses de ese año creó más dinero para comprar activos de los bancos que habían provocado la crisis (940.000 millones de dólares) que todo el que había creado en los cincuenta años anteriores (840.000 millones) para que funcionara la economía. En los siguientes cinco años se gastó casi cuatro billones de dólares en esas mismas operaciones. En 2018 volvió a poner en marcha otro programa semejante y en 2009 ya consideró que esa sería una forma permanente de actuación para evitar que las bolsas, cada vez más inestables y peligrosas, se vinieran abajo. Hace unos días, cuando se percibió que la pandemia del coronavirus provocaría un problema económico gravísimo, se anunció otro nuevo programa masivo de compras. Primero de 700.000 millones de dólares, pero enseguida "por cantidad ilimitada".

El Banco de Inglaterra también ha realizado este tipo de compras masivas desde 2009, por valor de un billón de libras desde ese año, y ha anunciado nuevas operaciones por valor de 645.000 millones para hacer frente a los efectos del coronavirus.

En julio de 2012, en medio de grandes ataques de los fondos especulativos a las economías europeas más afectadas por la crisis, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se convirtió en el gran héroe de la Expansión Cuantitativa. El 26 de julio compareció ante la prensa y se limitó a decir: "El BCE está dispuesto a hacer lo que haga falta para preservar el euro. Y créanme, será suficiente". Con esas pocas palabras paró en seco los ataques y elevó a los cielos la consideración de estas políticas. Todo el mundo lo aplaudió pero yo me pregunté en un artículo si no sería más lógico juzgarlo por no haberlo hecho antes.

Más tarde, en 2015, el Banco Central Europeo ya asumió la expansión como un programa permanente y desde entonces ha realizado compras por unos 3,5 billones de euros. También ahora, como los demás bancos centrales, volverá a gastar, de entrada, 750.000 millones de euros en comprar títulos para combatir los efectos de la pandemia.

Todos esos datos muestran que los bancos centrales tienen una capacidad de crear dinero ilimitada y que la han utilizado cuando lo han creído necesario. ¿Con qué objetivo? El Banco Central Europeo lo explica muy claramente en su web:

"El Banco Central Europeo compra bonos a los bancos... lo que incrementa el precio de esos bonos y genera dinero en el sistema bancario... En consecuencia, muchos tipos de interés se reducen y los préstamos se abaratan... lo que permite a empresas y particulares solicitar más préstamos y pagar menos por sus deudas... Como resultado, el consumo y la inversión reciben un impulso... El aumento del consumo y de la inversión fomentan el crecimiento económico y la creación de empleo".

La justificación es buena y cualquiera que la lea se apuntaría sin reservas a este tipo de programas de expansión cuantitativa de los bancos centrales. El problema es que las cosas no funcionan realmente como dice esa cita del Banco Central Europeo y que sus efectos son bastante diferentes a los que proclaman sus impulsores.

No se puede negar que puntalmente han servido para impedir que se hundan las bolsas, que hayan caído economías enteras (como algunas europeas gracias a la intervención de Draghi) o para reactivar en alguna medida el crédito. Lo que ocurre es que eso no es todo lo que producen ni ha ocurrido siempre así.

¿Hemos de dar la enhorabuena a los bancos centrales por actuar de bomberos en las bolsas, cuando en realidad son quienes permiten que allí se produzcan incendios constantemente?

¿Aplaudimos a los bancos centrales por salvar, como Draghi, a las economías, cuando en realidad son quienes permiten que haya movimientos especulativos que las amenazan cuando ven la oportunidad?

¿Hay que felicitar a los bancos centrales porque le den dinero a man salva a los bancos para que financien a la economía, cuando les están permitiendo que actúen como auténticos zombis y cuando esa financiación podrían proporcionarla mucho más barata ellos mismos?

Las compras masivas de títulos por los bancos centrales tienen otra cara de la que apenas se habla. Esconden, como si de un truco se tratara, que no son la mejor forma de hacer política económica y que benefician casi exclusivamente a los más ricos.

La mejor prueba de su fracaso es que sus diseñadores las concibieron como una solución temporal y de emergencia y, sin embargo, se han convertido en permanentes y cada vez más cuantiosas.

No voy a negar que realizar ese tipo de intervenciones de forma puntal sea necesario y positivo. Eso es evidente. Lo preocupante es que esos programas de compras masivas se están convirtiendo en una constante que tiene consecuencias bastante negativas, como ya se ha podido poner de manifiesto en investigaciones científicas, una vez que ha pasado algún tiempo desde que empezaron a realizarse.

Así, al aumentar la cantidad de dinero, reducen los tipos de interés, algo que no es necesariamente siempre bueno. Por ejemplo, porque las compras masivas hacen más rentables los activos de mayor riesgo, de modo que en realidad aumentan la peligrosidad de las bolsas, obligando a que los bancos centrales tengan que volver a hacer nuevas compras. También, producen desórdenes en los mercados de divisas que perjudican al comercio internacional. Algunos ven positivo que estas operaciones suban el precio de la vivienda y que así parezca que disminuye la desigualdad porque sube el valor de la riqueza de las familias propietarias, pero, por otro lado, dificultan que puedan disfrutarla los grupos sociales de menos renta. Y, lo que es quizá más grave, el dinero que ponen en manos de los bancos no va directamente a financiar a la economía. En gran parte ha servido para que acumulen nuevos activos, que luego van vendiendo de nuevo a los bancos centrales. Tampoco es cierto que la inversión y el consumo dependan solo del interés de los créditos, como hemos visto que supone el Banco Central Europeo para justificar las compras masivas. Dependen, sobre todo, de otras circunstancias que tienen que ver más con la economía real que con la financiera. Lo que sí hacen los tipos de interés demasiado bajos es estimular la deuda que es, ¡qué casualidad!, el negocio de la banca.

El corolario de todo eso es que las intervenciones masivas de los bancos centrales para comprar títulos financieros han ayudado decisivamente a que aumente la desigualdad en los últimos años. Con ellas se busca, como hemos visto, que no se hunda su precio cuando cae después de que las operaciones especulativas lo hayan elevado artificialmente, y eso lógicamente beneficia a sus propietarios y no precisamente a la mayoría de la población: en Estados Unidos el 80% de los títulos los posee el 10% más rico y, a nivel mundial, el 50% de los activos financieros está en manos de quienes tienen más un millón de dólares de patrimonio, según el informe anual del Boston Consulting Group. Por tanto, los grandes beneficiarios de esas compras masivas que realizan los bancos centrales, como ahora en medio de la pandemia, son las personas más ricas.

Se ha demostrado que en Japón "sólo beneficia a los grupos de rentas más elevadas y que amplía la brecha entre estos y los demás" (aquí:

<https://bit.ly/2z9VEIL>). En Estados Unidos también se ha comprobado que la Expansión Cuantitativa aumenta la desigualdad, al menos, en un 25% (dato aquí: <https://bit.ly/2z8MwOg>). El Banco de Inglaterra argumenta que el efecto de su Expansión Cuantitativa fue bueno porque conservó el empleo y que la desigualdad era ya de por sí alta pero lo cierto es que, en Inglaterra, la renta del 10% de los hogares más pobres aumentó 3.000 libras y la del 10% más rico 350.000 en el periodo en el que la llevó a cabo. El Banco Central Europeo también sostiene que su expansión cuantitativa disminuye la desigualdad porque aumenta el empleo y aumenta ligeramente el precio de la vivienda. Un argumento que es bastante falaz. Si esa política monetaria expansiva fuese realmente la que es capaz de aumentar el empleo no se entiende que se siga sin incluir el objetivo de aumentarlo entre los del banco central. Y, en todo caso, algún trabajo empírico ha demostrado que el efecto principal de la expansión es el aumento de los precios de los activos que es el que aumenta la desigualdad y no el de impulsar la economía (aquí: <https://bit.ly/3gc5VOU>).

Al volver a realizar compras masivas de títulos financieros con la excusa de luchar ahora contra la pandemia, los bancos centrales vuelven a hacer ilusionismo delante de nuestras narices. Van a conseguir lo que ya lograron en momentos anterior: salvar a los grandes propietarios de riqueza financiera y a los bancos impulsando la generación de deuda que es el único motor que saben poner en marcha para movilizar a la economía. Algo tan peligroso como arrancar un coche poniéndole un misil en el tubo de escape.

Es hora de acabar con el truco. En lugar de darle el dinero a los bancos, a los fondos especulativos y a los grandes propietarios de riqueza financiera, los bancos centrales deben ponerlo directamente en manos de quien lo gasta en crear riqueza y empleo y no en especular. Y mucho más ahora, en medio de una emergencia sanitaria que quizá se convierta en económica poco después.

Se acaba de hacer público un manifiesto promovido por la organización Recortes Cero que pide a todos los españoles unidad y solidaridad ante la epidemia que estamos viviendo para que podamos salir de esta terrible situación con éxito, con más fuerza y progreso.

Lo firmé con gusto cuando sus promotores me ofrecieron hacerlo, como han hecho también otras personalidades de muy distinta opinión a las que admiro como Miguel Ríos, Elvira Lindo, Rosa Montero, Juan José Millás, Fanny Rubio, Antonio Muñoz Molina, Juan Marsé, Antonio López, Ana Noguera, Fernando Schwartz, Javier Marías, Cristina Almeida, Fernando Savater, Juan José Tamayo o Rafael Matesanz, entre muchas otras personas.

Pedimos unidad y apoyo a las medidas de emergencia tomadas por el Gobierno para afrontar esta crisis porque nos parece que lo urgente es reducir la expansión de la pandemia y contribuir a aliviar la importante presión que tiene el Sistema Público de Salud y el conjunto de sus profesionales. Pedimos la unidad entre el pueblo de las diferentes nacionalidades y regiones de nuestro país porque todos padecemos por igual los efectos del virus. Pedimos unidad y solidaridad con todos los sectores de la sociedad española, con los que sufren la epidemia, con los más vulnerables, con quienes están haciendo posible que encerrados en nuestras casas podamos seguir satisfaciendo nuestras necesidades básicas. Pedimos unidad y solidaridad para que esta nueva crisis no vuelva a recaer sobre las personas más débiles y vulnerables, sobre quienes ya sufrieron en mayor medida los recortes y tienen empleos precarios o son más pobres. Pedimos la unidad y solidaridad de los españoles para salir de esta emergencia con más fuerza si cabe, redistribuyendo mejor la riqueza, fortaleciendo los servicios públicos de la salud, la educación o las pensiones que se ha comprobado que son nuestros mejores diques contra las crisis. Y pedimos que salgamos de esta situación con una estrategia nacional que nos permita reindustrializar el país, reconstruyendo el tejido productivo y el medio rural con un modelo ecológico, ayudando a autónomos y pymes, generando riqueza y más empleo, estable y de calidad y con medidas urgentes que atiendan a los sectores más desfavorecidos.

Yo vuelvo a decir que no soy ingenuo. He estudiado la historia y sé que en 1931 muchos latifundistas de derechas dejaron de recoger sus cosechas para provocar el hambre de sus jornaleros e indisponerlos así contra la República. He visto a líderes de la oposición acusar a Rodríguez Zapatero de ser cómplice de ETA y de traicionar a los muertos y no hace

mucho que Vox llegó a querellarse contra él por colaborar con los terroristas. He visto acusar de no querer acabar con el terrorismo incluso a quienes habían sido sus víctimas directas. Y basta con leer los medios para comprobar que esa dinámica se está manteniendo en medio de una emergencia sanitaria que no distingue a la hora de matar a los seres queridos de una y otra parte.

No voy a insistir ahora sobre la gravedad de la epidemia, ni sobre la catástrofe económica que nos espera si no hacemos frente con acierto a lo que estamos viviendo. Simplemente quiero decir una vez más que es materialmente imposible salir bien parados de esta emergencia, como decimos en el manifiesto, si los españoles no anteponeamos la unidad y la solidaridad a cualquier otro sentimiento u opinión.

Lo que está haciendo el gobierno de España no se diferencia básicamente de lo que se hace en otros países, incluso muchas de sus medidas son más moderadas que las que toman otros gobiernos de nuestro entorno donde la epidemia es de momento más benigna. Los ataques que recibe son, sin embargo, terribles, muchas veces simples mentiras y a veces, incluso fuera de la razón más objetiva. Se está acusando al vicepresidente Pablo Iglesias de peligroso extremista por recordar la letra textual de nuestra Constitución o de comunista irredento por afirmar que las empresas privadas deben ponerse ahora al servicio del interés público si es necesario. Se le acusa de eso cuando el gobierno conservador alemán ha hablado de que incluso está dispuesto a nacionalizar las que haga falta para actuar contra la epidemia. Y se ataca sin piedad y con todo tipo de insultos al gobierno diciendo que antepone la ideología a la recuperación económica cuando hasta el Papa Francisco pide que "primero la gente", aunque esto cueste un "descalabro económico" porque hacerlo al revés, anteponer la economía a la vida de las personas, sería "algo así como un genocidio virósico" (lo dice aquí: <https://bit.ly/2LOP076>).

Es comprensible, en todo caso, que haya españoles que estén en desacuerdo con algunas de las medidas del gobierno y es lógico que algunos protesten cuando su coste tiene que repartirse desigualmente porque no todos estamos en igual posición. Pero una cosa es tener una opinión distinta, disentir como ejercicio de libertad, y otra creer que quien se equivoca (suponiendo efectivamente que se esté equivocando) lo hace con la intención de hacer el mal a propósito.

El problema de las derechas españolas no es que piensen que las personas de izquierdas somos un atajo de incompetentes e inútiles que no sabemos gestionar o gobernar los intereses comunes. Eso sería llevadero porque afortunadamente tenemos una democracia que mejor o peor nos permite pronunciarnos y colocar en el gobierno a quien desea la mayoría. Lo terrible es que una gran parte de las derechas españolas están convencidas de que quienes somos de izquierdas solo buscamos destruir España

y, por supuesto, que solo nosotros nos equivocamos. La prueba es que en medio de esta desgracia que estamos viviendo no dejan de presentar contra nuestros responsables políticos o administrativos querellas criminales, es decir, las que se ponen cuando se entiende que ha habido una intención efectiva de producir un daño. Si sale algo mal con la izquierda, la derecha -después de no haber colaborado para que se hubiera hecho mejor- no entenderá nunca que se haya producido un error o un accidente, sino que verá en ello la intención de haber hecho el mal al resto de los españoles. Es el pensamiento primitivo y simplista que lleva a construir el concepto de la "anti-España", el nacionalismo terrible que considera que ni siquiera somos españoles quienes no pensamos como quienes se consideran a sí mismos como la única esencia y expresión de lo español.

Esta es la hora de amar y ayudar a España de verdad y eso no puede significar otra cosa que respetarnos, aunque seamos distintos, de colaborar unos con otros, de apoyar a quien está legítimamente al mando de la nave, aunque creamos que no lo hace bien y de no minar su autoridad ni su liderazgo por muy limitado que creamos que sea. Cuando hace falta coordinación, mando efectivo, unidad de acción y disciplina, tal y como lo está entendiendo la inmensa mayoría de los españoles que luchan contra el virus sin preguntarse de qué ideología es quien lucha a su lado, amar a España es solidarizarnos unos con otros sin descanso y sin distinción, apoyar al gobierno legítimo y pedirle las cuentas después y no hacer juicios de intenciones tan infundados (porque ningún ser humano puede saber cuáles son las de otro) como siempre malvados.

Yo no sé si lo habrá intentado y no ha tenido éxito (aunque en ese caso debiéramos haberlo sabido), pero sí pienso que quizá hubiera sido muy útil que el gobierno, sin renunciar por supuesto a la obligación que tiene de tomar las últimas decisiones, hubiera convocado una especie de mesa nacional, de espacio de información, complicidad y colaboración de los representantes de todos los partidos sin distinción. No tendría por qué haber afectado a su atención sobre la gestión urgente del día a día y, sin embargo, permitiría visibilizar una unidad de la que ahora carecemos y que nos está suponiendo un escollo quizá insuperable para salir con bien del peligro en el que estamos. Igual estamos todavía a tiempo de conseguir esa expresión institucional de unidad y solidaridad y animo al gobierno a que lo intente, poniendo de su parte la mayor generosidad posible. Si lo consigue, daremos un paso de gigante. Si no, al menos sabremos quién está de verdad por amar y salvar a España en su conjunto plural y diferente y quién busca solamente defender sus propios intereses.

Una de las críticas que la oposición le está haciendo al gobierno de Pedro Sánchez es que está improvisando en la lucha contra el coronavirus. Una crítica que me parece bastante injusta.

Cuando se produce una emergencia inesperada como la que estamos viviendo lo lógico es que haya que actuar con una gran dosis de improvisación, precisamente porque se trata, como ahora, de algo que ha sucedido sin que haya podido ser previsto y con una naturaleza en gran medida desconocida.

Yo no sé nada de biología ni de epidemiología, pero lo que oigo decir a quienes saben de eso es que, si bien la propagación pandémica de algún tipo de virus era previsible, no lo era la forma en que lo hiciera ni sus efectos porque se trata de un tipo de agente con una gran capacidad de mutación. Sin entrar en otras consideraciones técnicas que desconozco, parece evidente que, hasta la fecha y en todo el mundo, hay una gran incertidumbre sobre la tasa de mortalidad que provoca, sobre la cadena de transmisión de la epidemia, sobre la velocidad de su difusión y, por supuesto, también sobre el impacto económico y financiero que está teniendo y va a tener la pandemia. Y ante la incertidumbre, nos guste o no, es irremediable actuar sobre la marcha, improvisar.

Es justamente esa razón, el hecho de que la improvisación sea obligada cuando nos enfrentamos a algo desconocido y mutante, lo que hace imprescindible que en esas circunstancias se disponga de una gran capacidad ejecutiva, que se centralicen las decisiones y se puedan utilizar todos los recursos necesarios para garantizar que la información fluya rápida y nítidamente hacia quienes debe decidir. Hacer ruido constantemente, difundir bulos, criticar innecesariamente y debilitar la posición del ejecutivo es el peor enemigo con el que se puede contar en medio de una crisis como la del coronavirus.

Es verdad, sin embargo, que no disponer de algún tipo de protocolo previo es una irresponsabilidad, aunque también sea cierto que, por mucha previsión que se hubiera podido tener, la incertidumbre de los hechos nuevos es muy posible que hubiera impedido actuar conforme a un manual de instrucciones previamente elaborado.

Si en España hubiera existido algún tipo de previsión sobre cómo actuar en caso de producirse la propagación de un virus como el actual, algo que es probable pues disponemos de organismos del Estado que justamente están dedicado a anticipar estrategias de defensa nacional en

todos los ámbitos, no puede haber duda de que el gobierno la estaría tomando en cuenta. Pero si nuestros servicios de inteligencia y defensa nacional no hubieran elaborado estrategia alguna para actuar si se diera una epidemia como la que vivimos, ¿acaso sería el gobierno actual el responsable de esa carencia y de tener que improvisar? Honestamente hablando: ¿Se puede acusar al gobierno de Pedro Sánchez de improvisar cuando se está enfrentando a una pandemia de cuyo origen nadie sabía y cuyo desarrollo nadie sabe a ciencia cierta? ¿Tiene el actual gobierno la culpa de que los gobiernos anteriores no elaboraron protocolos de actuación para un caso como este?

Evidentemente, a Pedro Sánchez le correspondería una cuota parte de responsabilidad por no haberla elaborado en los meses en que ha sido presidente mas la correspondiente al Partido Popular sería sin duda mucho mayor. ¿A qué viene entonces criticar a este gobierno por improvisar?

Y hay que decir, además, que cuando la dialéctica gobierno-oposición se encanalla, como ocurre en España, ni siquiera la previsión está exenta de crítica. También se ataca a los ejecutivos cuando son previsores. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ahora está resultando de tan gran utilidad, el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, le acusó de crear un invento innecesario, de dudosa legalidad y de poner en marcha un "capricho faraónico". Un tipo de actitud destructiva que no sólo se da en España. Hace unos días, el expresidente francés François Fillon escribía un artículo recordando que la oposición masacró a su ministra de salud, la farmacéutica Roselyne Bachelot, cuando decidió comprar dos mil millones de mascarillas en previsión de problemas como el que estamos viviendo. En todos los medios y en el Parlamento se le acusó entonces de dilapidar recursos públicos y ahora Francia está tratando de comprarlas deprisa y corriendo (por cierto, con problemas de rapiña y fraude prácticamente iguales a los que sufre España y que provocan una crítica feroz de la oposición al gobierno de Sánchez, como si esos problemas fueran solamente nuestros y culpa de su gestión).

La oposición está en su derecho de criticar al gobierno y, de hecho y de derecho, es su obligación. Los dirigentes del Partido Popular, Ciudadanos o Vox tienen afortunadamente libertad para decir lo que quieran, pero sería mucho más positivo para España y para la salud y el bienestar de todos los españoles que no recurrieran a la mentira y que no actuaran como quien ejecuta una representación teatral.

Si lo que está pasando en España sólo ocurriera aquí, lo que dice la oposición podría ser más creíble, pero acusar al gobierno español de males que se están produciendo en prácticamente todos los demás países resulta, especialmente en estos momentos en que la enfermedad y la

muerte acechan a los españoles sin distinción, especialmente patético y desgraciado.

Cuando las cosas ya han sucedido, todo el mundo sabe lo que se debería haber hecho pero lo honrado es criticar contando con que las decisiones se toman con la información que se tiene en cada momento.

Ahora ya sabemos que estábamos en plena difusión de la pandemia cuando el virus no había hecho acto de presencia pero eso no lo supo el gobierno, ni quizá nadie, en su momento, y eso ha provocado efectivamente que se retrasen medidas, sobre todo la de encierro, que son imprescindibles para frenarla y reducir sus efectos. Algo que no sólo ha pasado en España, como se puede comprobar simplemente leyendo la prensa de otros países. En Francia, con un gobierno conservador y no "social-comunista" como aquí llaman al de Pedro Sánchez, las decisiones fueron también tardías y polémicas y allí no sólo se celebraron manifestaciones, como aquí, sino unas elecciones municipales que movilizaron a millones de personas. También sus dirigentes, como los de otros países, dieron muestras de tener un gran desconocimiento de lo que iba a ocurrir.

En enero de este año, la ministra de Solidaridad y Salud francesa, Agnes Buzyn, dijo sobre la Covid-19 que "el riesgo de importarlo de Wuhan es prácticamente cero" y el "de propagación es muy bajo". El Ministro de Educación Nacional, Jean - Michel Blanquer, afirmaba el 11 de marzo que "el cierre de las escuelas no es posible" y un día después el de Trabajo, Muriel Pénicaud, declaraba que "no es peligroso ir a trabajar en empresas de más de 1000 empleados". Y eso, por no hablar de los cambios de opinión de otros líderes más del gusto de la extrema derecha española, como Boris Johnson o Donald Trump.

Improvisar frente a un fenómeno que muta casi constantemente y de cuya evolución y consecuencias desconocemos casi todo no es, por tanto, lo peor que nos puede pasar sino más bien algo obligado. Sin embargo, esto no quiere decir que cualquier forma de improvisar, por muy inevitable que resulte, sea la adecuada.

Y lo mismo que es desleal que se critique a un gobierno por improvisar en medio de una tormenta de naturaleza y efectos desconocidos, es un error negar que no queda más remedio que ir tomando medidas que son improvisadas. En medio de la zozobra que forzosamente provoca vivir una emergencia sanitaria, lo importante es que el gobierno transmita la verdad, seguridad, confianza, la mayor certidumbre posible y mucha complicidad. Algo que es especialmente necesario para evitar que se hunda la economía. No es bueno aparecer ante la población como una especie de héroe que se encuentra solo ante el peligro. Por eso sería deseable que el gobierno se arrojara en mucha mayor medida y que haga más visible que recurre y cuenta con quienes conocen científicamente lo

que está pasando, con los líderes sociales y a ser posible con todos los partidos políticos. Yo apoyo en estos momentos al gobierno, no sólo porque esté de acuerdo con la mayoría de las medidas que toma, sino porque haría igual con cualquier otro en medio de una catástrofe sanitaria. Sin perjuicio de ello, no me puedo explicar, sin embargo, que no haya dado el paso de ofrecer a todos los partidos, y cuando digo todos me refiero a todos, algún tipo de espacio que permita el intercambio de información permanente y que, como decía en mi artículo de ayer en el que pedía unidad y solidaridad, visibilice ante todos los españoles, al menos, que se busca la mayor complicidad y cooperación posible, no únicamente para afrontar de forma inmediata la pandemia sino para hacer frente al día después. Si se pide ayuda, hay que ofrecer la forma de prestarla y si alguien se niega a darla, debe saberse.

¿SE HABRÁ INFILTRADO PABLO IGLESIAS EN LOS GOBIERNOS DE FRANCIA Y ALEMANIA?

Publicado en Público.es
el 5 de abril de 2020

Hace unos días, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias hizo referencia en un mensaje de Twitter al artículo 128 de la Constitución Española que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Lo hizo para subrayar que, en estos momentos de emergencia sanitaria, "cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general del país", un principio constitucional que lógicamente puede llevar a que puntualmente se disponga que alguna propiedad privada quede al servicio del bien común.

Enseguida, los medios de comunicación y los dirigentes y economistas de derechas arremetieron contra Pablo Iglesias, una vez más, con la desmesura y crueldad con que suelen referirse a lo que hagan o digan los líderes de Podemos.

Por esa declaración han acusado al vicepresidente de "querer imponer su ideología comunista y de amenazar a la propiedad privada" o de tener intenciones incluso más radicales y tremendas. Libertad Digital decía en un gran titular: "El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista". Esdiario se refería al mensaje del líder de Podemos diciendo que el "tuit chavista de Pablo Iglesias aterroriza a todo el mundo con ahorros". El diario El Economista aseguraba, también a toda plana, que "Iglesias quiere nacionalizaciones y socializar ahorros como Venezuela". El economista José Carlos Díez dejó de ser economista observador -como le gusta definirse a sí mismo- para convertirse en psicólogo: "España tiene un vicepresidente del Gobierno comunista obsesionado con expropiar empresas". Y el máximo líder del PP, Pablo Casado, se sumaba al clamor general -como no podía ser menos- asegurando que el vicepresidente "amenaza con expropiar la propiedad privada" o que quiere "nacionalizar la economía como en Venezuela". Otros líderes o medios le han pedido la dimisión por "amenazar" con la aplicación de ese principio constitucional.

Los juicios tan dramáticos y extremistas contra Iglesias son realmente chocantes si se tiene en cuenta que no mencionó ningún artículo de la extinta constitución soviética ni de la bolivariana de Venezuela sino uno de la española. Sorprende porque no parece lógico que, quienes a todas horas manifiestan su compromiso con nuestra Carta Magna y se denominan a sí mismos los constitucionalistas, puedan mostrar tanto temor cuando se invoca uno de sus artículos. Si hay algo de comunista, de bolivariano, de radical y terrible en la declaración de Pablo Iglesias será

porque todo eso está en nuestra Constitución y no porque lo haya afirmado el vicepresidente. Y si esa idea le parece peligrosa a la derecha (¡como si hubiera sido Podemos quien redactara un artículo bolchevique!) parece que lo lógico no es pedir la dimisión de quien invoca a la Constitución sino que se cambie el texto que no les gusta. Claro que entonces se estarían negando a ellos mismos y mostrando que su acendrado constitucionalismo es una farsa de cartón piedra.

Quienes critican a Iglesias por recordar la letra y el espíritu del 128 olvidan (seguramente lo saben, pero no quieren tenerlo en cuenta) que preceptos de ese tipo se encuentran, con una u otra redacción concreta, en casi todas las constituciones avanzadas y que es precisamente su ausencia lo que da problemas en momentos como los que estamos viviendo. Así lo ha reconocido nada más y nada menos que el expresidente Felipe González en un artículo de prensa en el que subraya la necesidad de tenerlo presente, naturalmente, reconociendo y cumpliendo al mismo tiempo con el resto de los principios constitucionales, como no puede ser de otra forma.

Concretamente, González afirma que "el enorme desafío, tanto sanitario como económico-social, cargado de incertidumbres, que nos plantea la pandemia de la Covid-19, exige, por tanto, que el Estado asuma ese papel previsto en el artículo 128 de la Constitución, respetando todo su contenido y respondiendo, de acuerdo con nuestra realidad, a la defensa del interés general que se invoca".

Con tal de atacar al gobierno, los constitucionalistas dejan en papel mojado la letra de la Constitución que dicen defender y acusan de agredirla a quienes precisamente reclaman que se aplique cuando sea necesario. El mundo al revés con tal de impedir que gobierne la izquierda.

Son unas acusaciones tan exageradas y estruendosas, tan desproporcionadas y malvadas, que lo que muestran es que el constitucionalismo de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox es falso, de pacotilla. No puede ser de otro tipo dada la escasísima confianza que tienen en la Constitución que dicen defender. Ni aplicar su artículo 128 supondría poner en marcha el comunismo, ni Pablo Iglesias, ni su partido, ni su gobierno podrían llevar a cabo, puesto que la propia Constitución contempla mecanismos e instituciones para impedirlo, actuaciones contra ella. Si quienes han levantado la voz contra las declaraciones de Iglesias encuentran tan radical e inadecuado el contenido de la Constitución y si creen que sólo con invocar unos de sus principios se la pone en peligro, si para ellos es tan peligrosa e incapaz de defenderse a sí misma, lo que no se entiende es que la hagan suya con tanto fervor. O, mejor dicho, sólo puede entenderse que digan que la defienden con tanto ahínco porque mienten. La Constitución les importa un rábano y sólo están preocupados por dinamitar a cualquier gobierno que defienda -con la Constitución en la mano-

intereses que no sean los de las grandes empresas o los de la cúpula que controla la Iglesia Católica. Las falsedades -como dijo Voltaire- no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí.

Curiosamente, hay una buena prueba de que detrás de las acusaciones de la derecha sólo hay histrionismo y ningún peligro de que el gobierno destruya la economía por recurrir al artículo 128 de la Constitución: gobiernos tan poco sospechosos de izquierdismo como los de Francia y Alemania están yendo mucho más lejos de lo que ha ido en España el vicepresidente Pablo Iglesias.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó la semana pasada que allí se está valorando la posibilidad de tomar participaciones en las empresas que lo necesiten e incluso realizar nacionalizaciones. Y el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, también ha anunciado que llevarán a cabo nacionalizaciones si fuese necesario. Y hasta el presidente Trump ha ordenado a General Motors y a Ford que se pongan a fabricar respiradores.

No es que Iglesias se haya infiltrado en los gobiernos de Francia y Alemania y los esté haciendo bolcheviques. No. Lo que simplemente ocurre es que, en momentos de emergencia como los que estamos viviendo, lo lógico es que los gobiernos tengan esa previsión y que invoquen el mismo principio al que hizo referencia el vicepresidente español.

Una epidemia como la de la Covid-19 nos obliga a utilizar todos los recursos necesarios para salvar vidas humanas y, desgraciadamente, a elegir entre preservar la salud confinando durante algún tiempo a la población o salvar la economía. Y la derecha, por cierto, también aprovecha esta terrible disyuntiva para criticar al gobierno, haga lo que haga: si hay muertes, dice que Pedro Sánchez e Iglesias las desean y no las evitan y, si el gobierno decide confinar a la población para evitarlas, los acusan de paralizar la actividad económica para destruirla por un capricho ideológico, por una obsesión, como dice Díez.

Para poder disponer de todos los medios que necesita nuestro sistema sanitario y para evitar que miles de empresas cierren por la obligada inactividad, el gobierno no puede tener la más mínima duda: si hace falta colocar a las empresas privadas al servicio del interés común debe hacerlo, lo mismo que debe proteger a todas las empresas que lo necesiten, cueste lo que cueste y de cualquier manera que sea, para evitar que desaparezcan. Hay muchas empresas españolas que tienen servicios de logística por todo el mundo ¿no es lógico, por ejemplo, que se recurra a sus redes para aprovisionarnos con seguridad en estos momentos de crisis? ¿no es razonable que se obligue, si fuera preciso, a que se reconviertan las que hagan falta para producir aquí lo que ahora no se pueda conseguir en los mercados internacionales, como algunos productos sanitarios?

Y eso hay que hacerlo, eso sí, con la máxima prudencia e incluso con comedimiento, en el fondo y en las formas, para que nadie pueda creer que hay amenaza donde sólo se está deseando que haya cuidado y protección.

Esperemos que el gobierno sea capaz de superar la agresión continuada, acierte en el tratamiento de la crisis, actúe con inteligencia y mayor prontitud para garantizar los ingresos perdidos por las empresas y las personas y no tengamos que ver a empresas y bancos, no sólo en España sino en el resto de Europa, pidiendo ellos mismos ser nacionalizados.

La epidemia del coronavirus se ha convertido ya en una crisis económica, como sabíamos desde el principio que iba a suceder, que está requiriendo medidas inmediatas, urgentes, para poder disponer de los recursos que precisa el sector sanitario y para evitar que, en esta fase de confinamiento que obliga a que se paralice una buena parte de la actividad económica, cierren miles de empresas y se dispare la pobreza en los hogares.

Los gobiernos las están tomando con mayor o menor capacidad, diligencia y efectividad, pero esa no es la única respuesta que hay que dar ante los efectos económicos que está provocando y va a provocar la epidemia.

Una vez que acabe esta fase de paralización la economía debe reactivarse y eso no va a ocurrir de forma automática ni proporcionando desde el principio el mismo vigor que la economía tenía antes de paralizarse.

No sabemos cuándo se va a producir, ni de qué manera, ni con qué fuerza. Podemos decir, eso sí, que las economías se recuperarán antes y mejor en función de tres factores: el tiempo que haya tardado la inactividad (que ya está siendo largo y se prevé que lo sea más de lo deseable); la ayuda que se haya prestado a las empresas y autónomos para garantizarles el ingreso cuando han estado obligadamente inactivos (algo que en España no se está garantizando suficientemente, al menos hasta ahora); y, por último, el mayor o menor empuje o impulso que el gobierno dé a empresas y familias cuando vaya terminando la inactividad.

Este último factor es esencial y debe prepararse con antelación para que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron en la crisis anterior al diseñar y poner en marcha en llamado Plan E.

La reactivación se va a encontrar con obstáculos cuya superación convendría preparar.

A pesar de la ayuda, muchas empresas van a desaparecer. Y las que se hayan mantenido "congeladas" se encontrarán con dificultades muy diversas. Algunas cadenas de suministros se habrán roto y es posible que no puedan aprovisionarse de todo lo necesario para volver a producir. No es seguro que sus clientes habituales sigan estando en las mismas condiciones que antes. Pueden haberse perdido materiales, capital, recursos... que después de este tiempo quizá no sea fácil reemplazar. A algunas empresas el cierre las habrá debilitado pero es probable que a otras, dentro de los mismos sectores, las haya reforzado, de modo que la competencia

se puede desatar en mayor medida de lo que algunas puedan soportar. Los consumidores suelen reaccionar con anomalías después de un shock, muchas veces, incluso con irracionalidad y será más difícil predecir su comportamiento y acertar en las estrategias de mercado. La economía internacional estará revuelta y eso, sin duda, nos va a afectar a nosotros. Las administraciones van a tener que multiplicar su actividad y eso puede ser bueno, aunque también un factor de desconcierto o incluso de ineficacia. Es duro decirlo, pero muchas personas, directivos, profesionales, especialistas de todo tipo... muy capacitados habrán fallecido y su reemplazo no podrá ser inmediato. El miedo que se está pasando y la incertidumbre, la pérdida de confianza son siempre enemigos de la economía y frenan la actividad. Y es muy posible que, como consecuencia de todo ello, los precios suban, lo que siempre supone un desajuste que dificulta el comportamiento de empresas y consumidores. En fin, son muchas las circunstancias que pueden ponernos cuesta arriba la vuelta a la normalidad.

Por supuesto, también habrá otras que faciliten la recuperación: la ilusión de volver a hacer vida normal, de recuperar el tiempo y de sentir que, a pesar de las dificultades, se ha podido salir de una amenaza sanitaria.

Ahora es el momento, por tanto, de analizar qué tipo de vientos a favor y en contra podríamos encontrarnos cuando el encierro se vaya relajando y de elaborar una estrategia en consecuencia. La previsión será fundamental para conseguir que esta crisis no sea el anticipo de otra peor.

En esa evaluación hemos de ser conscientes también de otros factores menos coyunturales que nos están afectando negativamente ahora y que hemos de procurar que no lo sigan haciendo en el futuro. Hemos de hacer autocrítica y tener bien presente, con rigor y sin remilgos, lo que nos ha hecho más frágiles que otros países cuando hemos vivido en la crisis y la zozobra. A las naciones les pasa aquello que Marco Aurelio decía que le ocurre a los seres humanos: "Los que no escudriñan los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desgraciados". Los españoles deberíamos ser capaces de escudriñar nuestra propia alma, lo que hemos hecho, lo que no y lo que hemos permitido hacer con nuestro voto o con nuestro no voto en los últimos años, y deberíamos poner sobre la mesa las fuentes de nuestra debilidad estructural como pueblo, como nación, como economía y como sociedad, porque estamos demostrando que somos más débiles y vulnerables que otros países en principio no tan fuertes como nosotros.

Nada de todo esto se puede ya improvisar. Ahora es el momento de prever y de adelantarse a los acontecimientos. La propagación de un virus mutante es, como escribí hace unos días, algo imprevisible y a lo que no hay más remedio que hacer frente con improvisación. Salir de la crisis

que provoca, sin embargo, requiere anticipación y estrategia, previsión y reflexión y no sólo del gobierno sino de toda la sociedad española.

Es el momento de decidir qué futuro queremos para nuestros hijos y nuestros nietos y es imprescindible poner en marcha un plan tan generoso como potente de movilización intelectual y ciudadana. Las universidades, las empresas, los sindicatos y patronales, los grupos profesionales, las fundaciones y centro de pensamiento, pero también los españoles de a pie, que al fin y al cabo son quienes sacan adelante a nuestro país día a día, todos nosotros, podemos y debemos aportar propuestas y soluciones.

Es la hora de que el gobierno impulse un gran proyecto de reactivación nacional, sin sectarismos, plural, abierto. En España tenemos especialistas que están en la vanguardia del pensamiento mundial, en ciencia, en tecnología y en análisis social. Y tenemos un pueblo que es capaz de crear y de reinventarse a sí mismo si se lo propone. Animo al gobierno a que lo intente, a que impulse desde ya una ilusión nacional, un proyecto colectivo y a que se deje la piel para tratar de incorporar a todos los partidos y ciudadanos sin distinción.

Si seguimos dominados por las lógicas que nos han gobernado hasta ahora, si no somos capaces de aprovechar esta oportunidad para recuperar nuestra agricultura, para reindustrializar, para remodelar nuestro sector turístico y no hacernos tan dependientes de él, para poner la construcción al servicio de la necesidad y la sostenibilidad y no de la creación de burbujas, si no mejoramos los recursos y la eficacia de nuestros servicios y administraciones públicas, si no relanzamos la investigación y la innovación, si no nos plantamos ante una Europa que no se cansa de equivocarse en las estrategias, si no somos capaces de recapacitar y de reorientar nuestra economía, si seguimos dejándonos llevar por el nacionalismo excluyente y por el cainismo, si seguimos pensando que los españoles que no piensan como nosotros son nuestros enemigos, volveremos a sufrir todavía más cuando vuelvan a darse nuevos contratiempos, que es lógico que se den. En definitiva, si seguimos haciendo lo mismo, si no aprovechamos para cambiar, se nos tendrá que decir, a las empresas y a las familias, a todos nosotros, lo mismo que al personaje de Julio Cortázar en Modelo de amar, "de qué te habrá servido tanta previsión si al final estás danzando esta misma música insensata".

Hay dos formas de hacer esclavo a un ser humano. Una es la de tomarlo en propiedad y la otra consiste en anular su capacidad para tomar decisiones libres sobre su vida, sobre su presente y su futuro. Esto segundo es lo que consigue la deuda.

Tanto es así que, en la Ley de las XII Tablas de Roma, se establecía que si un ciudadano romano no podía pagar una deuda a otro, podía hacerlo esclavo y venderlo para cobrársela o incluso matarlo. Una vez que el juez declarase el impago, el acreedor exhibía al deudor junto a su mujer y sus hijos durante sesenta días en tres mercados públicos de esclavos mientras proclamaba en público la situación y el dinero que le debía, hasta que apareciese alguien que los comprara.

De la esclavitud que significa la deuda se fue consciente desde la antigüedad y algunos pueblos como los sumerios, babilonios y asirios trataron por diversos procedimientos de evitar que ese tipo de esclavitud acabara con ellos. Incluso hay una palabra que nació para referirse a un momento en el que las deudas se anulaban para que no siguieran creciendo sin cesar, jubileo.

Esta palabra proviene de yobel que, en hebreo, era el cuerno de un carnero que se utilizaba para anunciar la fiesta que se celebraba cada cincuenta años y en la que se anulaban las deudas y se devolvían las tierras a quienes las habían tenido que vender antes, para que la pobreza y la desigualdad no siguieran creciendo por su causa. Se usó en la Biblia y fue traducida al latín por iubilare, que eran los gritos de alegría de los pastores, de modo que la palabra "jubileo" terminó significando alegría o gozo.

Los jubileos de la deuda se han producido casi siempre. El Código Hammurabi, de 1750 años antes de Cristo, también obligaba a cancelar las deudas en tiempos de inundaciones o sequías y todos los gobernantes de la dinastía babilonia comenzaban su reinado anulando las deudas agrarias. También se encontraba en la Ley de Moisés y en Roma, Julio César estableció diversos procedimientos para evitar que la deuda no ahogara por completo a los deudores.

Desde hace años vivimos en una economía que funciona impulsada principalmente por la deuda debido a cinco razones principales.

- Se han impuesto políticas que disminuyen constantemente la masa salarial. Con menos capacidad adquisitiva, las familias tienen que recurrir permanentemente a la deuda. Y con menos masa salarial, las empresas

que producen bienes y servicios tienen menos ingresos y también han de endeudarse constantemente.

- Desde los años setenta del siglo pasado, los bancos privados consiguieron que se estableciera la prohibición de que los bancos centrales financien a los gobiernos sin interés. Al prestarles ellos el dinero con los intereses más altos posibles, la deuda pública se ha disparado. Desde 1995 a la actualidad, todo el incremento de la deuda pública en la totalidad de la Unión Europea corresponde a intereses y así ocurre en otros países.

- Los bancos privados tienen el privilegio de crear dinero de la nada cada vez que conceden un préstamo (quien tenga dudas de esto puede leer cómo lo explica el Banco de Inglaterra [aquí](#)). Y es lógico que utilicen todo el poder económico y político que eso les proporciona para expandir el negocio lo más posible: ¿quién no ha vivido la experiencia de las tasadoras de los bancos aumentando el precio de las viviendas o el suelo que se iba a hipotecar o la de recibir préstamos por más del valor de la vivienda que se hipotecaba?

- Los títulos de la deuda no se quedan quietos, guardados en un cajón cuando se emiten, sino que, gracias a las nuevas tecnologías, se pueden volver a comprar y a vender miles de veces por segundo en los mercados financieros creando nuevos títulos (productos derivados se llaman) que a su vez se compran mediante operaciones de crédito que aumentan sin cesar el volumen total de la deuda.

- Finalmente, resulta que la deuda se alimenta a sí misma. Un préstamo al 7% por ciento de interés se duplica en diez años, y eso quiere decir que quienes se endeudan pasan toda la mayor parte del tiempo pagando intereses. Hoy día los gobiernos, y muchas familias y empresas, tienen que emitir deuda constantemente para pagar los intereses de la deuda anterior.

El crecimiento de la deuda en todo el mundo es espectacular y no hace falta ser un premio nobel de economía para darse cuenta de que lo hace alimentándose a sí misma, puesto que crece muchos más que la producción. De 1997 a 2007 el PIB mundial creció un 28,1% y la deuda un 131%, 4,6 veces más. Y de 2007 a la actualidad el PIB mundial ha aumentado un 14,4% y la deuda un 44%, el triple.

La deuda crece tanto que se ha llegado a producir una paradoja: no hay dinero en el mundo para pagarla puesto que es dos veces y media más voluminosa (unos 257 billones de dólares) que toda la cantidad de dinero que hay en la economía mundial (algo menos de 100 billones).

Las políticas de austeridad que se imponen a los gobiernos con la excusa de que así podrán pagar la deuda son una farsa. Nunca podrá llegar a pagarse por completo por muchos recortes que hagan. Lo único que se

consigue con ellos es que la deuda siga aumentando, que es justamente lo que buscan quienes se hacen cada día más ricos con ella, los bancos.

Y ya he señalado que la mayor parte, por no decir que todo ese crecimiento vertiginoso corresponde a intereses: más de 300.000 millones de euros están pagando cada año la totalidad de los países europeos por ese concepto y Estados Unidos pagó 574.000 millones de dólares en 2019.

Hace unos años, cuando terminé de dar una charla sobre estos temas y defendí que era necesario cortar de raíz el incremento absurdo de la deuda mundial a base de pagar intereses a los bancos privados, uno de los asistentes intervino y me dijo: "profesor, es usted un iluso si propone que se dejen de pagar las deudas en el capitalismo. Hasta los católicos han dejado de decir en el Padrenuestro 'perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores' y ahora dicen que lo que hay que perdonar son las ofensas". Lo comprobé y así era, pero cuando investigué vi con alegría que la Iglesia Católica no parecía ser del todo un enemigo de mi propuesta. El Papa Juan Pablo II había propuesto que se celebrara un Jubileo Universal en el año 2000 que acabara con la deuda externa de los países más pobres. Y en febrero de 2016 el Papa Francisco precisamente recordaba a los peregrinos el sentido del jubileo de los israelitas, el del diezmo que prescribía que "la décima parte de la cosecha, o de lo proveniente de otras actividades, fuese dada a quienes estaban sin protección y en estado de necesidad", o la "ley de las primicias" que obligaba a dar "la primera parte de la cosecha, la parte más preciosa" a quienes no poseían nada.

El Papa Francisco dijo en aquella intervención de hace justo cuatro años: "¡Cuántas familias están en la calle, víctimas de la usura! Por favor, recemos porque, en este Jubileo, el Señor elimine del corazón de todos nosotros este deseo de tener más, la usura. Que se vuelva a ser generosos, grandes. ¡Cuántas situaciones de usura estamos obligados a ver y cuánto sufrimiento y angustia llevan a las familias! Y muchas veces, en su desesperación, muchos hombres terminan en el suicidio porque no lo soportan y no tienen esperanza, no tienen la mano extendida que les ayude; sólo la mano que viene a hacerles pagar los intereses. Es un grave pecado la usura, es un pecado que grita en la presencia de Dios".

Yo creo que sus palabras no tienen sólo un sentido religioso sino elementalmente ético. Sea cual sea nuestra creencia, tengamos o no fe en cualquier dios, lo cierto es que estamos siendo esclavos de la deuda y de sus intereses. No hay derecho a que cuando la gente está muriendo por falta de recursos, como ahora, cuando la economía se bloquea y se paralizan las fuentes de creación de ingresos, la única solución que encuentren nuestras autoridades, y muy en particular los dirigentes de la Unión Europea, sea crear más deuda con interés para que se enriquezcan los bancos

y para que el día de mañana seamos todavía más esclavos que ahora. Es imprescindible establecer un jubileo universal de la deuda. Otro día explicaré cómo se podría hacer para que sus consecuencias no sean peor que el problema que se trata de resolver. Si no lo hacemos por convicción moral, guiados por una ética elemental de la vida y del amor a los demás, al menos, autoridades de todo el planeta, banqueros de todo el mundo, háganlo por puro egoísmo, porque en la red de la deuda también perecerán ustedes, sus hijos o sus nietos.

Francis Bacon decía que el disimulo es una sabiduría abreviada y cuentan que al rey Luis XI de Francia le gustaba decir que quien no sabe disimular, no sabe reinar.

Me vienen a la mente estas frases tras el nuevo fracaso de la reunión del Eurogrupo. Los líderes europeos ni siquiera disimulan sus desavenencias para mostrar solidaridad ante el infortunio y la muerte de los miles de ciudadanos a quienes gobiernan. Cuando escribo a primeras horas de la mañana estas líneas ni siquiera se sabe si ha terminado su reunión, pues anunciaron que seguirían discutiendo por la noche. Me temo que no hace falta esperar para saber que ha sido un fracaso.

Está mal que los diferentes países de la Unión Europea hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre las medidas concretas que podrían adoptarse para hacer frente a la pandemia. Reconociendo las dificultades innegables que plantea una situación como la que estamos viviendo, podría admitirse que eso ocurriera y que se tardara en encontrar la mejor fórmula para proporcionar a países tan dispares una solución adecuada para cada uno de ellos.

Sería lógico que, para llegar a un acuerdo satisfactorio para tantos países concernidos, hubiera que recorrer un camino tortuoso y creo que cualquier persona sensata entendería las dilaciones. Lo peor, sin embargo, lo verdaderamente lamentable no es la lentitud, ni la disensión técnica, aunque esto muestre que la Unión Europea es un armatoste que resulta ineficaz cuando la sociedad tiene problemas que reclaman medidas urgentes para evitar, como en este caso, la muerte de miles de personas. Lo que está hundiendo a la Unión Europea es que ni siquiera sepa disimular que sus dirigentes son incapaces de actuar fraternalmente, expresar de vez en cuando palabras de solidaridad y de ayuda y tener, al menos, la sabiduría abreviada de la que hablaba Bacon. Todo lo contrario, están dándole la razón a Luis XI: los líderes europeos no saben reinar.

En su fabulosa novela Trafalgar, Pérez Galdós se refiere a la actuación del pueblo de Cádiz tras el desastre diciendo que "jamás vecindario alguno ha tomado con tanto empeño el auxilio de los heridos, no distinguiendo entre nacionales y enemigos, antes bien equiparando a todos bajo el amplio pabellón de la caridad (...) Quizás la magnitud del desastre apagó todos los resentimientos" y enseguida se hace una pregunta retórica: "¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos?".

A los dirigentes de la Unión Europea les está pasando lo contrario. Ni en medio de un desastre son capaces de dejar a un lado los resentimientos para hacer políticas auténtica y eficazmente humanitarias, ni la desgracia les está ayudando a actuar como hermanos. Ni ante la muerte son capaces de ser grandes y generosos.

Al paso que vamos, la catástrofe que vamos a padecer los europeos no va a ser la que directamente provoque el coronavirus sino la irresponsable actuación de nuestros líderes.

En la reunión de ayer se discutía la forma de movilizar 500.000 millones de euros. Una cifra de por sí ya insuficiente si se tiene en cuenta que ya hay estimaciones del daño que se va a producir que indican que sólo un país como España podría tener una pérdida de actividad en un primer año equivalente a la mitad de ese medio billón de euros.

Según han informado los medios, en la mesa de la reunión estaba distribuir esa cantidad en tres medidas: 200.000 millones para que el Banco Europeo de Inversiones proporcione garantías paneuropeas a los bancos; otros 200.000 millones para que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) conceda préstamos de rescate (dando por hecho que va a haber que rescatarlos), sobre todo, a España e Italia; y 100.000 millones para ayudas al desempleo (dando, pues, por sentado, que no se va a evitar sino que va a multiplicarse).

Como en ocasiones anteriores, Alemania y Holanda se atrincheran para obligar a que la intervención y las ayudas no sean, en ningún caso, mancomunadas; para que los préstamos del MEDE vayan unidos a condiciones que obligarían realizar nuevos recortes; y para evitar por todos los medios que las ayudas al empleo se consoliden, convertidas más adelante en un seguro de desempleo europeo.

Esas tres medidas, para colmo, ni siquiera concitan el acuerdo de los países más afectados, Italia y España. Los italianos se niegan, con razón y por dignidad, a ser rescatados por el MEDE. España afirma que no necesita todavía esa posible ayuda (lo cual, por cierto, sorprende porque hay miles de empresas y autónomos que todavía no han recibido ayuda alguna) pero estaría dispuesta a ceder, recibiendo el préstamo del MEDE, si no conlleva una condicionalidad muy dura y a cambio de que se ponga en marcha un Plan Marshall que facilite la reconstrucción. Una apuesta arriesgada esta última porque equivale a dar por hecho que la destrucción se va a producir, en lugar de luchar por evitarla.

El error de todos estos dirigentes es histórico y fatal porque, a diferencia de lo que ha solido ocurrir en otras crisis anteriores, ahora hay una coincidencia bastante grande entre economistas de muy diferente signo o matiz ideológico.

Incluso alguien tan poco sospechoso de extremismo, el anterior presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, ha defendido prácticamente el mismo camino de actuación que llevamos reclamando muchos economistas de todas las tendencias en las últimas semanas.

En un artículo publicado en el Financial Times el pasado 25 de marzo (aquí), dice que el coronavirus es "una tragedia humana de proporciones potencialmente bíblicas", "una recesión profunda es inevitable" y que el desafío al que hay que enfrentarse es el de actuar "con suficiente fuerza y velocidad para evitar que la recesión se transforme en una depresión prolongada... que deje un daño irreversible" (aquí: <https://on.ft.com/3bRbE9o>) . Y con rotundidad afirma que la respuesta va a implicar un aumento significativo de la deuda pública porque "la pérdida de ingresos sufrida por el sector privado... debe ser absorbida, total o parcialmente, por el presupuesto del gobierno".

Draghi afirma que "debemos proteger a las personas de perder sus empleos en primer lugar" pero también es esencial, sigue diciendo, "que todas las empresas cubran sus gastos operativos durante la crisis, ya sean grandes corporaciones o incluso más pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos".

Para que eso sea posible, Draghi dice que "los bancos deben prestar rápidamente fondos a coste cero a las compañías que pueden salvar el empleo" y reclama que se movilice todo el sector financiero europeo con la ayuda de capital si hace falta de los gobiernos.

Si se actúa así, sigue diciendo, "los niveles de deuda pública habrán aumentado. Pero la alternativa, una destrucción permanente de la capacidad productiva y, por lo tanto, de la base fiscal, sería mucho más perjudicial para la economía".

Lo que dice Draghi es lo que vengo diciendo en las últimas semanas y me alegra que alguien con tanta información y crédito lo corrobore, aunque no comparto con él el dejar a un lado al Banco Central Europeo a la hora de dar soluciones (ni tan siquiera lo cita en su artículo). A mi juicio, es la pieza fundamental para evitar que ese incremento de deuda que él ve imprescindible se convierta en una losa fatal pasado mañana. Dejarlo de lado es un error descomunal y tengo la completa seguridad de que, antes o después, tendrán que rectificarse para obligarle a actuar con toda su potencia.

Coincido, en fin, con un vaticinio último de Draghi que yo desearía que fuese un simple error de predicción: "el coste de la vacilación puede ser irreversible".

La situación europea es muy preocupante no sólo porque sus ministros de economía y finanzas y sus jefes de gobierno vacilan, sino porque ni siquiera logran disimular ante los europeos de todas las nacionalidades

y grupos sociales para mostrar que, al menos ante la desgracia, son capaces de darse la mano y de hablar sin reproches para transmitir mensajes de esperanza, de cooperación y solidaridad. Con su desunión condenan a sus pueblos y prenden fuego a la Unión Europeo. Será un milagro que los pueblos no le devuelvan la factura pero, al final, seguro que no la pagan los burócratas que gobiernan las instituciones europeas sino, otra vez, la población más débil y necesitada. Están convirtiendo a Europa en una verdadera desgracia.

Empiezan a publicarse las primeras estimaciones de la actividad económica durante el primer trimestre de este año y los datos que muestran son desastrosos, tal y como habíamos advertido.

Francia, que el 15 de marzo todavía estaba celebrando elecciones municipales con millones de personas en las calles, se estima una caída del 6% en el Producto Interior Bruto en los tres primeros meses del año; la más grande desde el final de la segunda guerra mundial y un poco mayor que la que se produjo en el segundo trimestre de 1968 (5,3%) cuando las revueltas mantuvieron cerrado prácticamente a todo el país. En Alemania se prevé una caída del 2% en este periodo, pero del 10% en el segundo trimestre, durante el cual se estima que la economía de Estados Unidos podría caer un 30%.

Un indicador que suele ser bastante fino para prever lo que se acerca en la actividad económica es el llamado PMI (Purchasing Managers' Index) que refleja las estimaciones de compras que tienen los gestores de las empresas. Su evolución en las últimas semanas no deja lugar a dudas. El de servicios ha bajado unos 10 puntos en Estados Unidos, 20 en Alemania y alrededor de 30 en España, Francia o Italia. El de compra de manufacturas ha caído bastante menos, de momento, no sólo porque le haya afectado menos la paralización del consumo social que provoca el confinamiento debido a que su evolución suele ir con algo de retraso.

El derrumbe de la actividad desde que se decretó la paralización de una buena parte de la actividad económica en la mayoría de los países era inevitable y se va a registrar en todos ellos, con menor medida durante el primer trimestre y en mucha más en el segundo si no se vuelve a la actividad en los próximos días, algo prácticamente imposible que suceda a tenor de cómo va evolucionando la propagación de la pandemia.

La caída tan extraordinaria de la actividad es lógica, era previsible y la habíamos advertido prácticamente todos los economistas desde el primer momento. También se dieron cuenta de ello muchos gobiernos y algunos actuaron con extraordinaria rapidez para evitar que el desplome fuera peor de lo que necesariamente iba a ser. En sólo cinco días desde que se aprobó la ayuda, el gobierno de Berlín, por poner un ejemplo, había repartido 1.400 millones de euros entre 150.000 trabajadores autónomos y microempresarios que habían comenzado a perder sus ingresos. Pero ni siquiera así se va a poder evitar que los registros de la actividad

se desplomen porque una proporción muy grande de las empresas y de la actividad profesional, como bien sabemos, está paralizada.

La pregunta que cabe hacerse ahora es si este derrumbe se va a producir sólo durante estos dos trimestres de 2020 o si la situación va a seguir deteriorándose. Y ahí es preciso recordar algo que la mayoría de los analistas y los gobiernos no están teniendo en cuenta.

Todos sabemos que la propagación del coronavirus y las medidas que se han debido de tomar han frenado el consumo, las compras y ventas, la inversión de las empresas y el comercio internacional mas se está olvidando que eso no es lo único que está sucediendo en la economía mundial.

Lo que van a decirle a la gente cuando a final de este mes empiecen a salir los datos oficiales que reflejarán el derrumbe de las economías es que -aunque muy preocupante- es únicamente la consecuencia de la propagación del virus y que, por tanto, enseguida que se vuelva a la normalidad, cuando acabe el confinamiento, la economía se recuperará de nuevo.

Yo creo que se van a equivocar porque esa normalidad no es la solución para lo que nos pasa sino que, en buena parte, es precisamente nuestro mayor problema y lo que ha ocasionado que los efectos del coronavirus hayan sido tan grandes.

Como vengo diciendo desde que estalló la crisis del coronavirus, éste no es el problema más grave que tiene la economía mundial. Lo verdaderamente preocupante es el contexto en el que se ha producido la propagación del virus y las medidas de aislamiento para combatirla. Si ese contexto fuera sano, si no sufriera de los problemas que voy a mencionar enseguida, el efecto de la pandemia sería grave pero en unos cuantos meses saldríamos de nuevo adelante. Lo malo, como digo, es que estamos metidos de lleno en una suma de problemas o fallos estructurales que si estallan al mismo tiempo nos pueden llevar al colapso del sistema y de la civilización en la que vivimos.

Los resumo de la manera más clara posible para que todo el mundo lo pueda entender.

- La economía mundial estaba ya ralentizándose cuanto surgió la epidemia. La de Francia (0,3% de crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2019 y 0,1% en el cuarto) y la de Alemania (0,4% en el cuarto y 0,6% en todo el año) estaban prácticamente paralizadas desde el verano del año pasado. Además, casi todos los indicadores daban por seguro (mucho antes de que estallara la pandemia) que Estados Unidos entraría en recesión este año.

- La epidemia ha provocado y va a provocar en mayor medida a partir de ahora una fractura en las cadenas de suministro mundiales pero antes de que estallara se había empezado a producir una caída generalizada en la producción industrial. Una caída, como ya he explicado en otras ocasiones, que era consecuencia de la pérdida de rentabilidad de las empresas que actúan en el sector real de las economías.

- La situación empresarial prácticamente en todo el mundo era ya muy preocupante y crítica desde hace meses. En octubre del año pasado, el Informe de Estabilidad Financiera Global del Fondo Monetario Internacional advertía de la "elevada vulnerabilidad" de las empresas y del sector financiero en las grandes economías del planeta. Y dos economistas de ese organismo, Tobias Adrian y Fabio Natalucci, escribían ese mismo mes (cuando ni siquiera podía imaginarse que vendría la pandemia) que contemplaban una desaceleración "cuya gravedad sería la mitad de la crisis financiera mundial de 2007-08". En concreto, señalaban como un detonante principal del peligro la proliferación de la deuda empresarial. Decían en su trabajo que el 40% de toda ella corresponde a las empresas zombis, llamadas así porque son como muertos vivientes pues al vivir sin márgenes suficientes y tener que adquirir continuamente más deuda para pagar sus deudas anteriores. Según sus cálculos, hay 19 billones de dólares de deuda acumulada en empresas de este tipo, una deuda que podría dejar de pagarse si las circunstancias empeorasen, provocando un problema financiero mundial de grandes consecuencias (aquí: <https://bit.ly/2Zs8hDb>). Y eso lo decían antes de que estallara la pandemia. En España, según la estimación más optimista del Banco de España, habría más de 250.000 en esta situación a finales de 2018.

- Los mercados financieros son una bomba de relojería. O mejor, un mosaico de bombas en forma de diferentes burbujas y factores de vulnerabilidad y riesgo que pueden estallar en cualquier momento. Con los tipos de interés tan bajos, los grandes fondos de inversión han recurrido cada día más a acumular títulos cada vez más arriesgados que incrementan la inestabilidad y el peligro de las bolsas. Por mucho que intervengan los bancos centrales con cientos de miles de millones de dólares para comprar los títulos y salvar a sus propietarios, su derrumbe será inevitable si no se frena la vorágine especulativa que las mueve.

- En esa situación anterior, el sector bancario se encontraba en situación de gran debilidad y peligro. Tanto así que los dos economistas que he citado antes decían en su trabajo que era necesario el "endurecimiento de la supervisión macroprudencial y supervisión, en particular con pruebas de estrés específicas para bancos" para evitar el "el resultado más peligroso". En lugar de eso, lo que acaba de hacer el Banco Central Europeo ha sido relajar esa supervisión y las garantías exigibles a la banca

para que pueda seguir haciendo negocio, ahora financiando los gastos que los gobiernos y las empresas tendrán que hacer frente a la pandemia.

- Los llamados países emergentes, en donde todavía no se ha extendido tan gravemente el virus, también se vienen encontrando en una situación de enorme vulnerabilidad debido, sobre todo, a la deuda externa que ha aumentado un 60% en los últimos diez años. Si la pandemia les ataca de lleno, no sólo van a sufrir gravísimos daños internos, sino que van a transmitir problemas de solvencia y de suministro muy grandes al resto de las economías.

- En los últimos años se han venido infrafinanciando los servicios públicos para ir justificando así su progresiva privatización y, en general, se ha ido debilitando el poder de intervención de los gobiernos para corregir y ajustar los fallos del mercado, de modo que hay cada vez menos "colchón" para hacer frente a los shocks externos y menos capacidad de actuación para dar respuestas a los problemas que producen mercados cada día más imperfectos e inestables.

- Añadan a todo ello otros dos factores finales, aunque no menos importantes. Por un lado, la desigualdad creciente que debilita los mercados internos (cuanta mayor concentración haya de la renta, más dinero va a la especulación financiera y menos al consumo productivo que es el que se convierte en ingreso de las empresas que generan producción real y empleo). Y, por otro, la crisis ambiental que no sólo destruye algo que no es nuestro y tan importante como la naturaleza, sino que genera enormes costes económicos, "invisibles" pero reales. A ver qué gobierno va a dedicar a partir de ahora dinero a combatirla cuando su deuda se haya disparado y los organismos internacionales le impongan recortes a diestro y siniestro.

La situación es preocupante. Los líderes del mundo no están siendo capaces de actuar unidos frente a un peligro que amenaza a todos los países por igual. No consiguen (especialmente en Europa) coordinar medidas urgentes y completamente efectivas para frenar los problemas más inmediatos que la propagación de virus plantea a las personas y a las empresas. Se empeñan en darle prioridad a preservar el valor de la riqueza financiera, lo que ya impidió que la crisis de 2008 impulsara el necesario cambio de rumbo que necesitaba la economía mundial. Están ciegos ante los fallos estructurales que acabo de señalar. Y, lo que es peor, a la inmensa mayoría de quienes toman las decisiones no parece que les importe seguir dejando en la cuneta a millones de hogares, de trabajadores autónomos y de pequeñas empresas. Y no es por falta de alternativas, que se tienen y sabemos cuáles son, sino porque están plegados al interés y al poder de una minoría tan avariciosa como insensata, dispuesta a inmolarse al mundo con tal de seguir siendo dueña de todo.

NOS OBLIGAN A PREGUNTARNOS SI SEGUIR EN ESTA UNIÓN EUROPEA VALE LA PENA

Publicado en Público.es
el 10 de abril de 2020

Después de darse una prórroga de 48 horas, el Eurogrupo ha aprobado las tres medidas que estaban sobre su mesa el martes pasado, ahora con algunos matices que no sirven para ocultar que el acuerdo es tardío, insuficiente e inadecuado.

Lo acordado por los ministros de Economía y Finanzas en esta última reunión es lo siguiente:

- Utilizar un fondo de garantías del Banco Europeo de Inversiones por valor de 200.000 millones de euros para facilitar que se les concedan créditos puente (provisionales) y otros tipos de ayudas crediticias a las empresas.

- Dedicar hasta 240.000 millones de euros a préstamos concedidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con el único requisito de que se dediquen a "apoyar la financiación nacional de los costos relacionados con la atención médica, la cura y la prevención directa e indirecta debidas a la crisis de la COVID-19" y por una cuantía máxima del 2% del PIB del país solicitante. Una vez que termine esta crisis, los préstamos que se soliciten estarán sujetos a las estrictas condiciones habituales de ajuste y estabilidad presupuestaria.

- Conceder hasta 100.000 millones de euros, aprovechando el presupuesto de la UE en la mayor medida posible, en préstamos de asistencia financiera de carácter temporal para "proteger el empleo en las circunstancias específicas de emergencia de la crisis COVID-19".

Me cuesta trabajo ser cansino y tener que repetir otra vez lo mismo que vengo diciendo sobre las decisiones de los líderes europeos. Pero sí le dedico tiempo de un Viernes Santo a criticarlos es porque tengo la convicción de que se están equivocando. Parece que no se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando y de que están poniendo en peligro el futuro de Europa cuando están dispuestos a que Italia y España entren irremediabilmente en una gravísima crisis de deuda en los próximos meses. El acuerdo de ayer me parece, como he dicho, tardío, insuficiente e inadecuado por las siguientes razones.

- Además de llegar con varias semanas de retraso debido a las diferencias entre los gobiernos, va a proporcionar demasiado tarde las ayudas porque no se establecen de forma directa a quienes las están necesitando en este momento (los gobiernos, las empresas y los hogares). Se concederán a través del Banco Europeo de Inversiones, al que deberán recurrir

los gobiernos, y del MEDE, quien al menos necesitará dos semanas para tener disponibles los fondos que luego deberán llegar a los gobiernos. Y las ayudas al empleo ni siquiera se sabe cómo van a disponerse.

Se puede justificar en mayor o menor medida este retraso pero lo cierto es que se trata de una falta de diligencia como la que se produjo en la anterior crisis que termina afectando muy negativamente a la recuperación de las economías. Mucho más teniendo en cuenta la máxima gravedad de la situación económica en la que estamos

- Las tres medidas implican proporcionar crédito y, por tanto, aumentar la deuda en lugar de aliviar la que necesariamente se está generando cuando los gobiernos hacen frente a un desastre natural como es la pandemia de la Covid-19.

Lo que las economías afectadas por la paralización de la actividad necesitan es ayuda directa, líquida, y no préstamos. Unos préstamos, además, que no sólo llegan con retraso y si se es capaz de superar una dificultad tras otra en las oficinas bancarias, sino que, a la postre, van a suponer una sobrecarga más a empresas que ya están en bastantes dificultades y en peligro de cerrar.

- El acuerdo sobre los préstamos del MEDE supone violar la letra del Tratado que lo creó, el cual establece claramente que esos préstamos se dan, no con carácter preventivo y sin condiciones como dicen que se van a dar ahora, sino cuando los países solicitantes se encuentran en graves condiciones macroeconómicas y a cambio de compromisos de ajuste muy rígidos.

Una vez más, como cuando los resultados de los referéndums no convienen o cuando el Banco Central Europeo usa la puerta de atrás para financiar a los gobiernos, los dirigentes de la Unión Europea se saltan a la torera, según les convenga o no, las normas comunitarias. Pero -qué casualidad- dicen que no se las pueden saltar -ni siquiera en situación de emergencia sanitaria- cuando se trata de limitar el privilegio bancario, como señalaré más abajo.

- El acuerdo moviliza una cantidad de fondos claramente insuficiente; básicamente, porque la ayuda que podría ir más directamente dirigida a los gobiernos (la del MEDE) se contempla para hacer frente tan sólo a los costes sanitarios, cuando es evidente que la Covid 19 produce otros, quizá mucho mayores, si se quiere evitar que cierren miles de empresas, se multiplique el desempleo y millones de personas se queden sin ingresos.

Al dejar fuera los costes de salvación de las economías y limitarse a los sanitarios, se va a dar lugar a que algunos países, en estos momentos sobre todo Italia y España, se sitúen en una posición de gran riesgo macroeconómico en los próximos meses y, entonces, lo que recibirán no

serán ayudas generosas sino un rescate muy oneroso, sobre todo, para la población de menor renta. Incluso al margen de esta consideración, el volumen de ayuda es claramente limitado si se compara no ya con las que están movilizando otras potencias como Estados Unidos o el Reino Unido sino incluso algunos países miembros de la UE, como Alemania.

- Estas medidas requerirán, en mayor o menor medida según los casos o los países, la intermediación de la banca. Sin embargo, los hechos están demostrando que el sector no está siendo capaz de actuar con agilidad, de adelantarse a las demandas y de satisfacerlas como sería necesario. A pesar de que es urgentísimo que las empresas reciban las ayudas y el apoyo financiero y a pesar de que los incentivos que los bancos europeos están recibiendo del Banco Central Europeo y de los gobiernos, el 3 de abril mantenían inmovilizados 250.850 millones de euros que podrían estar sirviendo para ayudar a miles de empresas. Y cualquiera que conozca la realidad de las oficinas bancarias sabe los problemas de todo tipo con los que se están enfrentado muchas empresas y trabajadores autónomos cuando solicitan los préstamos.

- Esto último que acabo de señalar es una prueba más de que el canal utilizado por la Unión Europea para proporcionar la ayuda común y los recursos imprescindibles que necesitan sus estados miembros para salvar sus economías no es el adecuado.

En cuanto comenzó a extenderse la epidemia y a manifestarse su magnitud, los dirigentes de la Unión y del Banco Central Europeo coincidieron en que era imprescindible una gran intervención fiscal de los gobiernos para hacer frente al gasto sanitario inmediato y al que era necesario realizar si se quería evitar el cierre de miles de empresas o ir a una larga depresión económica si no se las protegía. Y llevaban razón.

Sin embargo, ha bastado muy poco tiempo para comprobar que esa intervención tendría que ser mucho más cuantiosa de lo que inicialmente se pudiera haber previsto y que los gobiernos van a tener que endeudarse en una gran cuantía para poder financiarla. Y ahí es donde se está produciendo el gran error de la Unión Europea. Las medidas que está adoptando o aumentan la deuda de las empresas o la de los gobiernos o la de ambos; en cualquiera de los casos, en beneficio de la banca privada. No ayudan sin aliviarla, como habría que hacer y como se podría hacer, si se quisiera.

Algunos gobiernos europeos se han opuesto a adoptar medidas mancomunadas para hacer frente a la situación porque no desean asumir la deuda que generen los demás y eso es comprensible, pero es que no se trata de eso. Se trata de gestionar mancomunadamente toda la deuda que es inevitable que se produzca por los efectos de la pandemia, asumiendo cada uno su cuota parte, mas tratando de reducir sus costes globales; no

ya por el ahorro que eso suponga sino porque una crisis de deuda en Italia o España (y mucho más si es de los dos al mismo tiempo) no sería como la de Grecia sino algo mucho más peligroso para la estabilidad de todos los países miembros y para la Unión Europea en su conjunto.

Esta estrategia inteligente, consistente en asumir cada país su responsabilidad pero gestionando la deuda de todos los países miembros conjuntamente, puede llevarse a cabo a través de dos posibles vías. Una más cara y lenta y otra mucho más barata y efectiva.

La primera consistiría en emitir cualquier tipo de bonos mancomunados que, como he dicho y en contra de lo que se puede creer, no tienen por qué suponer una misma carga ni responsabilidad para todos los países.

La segunda (que incluso podría ser complementaria de la anterior) sería que el Banco Central Europeo financie directamente la deuda, es decir que proporcione el dinero que necesitan los gobiernos, naturalmente bajo el control y el seguimiento necesarios para evitar cualquier efecto colateral adverso.

Es cierto que esto último podría producir alguna subida de precios, pero también se va a provocar inflación y quizá en mayor medida si se cierran miles de empresas y se rompen las cadenas de suministro por no actuar rápidamente y con suficientes recursos. Y, en todo caso, el coste de esa posible inflación sería mucho menor que el que llevará consigo la mala y retardada actuación que hasta ahora están llevando a cabo las autoridades europeas.

La conveniencia de que los bancos centrales, en nuestro caso el BCE, intervengan directamente para proporcionar ayuda directa a los gobiernos (o incluso a las empresas y familias) la defienden cada vez más economistas de todas las tendencias. Ayer se anunció que el Banco de Inglaterra va a financiar directamente al gobierno. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, François Villeroy de Galhau, ha reconocido que se puede contemplar la posibilidad de que este último financie directamente a las empresas. Y muchos otros economistas bastante ortodoxos, como Nouriel Rubini o Gregory Mankiw por citar sólo a dos, están defendiendo que se haga igual con las personas. De hacer esto (financiar directamente a empresas y hogares) el Banco Central Europeo no sólo estaría salvando a miles o millones de ellos y evitando la depresión que vendrá después con toda seguridad si eso no se hace, sino que estaría sorteando la prohibición de financiar directamente a los gobiernos, que se fijó en el Tratado de Maastricht para que la banca privada llevara a cabo el que quizá esté siendo el negocio más rentable de la historia.

La Unión Europea no puede correr el riesgo de equivocarse gestionando una crisis sanitaria de la envergadura que tiene la que ha provocado el coronavirus. Se está equivocando y está dando lugar a que cada día más europeos nos preguntemos si realmente vale la pena seguir en una Europa tan torpe y con unas prioridades políticas y económicas tan inmorales. Luego nos dirán que somos populistas.

Italia ha sido el primer país en sufrir la propagación de coronavirus y, por tanto, en padecer también las dramáticas consecuencias económicas que lleva consigo. Y como la situación de sus finanzas nacionales y de su economía en general era ya problemática antes de la epidemia, es lógico que ahora se encuentre en condiciones especialmente difíciles que son objeto de todo tipo de críticas e interpretaciones.

Cuando en la Unión Europea se ha planteado la necesidad de tomar medidas, algunos países, encabezados por Alemania y Holanda, se niegan a adoptar soluciones mancomunadas -como ya es bien sabido- porque consideran que Italia, como España y otros países del sur, tiene una larga historia de incumplimientos y despilfarro financiero.

No voy a poner en duda aquí que la historia económica reciente de Italia está plagada de hechos y decisiones que hacen muy difícil lograr equilibrio económico y financiero, avance productivo y tecnológico y bienestar social. Su inestabilidad política, la corrupción, la Mafia, la desigualdad territorial y personal, entre otros factores que ya son casi consustanciales a su estructura social son, como digo, obstáculos casi insalvables para progresar económicamente.

Todo ello lo sabe casi todo el mundo y se airea constantemente para justificar el innegable estancamiento de la economía italiana durante las últimas décadas. Lo que no se suele decir es que todas esas circunstancias, por muy importantes que sean, no son las que de verdad lo explican. Como tampoco es verdad que el despilfarro y el incumplimiento de las reglas europeas de estabilidad y austeridad hayan sido las causas del deterioro de su economía. Se olvida decir justamente lo contrario: Italia ha sido el país que las ha cumplido más estrictamente y es precisamente eso lo que ha ocasionado que su economía haya ido tan mal en las últimas décadas.

Estoy seguro de que la lectura de esta última frase puede haber sorprendido a muchos lectores pero los datos no dejan lugar a dudas. Así lo puso de manifiesto Servaas Storm, un economista casualmente holandés, en un documento de trabajo del Institute for New Economic Thinking (INET) de Nueva York publicado en abril del año pasado (aquí: <https://bit.ly/2LLyC7p>).

Para no cansar aquí con muchos datos basten dos para comprobar el declive de la economía italiana desde 1991, un año antes de que se

aprobara el Tratado de Maastricht y cuando comenzaron las políticas de ajuste para tratar de cumplir las reglas fiscales establecidas allí.

En aquel año, 1991, el ingreso neto promedio de un hogar italiano (en euros de 2010) era de 27.499 euros y en 2016 había caído a 23.277 euros, una pérdida de renta y poder adquisitivo que habían sufrido todos los grupos sociales, aunque desigualmente: un 6% los más ricos y un 25% los más pobres.

En el primer año, 1991, el PIB italiano era el 94% del PIB promedio del grupo de países con mejor rendimiento del euro (Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos). Ahora, es del 74%.

Los problemas de la economía italiana comenzaron cuando en aquel ya lejano año de 1991 las reglas de austeridad fiscal establecidas en Maastricht obligaron a tomar medidas para combatir su elevado porcentaje de deuda pública (alrededor del 117% del PIB en 1994) y para mantener controlada la inflación.

Muy pronto, los sucesivos gobiernos italianos se pusieron manos a la obra y aplicaron sin descanso las directrices de Maastricht: se recortó el gasto público (la presión fiscal sobre el PIB prácticamente se ha mantenido constante en todo este periodo) y se llevaron a cabo sucesivas reformas laborales que lograron reducir salarios con el fin de evitar la presión de costes de las empresas, pues la doctrina dominante considera que la producida por los salarios es la que provoca la inflación.

Gracias a los recortes de gasto, Italia consiguió registrar un superávit primario (es decir, sin contar el pago de los intereses) promedio del 3% durante el periodo que va de 1995 a 2008, cuando Francia tuvo un déficit promedio del 0,1% y Alemania un superávit de sólo el 0,7%. Eso significó que, sin contar los intereses, Italia redujo en cuarenta puntos el porcentaje de su deuda pública sobre el PIB, ocho veces más que Alemania.

Sin embargo, ese esfuerzo tan grande en el recorte de gasto no fue suficiente: al tener en cuenta el pago de los intereses, la deuda no sólo no bajó sino que subió 23 puntos.

Incluso en la etapa posterior a la crisis de 2008, Italia ha seguido recortando gastos más que ningún otro país de los más grandes de la eurozona. De 2008 a 2018 ha tenido un superávit primario promedio del 1,3% (incluso del 2% en 2012-2013) cuando el promedio de los cuatro países antes citados ha sido prácticamente del 0%.

¿Qué le ha ocurrido entonces a la economía italiana?, ¿de dónde procede su declive? ¿realmente le va mal porque su gobierno despilfarra recursos y por no cumplir con los preceptos europeos?

Ya hemos visto que no, porque mantiene superávits primarios, es decir, que gasta menos de lo que ingresa si se dejan a un lado los intereses.

Las causas del declive de la economía italiana son dos y ambas tienen que ver con las normas establecidas en la eurozona. La primera, como acabo de señalar, es que ha tenido que pagar unos intereses muy elevados desde que el Banco de Italia dejó de financiar al gobierno y tuvo que recurrir a los mercados. Y la segunda razón consiste en que la austeridad continuada, los recortes salariales y de gasto público han debilitado muchísimo su demanda interna y, al final, también la externa, su capacidad exportadora.

La explicación es bastante simple y lógica y en el trabajo que he citado de Storm vienen todos los datos que lo prueban.

Para entender lo que le ha pasado a la economía italiana hay que saber que las economías tienen dos motores: la demanda interna (el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto público) y la demanda externa (las exportaciones).

Al bajar la masa salarial, el consumo de los hogares lógicamente se reduce. Además, con salarios más bajos y con condiciones de negociación más favorables, las empresas intensifican el uso del trabajo (temporal y más precario) en perjuicio de la innovación y de la inversión que aumenta la capacidad productiva. Es normal y ocurre siempre: si un factor es más barato (en este caso, el trabajo), las empresas tienen más incentivo para utilizarlo y la inversión de las empresas en capital baja.

Al aplicar las reglas de estabilidad financiera, se reduce el gasto público, lo cual disminuye tanto el gasto en consumo como en inversiones en infraestructuras y en los servicios que son esenciales para favorecer que el estado actúe como motor del emprendimiento en la economía y de la creación de riqueza productiva.

Los datos en este sentido son abrumadores: precisamente porque Italia aplicó con más ahínco las reglas de austeridad de Maastricht, la demanda interna de su economía aumentó muy poco de 1992 a 2028, sólo un 7%, frente al incremento del 33% de la francesa y del 29% de la alemana.

Pero eso no fue todo. Con la menor productividad que generan los salarios más bajos, con menos inversión empresarial y con un gasto público tan recortado, las empresas exportadoras también se resienten. Los bajos salarios permiten que se mantengan las empresas menos productivas y la menor y más antigua capacidad productiva del capital asistente, la menor investigación básica y el insuficiente apoyo del sector público hacen que la capacidad exportadora termine igualmente perjudicada, y eso fue lo que pasó a Italia.

La política impuesta desde Europa no sólo reduce el gasto público sino que debilita a todos los motores de la economía y eso termina por frenar su crecimiento y produciendo el efecto paradójico de que, en lugar

de disminuir la deuda, lo que hacen es aumentarla. No puede ser de otro modo cuando se taponan las fuentes de alimentación de la actividad económica. El Ministerio de Finanzas italiano mostró que sólo de 2012 a 2015 la política de recorte de gasto provocó una caída del 5% en el PIB y del 10% en la inversión.

Las reglas de Maastricht y las políticas sucesivas de la Unión Europea son una insensatez: buscan el mayor crecimiento y, sin embargo, obligan a llevar el freno pisado constantemente. Ahora bien, nada de eso se hace gratuitamente: el aumento constante de la deuda incrementa sin cesar el negocio de la banca y la acumulación de déficits estructurales en los países del sur aumenta los excedentes en los del norte.

Y eso no ha pasado sólo en Italia o en otros países del sur. El crecimiento del PIB per cápita de los cuatro grandes referentes del euro (Alemania, Bélgica Francia y Países bajos) fue de un reducido 1,24% de promedio entre 1992 y 2018, muy por debajo del registrado en las grandes economías fuera del euro, como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido o Suecia.

Italia es un ejemplo muy claro del daño que han hecho las políticas europeas y también una advertencia. Al concluir su trabajo, Servaas Storm escribía que mantener estas políticas conllevaba un riesgo: "un colapso de la estabilidad política y social". Imagínense cómo será ese riesgo ahora, con la exigencia de mayor gasto que plantea la epidemia y con el absurdo empecinamiento de los líderes europeos que les impide cambiar la orientación de unas políticas cuyo fracaso está claramente demostrado, como en el caso de Italia.

Como dice Storm, la enfermedad de la economía italiana (y la de otras de la eurozona) se llama iatrogenia, la que produce el propio médico a su paciente. La seguiremos padeciendo mientras no se cambie por otro.

Todas las grandes conmociones sociales, las crisis, los desastres las guerras... las grandes epidemias, traen consigo cambios en el orden social y también en los seres humanos. Unas veces, son cambios positivos, trascendentes, que han llevado a etapas superiores de progreso humano. En otras ocasiones, ese tipo de impactos hace brotar de nuestro interior lo peor que tenemos los seres humanos, el odio, la maldad, la insolidaridad y la violencia.

Es muy pronto aún para saber qué cambios provocará, en nuestras sociedades y en nosotros mismos, la pandemia que estamos viviendo; entre otras razones, porque ni siquiera sabemos a estas alturas su magnitud ni sus efectos reales. Casi todas las personas con las que hablo y a las que leo coinciden en que va a ser inevitable que haya cambios a partir de ahora, aunque nadie sepa con antelación en qué sentido se puedan dar finalmente.

Yo me atrevo a pensar que uno de esos cambios ya ha comenzado a darse e incluso diría que está siendo obligado que comience a producirse. Me refiero al valor que le damos a las distintas cosas que tenemos a nuestro alrededor.

Según la Real Academia de la Lengua, para expresar que algo no es bastante grande, numeroso o importante, ni digno como para ser tenido en cuenta, o cuando queremos desestimar o tenerlo en poco, utilizamos términos como desprecio, despreciable o despreciado. Por el contrario, si lo que queremos es reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo, o mostrar que sentimos afecto o estima hacia alguna persona o cosa diremos que lo apreciamos; lo que, según dice la misma Academia, significa "poner precio o tasa a las cosas vendibles".

Sé que hay otras palabras para expresar que cualquier cosa o persona nos parece valiosa o digna de nuestra mayor consideración, estima o afecto, pero no es casualidad que el poner precio a algo se haya convertido en una forma tan corriente de manifestarlo en nuestras sociedades.

El precio, como muy correctamente dice la Academia, se pone a las cosas vendibles y apreciar o poner precio es algo tan habitual y deseado (si se me permitiera una enorme redundancia, diría que tan apreciado) porque en la sociedad capitalista en la que vivimos hemos convertido en algo vendible lo que para cualquier ser humano es lo más valioso: la vida humana y la naturaleza.

Hay mucha personas, entre ellas bastantes economistas, que están confundidas al respecto: creen que lo característico del capitalismo es la existencia de los mercados y por eso dicen que lo distintivo de nuestra época es que vivimos en una "economía de mercado".

No es así. Mercados, como casi todo el mundo sabe, ha habido desde hace miles de años y sabemos que algunas sociedades o civilizaciones han sido tanto o más dadas al intercambio y al comercio que la nuestra.

Lo que caracteriza al capitalismo no es que haya mercado, ni tampoco que haya muchos o pocos, o de una u otra forma. Su rasgo distintivo es que ha llevado a los mercados lo que nunca había sido objeto de compra y venta: el trabajo humano, los recursos naturales y el dinero.

Para bien o para mal, no voy a entrar ahora en esto, esos tres elementos se han convertido en mercancías, lo que significa que, si se quiere disponer de cualquiera de ellos, hay que adquirirlos en un mercado pagando un precio.

Como recalcó el gran historiador Karl Polanyi, el trabajo es una parte de la vida humana, los recursos naturales naturales son la vida en su sentido más palmario y el dinero es algo indispensable para la vida pues sin él no podemos garantizarnos el sustento en las economías de mercado en las que vivimos. Resulta, entonces, que es la vida misma, lo que se ha convertido en una mercancía en el capitalismo. Dentro del mercado está lo que nos parece más valioso y expresamos su mayor o menor valor con un precio más o menos elevado. El precio -de mercado- se convierte así en el criterio decisivo para expresar, como decía al principio, lo que nos parece meritorio, digno de tener en cuenta, deseable o incluso poderoso.

Pues bien, yo creo que la epidemia que estamos viviendo nos está enfrentando a la necesidad de cambiar el criterio que usamos para valorar todo lo que necesitamos para vivir.

Apenas habíamos valorado a las personas que nos salvan la vida en los hospitales, no nos importaba que tuvieran empleos precarios, jornadas extenuantes y sueldos muchas veces miserables. No nos importaba que se tuvieran que ir a trabajar a otros países porque aquí habíamos decidido darle más valor al salvamento de los bancos y hacíamos recortes en sanidad que nos impedían contratarlos. Ahora salimos a aplaudirles a las ocho de la tarde.

No le debimos dar mucho valor a la vida de nuestros padres o abuelos cuando permitimos que muchas de las residencias donde vivían fueran simples negocios, propiedad de grandes magnates o de los bancos sólo interesados en aumentar cada día más sus cuentas de resultados. Ahora, miles de personas les lloran sin ni siquiera haber podido ir a sus entierros.

De los maestros y maestras yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera echaba cuentas, como suele decirse. Nunca nos preguntábamos cuánto cobran, ni cuántas horas trabajan, ni qué les supone el esfuerzo heroico que hacen cada día para educar a nuestros hijos en sus aulas. Ahora suspiramos por ellos, cuando somos nosotros los que tenemos que luchar día a día para dar la clase a nuestros hijos en casa.

No valoramos nuestro campo, ni a los comerciantes más cercanos, pagábamos con más gusto lo lejano y nos creíamos que vivíamos en un mundo infinito en donde nada nunca se acababa, que de cualquier sitio vendría enseguida todo lo que necesitáramos. Ahora se paga una fortuna por una mascarilla, nadie encuentra guantes, no hay respiradores y veremos a ver si dentro de poco nos cuesta aprovisionarnos de lo más necesario para el día a día. Empezamos a darnos cuenta de que hubiera sido más seguro que muchas de esas cosas se hubieran producido cerca y por nosotros mismos; y respiramos tranquilos cuando recibimos un folleto que nos informa de que hay cooperativas, pequeños negocios y gente emprendedora que ahora nos suministra lo más básico que tanto necesitamos. No le dimos valor a los oficios, al trabajo de cuidados, a los transportes, a las fuerzas de seguridad, a lo más cercano y no nos preocupó su precariedad; ahora recurrimos a ellos para que nos presten auxilio.

Le dimos valor a las palabras de quienes nos decían que lo público es el problema y que es mucho mejor que cada uno se las arregle como pueda. Despreciamos lo común y los impuestos nos parecían un precio demasiado alto, hubo manifestaciones en las calles para eliminarlos, y nos nos pareció necesario financiar con ellos a nuestros servicios públicos. Ahora, a ese mismo Estado al que no quisimos dotar de recursos le pedimos, incluso sus más acérrimos enemigos, que se haga cargo de todo y que sean los servicios públicos quienes nos salven.

Nos sorprende ahora y nos maravilla el aire limpio, la atmósfera nítida y el agua de los ríos tan transparente. Antes -y al revés de tantas otras cosas que ahora, sin embargo, nos resultan insignificantes- no nos parecía que fuese necesario pagar por ello y permitíamos que saliera gratis ensuciarlos y destruir nuestro medio ambiente.

Al trabajo de limpiar nuestras casas, de cocinar, de cuidarnos dentro de ellas, a eso... bueno, a eso no le dimos valor ninguno, ni siquiera lo consideramos trabajo cuando lo hacían principalmente las mujeres. Y si se contrataba a alguien externo se le pagaba lo menos posible, cuando no se le explotaba con jornadas que no terminan nunca. Ahora, muchos estarán aprendiendo lo que cuesta ese trabajo, si por fin lo realizan; o, al menos, apreciarán en mucha mayor medida su valor tan grande cuando tienen que permanecer tanto tiempo en su casa y desean hacerlo confortablemente.

Antes salíamos deprisa del trabajo y dedicábamos nuestro tiempo libre a ver televisión y a encerrarnos en casa. Ahora echamos de menos los parques, salir a caminar y respirar al aire libre. Apenas nos parábamos a hablar unos con otros y ahora empezamos a conocer a nuestros vecinos, cuando hablamos con ellos de ventana a ventana; o estamos deseando hacer lo que antes casi nunca se nos pasaba por la cabeza, dar un abrazo a los amigos, a los compañeros de trabajo o a nuestros familiares más cercanos, en lugar de limitarnos a verlos a través de una pantalla.

Antes salíamos disparados cuando nos encontrábamos con un conflicto familiar. Ahora empezamos a darnos cuenta de que hay que saber temprar, que no nos queda más remedio que hablar y aprender a convivir en paz.

Antes vivíamos como si fuésemos a vivir siempre, como si la vida fuera un don eterno que nunca se fuese a acabar, pasara lo que pasara o hiciéramos nosotros lo que hiciéramos. Ahora, quien quiera mirar, puede verle claramente las orejas al lobo, y no sólo a este virus: he leído que hay como unos 300.000 más de cuya existencia no sabemos y que potencialmente podrían hacernos lo mismo o quizá daños peores. Por no hablar de las demás amenazas que nos acechan si seguimos violando las leyes de la naturaleza.

Nos creemos eternos y superpotentes pensando que podemos vivir la vida haciendo con ella cualquier cosa con tal de ponerle precio a todo. Le damos valor sólo a lo que compramos y ahora quizá nos demos cuenta de que lo valioso ni se compra ni se vende en los mercados, sino que lo que de verdad tiene valor es el buen vivir, rodearnos de amor y sentir que nuestros corazones están en paz. O incluso simplemente vivir.

No estoy ni mucho menos seguro de que esto sea lo que finalmente ocurra, pero quizá esta crisis nos enseñe que el precio de las cosas es algo muy distinto a su valor; que no debemos seguir cayendo en la insensatez de creer que podemos hacer cualquier cosa con tal de pagar por ello y que no es verdad que aquello por lo que no se paga un precio de mercado carece de valor.

Antonio Machado puso en boca de Juan de Marina una sentencia sublime: "todo necio confunde valor y precio". Yo me conformaría si de esta pandemia salimos todos un poco menos necios.

Es muy de agradecer que el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, en lugar de dedicarse a atacar a sus rivales políticos con palabras vacías e insultos, haya hecho una propuesta concreta para hacer frente a las consecuencias de largo plazo que la crisis de la Covid-19 puede generar en la Unión Europea y en España en particular.

Con semejante espíritu me gustaría hacer algún comentario sobre su planteamiento porque me parece que, aunque tiene algún aspecto positivo, no puede ser la solución completa y suficiente que necesita nuestra economía para evitar la crisis profunda y peligrosa que se avecina, si no acertamos con la terapia.

Estoy de acuerdo con los puntos de partida de Garicano que creo se pueden resumir fielmente en los siguientes:

- La tarea inexcusable de los gobiernos, "para aguantar el parón forzoso del confinamiento", es "mantener las rentas salariales y de los autónomos, garantizar la liquidez a todas las empresas y ejecutar el gasto sanitario"

- Ese objetivo implica un inevitable incremento del gasto público que, unido a la lógica pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de la inactividad, va a suponer que los países ya de por sí más endeudados salgan de esta crisis con "una deuda gigantesca". Garicano estima que la de España podría aumentar "en 30 o 40 puntos sobre el PIB", es decir entre 360.000 y 480.000 millones de euros, más o menos, sólo en 2020.

- Una deuda tan elevada provoca dos problemas. El primero es, dice Garicano, "el riesgo de que los mercados no quieran comprar nuestra deuda", lo cual "podría llevar a una crisis parecida a la de 2008". El segundo problema es que tal cúmulo de deuda impondría "una presión de décadas sobre el crecimiento".

El eurodiputado de Ciudadanos estima que el primer problema es "muy probable" que lo hayamos esquivado gracias a las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo y a las aprobadas la semana pasada por el Eurogrupo. El segundo, el posible frenazo del crecimiento, es al que trata de dar respuesta.

Su propuesta consiste en que el esfuerzo para llevar a cabo la reconstrucción necesaria tras la crisis no recaiga sólo en los Estados miembros, sino que "gran parte del gasto de la reconstrucción de Europa lo hagan los europeos de forma conjunta". Para ello propone que la Unión

Europea pida prestado algo más de un billón de euros al 2,5% (pagándolo con nuevos impuestos) y que, a través de su Presupuesto, financie las inversiones necesarias para la reconstrucción.

De esa forma se conseguiría que "la UE no se endeude para prestar a los países, sino para financiar directamente inversiones europeas".

Si me quedara sólo con el final de lo que propone Luis Garicano podría estar bastante de acuerdo con él. Yo también creo conveniente que la Unión Europea aumente su presupuesto y que asuma todas o parte de las inversiones que van a ser imprescindibles no sólo como consecuencia de la pandemia sino para hacer frente a la ralentización que ya se venía produciendo antes de que estallara y al cambio tecnológico y civilizatorio que se avecina.

Sin embargo, no puedo considerar su propuesta como una terapia adecuada para las gravísimas consecuencias de la pandemia ni me parece aceptable la fórmula que propone para disponer de los recursos. Mis razones para creerlo así son las siguientes:

- A finales de 2017 (últimos datos disponibles de Eurostat), los países de la UE acumulan una deuda pública de 12,73 billones de euros y los de la eurozona de 9,91 millones. Los primeros pagaron un total de 303.890 millones de euros en intereses en ese año y los de la eurozona 219.732 millones. De 1995 a 2017, el 99% del incremento de deuda de los países de la UE y el 106% de los de la eurozona corresponde a intereses.

En esta situación, lo que propone Garicano es que la deuda nacional siga aumentando (porque así lo hará, aunque se vea algo aliviada si una parte del gasto en inversiones lo realiza la Unión Europea en su conjunto) y que la paneuropea también. Su receta tiene, por tanto, el mismo efecto que tienen las únicas políticas que se sabe aplicar en la Unión Europea: aumentar la deuda o, lo que es lo mismo, el negocio de la banca privada.

- La propuesta de Garicano de convertir a la Unión Europea en inversora en lugar de prestamista de sus países miembros es buena, aunque el procedimiento por el que pretende conseguirlo me parece inaceptable. Si el Banco Central Europeo le da todo el dinero que desee a la banca privada al 0% ¿cómo podemos admitir como razonable que la Unión Europea se financie al 2,5%? ¿Por qué el Banco Central Europeo no puede financiar las inversiones europeas, conjuntas o nacionales, al mismo coste con que financia a la banca privada? El único obstáculo (además de la voluntad política de favorecer a esta última) es el artículo 123 del Tratado de Lisboa que prohíbe financiar a los gobiernos pero este se puede cambiar y, si no se desea hacerlo, se puede financiar a través de entidades de crédito públicas.

Garicano no dice a cuántos años se endeudaría la Unión Europea pero es fácil calcular la ingente cantidad de intereses que tendría que pagar a la banca privada al rechazarse que sea el Banco Central Europeo quien la financie.

- La propuesta de Garicano podría ser aceptable, salvo en el aspecto que acabo de mencionar, para ayudar a la reconstrucción, pero esta es sólo una de las cuestiones que hay que resolver. A su propuesta le pasa lo mismo que a la de una renta básica que hace unos días realizó su antiguo compañero de partido Toni Roldán: sólo pondría en movimiento una de las dos ruedas del carro que hay que impulsar. En el caso de la renta básica, salvar los ingresos de las personas, pero no la liquidez de las empresas; y, en la propuesta de Garicano, afrontar la reconstrucción, pero no evitar que nuestra economía se destruya previamente.

Un mayor esfuerzo presupuestario europeo para reconstruir Europa tras la pandemia es, como digo, deseable, pero por definición implica que se ha producido antes la destrucción. A mi juicio, el defecto principal de la propuesta de Garicano es que no contempla la respuesta que con carácter inmediato habría que dar a lo que él mismo señala, muy correctamente, como las tareas que deben acometer los gobiernos: endeudarse para garantizar salarios, liquidez empresarial y suficiente gasto sanitario.

¿De verdad cree Luis Garicano que, si la deuda de España sube 30 o 40 puntos en 2020 como él mismo dice, lo que simplemente debemos buscar es que la UE aumente sus inversiones en un billón de euros en unos cuantos años y para todos los países? Yo tengo la seguridad de que Luis Garicano es plenamente consciente de lo que supone ese incremento de deuda para nuestra economía, por muy generoso que sea el Banco Central Europeo comprando bonos españoles en el mercado secundario. España quizá no entraría en bancarrota si la socorre el MEDE o el BCE pero lo que pudiera recibirse en inversiones adicionales del presupuesto comunitario gracias al préstamo a la UE sería completamente insuficiente para evitar un declive de décadas en nuestra economía y una catástrofe social.

Me temo que la propuesta de Luis Garicano, sin duda bien intencionada y en parte positiva por lo bueno que sería el aumento de las inversiones paneuropeas, es inapropiada, porque incrementa innecesariamente la deuda que es el mayor factor de riesgo de la economía española y mundial, y porque no proporciona garantías de que la pandemia no destruya una buena parte de nuestra capacidad productiva.

Yo creo, por el contrario, que en España, como en Italia y en los demás países europeos, tenemos dos grandes alternativas que resolver con urgencia y me parece que Garicano más bien las soslaya.

La primera radica en decidir si se pone en la economía el dinero que es necesario para garantizar que no cierren miles de empresas, se empobrezcan millones de personas y colapse el sistema sanitario, o si no se pone y nos encaminamos directamente a una dura depresión económica en los próximos años.

La segunda alternativa consiste en decidir si la financiación necesaria para evitar el colapso económico (esos 30 o 40 puntos de deuda que estima Garicano) la van a proporcionar con mucho mayor coste los mercados (aunque sea con la protección adicional del BCE o del MEDE que no evita una factura de intereses brutal), o si la proporciona directamente el Banco Central Europeo, no sólo evitando el pago de intereses sino incluso reduciendo la deuda hasta ahora acumulada (algo que se podría hacer muy fácilmente).

Si se elige pronto y bien, en lugar de la reconstrucción a la que se refiere Garicano tendríamos que hablar solamente de reactivación. Parece una simple deferencia terminológica pero creo que cualquier persona, por muy poco que sepa de economía, entenderá perfectamente la enorme diferencia que eso supone para nuestras finanzas, nuestras empresas y nuestros compatriotas. El problema es que el tiempo para conseguirlo se va acabando.

Este es un artículo a la desesperada y lo escribo sabiendo el escaso efecto que puede tener, conociendo bien a nuestra sociedad, a mis compatriotas y cómo está actuando una parte de nuestros representantes políticos.

Soy plenamente consciente de que casi nunca un partido político actúa como le gustaría a los demás que actuara y, mucho menos, en medio de una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Nuestras sociedades son mosaicos de piezas muy diferentes y las políticas que se han aplicado en las últimas décadas nos han ensimismado. Margaret Thatcher decía que no hay sociedad sino individuos y eso es lo que se ha conseguido que haya en nuestra civilización, seres que actuamos como si fuésemos átomos aislados, creyendo que nuestra existencia y devenir es el simple resultado de nuestras preferencias y decisiones individuales, sin darnos cuenta de que, en realidad, hay lazos permanentes que unen la existencia de unas personas con la de otras que son los que de verdad condicionan lo que ocurre en nuestras vidas.

Sé perfectamente que, para poder venderlos sin parar, los bienes y servicios más exitosos en los mercados se producen desde hace años diferenciándolos al máximo, para que quien los compra crea que adquiere algo que antes no tenía. Sé que eso requiere y conforma un tipo de consumidor que, sobre todo, busca la diferencia con los demás, y que así se ha dado lugar a que el sentirse distinto o, a lo sumo, parte de una pequeña tribu sea el leitmotiv de la vida de la mayoría de la gente.

Sé perfectamente que el signo de nuestra cultura y de nuestro modo actual de vivir es la diferencia y la individualización; y que es inevitable que eso produzca sociedades en donde el acuerdo, la percepción de lo común y del interés colectivo, y el sentirse no ya a gusto sino simplemente algo identificado con la posición o las ideas de otro, sea muy difícil, por no decir que casi imposible.

Sé perfectamente que cuando las personas somos así, cuando actuamos como individuos y no como seres sociales que formamos parte de un entramado de relaciones que nos conforman y que condicionan nuestras ideas, nuestras preferencias y nuestras capacidades, es un milagro que podamos percibir que el mundo en el que estamos no es una suma de partes aisladas sino un proyecto compartido.

Sé perfectamente que se ha construido una no-sociedad en la que la mayoría de la gente trata de ir a lo suyo, íntima y fuertemente convencida

de que sólo yendo por su propia cuenta puede salir adelante y asegurarse su sustento y su vida de la mejor manera posible. Y sabiendo todo eso no puede extrañarme la incapacidad tan grande que hay a mi alrededor para llegar a acuerdos y para resolver los conflictos y las diferencias con cordialidad y fraternidad. Como tampoco me extraña, por extensión, que la vida política, por esas mismas razones, esté tan polarizada y sea tan feroz en la inmensa mayoría de los países. Las sociedades fragmentadas hasta la exageración de nuestro tiempo no producen proyectos comunes o convergentes sino de los unos contra los otros. En fin, sé que vivimos una época como la que Alejo Carpentier describió, con palabras mucho más bellas, en *El siglo de las luces*: "hecha para diezmar los rebaños, confundir las lenguas y dispersar las tribus".

Como llevo estudiando todo esto desde hace años no me extraña que en España se esté consolidando también una sociedad en la que cada parte de ella esté convencida de que la otra es la expresión de todos los males y que eso genere la agresividad tan grande que nos rodea cuando hablamos de lo que es común a todos. Un terreno en donde puede brotar a destajo y a su aire cualquier tipo de infamia y mentira. Aunque algunas veces, lo reconozco, llegando a una inhumanidad tan terrible que nunca pensé que pudiera darse. He leído, por ejemplo, que un médico de la Comunidad de Madrid escribió en su cuenta de Twitter: "Me estoy pensando si vale la pena salvar a estos rojos de la enfermedad"; también el cartel de unos vecinos que pedían a otro que es voluntario de la Cruz Roja que no vuelva a su casa para evitar el riesgo de contagiarlos; a un partido político decir que los mayores mueren en las residencias porque el gobierno está cometiendo allí una "eutanasia feroz"; o a parlamentarios independentistas haciendo chistes con los muertos de Madrid.

Pues bien, a pesar de ser consciente de todo ello, una vez más reclamo unidad, respeto y cooperación. El abismo al que se están asomando todas las economías y no sólo la española es tremendo, me parece que todavía inimaginable para la mayoría de las personas. Lo que puede ocurrirnos si no acertamos con la solución es muy serio. Hay ya cientos de miles de españoles de todas las ideologías en situación extrema, sin ingresos, los servicios administrativos que conceden las ayudas comienzan a estar tan saturados como los sanitarios y miles de empresas y autónomos se encuentran al borde de la asfixia y el cierre.

Tenemos la obligación de expresar cada uno lo que pensamos y de criticar lo que nos parece mal que no será poco, tal y como se han presentado los problemas y dado que nadie sabe todavía cuáles son sus soluciones. Pero lo completamente absurdo es destruir la nave porque los nuestros no están al timón. No podemos seguir así.

Me resulta incomprensible la actitud de la oposición política o social, pero debo reconocer que no me explico tampoco la falta de decisión

del gobierno a la hora de promover acuerdos y de hacerlos visibles ante los españoles. No puedo entender y me parece suicida que no se haya formado una mesa nacional, o como quiera que sea el nombre que se le ponga, en la que estén todos los operadores políticos y sociales para ser informados constantemente, para aportar propuestas y soluciones y para mostrar al resto de los españoles que se hace frente cooperativamente a una situación de emergencia en la que mueren tantas personas queridas de todos los españoles sin distinción. Y me parece especialmente incomprensible que los líderes de todos los partidos no estén permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo, en instancias que, como la situación, también deberán ser excepcionales y no las habituales en momentos de normalidad.

Una vez más pido al gobierno que convoque abiertamente a todos los responsables políticos y líderes sociales y económicos, para seguir la situación del momento y para poner en marcha una estrategia de reactivación común. Y le pido que lo haga sin olvidar que no es fácil obtener colaboración de los demás en un momento puntual grave, para suscribir un pacto, cuando no hay contacto diario y colaboración permanente.

Aprecio mucho el esfuerzo del presidente Sánchez y empatizo con él en una situación que debe resultarle difícil y muy dolorosa, política y personalmente, pero creo que le falta dar el paso decisivo de llamar, con más operatividad y menos retórica, no al gobierno, pero sí a la colaboración más estrecha y diaria, al resto de las fuerzas políticas y sociales y a la sociedad civil.

Los españoles necesitamos ver que se hace frente con cooperación y unidad a esta emergencia que puede terminar tan mal. El gobierno debería ofrecerla ya, de manera expresa, formal, pública, operativa, generosa e inmediata y, si hay quien no la acepta, que asuma la responsabilidad y se retrate ante el resto de los españoles.

¡Que se sienten y que hablen cuanto antes! Si ahora se hunde España, como puede hundirse, no sufrirá sólo una parte, lo lamentaremos todos.

¿QUIENES SON, DE VERDAD, LOS ADICTOS A LA DEUDA?

Publicado en Público.es
el 12 de abril de 2020

En los últimos decenios, desde los años 70 del siglo pasado, la deuda pública y privada se ha multiplicado en todo el mundo (ha crecido casi tres veces más que la producción) y uno de los mitos, por no decir falsedades, que más se han extendido es que eso ha ocurrido por dos razones. La primera, porque se dispara cuando las izquierdas gobiernan y, la segunda, porque las personas o los países viven por encima de sus posibilidades.

Los datos, sin embargo, son muy concluyentes y no dejan lugar a dudas.

Si se toma, en primer lugar, el caso de la deuda pública es fácil comprobar que son los gobiernos más conservadores los que elevan la deuda en mayor medida.

En Estados Unidos, si dejamos a un lado las presidencias de Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt, que tuvieron que financiar la participación de su país en una guerra mundial, el presidente que más elevó la deuda fue Ronald Reagan. Sí, durante el mandato de quien decía ser el gran enemigo del gobierno y lideró, junto a Thatcher, la revolución conservadora contra la intervención pública, la deuda gubernamental creció un 186%. El segundo presidente con mayor crecimiento de la deuda fue el también republicano George W. Bush (101%); el tercero sí fue un demócrata, Barak Obama, en cuyo doble mandato la deuda subió un 74%, bastante menos a pesar de haber tenido que hacer frente a la peor recesión del los últimos 90 años. Y después de él, vienen dos nuevos presidentes republicanos: George H. W. Bush (54% de incremento) y Gerald Ford (47%). Con el presidente que menos subió la deuda de Estados Unidos fue con el demócrata Bill Clinton (32%).

Todavía no ha terminado la presidencia de Trump y no podemos saber exactamente cómo terminará la deuda bajo su mandato. Sabemos que hizo su campaña -como casi todos los aspirantes de derechas- prometiendo acabar rápidamente con los déficits. Concretamente, prometió acabar con toda la deuda nacional en ocho años (aquí: <https://wapo.st/36kKVRC>). Lo que va a suceder será, con toda seguridad y como casi siempre, otra cosa muy diferente. Cuando comenzó su presidencia, en enero de 2017, la deuda pública de Estados Unidos era de 19,9 billones de dólares. En 2019 ya era de 23 billones, registrando el crecimiento más rápido de la historia de ese país. Con las estimaciones presupuestarias que había hecho su propia administración se calculaba que Trump aumentaría la deuda pública en 4,8 billones de dólares en su

primer mandato. Si se le suma la que tendrá que generar como consecuencia de la crisis fiscal que producirá la pandemia de la Covid-19 se puede asegurar que muy posiblemente batirá un record histórico.

Si se toman los periodos de presidencia republicana o demócrata en su conjunto, los datos también demuestran que, globalmente, son los primeros quienes más aumentan la deuda. En concreto, una investigación publicada en 2014 estimó que, en comparación con los presidentes demócratas, los republicanos agregan cada año entre un 0,75% y un 1,2% más al déficit (como porcentaje del PIB) y un 0.97% más a los déficits en promedio cada año (el estudio y los datos están aquí: <https://bit.ly/36iZ5SX>).

Esta investigación detectó que los gobiernos a la izquierda sólo aumentan el gasto y los déficits más que los conservadores cuando se encuentran en etapas de recesión, como es lógico y necesario que ocurra. Y otra investigación significativamente titulada El color político de la responsabilidad fiscal (aquí: <https://bit.ly/2Xg9xXs>) llega exactamente a la misma conclusión, no sólo para Estados Unidos sino para los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.

Otro caso histórico que demuestra bien claramente que son los gobiernos más a la derecha los que incrementan en mayor medida la deuda es el de las criminales dictaduras militares de América Latina que destruyeron a sus países para abrir la puerta al neoliberalismo: dijeron que venían a salvar a sus patrias y lo que hicieron fue endeudarlas por decenios y arruinarlas.

La deuda externa argentina contraída por la dictadura militar entre 1976 y 1983 pasó de 6.300 a 46.000 millones de dólares. La deuda pública de Brasil pasó de ser el 15,7% del PIB en 1964 al 54% del PIB en 1984, cuando los militares dejaron el poder, y la externa se multiplicó por 30 en ese mismo periodo. En el Chile de Pinochet la deuda pública pasó de representar el 1,53% del PIB en 1973 al 17,06% en 1989; y la externa pasó del 9,16% del PIB al 33,10%

En España, el presidente con el que más ha subido la deuda ha sido Mariano Rajoy (28 puntos porcentuales del PIB). Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero subió 23 puntos y 30 puntos en el de Felipe González, aunque si se tiene en cuenta que éste último gobernó durante más tiempo, resulta que la subió menos incluso que el gobierno de Zapatero. Durante el gobierno de José María Aznar la deuda pública bajó 13 puntos, pero su resultado sería muy distinto si se tiene en cuenta que bajo su mandato se vendió quizá la mayor cantidad de riqueza pública de la historia de España.

La historia de los llamados "municipios del cambio" que tuvieron que reducir drásticamente la deuda acumulada por gobiernos municipales

de derechas en nuestro país es también muy significativa de lo que vengo diciendo.

No es verdad, por lo tanto, que los gobiernos más a la derecha sean los enemigos de la deuda y del gasto. Son, en realidad, quienes la elevan más que nadie y quienes no reducen necesariamente el gasto, sino que disminuyen el social y aumentan el que ayuda a grandes empresas o a la industria militar, al mismo tiempo que reducen impuestos a las rentas más altas.

El segundo mito en relación con quienes supuestamente alimentan en mayor medida la deuda consiste en decir que ésta aumenta porque los pueblos o los gobiernos son adictos a gastar o vivir "por encima de sus posibilidades".

Al respecto, los datos también son bien claros. La proporción que representa la deuda familiar en el total no suele pasar del 20% y esta es, además, una deuda cuya magnitud no depende del deseo de las familias sino de los bancos o de los gobiernos que en lugar de fomentar el alquiler de la vivienda promueven su compra, precisamente, para ayudar a que los bancos hagan más negocio. La mayor parte de la deuda de las familias (sobre todo en las de renta más baja) suele ser la generada por la compra de la vivienda y es sabido que la magnitud de la deuda hipotecaria depende de la tasación del precio de la vivienda que fijan al alza los propios bancos para aumentar su negocio.

La deuda de las grandes empresas es bastante más elevada. Según la OCDE, las llamadas empresas "zombis" (ahogadas en deuda y que viven sólo a base de endeudarse) son el 16% de las que cotizan en bolsa y algo menos del 10% en Europa; y las compañías privadas de Estados Unidos tienen, en promedio, un volumen de deuda equivalente a seis veces sus ganancias anuales

Por otro lado, no sólo resulta que la deuda familiar o incluso la del gobierno representan un porcentaje sobre el total menor que la de las grandes empresas y los bancos, sino que es tan alta debido al pago de los intereses. No nos podemos cansar de repetir que el 110% del incremento de la deuda pública en la eurozona de 1995 a 2018 se debe al pago de intereses: alcanza, en total, la astronómica cantidad de 6,4 billones de euros.

Quienes son de verdad adictos a la deuda son los bancos. Tienen el privilegio de crear dinero de la nada cuando dan un crédito (el Banco de Inglaterra lo explica con todo detalle aquí <https://bit.ly/3bUuH2y> y el Banco de Alemania aquí: <https://bit.ly/2XjqeRI>). Si los bancos ganan más dinero cuanto más prestan ¿qué harían ustedes si fueran dueños de uno de ellos? Es sencillo, utilizar toda su influencia para promover políticas que obliguen a que la gente, las empresas y los gobiernos se

endeuden constantemente; establecer normas (como las europeas) que impidan que los bancos centrales financien sin interés; tratar de que gobiernen políticos dispuestos a favorecer sus intereses; promover que se construya o produzca lo que haga falta con tal de que sea con financiación bancaria; penalizar a quien adelanta la amortización de su deuda...

El banquero Juan March decía: "lo que nos gusta es ganar dinero, no tenerlo". Esta avaricia, esta patología de los financieros, pone lo que falta para convertir a la deuda no sólo en el motor extremadamente peligroso de las economías de nuestro tiempo sino en una auténtica droga que consumen los banqueros y que paga el resto de la sociedad. La adicta a la deuda es la banca y quien más ayuda a que se droguen cada días más son los gobiernos conservadores.

Hace un par de días se publicó el primer Informe de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetaria Internacional desde que estalló la crisis del coronavirus y todos los medios se han hecho eco de sus previsiones. Allí se estima que la crisis producirá, en el mejor de los escenarios, una caída del 3% de la producción mundial y una mayor en las economías avanzadas y en los países que dependen del turismo, los viajes, la hospitalidad y el entretenimiento para su crecimiento. Concretamente, el informe prevé que el PIB caiga en 2020 el 9,1% en Italia, el 8% en España, el 7,5% en la eurozona, el 7,2% en Francia, el 7% en Alemania y el 6% en Estados Unidos; y que, de entre todas las grandes economías, sólo China (1,3%) e India (1,9%) registrarán crecimiento positivo este año.

En total, el Fondo estima que se perderán unos 9 billones de dólares, lo que producen Japón y Alemania juntas, y que el ingreso per cápita se reduzca en más de 170 países.

Ahora bien, estas estimaciones se refieren, como he dicho, al escenario más favorable, es decir, al que implica que la pandemia haya desaparecido en la segunda mitad de 2020, que las acciones políticas tomadas en todo el mundo sean efectivas para prevenir la quiebra de empresas y la pérdida de empleo generalizados y que no haya tensiones financieras en todo el sistema. En este caso, el FMI cree que en 2021 se produciría una recuperación rápida del crecimiento: 5,8% para todas las economías, 4,5 en las avanzadas y 4,3% en España.

Por el contrario, si la pandemia no retrocediera en el segundo semestre y hubiera que alargar lo que ya se empieza a llamar el "Gran Encierro" (rememorando a la Gran Recesión), si por esa causa empeorasen las condiciones financieras y se rompieran las cadenas de suministro mundiales, el FMI estima que la caída del crecimiento mundial no sería del 3% sino del 11%, una verdadera debacle.

De todas estas predicciones han hablado los medios de comunicación, mas lo que no dicen es que el Fondo Monetario Internacional, a pesar de tener en su seno a los que supuestamente son los mejores profesionales del mundo, es un organismo que se equivoca constantemente en sus análisis sobre la evolución de las economías y a la hora de evaluar por anticipado los efectos de las políticas que propone. No hay en todo el mundo otro organismo tan poderoso como el FMI que se equivoque tanto al analizar la realidad y predecir los hechos económicos: de las 134

recesiones que se produjeron en el planeta de 1991 a 2001 sólo supo prever 15 (la fuente de este dato aquí: <https://bit.ly/3bSkow2>).

El propio Fondo encargó una evaluación independiente de su actuación ante la crisis de 2008, de sus análisis y propuestas, y en ella se pusieron de manifiesto sus muchísimos y graves errores. Entre otros, transmitir una "visión idílica de la economía mundial", no advertir de las vulnerabilidades y los riesgos que provocaron la crisis, haber prestado muy poca atención a problemas fundamentales de las economías, no incorporar las señales de alerta adecuadas, no haber sabido detectar los elementos clave que estaban generando la crisis, haberse equivocado en la evaluación de las políticas económicas necesarias, promover las prácticas financieras (titulización) que luego provocaron la crisis, actuar con retraso, estar afectado por sesgos cognitivos que le impidieron ver la realidad tal cual era (como pensar que "la disciplina de mercado y la autorregulación serían suficientes para evitar problemas graves en las instituciones financieras", "tener en cuenta solamente la información que coincide con sus propias expectativas" o "ignorar la información que es incompatible con las mismas"), utilizar enfoques analíticos y modelos macroeconómicos inadecuados o haber "ignorado o interpretado erróneamente" muchos de los datos disponibles (el contenido completo de la evaluación independiente se puede leer aquí: <https://bit.ly/3g9JR7C>).

Con esta historia por detrás, el Fondo Monetario Internacional se presenta de nuevo a decirle al mundo lo que va a pasar y las políticas que hay que poner en marcha para que salgamos de una nueva crisis. Yo creo que hay que ser demasiado ingenuo o tener muy poca información para pensar que esta vez va a acertar y que sus recetas podrán ayudarnos a no caer en el abismo.

Es verdad que algo han aprendido los dirigentes y economistas del FMI y que ahora, al menos, no se está dedicando a quitarle importancia a la crisis, como hizo en 2008, para ocultar las vergüenzas de la economía inestable, débil, ineficiente e injusta que sus políticas neoliberales han contribuido a consolidar en casi todos los países del mundo durante los últimos cincuenta años. En esta crisis del coronavirus está reconociendo desde el primer momento (quizá porque se le puede echar la culpa al virus) que "esta es una verdadera crisis global, ya que ningún país se salva" pues "tanto las economías avanzadas como las economías emergentes y en desarrollo están en recesión". E incluso está proponiendo desde el principio medidas por las que se tacha de radicales, bolcheviques o bolivarianos (que está más de moda) a los economistas críticos que las venimos defendiendo. Por ejemplo, la necesidad de acordar moratorias sobre los pagos de la deuda e incluso de proceder a su reestructuración.

Me temo, sin embargo, que ese esbozo de mayor realismo va a ser insuficiente para que el Fondo Monetario Internacional deje de equivocarse y acierte ahora con sus previsiones y recetas.

No va a acertar porque sigue sin contemplar a la economía mundial como un sistema complejo en el que unos problemas conectan con otros, provocando fallos estructurales y no sólo problemas particularizados, y porque, una vez más, sus análisis no tienen en cuenta el contexto en el que se está produciendo la crisis del coronavirus. El tiempo, otra vez, dirá quién lleva razón o no.

En estos momentos es muy difícil saber el impacto inmediato del confinamiento y de la crisis que ya estamos viviendo, porque depende de lo que se tarde en controlar la propagación del virus para acabar con el encierro, total o parcialmente, y de las medidas de garantía de ingresos que se tomen. Y es materialmente imposible saber cuándo y cómo se va a producir la recuperación sin conocer las estrategias de reactivación (en el mejor de los casos) o de reconstrucción (en el peor) que se pongan en marcha.

Mi opinión es que la mayoría de los gobiernos están dando por hecho que nos enfrentamos a una "crisis temporal" que se detendrá pronto porque pronto se va a poder detener la propagación del virus y eso me parece un principio de actuación muy arriesgado. No tengo noticias de que se estén elaborando estrategias económicas para hacer frente a un posible rebrote en la segunda mitad del año y eso me hace pensar que si se produjese un Segundo Gran Encierro, como hubo una Segunda Gran Recesión, la situación sería mucho peor que la que describe el informe del Fondo Monetario Internacional.

Por otro lado, las medidas que están llevando a cabo los gobiernos son de momento claramente insuficientes y demasiado conservadoras en la mayoría de los casos. Salvo en algunos países, no se están garantizando suficientemente los ingresos de las empresas y las personas y eso puede provocar que, cuando acabe el encierro, nos encontremos con una parálisis productiva mucho mayor de la esperada.

Algunos gobiernos (el italiano ya ha comenzado a actuar en ese sentido) se están poniendo en marcha para diseñar cuanto antes estrategias de reactivación, pero la mayoría se están limitando a capear como pueden y a corto plazo al temporal, sin avanzar en planteamientos de futuro. Y, lo que es más importante, todo el mundo habla de que esta crisis nos obliga a cambiar, pero no se perciben pasos de los dirigentes mundiales y de las instituciones en esa línea de cambio. El informe del FMI que he comentado es una prueba de ello. Se reconoce la gravedad del problema, se reclaman medidas extraordinarias, pero sólo se piensa en hacer que la locomotora se ponga a funcionar a máxima potencia en la misma vía de

siempre, sin tener en cuenta que esa vía, esa locomotora y el tipo de combustible que utiliza son las constantes que han llevado, y no sólo el virus, a que las economías sean tan frágiles y vulnerables y a que apenas tengan capacidad de respuesta ante un tipo de contingencias naturales y de desequilibrios económicos y sociales que la ciencia nos dice que ya se han hecho consustanciales a la civilización que hemos creado. Parece olvidarse algo fundamental que decía Einstein: "si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".

A medida que pasan los días tenemos más datos y estimaciones sobre la magnitud del desastre que estamos viviendo.

Se acaba de saber que la economía china ha caído un 6,8% en el primer trimestre del año, el derrumbe más grande sufrido en los últimos cincuenta años. Pronto iremos teniendo noticias de lo que ha ocurrido en las demás economías en estos primeros tres meses del año, aunque, sean los datos que sean, no serán tan malos como los que se registrarán en el segundo trimestre.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, declaró hace unos días que prevé que la tasa de desempleo suba al 30% en Estados Unidos y que el PIB caiga un 50% de abril a julio. Sería el gigantesco descalabro que, en mayor o menor medida, se va a producir en todas las economías del mundo y que a mí me parece que no está recibiendo el tratamiento de choque que sería necesario aplicar para evitar que se produzca una hecatombe global.

No he leído a nadie describir la situación tan claramente como lo hizo este último banquero: nos encontramos -dijo- ante "un cierre parcial, planificado y organizado de la economía" y el objetivo general debe ser "mantener a todos, hogares y empresas, enteros con el apoyo del gobierno".

En esta segunda frase es donde a mi juicio se encuentra la clave para saber si se está haciendo lo que hay que hacer para evitar la hecatombe: ¿se están manteniendo a flote las empresas y los hogares? Me parece evidente que no.

En miles de hogares está empezando a faltar la liquidez, no hay dinero para comer y los trámites de las ayudas se retrasan. La única forma de evitar la situación límite en la que pueden estar millones de personas es poner en sus bolsillo dinero en efectivo para que puedan salir adelante. Un dinero que, de paso, iría directa e inmediatamente después a la caja de las empresas, ayudando así a que se pueda ir manteniendo el empleo en algunos sectores vitales.

Si se deja que esta situación se deteriore no sólo se va a producir un gran sufrimiento personal -lo que ya de por sí es tremendo- sino el brote de un descontento que antes o después se dejará notar en las calles, en la disciplina social y en la estabilidad política. El conservadurismo a la hora de determinar el modo de prestar ayuda a los hogares y la falta de decisión para recurrir a medidas de endeudamiento inmediatas que pudieran

permitir hacerlo de la forma más efectiva posible va a pasar una factura grande en los próximos meses, si no en las semanas inmediatas.

Lo mismo se puede decir de las empresas. Es lógico que algunas tengan un colchón de liquidez más mullido que las familias, pero la gran mayoría de las microempresas, de las pequeñas y medianas y muchísimos trabajadores autónomos están acercándose al límite de lo que pueden resistir.

Como muchos economistas propusimos desde el comienzo de la crisis, la fórmula inteligente, me atrevería a decir que la de sentido común, para hacer frente al cierre forzado de la actividad tendría que haber sido que el gobierno se hiciera cargo de la mayor parte de la carga salarial de las empresas y les permitiese retrasar pagos a hacienda, para mantenerlas "congeladas" durante el periodo de encierro.

Ambas ayudas, a hogares y empresas, deberían de haberse hecho sin más trámite que el preciso para hacerlas efectivas inmediatamente, dejando para después el control y seguimiento de su justificación y uso. En lugar de eso, lo que se está haciendo, no sólo en España y tanto en el caso de los ERTES como de las ayudas familiares, conlleva un retraso demasiado grande que puede dar lugar a que, cuando se hagan efectivas las ayudas, sean todavía más insuficientes que cuando se puso en marcha el proceso para darlas.

Algo parecido está ocurriendo como consecuencia de haber recurrido al crédito de la banca privada para evitar que las empresas se vengan abajo. Los trámites engorrosos y las trabas de todo tipo, la falta de recursos y de eficacia de los bancos, la indecisión y el desconocimiento de muchas empresas, el temor a incrementar una deuda ya demasiado elevada en circunstancias tan desfavorables, la incertidumbre general o, sencillamente, la quiebra total que para miles de autónomos o microempresas supone el quedarse sin actividad solo unos pocos días, están haciendo que la financiación bancaria no resulte una vía efectiva de ayuda para miles de empresas y trabajadores autónomos.

Todo esto está ocurriendo, como he dicho, en toda Europa. Sus dirigentes parece que sólo se dieron cuenta de la gravedad de la situación en la retórica pero no en la práctica. Y no entendieron, desde luego, que la única institución que puede garantizar que se pongan en marcha el tipo de ayudas inmediatas y efectivas que se necesitan es el Banco Central Europeo, financiándolas completa y directamente, con el apoyo -eso sí- de la Unión Europea en su conjunto, comprendiendo la situación y facilitando que el endeudamiento subsiguiente no se convierta en una losa definitiva para las economías.

El error que ha supuesto no tomar estas medidas de apoyo directo, proporcionando la liquidez suficiente e inmediata que pueda "mantener a

todos los hogares y empresas", como decía el banquero de la Reserva de St. Luis, está ya tan admitido que hasta se manifiesta en el lenguaje: se habla de la necesidad de "reconstruir" las economías tras el coronavirus, dando por hecho que van a quedar destruidas. Y, lo que es peor, parece que por Europa se extiende la idea de que, antes que tomar las medidas de "mantenimiento" que deberían tomarse, lo mejor es ir terminando cuanto antes el encierro, minimizando la destrucción, y apostar a que el virus no vuelva a propagarse en una segunda oleada. La ruleta rusa como única alternativa.

Si su apuesta sale mal y la destrucción se generaliza no se deberá olvidar que fue como consecuencia de la incompetencia y de la irresponsabilidad de las autoridades europeas que no supieron hacer frente al sentido común de las cosas.

Yo creo que se está a tiempo todavía de rectificar. La Unión Europea tiene a su alcance medidas de mucha mayor eficacia para actuar, aunque sólo sea permitiendo a los gobiernos nacionales que intervengan con mucha más osadía y contundencia. Y el Banco Central Europeo podría poner en marcha en cuestión de días o incluso de horas programas de financiación, incluso mucho menos costosos que los que ha aprobado hasta ahora, para garantizar de verdad que miles de empresas no cierren y que millones de personas no caigan en la pobreza. Naturalmente, nada de esto podrá ser efectivo si en el seno de cada país, como ocurre en España, se actúa sin unidad de escuadra, si se carece de solidaridad, si la emergencia simplemente se utiliza para agredirse unos a otros y si la sociedad civil no se moviliza y reclama que se actúe con más eficacia y contundencia.

La orquesta del Titanic nunca tuvo tantos músicos como ahora.

Ahora que hay en España un gobierno progresista y que nos encontramos de lleno en el inicio de una crisis que puede ser grave quizá sea un buen momento para reflexionar sobre el papel que tienen las empresas en los proyectos de transformación que pretenden llevar a cabo los partidos de izquierda.

Cualquiera que conozca su mundo y haya analizado con un mínimo detenimiento las ideologías, las propuestas políticas y las prácticas de las izquierdas, de las diferentes sensibilidades o corrientes de la izquierda en general, habrá detectado la escasa empatía e incluso el alejamiento que se da entre las ellas y el mundo de la empresa, también en general.

No se puede decir que la izquierda sea ajena a los problemas empresariales. De hecho, resultará significativo comprobar que la palabra empresa salió más veces en los programas electorales de los partidos de izquierda que en los de la derecha en 2019: 87 veces en el del PSOE, 79 en el de Podemos, 55 en el del PP, 29 en el de Ciudadanos y sólo 12 en el de Vox.

A mi juicio, se trata más bien de que la militancia de izquierda suele considerar que los asuntos relativos a las empresas, si bien merecen atención a la hora de hacer políticas generales, pertenecen como a una especie de otro mundo distinto al de los intereses populares, de las clases trabajadoras, de los de abajo... o como quiera calificarse a la parte de la sociedad que las izquierdas consideran que representan más específicamente.

En algunas corrientes de izquierdas incluso hay animadversión explícita y hasta una actitud combatiente contra todo lo que tenga que ver con la empresa.

A mí me parece que esta actitud que en mayor o menor medida está casi siempre presente en el universo ideológico y simbólico de las izquierdas es el resultado de un error de comprensión bastante generalizado que trae consigo consecuencias muy negativas a la hora de poner en marcha las estrategias de transformación social que las izquierdas se proponen llevar a cabo.

El error se basa en asociar mecánicamente a la empresa en general con el capitalismo, un sistema que, con más o menos radicalidad, es el que se quiere superar por los socialistas o comunistas de diferente tonalidad, por el anarquismo o por cualquier otro matiz de las propuestas de izquierdas.

Es cierto que el capitalismo no podría existir sin empresas, pero exactamente lo mismo le ocurriría a cualquier otro sistema económico. Ni las empresas (con ese o con cualquier otro nombre) nacieron cuando comenzó a extenderse el capitalismo ni será posible que desaparezcan mientras los seres humanos tengamos que utilizar en común lo que tenemos a nuestro alrededor para producir los bienes y servicios que necesitamos.

Otra cosa es que en cada sistema económico las organizaciones que se encargan de producir los recursos y de distribuirlos respondan a una lógica u otra, que funcionen bajo tipos diferentes de propiedad o que actúen en un sistema de intercambio que también pueden ser distinto en cada momento histórico.

También es cierto que las empresas capitalistas son singulares y que en su seno se refleja el conflicto básico de nuestras sociedades, entre el capital y el trabajo. Al basarse la producción y distribución de lo que necesitamos en el trabajo asalariado, es decir, en la compra de tiempo de trabajo por los propietarios del capital, es inevitable que el valor total de todo lo que se produzca vaya a uno o a otro factor (el Estado puede apropiarse de una parte, pero acto seguido vuelve a repartirlo). Y de ahí el conflicto permanente para tratar de quedarse, cada uno, con la mayor parte de la tarta. Y la historia nos ha enseñado que si ese balance no se modula bien se producen desequilibrios y bloqueos que terminan mirando tanto a las empresas en particular como a las economías en su conjunto.

Sin embargo, incluso en nuestra economía capitalista existen formas de empresas que no responden a la lógica dominante de capitalismo. Por ejemplo, las cooperativas o también muchas empresas que renuncian a todos o a parte de los principios o formas de funcionamiento típicos del capitalismo, en aras de asumir una alto grado de responsabilidad o compromiso con la sociedad, las personas o el medio ambiente.

Sé que nunca es bueno generalizar, pero yo me atrevería a decir que, consciente o inconscientemente y de manera más o menos explícita, las izquierdas han equiparado casi siempre a las empresas en general con todo lo malo del sistema económico capitalista que se desea superar o transformar y eso supone, a mi juicio, una limitación muy grande a la hora de tener éxito en esta pretensión de cambio social.

Incluso cuando se asume la importancia de las empresas para lograr la riqueza que hay que repartir del modo más justo posible, como se supone que pretende la izquierda, se las considera como cosa de otros, extramuros de ella, y no como un instrumento propio para la política transformadora. Ni siquiera se suele ser consciente de que existen muchas empresas que responden a objetivos y formas de actuar que no sólo no

concuerdan con los del capitalismo dominante, sino que anticipan una economía diferente y mucho más satisfactoria desde todos los puntos de vista.

Cuando eso ocurre, cuando los proyectos y las políticas de las izquierdas no asumen como algo propio el poner en marcha empresas de nuevo tipo, transformadoras, alternativas y, al mismo tiempo, el tratar de conseguir que las que ahora existen dispongan de sistemas de incentivos y facilidades que les permitan satisfacer de la mejor forma posible las necesidades sociales, creo que pierden una gran oportunidad y que lastran su capacidad efectiva de transformar la realidad.

Si las izquierdas no crean o no promueven otro tipo de empresas, otra manera de organizar la producción y la distribución de los recursos que necesitamos para vivir, les están diciendo a la sociedad que la única manera de hacerlo es la capitalista.

Si las izquierdas siguen considerando como extramuros todo lo relativo al mundo de la empresas, al final termina destilándose un discurso, un lenguaje y una práctica social que no sólo no empatiza, sino que incluso violenta a quienes viven en el mundo de la empresa. Y no sólo a ese uno por ciento súper rico que se queda con todo sino a millones de personas que sacan día a día sus empresas quizá con más esfuerzo, con más sufrimiento y mayor renuncia, en un mundo empresarial dominado por las grandes corporaciones, que las clases trabajadoras en sentido estricto a las que emplean. Es decir, a aliados imprescindibles para hacer posible la transformación social a la que se aspira.

Además, el error del que vengo hablando impide que las izquierdas hagan suyos valores que mueven a las empresas, capitalistas o no, y que no sólo no son intrínsecamente negativos por el hecho de cultivarse allí, sino que quizá sean fundamentales para promover el cambio social al que se aspira. Valores que muy a menudo se echan en falta en el seno de la izquierda en una época en la que, como dijo Anthony Guiddens, es la que es esta última quien se ha hecho conservadora y la derecha revolucionaria. Me refiero, por ejemplo, a valores como la innovación, espíritu de equipo, asunción de riesgo, proactividad, sentido de la estrategia, competencia, capacidad de adaptación, sacrificio, eficacia, realismo... sin los cuales no puede funcionar bien una empresa exitosa, en el mejor sentido del término, y que sería deseable que fueran asumidos, con las matizaciones que hagan falta, en el conjunto de los comportamientos sociales.

Finalmente, cuando las izquierdas no son capaces de entender el papel central de las empresas en el progreso social y eso se traduce en un lenguaje y en proyectos que no las incluyen activamente, resulta que le resultará mucho más difícil conseguir apoyos para sus políticas de transformación. Se pueden presentar sólo propuestas como la elevación del

salario mínimo, la creación de un ingreso mínimo vital o de gasto social en cualquiera de sus manifestaciones, como medidas que benefician sólo a los trabajadores o a las personas más necesitadas o, por el contrario, también como beneficios que van a tener acto seguido las empresas en su conjunto puesto que prácticamente la totalidad del dinero que se gaste en todo eso se va a convertir casi inmediatamente en más ventas empresariales.

Afortunadamente, las actitudes y las propuestas están cambiando en las corrientes de izquierdas más avanzadas. Cada día se comprende mejor que es imprescindible que existan formas de producción y distribución, organizaciones (empresas) que funcionen con eficacia, innovación y plena adaptabilidad al mundo en el que vivimos sin necesidad de perseguir exclusivamente y a cualquier precio el máximo lucro privado. La protección de estas empresas y su impulso debiera ser una prioridad de los gobiernos progresistas. Y cada vez hay más propuestas imaginativas y rigurosas para tratar de corregir lo que de malo hay en los modelos empresariales del capitalismo de nuestro tiempo. Las propuestas de que Thomas Piketty realiza en su último libro *Capital e ideología*, o las nuevas formas de comportamiento empresarial que viene promoviendo la Economía del bien común, inicialmente concebida por Christian Felber y ya con un buen número de iniciativas y experiencias concretas, son una buena muestra de ello.

Sin empresas no es posible que haya ni economía ni sociedad. Considerar, en general, que forman parte de otro mundo distinto al de la forma social que persigue la izquierda es un error que bloquea cualquier proyecto de cambio.

La existencia de grupos, de personas o clases sociales con intereses distintos no es algo de lo que se pueda presumir. Es cierto, por un lado, que son la muestra de que las sociedades son diversas y plurales como consecuencia de la libertad de las personas que la conforman. Sin embargo, por otro lado resulta que esos intereses contrapuestos suelen ser el origen de conflictos, de guerras y de gran parte de las desgracias que por doquier amenazan la paz y la vida en nuestro mundo.

Ese conflicto, llámese guerra, lucha de clases o como se quiera, es tan antiguo como la humanidad. Sólo quienes han leído muy poco o los que han leído mucho, pero quieren confundir a los demás pueden negar su existencia o creer, como suele ocurrir con mucha frecuencia, que es un invento de las izquierdas y más concretamente de los marxistas.

Es cierto que Marx dijo que la lucha de clases era el motor de la historia, pero él mismo reconoció que esa idea venía de antes. Su aportación se limita, en realidad, a creer que de ese conflicto nacería una sociedad nueva, que la lucha de clases era "la partera de la historia". Algo, sin embargo, que tampoco era completamente novedoso.

Más de tres siglos antes, en 1513, Maquiavelo había dejado escrito en *El Príncipe* que la división social era consustancial al orden político y que "en toda república hay dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos".

En su obra *El Origen de la Desigualdad entre los Hombres*, Rousseau escribió: "El primer hombre a quien, cercado un terreno, se le ocurrió decir "Esto es mío" y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: "¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!"

Los economistas clásicos, los liberales François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, y también los marxistas, fundaron la Economía Política como una ciencia que trataba de descubrir las leyes que regulan la distribución de la riqueza entre las clases sociales.

Y lo hacían porque eran inteligentes, había sido capaces de detectar cómo funciona el capitalismo y trataban de explicarlo con rigor y transparencia.

No puede ser de otra manera. En el capitalismo, el valor del beneficio de las empresas es igual al valor de las ventas que realizan menos el de las materias primas o maquinaria y menos los salarios que pagan. Por tanto, salarios más elevados implican menos beneficios, salvo que las empresas sean capaces de aumentar por otros procedimientos el valor de las materias primas y maquinaria o vender más. Los intereses de los propietarios de las empresas y de los asalariados son, por definición, contrapuestos. Una contradicción de intereses que puede concluir en un conflicto permanente y destructivo o en equilibrios más o menos armoniosos y mutuamente aceptables, un balance que depende de la tecnología disponible, de las instituciones y leyes y, en suma, de la capacidad de negociación que cada parte tenga.

Después de la segunda guerra mundial se produjo una situación social de equilibrio de fuerzas que permitió lograr una distribución del producto global muy favorable para las clases asalariadas. Eso llevó a que muchos intelectuales y políticos proclamaran que la lucha de clases ya había desaparecido. Lo que había ocurrido, en realidad, fue todo lo contrario: el conflicto seguía produciéndose solo que con fuerzas mucho más igualadas y ese equilibrio de poder fue lo que permitió alcanzar un reparto de la tarta más balanceado. Tanto, que los propietarios del capital vieron en peligro sus beneficios, con razón, y pusieron en marcha una contraofensiva que culminó con las políticas neoliberales que han producido el reparto de la riqueza más concentrado y desigualitario de la historia moderna.

Las crisis económicas, como la que vivimos a partir de 2008 o la actual, son los momentos en que mejor se puede comprobar la existencia innegable de las diferencias de intereses en nuestras sociedades. No en vano, la palabra "crisis" se empezó a utilizar en Grecia por los jueces para referirse al momento en el que percibían mejor la naturaleza del asunto que debían juzgar.

Hace unos días, los medios informaron de que la Xunta de Galicia se había dirigido por carta al Gobierno central para manifestarle su queja porque estimaba que "prohibir los desahucios durante la crisis del coronavirus enfría el mercado inmobiliario y supone una desprotección para los propietarios".

Es un ejemplo muy claro de la diferencia de intereses que existe en nuestra sociedad y que puede llevar consigo efectos muy importantes para unas personas u otras. Un conflicto que se puede resolver, como suele ocurrir en España, en favor casi exclusivo de una parte (según quién sea quien gobierne) o, como ocurre en otros países europeos, mediante un tratamiento legal del problema más equilibrado que trata de salvaguardar (bastante mejor que la norma española de un signo o de otro) los intereses de las dos partes en conflicto.

Las medidas macroeconómicas que se toman contra las crisis también suelen ser un reflejo muy fiel de los conflictos de grupos o clases sociales. El incremento del ingreso de los más ricos ha sido espectacular como consecuencia de las que adoptaron en la de 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% más rico de todas las familias se quedó en 2010 con 93 de cada 100 dólares de incremento en el ingreso del país y, en los demás años, ese porcentaje no ha sido inferior al 60%. En España, la desigualdad también aumentó después de la crisis por la misma razón, es decir, porque los grupos sociales más ricos lograron que los gobiernos adoptaran medidas que les beneficiaban en mayor medida.

Ahora, a pesar de que nos encontramos todavía en los primeros momentos de la crisis provocada por la propagación de la Covid-19, ya se puede observar que el conflicto entre clases o grupos sociales no deriva en una lucha sino en una auténtica guerra.

En Estados Unidos, la administración Trump ha entregado un cheque de 1.200 dólares a todas las personas que ganen menos de 75.000 dólares anuales y que hayan pagado impuestos en 2019. Quienes no pagaron impuestos y ganen menos de 2.500 euros, o sea las más pobres, recibieron sólo 600 dólares.

Sin embargo, esa ayuda, que ni siquiera es generosa con los más pobres, esconde algunas condiciones que dejan bien clara la diferencia de trato que reciben los estadounidenses según su condición social. Así, aunque en principio no es legal, muchos bancos han empezado a embargarla a quienes tienen deudas. Y, lo que es peor, Trump ha aprovechado la norma legal de ayudas para hacer frente al coronavirus para dar todavía más beneficios a los ricos por medio de exenciones fiscales. Por ejemplo, disminuyendo los tipos para las personas individuales del 39,6% al 37% y el de las empresas del 35% al 21%, además de darles a éstas últimas diversas facilidades para disminuir su carga fiscal por otras vías.

Un comité del Congreso de Estados Unidos que evalúa la política impositiva (el Joint Tax Committee) ha calculado que el 80% de la ayuda total aprobada va a ir a parar a las 43.000 personas que ganan más de un millón de dólares, las cuales van a disfrutar de una ayuda media de 1,6 millones frente a los 1.200 del resto. Trump se ha gastado más en ayudarles con esa exención que lo que ha dedicado a todos los hospitales de Estados Unidos en plena emergencia sanitaria (datos aquí: <https://bit.ly/3bRafQa>).

Por otro lado, las compras masivas de títulos que viene haciendo la Reserva Federal representan un beneficio inmediato para los grandes tenedores y fondos de inversión que han visto cómo subían sobre la marcha las cotizaciones de sus títulos o que han hecho grandes negocios comprando y vendiendo rápidamente. Sólo Citibank ha ganado 100 millones

de dólares en una sola operación, comprando títulos de un fondo que estaba cayendo para venderlos inmediatamente a la Reserva Federal.

En Estados Unidos, las encuestas muestran que el 77% de los votantes demócratas y el 53% de los republicanos están a favor de que haya impuestos más elevados para los ricos. Sin embargo, lo que allí se viene haciendo, como en casi todo el mundo, es lo contrario: en 2018, la tasa impositiva de las 400 personas más ricas fue del 28%, la más baja de todos los grupos sociales y de todos los tiempos.

Naturalmente, los conflictos de intereses no tienen que ver sólo con la clase social sino también con la raza o el sexo. Las mujeres, por ejemplo, trabajan mucho más que los hombres en épocas de crisis y pierden más ingresos, como le ocurre a las personas de color o inmigrantes.

¿Todo esto no es un conflicto de intereses? ¿de verdad creen ustedes que no hay una lucha de intereses en nuestras sociedades?

¿A quién beneficia y a quién no que desaparezca la sanidad universal, que las pensiones sean privadas o que los impuestos a los ricos bajen 15 puntos, como preconiza Vox (aquí <https://bit.ly/2Tqwo1w> o aquí <https://bit.ly/3bTGhuK>)? ¿Quién pagaría al final la bajada de impuestos que propone el Partido Popular para luchar contra la crisis de la Covid-19, (aquí: <https://bit.ly/3e5KFs3>)?

Las investigaciones que viene realizando el profesor Iago Santos demuestran que menos de 1.500 personas controlan en España recursos por valor del 80% del PIB.

¿De verdad que puede creerse que cuando esos promotores y constructores, banqueros, grandes empresarios, rentistas... hablan de hacer lo que conviene a España lo están haciendo en nombre de los intereses generales?

Uno de los financieros más ricos y poderosos del mundo, Warren Buffet, dio claramente la respuesta a esa pregunta: "Hay luchas de clases y los ricos la estamos ganando".

Según informó la Cadena Ser, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha declarado que el ingreso mínimo vital o renta básica que prepara el gobierno para ayudar a quienes se han quedado en paro o lo necesitan "es indispensable", pero sólo mientras dure la crisis del coronavirus pues, en su opinión, "pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común".

Naturalmente, la jerarquía de la Iglesia católica española está en su derecho de mantener las posiciones políticas que desee y es lógico que lo haga, teniendo tantos privilegios heredados de la dictadura que le conviene proteger. Sin embargo, me parece que la declaración que ha hecho su portavoz se puede considerar objetivamente como tramposa, cínica y tan falsa y oportunista que incluso es contraria a la propia doctrina católica y a lo que propone Cáritas, que es la organización a la que los propios obispos españoles confían la lucha contra la pobreza. A continuación, justifico mi opinión.

Declaración tramposa

Los obispos han hecho una declaración tramposa porque la renta básica, ingreso mínimo, renta de inserción... o como se quiera llamar a lo que va a aprobar el gobierno ya existe en todas las comunidades autónomas de España, gobernadas por partidos de distinto signo.

Lo único que ahora parece que pretende hacer el gobierno es establecer en España lo que ya existe en todos los países miembros de la Unión Europea, un ingreso o renta mínima nacional para combatir la pobreza, algo que en nuestro país (y esto sí que es criticable) no existe porque lo que tenemos son rentas mínimas en todas las comunidades autónomas, aunque con distinto nombre, condiciones y contenido y conformando todas ellas un conjunto (más bien una maraña) con grandes deficiencias, inequidades y disfuncionalidades que sí conviene reformar.

Por lo tanto, los obispos españoles hacen trampa cuando se meten en el rifirrafe contra el gobierno con la excusa de estar preocupados porque haya "grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada", como ha dicho su portavoz.

Son tramposos porque están criticando como si fuera nuevo lo que ya existe. Si su preocupación por esa situación fuese sincera la hubieran expresado ya hace tiempo en todas las comunidades autónomas y no

ahora; y, además, habrían criticado ese ingreso mínimo o renta básica no sólo en España sino en toda Europa.

¿Por qué lo hacen ahora, justo en este momento político? Obviamente, no puedo saber las intenciones de sus eminencias pero, en fin, es como eso de que sale de una vaca, es blanca y se mete en una botella...

Declaración cínica

Además de tramposa, la declaración de los obispos españoles es cínica porque la institución que recibe más subsidios en España y la que tiene más privilegios democráticamente injustificables, y a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro país europeo, es precisamente la Iglesia Católica.

Sin necesidad de entrar en el debate de si una parte del dinero que recibe del Estado es como contraprestación a servicios que realiza a la sociedad (algo que es bastante discutible pero que incluso puedo dar por bueno), lo cierto es que la Iglesia Católica tiene en España una financiación privilegiada que se puede considerar como un auténtico subsidio: entre otros, multitud de exenciones fiscales, el pago a sacerdotes o la posibilidad de inmatricular propiedades (se ha calculado que se ha apropiado de unas 100.000 desde que la dictadura franquista le permitió quedarse con ellas sólo con que el obispo correspondiente certificara que era suya).

Es muy cínico, pues, que los obispos españoles se preocupen ahora porque las personas sin empleo ni ingreso puedan recibir un subsidio para sobrevivir cuando su Iglesia católica española no podría vivir como vive ni hacer lo que hace si no fuera por los subsidios que recibe del Estado.

Y es particularmente cínico que la Conferencia Episcopal haga esa crítica cuando la jerarquía católica española hace un uso tan poco ejemplar del dinero que recibe del Estado. Por ejemplo, cuando dedica más dinero (10 millones de euros últimamente y más en años anteriores) a una cadena de televisión derechista y muy deficitaria (13TV) que a Cáritas (6 millones).

Declaración tan falsa y oportunista que incluso es contraria a la doctrina de la Iglesia y a lo que propone Cáritas

Con tal de atacar al gobierno, los obispos españoles se saltan a la torera su propia doctrina.

El Papa Francisco acaba de reclamar hace unos días un "salario universal" para "garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos". Una reivindicación que, en pureza, es mucho más radical que la de una renta básica pues implica que el precio del trabajo no se fije en función de la oferta y la demanda en los mercados sino de tal manera que "reconozca y dignifique las nobles e

insustituibles tareas que realizan" quienes "viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja". Esta reivindicación del Papa de un salario universal (que no sería de mercado porque el mercado de trabajo no funciona para dignificar y reconocer la nobleza de las tareas humanas) se corresponde con una amplia tradición doctrinal de la Iglesia Católica que siempre ha concebido el derecho al trabajo de todas las personas como "un derecho fundamental" puesto que se considera que el trabajo es un instrumento insustituible de humanización (Juan Pablo II, *Laborem Exercem*). Y siendo el derecho a trabajar un derecho fundamental que se supone que siempre debe estar garantizado, lo lógico es que "la vida digna en el plano material, cultural y espiritual" (Pablo VI, *Octogesima Adveniens*, 14) que la Iglesia católica defiende para todas las personas se garantice a través de un salario o remuneración del trabajo justos; eso sí, "teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común" Pablo VI, *Gaudium et Spes*, 67).

Y Juan Pablo II señaló en una de sus encíclicas que, si no se disfruta de ese derecho fundamental al trabajo de donde nace la remuneración justa que garantiza una vida digna, el Estado tiene "la obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias" (Juan Pablo II, *Laborem Exercens*, 18a).

Es cierto que eso no es defender un ingreso mínimo o renta básica para cualquiera que carezca de recursos y no pueda sobrevivir dignamente, sino un subsidio de desempleo para quienes habiendo estado ocupados han perdido el empleo. Pero ¿qué ocurre, entonces, cuando hay personas que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir porque el Estado no cumple con esa obligación de concederle el subsidio de desempleo al ser despedidos involuntariamente (un millón de parados en España no recibe ayudas) o cuando, por cualquier otra circunstancia indeseada, no encuentran empleo? Para los obispos españoles está claro: esas personas empobrecidas deben mantenerse en la indigencia o vivir de la caridad. El gobierno, como antes todas las comunidades autónomas y todos los gobiernos europeos sin excepción, trata de evitar -con más eficacia de la que se consigue hasta ahora- que quienes estén en esa situación permanezcan en la pobreza. Y esto le parece mal a los obispos españoles, unos señores que en nombre de Dios se llenan la boca pregonando justicia, amor al prójimo, solidaridad, generosidad o paz.

La prueba palpable de que la propuesta que acaban de hacer los obispos españoles (dejar sin ingreso mínimo a las personas que no están empleadas y carecen de rentas una vez que pase la crisis del coronavirus) es contraria a su propia doctrina la ofrece Cáritas, la organización católica

que tan ejemplar y esforzadamente se dedica a combatir la pobreza y a tratar de remediar el daño que produce a tantas personas.

Basta dedicar unos minutos a indagar en Google o en cualquier otro buscador para encontrar pruebas de que, quienes de verdad siguen la doctrina católica y luchan día a día contra la pobreza como hace Cáritas, sí defienden un ingreso o renta mínimos, antes y después de la crisis del coronavirus. Yo ofrezco modestamente estas primeras que he encontrado sobre la marcha por si de su lectura pudiera brotarles a sus eminencias algo de arrepentimiento y propósito de la enmienda:

- Cáritas seguirá promoviendo la renta mínima garantizada.

- Cáritas pide que los Presupuestos de 2020 amplíen la cobertura de la Renta Mínima y un plan de apoyo a las familias.

- Cáritas solicita la renta básica como garantía para erradicar la pobreza.

- Cáritas edita un manual de referencia sobre el actual marco legal de la protección social en España (...) la autora propone la articulación de un marco legal básico de garantía de mínimos para todo el territorio.

- Cáritas insiste en establecer un Ingreso Mínimo Garantizado que proteja a las familias más golpeadas por el coronavirus. Urge al Gobierno a establecer un IMG equivalente para todo el Estado y que se mantenga en el futuro.

- Cáritas: La propuesta de ingreso mínimo garantizado para la inclusión no puede quedar circunscrita a la actual crisis que estamos atravesando.

Como he dicho antes, los obispos están en su derecho de militar contra el gobierno y de defender sus intereses y privilegios. Por mí pueden seguir haciéndolo pero, como acabo de demostrar, lo que han hecho con esta declaración es muy feo. Si de verdad creen en el infierno y en todo lo que predicán yo les aconsejo humildemente que vayan corriendo a confesarse.

El gobierno español ha mostrado por fin la propuesta que hará en el Consejo Europeo de mañana jueves para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. El presidente Sánchez propondrá la creación de un fondo de reconstrucción de 1,5 billones para realizar inversiones que, a partir de 2021, permitan reconstruir las economías dañadas como consecuencia del obligado cese de una gran parte de la actividad económica. Lo singular de la propuesta española (además de que, casi por primera vez, sea España quien lleve la iniciativa en un asunto de gran envergadura para el conjunto de la Unión Europea) es el modo de financiarla y el uso que se haría de los fondos.

Según lo que se ha informado, nuestro gobierno propondrá que sea la Comisión Europea quien se endeude emitiendo deuda perpetua, lo que significa que no se devuelve su principal sino sólo los intereses, los cuales no deberían ser elevados dadas las condiciones actuales del mercado. Los fondos así obtenidos permitirían aumentar considerablemente el presupuesto europeo, casi doblarlo, y se repartirían después entre los diferentes países -con preferencia de los más afectados por la crisis- en forma de una especie de fondos estructurales que se recibirían a fondo perdido y que no habría que devolver.

Las principales ventajas e inconvenientes y los retos que plantea a España, tanto si se finalmente se aprueba como si no, me parece que son los siguientes.

Ventajas

La principal ventaja de la propuesta es que no aumentaría el endeudamiento de los países que reciban esos fondos, puesto que la deuda sería emitida por la Unión. Así se trataría de evitar la crisis financiera que llevaría consigo que Italia y España tuvieran problemas de sobreendeudamiento en mercados que, por mucho que intervenga el Banco Central Europeo, les impondrían un castigo severo. Si la crisis griega fue un lastre pesado para la UE y el euro, representando aquel país un magro 2% del PIB comunitario, una eventual crisis de deuda de España e Italia supondría un golpe de muerte para el proyecto europeo.

Una segunda ventaja de la propuesta española es que supone un reforzamiento sin precedentes del presupuesto de la Unión Europea. Lo cual, a su vez, tendría otras consecuencias positivas. Por un lado, el necesario mayor protagonismo de un Parlamento Europeo que es donde está representada la ciudadanía europea. Y, por otro, que la disposición de

unos fondos tan importantes debería obligar, al menos, a repensar la puesta en marcha de una auténtica y necesaria hacienda europea.

En tercer lugar, con una cantidad tan ampliada de recursos, se abriría la posibilidad de que Europa por fin emprendiese con efectividad las reformas estructurales que se han estado dilatando y que, si eran urgente antes de esta crisis, ahora son ya imprescindibles. Me refiero a la reindustrialización sostenible, a la transición energética y tecnológica frente al cambio climático, al reto de la digitalización o a las que puedan frenar la divergencia progresiva entre territorios.

Finalmente, con un fondo de reconstrucción de esa naturaleza, que no suponga una sobrecarga de deuda para los países más afectados, se podría garantizar no sólo que se recobrase pronto una gran parte de la normalidad, sino que esos países tuvieran la posibilidad de acometer reformas de sus estructuras productivas, muy dañadas por las políticas europeas de los últimos años y, en el caso de España, por la desindustrialización y la especialización tan inadecuada de nuestra economía.

Inconvenientes

La propuesta española tiene, sin embargo, algunos inconvenientes importantes.

El primero de ellos es que implica dar por hecho que se va a sufrir un daño económico que podría haber sido mucho menor si se hubiera actuado en la dirección que venimos proponiendo muchos economistas, proporcionando ayudas directas y mucho más rápidas a empresas y familias, preferentemente mediante la intervención directa del Banco Central Europeo. Es cierto que esta era una medida que no hubiera podido emprender España por sí sola o que, de haberlo hecho, hubiera tenido un coste inicial muy elevado, pero no estoy seguro de que a la postre hubiera sido mayor que el que nos va a suponer el no haberla tomado.

El segundo inconveniente de la propuesta es que sigue el camino de hacer esclavas de la deuda a las economías. Es verdad que ahora no a cada una de ellas en concreto, aunque sí a la europea en su conjunto. Por esta última razón es por lo que creo que Alemania no va a aceptar la propuesta española tal y como se ha presentado. Pondrá objeciones a la cantidad y muchas más a la forma de financiarla. Y, si se acepta en esa cuantía o incluso en una menor, dejará a la Unión Europea sin munición para episodios futuros que, sin lugar a duda, van a darse bajo la forma de rebrotes de esta pandemia o de otras semejantes, de crisis climáticas, de inestabilidad social o de crisis financieras. No hay que olvidar que esta crisis del coronavirus se ha producido en medio de un proceso de debilitamiento generalizado de la industria y el comercio mundial que va a dilatar bastante la recuperación si ésta se hace bajo la misma lógica

productiva anterior: principalmente, en las economías con mayor dependencia de turismo y del resto de las actividades que implican consumo social.

En particular, hay que tener en cuenta que la propuesta española es una respuesta para el día después que no pone remedio a lo que está pasando en el de hoy; a saber, que tanto Italia como España están incurriendo en déficits que, en un cortísimo espacio de tiempo, van a incrementar su deuda sin que, para colmo, esta esté siendo suficiente para evitar la sangría que se produce en sus economías. Haber impuesto el "sálvese quién pueda" como plan de choque inmediato frente a la crisis se está pagando ya muy caro y su factura puede hacer inútil incluso una ayuda tan importante como la que supone la propuesta española.

El tercer inconveniente de la propuesta de nuestro gobierno es que, si no se rediseña al mismo tiempo el conjunto de las políticas e instituciones en que se ha basado la eurozona, será inevitable que el incremento de los recursos aumente las divergencias que se vienen dando desde que el euro se puso en marcha.

Sin un programa o estrategia bien diseñados de convergencia en la productividad, el crecimiento del PIB, la inversión o el empleo, lo que resultará de esta crisis, por muy abundante que sea el plan de reconstrucción, será una Europa todavía más deformada e insostenible. Aunque, dicho esto, es igualmente cierto que, sólo disponiendo de un gran volumen de nuevos recursos, como proporcionaría la propuesta española, se puede comenzar a cambiar la lógica y el diseño tan negativos e irracionales que gobiernan la eurozona.

Por último, hay que señalar que la propuesta de España será exitosa para nuestro país si el gobierno es capaz de liderar una buena estrategia de reactivación y reconstrucción. Y, al respecto, creo que hay algunos principios que no se debieran olvidar. Hay que involucrar para ello a toda la sociedad y no sólo a la clase política y me parece que es un gran error circunscribirse al ámbito parlamentario a la hora de diseñarla. El gobierno debería lanzar desde este preciso momento una iniciativa nacional dirigida a reclamar ideas y a diseñar proyectos de relanzamiento económico y eso sólo lo pueden hacer quienes día a día ponen en pie a nuestro país, desde los más altos directivos empresariales a las trabajadoras y trabajadores más humildes, que son quienes conocen bien las cosas que funcionan bien y las que hay que cambiar. Sólo de esta forma, además, se podrán vencer las resistencias tan irresponsables que se están generando desde la oposición y muchos medios de comunicación y lograr un mayor consenso en la toma de decisiones.

Sin ese impulso y sin más acuerdo transversal, cualquier propuesta que Pedro Sánchez consiga que se apruebe mañana en el Consejo

Europeo será improductiva. El punto de partida de la reactivación de nuestra economía y la garantía de que seamos capaces de reconstruir con éxito lo que desgraciadamente se nos ha venido abajo es la contribución activa de todos los españoles que a cada minuto sacan España adelante. El gobierno debería empezar a trabajar inmediatamente en esa dirección.

En resumen, la propuesta española es arriesgada. No sólo porque es difícil que sea asumida, pues si bien no implica directamente la mutualización de la deuda que rechazan Alemania y otros países sí supone una carga fiscal común muy grande. Lo es también porque, para ser efectiva, requiere reformas complementarias de gran calado que nunca hasta ahora se han puesto sobre la mesa en las instituciones europeas. Y, además, porque se basa en asumir supuestos bastante improbables: la pronta detención de la propagación de la pandemia, unos costes inmediatos no demasiado elevados, una deuda nacional como consecuencia de la pandemia que no se va a disparar y una situación internacional que no va a seguir deteriorándose, provocando problemas añadidos a los del virus.

En cualquier caso, es muy ingenuo creer que cuando uno se encuentra en una situación de emergencia se pueden tomar decisiones sin riesgo, sobre seguro.

El gobierno actual actúa y decide con una gran dosis de incertidumbre, tal y como le está ocurriendo a los demás y como le pasaría a cualquiera de otra tendencia política en España. Si logra hacerse cada día con más apoyo, si es capaz de mostrar cohesión, liderazgo, generosidad, capacidad de diálogo y humildad ante los errores que se puedan cometer, si es capaz de movilizar a quienes de verdad saben cómo funciona España y lo que hay que hacer para cambiar lo que está mal, si no se deja llevar por el sectarismo y la obsesión cainita de la oposición, sino que constantemente le tiende la mano a pesar de todo, España puede tener una oportunidad de oro para convertir esta situación desgraciada en el inicio de una nueva etapa de progreso. Si no lo hacemos bien, nuestros nietos se acordarán de nosotros

¿METEDURA DE PATA O VÍA LIBRE PARA QUE OTROS METAN LA MANO?

Publicado en Público.es
el 23 de abril de 2020

La presidenta del Banco Central Europeo metió la pata hace unos días cuando dijo públicamente, refiriéndose al banco que preside: "No estamos aquí para hacer que bajen los diferenciales, hay otros instrumentos y otros actores para estos problemas". Es decir, que el banco no iba a actuar para evitar que aumenten las primas de riesgo entre los diferentes países como consecuencia de su distinta situación financiera.

Al decirlo, le hizo un roto como una casa a Italia que en ese momento tenía que salir a los mercados a financiarse para combatir la epidemia del coronavirus. Un roto tan grande que obligó a reaccionar muy duramente al Jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, diciendo que Italia estaba pasando por una situación muy difícil y que lo que allí se esperaba de Europa eran iniciativas solidarias y no movimientos que puedan obstaculizar su acción", en clara alusión a las declaraciones de Lagarde.

Muchos analistas justificaron a la presidenta del Banco Central Europeo señalando que era un error debido a que llevaba poco tiempo en el cargo, como si Lagarde, que ha sido ministra de Agricultura y Pesca, ministra de Comercio, ministra de Economía, Finanzas e Industria en Francia y directora del Fondo Monetario Internacional, fuese una política principiante que se confunde cuando da una rueda de prensa rodeada de periodistas.

Según han informado diversos medios de comunicación (aquí: <https://bit.ly/2ZnyEKw>), cuando un eurodiputado le preguntó sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo prestara directamente a los Estados para hacer frente a los gastos que supone la emergencia sanitaria de la Covid-19, Lagarde respondió diciendo que eso no era posible porque "vulneraría los tratados" y porque "socavaría el objetivo de una política presupuestaria disciplinada".

Lo primero es cierto, pero solo en alguna medida. El Banco Central Europeo tiene prohibido financiar directamente a los gobiernos, pero sí podría dar dinero sin interés, como hace con los bancos privados, a entidades de crédito públicas que podrían trasladar dinero barato a empresas y familias. Por tanto, sí podría financiar el gasto que los diferentes Estados han de realizar ahora para frenar la pandemia y evitar sus dramáticas consecuencias, evitando que los financien los mercados en condiciones mucho más costosas.

La segunda razón (que la financiación del Banco Central Europeo socavaría la política presupuestaria disciplinada) no tiene fundamento alguno.

La disciplina presupuestaria no puede ser un objetivo en sí mismo. Si es deseable es porque con ella se consigue que haya menos deuda. Y lo cierto y verdad es que, desde que los bancos centrales no financian a los Estados, la deuda no ha disminuido, sino que ha aumentado sin cesar por la factura de los intereses.

Si un banco central tiene miedo de que una financiación sin interés provoque un exceso de gasto (indisciplina presupuestaria) lo que tiene que hacer es financiar con criterio y sólo cuando sea preciso, pero no dejar de financiar siempre y menos en momentos como los actuales, por razones de emergencia sanitaria. Si hace esto, lo único que se consigue es que el gasto de los gobiernos sea mucho más elevado porque tendrán que financiar sus gastos imprescindibles a un coste financiero más elevado.

La estupidez de este principio de actuación del Banco Central Europeo se demuestra a su vez cuando, en estos momentos, ha sido la propia Unión Europea quien ha suprimido las reglas de disciplina presupuestaria para poder hacer frente a una emergencia sanitaria.

La propia Christine Lagarde, en nombre del BCE dijo claramente, cuando se desató la crisis del coronavirus, que la respuesta debía ser fiscal y todas la autoridades mundiales han reconocido que se necesita una respuesta de este tipo -fiscal- muy contundente. Tanto, que hasta la propia Unión Europea -como acabo de decir- dejó sin efecto sus normas de disciplina presupuestaria para que los gobiernos de puedan endeudar lo que haga falta.

Entonces, si ahora en medio de una emergencia no hay que someter la política fiscal a las reglas de estabilidad ¿por qué no puede financiar el Banco Central Europeo, justamente para hacer que esa política fiscal resulte lo menos costosa posible y no ponga en peligro la estabilidad presupuestaria futura? Lo que se va a cobseguir es lo contrario de lo que se dice que justifica que el Banco Central Europeo no financie a los gobiernos, más deuda.

La consecuencia de ese principio de actuación es que el Banco Central Europeo, en lugar de ser un facilitador de las políticas que permiten que la economía europea se desembarace de la deuda y pueda resolver más satisfactoriamente sus problemas económicos, como en este caso los derivados de la Covid-19, actúa como la fuente que produce la carga más pesada que tienen que soportar, la de los intereses bancarios que cobra la banca privada por financiarlos.

¿Cómo se puede sostener -como Lagarde- que es bueno que el Banco Central Europeo no financie a los gobiernos para garantizar así la disciplina presupuestaria cuando eso ha hecho que todo el incremento de la deuda pública europea desde 1995 a 2018 corresponda a intereses? La no financiación del Banco Central Europeo a los gobiernos no se hace para garantizar la disciplina presupuestaria sino para que la banca privada haga un negocio colosal.

A la cabeza de una nave tan poderosa y decisiva como el Banco Central Europeo no está alguien que no sabe lo que se dice y que mete la pata como si fuera una becaria novata. Declaraciones como las de Lagarde no tienen nada que ver ni con el simple error ni con el desconocimiento de la economía o las finanzas. Son la justificación de decisiones políticas que se toman en beneficio de unos pocos y que suponen un coste muy grande para la mayoría de la sociedad.

Si el Banco Central Europeo hubiera puesto directamente el dinero que se necesita para disponer de recursos sanitarios suficientes, la propagación del virus se frenaría antes, no tendrían que cerrar miles de empresas y no habría millones de personas más en la pobreza en Europa. Renunciando a ese papel para que la banca haga negocio se convierte en responsable del daño que va a producir el mayor endeudamiento de los gobiernos, el desempleo y la ruina de miles de personas de todas las condiciones. Algo mucho peor que una simple metedura de pata.

Una de las consecuencias de la crisis sanitaria de efectos económicos tan intensos que estamos viviendo es que nos obliga a valorar las ventajas e inconvenientes de las grandes instituciones que sostienen a nuestra sociedad. Y, de forma muy particular, la utilidad y las limitaciones de los mercados para proporcionarnos los bienes que necesitamos.

De una institución tan antigua como el mercado lo sabemos casi todo. Cuando funciona bien, es decir, cuando hay muchos vendedores y compradores y ninguno puede actuar con un poder superior al de los demás a la hora de decidir sobre las condiciones del intercambio, el mercado nos proporciona la mejor combinación posible, para vendedores y compradores, entre la cantidad que se puede producir de un bien y su precio. Aunque, eso sí, deberá haber normas que garanticen ese equilibrio de poder y que se actúe con plena competencia.

Cuando ésta última predomina en su máximo grado, los mercados son instrumentos muy útiles para fomentar la producción de lo que se necesita y para establecer un precio a los bienes y servicios inmejorable, pues será aquel que obligue a los vendedores a actuar con la máxima eficiencia y el más bajo posible (dada la producción existente) para los compradores.

La crisis del coronavirus nos está planteando, sin embargo, algunos problemas que sufren nuestras sociedades a causa del predominio que tienen los mercados en la provisión de todo aquello que necesitamos.

Unas veces, puede ocurrir que por circunstancias excepcionales se produzca escasez. Bien porque los vendedores realicen muy poca oferta, porque exista mucha demanda de los compradores o porque ambas circunstancias coinciden. Y, cuando eso ocurre, los precios reaccionan.

Cuando se está propagando un virus y la gente quiere protegerse a toda costa se demandan, por ejemplo, muchas mascarillas y eso hace que escaseen. Inmediatamente, sus precios se disparan: mucha gente estará dispuesta a pagar lo que sea si considera que esa es una protección que le resulta imprescindible y los productores y vendedores reaccionarán aprovechándose para tratar de ganar lo más posible.

Afortunadamente, los precios tan rápidamente elevados sirven de llamada a nuevos productores y, además, los antiguos tratarán de vender lo más posible, sabiendo que hay tanta gente que quiere comprar las mascarillas. Lo más seguro será, por tanto, que incluso en muy poco tiempo haya de nuevo oferta suficiente y que los precios vuelvan a bajar.

Sin embargo, los mercados no siempre reaccionan así de bien y el camino se puede torcer. Por ejemplo, puede ocurrir que algunos productores racionen a propósito la oferta para producir artificialmente la escasez y poder seguir vendiendo muy caro. O puede suceder que los precios que se hayan fijado en el mercado, incluso antes de que comenzaran a subir por el incremento súbito de la demanda, fuesen ya demasiado altos como para que una parte de la población los pudiera pagar.

Hay, por tanto, dos tipos principales de problemas que son consustanciales a los mercados. Uno aparece cuando no hay competencia porque algunos de los agentes que intervienen tiene más poder de decisión o puede imponer condiciones que le dan ventaja estratégica sobre los demás. Entonces, los precios del mercado no serán ya los que mencioné al principio, es decir, los que fomentan una oferta de productos de máxima eficiencia y los más bajos para los consumidores. Se trata de un problema que sólo se puede solucionar con normas jurídicas que impidan que pueda darse esa situación de ventaja.

El segundo problema es, como también he dicho, que el precio de mercado, incluso siendo el más bajo posible, resulte demasiado elevado para muchas personas. Entonces es cuando se producen lo que José Luis Sampedro llamó "las colas invisibles del capitalismo", es decir, las que no se ven, pero no porque todo el mundo esté satisfecho, sino porque son las que formarían personas que desean el producto pero saben que no tienen dinero para pagar su precio.

Estos problemas se dan con mucha frecuencia en nuestra sociedad y afectan a bienes y servicios muy importantes para nuestras vidas. Se han planteado, por ejemplo, en la vivienda de propiedad o alquiler, de modo que miles de personas no pueden acceder a ella porque no pueden pagar los precios de mercado. Y también podría producirse ahora si un laboratorio privado descubre una vacuna contra la Covid-19. Sería un éxito sanitario, pero, en buena lógica de mercado, trataría de rentabilizar al máximo su inversión y el precio de la vacuna sería tan alto que muchísimas personas o incluso gobiernos no podrían pagarlo. Y eso es lo que también ha podido ocurrir cuando las mascarillas u otros productos sanitarios han alcanzado un precio demasiado alto.

Cuando eso ocurre (pensemos en las decisiones de muchos ayuntamientos o gobiernos) la tentación es intervenir sobre los precios, obligando a que los vendedores los reduzcan hasta el nivel que se considere adecuado. Una alternativa que, a primera vista, puede parecer muy fácil y efectiva pero que no lo es en realidad, pues puede traer consigo efectos de rebote que produzcan problemas quizá peores que los que se desea evitar.

Tomemos a las mascarillas como ejemplo y supongamos que un gobierno decreta que las farmacias no podrán venderlas por encima de un determinado precio. Si resulta que los productores u otros intermediarios son los que han encarecido su precio y las farmacias han de comprarlas por encima del máximo fijado por el gobierno, lo que se está haciendo es obligar a que estas últimas vendan con pérdidas y el resultado será que muchas de ellas renuncien a hacerlo.

En otras ocasiones, si los vendedores saben que hay compradores dispuestos a pagar más del precio máximo, lo que puede ocurrir es que se genere un mercado paralelo y que el límite fijado por el gobierno no sólo sea inútil, sino que incluso termine provocando que suban los precios.

Tratar de controlar los precios obligando a que no suban o bajen de unos niveles determinados cuando hay problemas de suministro, de escasez de oferta o de exceso de demanda, no es casi nunca el mejor camino para lograr que toda la población que lo necesite disponga de un determinado bien o servicio cuando este se ha encarecido.

Los precios son, en realidad, como un indicador de lo que está ocurriendo en los mercados y empeñarse en que no suban (con precios máximos como el de las mascarillas) o que no bajen (salarios mínimos) por debajo de lo establecido puede ser un empeño inútil y contraproducente. Es como luchar contra la fiebre obligando a que los termómetros se fabriquen sin que puedan pasar de 36 grados.

Si se utiliza el mercado, y eso es lo que más conviene cuando funciona con plena competencia, hay que dejar que lo haga lo más libremente posible, una vez establecidas correctamente las normas que lo regulen. Cuando no funciona bien porque está sometido al poder muy superior de los grandes operadores (lo que normalmente ocurre en el capitalismo) hay que tratar de corregirlo adecuadamente. Y, cuando esto no es posible o el mercado es incapaz de proporcionar bienes o servicios que se consideran imprescindibles para toda la gente que los necesita, lo que hay que hacer es garantizar que exista una oferta alternativa y suficiente, pero no forzarlo a que haga lo que no está a su alcance.

Si no hay viviendas de alquiler a precios asequibles lo mejor es producir una oferta pública complementaria. Si no hay mascarillas, lo mejor es que las produzca directamente el Estado y las distribuya luego gratis o al precio deseado, o que las importe y haga lo mismo después. Y, por cierto, lo mismo ocurrirá con la vacuna contra la Covid-19 que tanto se anhela y con otras que serán necesarias en el futuro. Si se quiere que sean asequibles y se sabe que en su momento se obligará a que tengan un precio de mercado limitado a ningún capital privado le interesará dedicar recursos para tratar de encontrarlas. Si se quiere que estén al alcance de

todos sin malgastar recursos, más vale que se financie su búsqueda desde ya como un bien público.

La crisis que estamos viviendo, como la de 2008 cuando la avaricia y la irresponsabilidad de los bancos dejó a las economía sin el fluido vital que es la financiación, nos demuestra que es muy peligroso dejar que sólo los mercados se encarguen de suministrar los bienes y servicios que resultan imprescindibles para todos o para garantizar el funcionamiento de instituciones o piezas vitales de nuestra sociedad. Aunque también nos enseñan que, ante un mal funcionamiento del mercado, no vale cualquier tipo de respuesta política. El infierno está lleno de buenas intenciones.

El encierro obligado de millones de trabajadores está produciendo un aumento exponencial de las horas dedicadas al teletrabajo, algo que tiene efectos muy desiguales y que seguramente sea uno de los grandes debates del futuro laboral, político y social que el coronavirus ya ha cambiado.

Desde hace algunos años se han venido haciendo estudios sobre los efectos que tiene esta modalidad de actividad laboral y las conclusiones parece que son bastante coincidentes en todos ellos, aunque la proporción de trabajadores que la habían realizado antes del encierro no era muy alta.

Según el Instituto Nacional de Estadística, de los 19,8 millones de personas que hay empleadas en España, 951.000 realizaron teletrabajo la mitad de los días que trabajó y 688.700 lo hizo de forma ocasional. Y, en contra de lo que podría parecer, el mayor porcentaje de esos teletrabajadores se daba entre los ocupados mayores de 55 años (9,9%) y el más bajo entre los jóvenes de 16 a 24 años (2,1%).

Esos porcentajes de teletrabajo en España son muy reducidos, teniendo en cuenta que un informe de Randstad estima que 4,4 millones de las personas que están ocupadas en España (el 23% del total) podría estar en condiciones de hacerlo., naturalmente, en mayor o menor medida dependiendo de su ocupación específica. Así, casi la mitad (49,8%) de todo el teletrabajo potencial se concentraría en la actividad de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, el 20,2% en la de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, el 17,7% en la de directores y gerentes y el 10,7% en la de técnicos y profesionales de apoyo, mientras que el teletrabajo en las actividades de los trabajadores de industrias manufactureras y construcción apenas representaría un 1,5% del total. En el resto, no se podría dar teletrabajo o se realizaría de manera puramente accidental o simbólica.

Incluso dentro de esas actividades, no todas las personas estarían en condiciones de realizarlo. Según el informe de Randstad, podrían teletrabajar el 100% de los directores y gerentes, pero sólo el 59,9% de los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, el 43,6% de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina y el 22,3% de los técnicos y profesionales de apoyo.

Muy pronto se irá analizando la situación que ha producido el encierro y podremos saber si esos porcentajes se han cumplido o si la necesidad

ha creado la posibilidad de teletrabajar en personas y actividades que hasta ahora se consideraban que no podrían hacerlo.

También se han realizado muchas investigaciones para tratar de averiguar los efectos del teletrabajo, tanto sobre las personas como sobre las empresas, y las conclusiones apuntan casi siempre en la misma dirección.

Hay un porcentaje muy elevado de trabajadores (el 86% de los españoles y el 73% de los europeos) que piensa que su vida mejoraría si su actividad laboral se llevara a cabo de forma más flexible, lo que ocurriría con el teletrabajo que es una de las maneras más efectivas de flexibilizar el tiempo y la actividad laboral en general.

La mayoría de los estudios que se han realizado sobre el trabajo coinciden en señalar sus ventajas: aumenta la autonomía de las personas que lo realizan, disminuye costes de desplazamiento y otros generales tanto a las empresas como a las personas, puede atraer más talento a las empresas contratando a personas que nos se encuentren físicamente cerca de ella, permite contratar en mayor medida a personas con minusvalías, disminuye la contaminación, reduce el absentismo, permite una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, reduce los conflictos dentro de la empresa y puede hacer que se trabaje con menos stress.

Si estos efectos predominan puede lograrse que se incremente la productividad del trabajo. Y eso es lo que suelen mostrar la mayoría de los estudios: un aumento de entre el 10% y el 30%, según los casos y en función del tipo de actividad o las condiciones en que se haya llevado a cabo.

En España, una investigación de Vanson Borne mostró que el 76% de quienes han teletrabajado creen que son más productivos cuando lo han hecho, aunque también proporcionó un dato significativo y bastante curioso, pues contrasta con el anterior: sólo el 51% de los empleados cree que sus compañeros de trabajo vayan a ser más productivos si trabajan en sus casas.

La opinión más generalizada en estas semanas de encierro es que el teletrabajo, ahora obligado, ha sido un gran descubrimiento para la gran mayoría de las empresas que lo han podido implantar, hasta el punto de que muchas de ellas ya se están planteando continuar con este régimen laboral una vez que acabe el periodo excepcional que estamos viviendo.

Lo cierto es, sin embargo, que el teletrabajo no sólo tiene ventajas como las que he señalado sino también inconvenientes que pueden ser grandes.

A las personas que lo realizan les resulta muy difícil desconectar de la jornada de trabajo y separar vida laboral y personal, lo que puede aumentar el stress y que se descuiden otras tareas o actividades personales

que a la larga pueden producir problemas de todo tipo. Además, el trabajo no sólo genera ahorro para los trabajadores, sino que también les supone costes que no siempre se contemplan en el salario (electricidad, equipos informáticos...). En realidad, son las circunstancias personales o familiares de cada persona las que pueden dar lugar a que el teletrabajo resulte un alivio excepcional o un completo infierno, así que hay que analizar los casos concretos y ser cuidadosos a la hora de extraer conclusiones de carácter general que pueden ser muy desacertadas.

Las empresas también deben tener presente que el teletrabajo no es necesariamente la panacea que a primera vista puede parecer. Dificulta el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la generación de cultura de empresa que suelen ser fuentes de gran valor; obliga a establecer vías más sofisticadas y costosas de control sobre la actividad laboral así como a realizar inversiones para que se pueda llevar a cabo y se pueda aprovechar bien. También puede afectar al aprendizaje continuado de los trabajadores y dar lugar a pérdidas de confidencialidad.

Sin embargo, el mayor problema que posiblemente pueda suponer el teletrabajo si no se controla bien es que, a la postre, termine produciendo una pérdida de rendimiento que disipe todas las ventajas que he señalado. El teletrabajo implica que los trabajadores tenemos disponibles veinticuatro horas al día para realizar nuestra actividad y el riesgo es que efectivamente se utilicen para llevarla a cabo, alargando la jornada ad infinitum. Hace unos días recibí un mail de una profesora sobre un problema de la asignatura que imparto este cuatrimestre a las 3,15 horas y un empleado de mi universidad me llamó otro día a casa a las 21,00 horas para atender una consulta que le había realizado por la mañana sobre un problema laboral que me afecta y que no viene al caso. Tengo la completa seguridad de que no han sido los únicos casos de ese tipo que se han producido en las últimas semanas en España.

La flexibilidad que implica el teletrabajo es generalmente bienvenida y sin duda tiene enormes ventajas, pero no se puede olvidar que, si implica una intensificación extraordinaria del tiempo de trabajo, lo que va a producir no es que aumente la productividad sino la explotación o autoexplotación del trabajo que al final produce justamente lo contrario, que las empresas sean menos productivas, menos innovadoras y, en resumen, un empobrecimiento de nuestras empresas y de toda nuestra economía.

Los economistas conocemos desde tiempos inmemoriales la llamada "ley de los rendimientos decrecientes" que, expresada de la forma más clara posible, dice que el rendimiento de un factor productivo (en este caso, el trabajo) desciende a medida que se sigue utilizando si se mantienen constantes los demás. Una ley que un viejo amigo la reformuló

diciendo que "toda finca es susceptible de mejora hasta la completa ruina de su propietario".

Eso es lo que les puede pasar a quienes, llevados por la novedad, crean que utilizar el teletrabajo para intensificar sin descanso la actividad laboral es la panacea de sus negocios. Conviene pensar bien las cosas, analizar sus pros y sus contras, regular bien las nuevas condiciones laborales que se están abriendo paso sin remedio y avanzar decididos con sentido del equilibrio y mucha sensatez.

Imaginen que una nave tripulada por seres procedentes de otra civilización inteligente (distinta a la nuestra, por lo tanto) se acerca a la Tierra para conocer su naturaleza y cómo vivimos sus habitantes.

Enseguida descubren que allí se ha propagado un virus que infecta a millones de personas y que produce docenas de miles de muertes, en casi todos los lugares y muchas más de las que registran las estadísticas a las que tienen acceso, gracias a su conocimiento y tecnología, muy superiores a los de la Tierra.

Para saber la situación más concreta, los efectos que realmente está teniendo la epidemia y las medidas que estos humanos llevan a cabo para paliarlos, deciden acudir a la más alta autoridad de la máxima potencia económica, militar, cultural y política de ese planeta, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Justo cuando van a ponerse en contacto con él, se encuentra dando una rueda de prensa en la que propone inyectar desinfectante y luz en el cuerpo de las personas afectadas como forma de acabar con él. Incrédulos, los visitantes deciden, entonces, recurrir a otras fuentes de conocimiento.

Comprueban más tarde que, al principio de la epidemia, todos los líderes y gobiernos de planeta le había quitado importancia pero que ahora, sin ninguna excepción, la contemplan con sofoco y la consideran de gran peligro. Ya saben que se trata de un mal global, cuya expansión no es posible detener mediante fronteras físicas y que se requeriría una actuación así mismo global para poder hacerle frente con algún éxito; por ejemplo, compartiendo recursos sanitarios, investigando en equipo la obtención de vacunas o poniendo a disposición unos de otros el conocimiento y los medios materiales, personales o económicos necesarios para evitar una catástrofe.

Los visitantes, sin embargo, comprueban que no se ha producido ningún tipo de encuentro global porque las instituciones en donde solían sentarse todos los países del planeta sin excepción, como las Naciones Unidas, hace tiempo que están devaluadas y apenas si tienen influencia en las decisiones de los países más poderosos. Es más, el presidente de la gran potencia mundial había decidido que su país -el más rico del planeta- dejase de contribuir y colaborar, precisamente en ese momento, con su oficina dedicada a combatir este tipo de desastres sanitarias, la Organización Mundial de la Salud.

Los visitantes extraterrestres no pueden explicarse la actuación de los humanos de la Tierra en materia de prevención vírica. Los científicos

de ese planeta saben que allí hay más de 300.000 virus que podrían producir un efecto parecido o peor que la Covid-19 y, a pesar de ello, sus gobiernos siguen dejando el descubrimiento de vacunas y remedios en manos de laboratorios privados, los cuales, lógicamente sólo tratarán de descubrir aquello que les resulte rentable a sus propios negocios y no al interés general. La situación de desarme sanitario les parece tan increíble como absurda. No pueden entender que Estados Unidos dedique casi 600.000 millones de euros a gasto militar y luego resulte que el 80% de las medicinas que se consumen en su interior provengan de China que se supone que es uno de los adversarios que justifican semejante dispendio armamentístico.

Los visitantes se sorprenden especialmente de esta falta de colaboración global cuando se dan cuenta de que las cadenas globales de suministro de alimentos están cediendo, algo que ha puesto de relieve, entre otros muchos investigadores, un economista al servicio de la FAO, la oficina de las Naciones Unidas dedicada a los problemas de la alimentación, en un artículo aparecido en la revista Nature (aquí: <https://go.nature.com/2zhG6wa>). Allí se señalan algunos ejemplos de lo que, en realidad, está pasando en todo los países: "En India, los agricultores están alimentando con fresas a las vacas porque no pueden transportar la fruta a los mercados de las ciudades. En Perú, los productores están vertiendo toneladas de cacao blanco en el vertedero porque los restaurantes y hoteles que normalmente lo comprarían están cerrados. Y en los Estados Unidos y Canadá, los agricultores tuvieron que tirar la leche por la misma razón. Legiones de trabajadores migrantes de Europa del Este y África del Norte están atrapados en las fronteras, en lugar de cosechar en las granjas de Francia, Alemania e Italia. Estados Unidos, Canadá y Australia dependen en gran medida de los trabajadores agrícolas temporales que no pueden viajar debido a restricciones de virus". Y también se advierte en ese artículo de que el miedo a la pandemia ha producido "reacciones en cadena caóticas" muy peligrosas que ya han hecho subir los precios de productos básicos para la alimentación humana, como el trigo (8% en comparación con los de marzo del año pasado) o el arroz (25%).

Esa información hace que los visitantes se interesen por el hambre y descubren también que afecta a 821 millones de personas, a pesar de que sólo con los productos alimenticios que se desperdician en todo el planeta se podría alimentar a 1.260 millones de seres humanos todos los años. Cuando analizan la forma en que los humanos de la Tierra organizan la producción y el consumo de los productos básicos que necesitan, los visitantes se sorprenden sobremanera del gran daño que provocan sobre su medio ambiente natural y, a su vez, del coste tan enorme que esto lleva consigo, tanto en dinero como en vidas humanas.

Así, la contaminación del aire mata a siete millones de personas cada año y los desastres naturales causados por el clima a unas 600.000. El 40% de la población mundial ya tiene problemas con la escasez de agua y todos los años mueren 2,2 millones de personas por simples diarreas. Como consecuencia en gran parte del modo de vida existente en la Tierra, el nivel del mar ha subido el doble de lo previsto en los últimos 25 años, un tercio de las especies marinas están en riesgo por el cambio climático, las capas de hielo que cubren la superficie terrestre se están descongelando un 20% más de lo previsto por los científicos y la del Ártico se ha reducido en un 40% en los últimos 35 años. La deforestación (que produce la quinta parte de las emisiones de CO2 que destruyen la Tierra) avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año (casi la cuarta parte de España). Al ritmo en que se produce y consume en el planeta que van a visitar, en 2050 vivirán en tierras desertificadas unos 4.000 millones de personas y la resistencia a los antibióticos, provocada entre otras causas por los contaminantes vertidos en el agua y en los alimentos, será la primera causa de muerte en el mundo ese año.

A los visitantes les confunde la forma económica tan extraña con que los habitantes de la Tierra hacen frente a estos problemas pues se calcula que podrían evitarse con 19,5 billones de euros, mientras que el coste de soportarlos supone 47 billones. Y también les resulta incomprensible que los actuales habitantes de la Tierra no tengan en cuenta que después de los que viven ahora allí tendrán que venir otras generaciones futuras, sus hijos, nietos y biznietos, cuyo bienestar y forma de vida no parece preocuparles. Aunque igualmente les sorprende el escaso cuidado que tienen con los niños pues, como señalaba el informe Acción humanitaria para la infancia 2019 de UNICEF que han consultado, "la infancia sufre la mayor amenaza para su desarrollo en los últimos 30 años". Algo que también produce perplejidad a los alienígenas, porque en ese informe se indica que sólo harían falta 3.500 millones dólares para conseguir que todos los menores del planeta tuvieran cubiertas sus necesidades básicas, más o menos el presupuesto de los 20 o 25 equipos de fútbol europeos con mayor presupuesto.

Las cuestiones económicas asociadas con la propagación del virus llaman extraordinariamente la atención de los visitantes. En concreto, que tampoco en este campo haya habido una respuesta global a los cientos de millones de desempleos que va a producir, ni a la pérdida de las miles de empresas que proporcionan los suministros básicos para la población. Les sorprende también la imprevisión ante la gigantesca crisis de deuda que inevitablemente se producirá una vez que se salga de la crisis actual. Aunque nada les produce tanto estupor como el hecho de que en la Tierra se dediquen casi 125 veces más recursos a realizar apuestas en una especie de casinos financieros, para estos visitantes completamente desconocidos

y cuya lógica apenas entienden, que para las actividades directamente encaminadas a satisfacer sus necesidades reales. Unos casinos a cuyo mantenimiento se dedica más atención en la Tierra que al cuidado y a la vida de los seres vivos.

Los visitantes, en fin, tampoco pueden entender que en el planeta que desde las profundidades del espacio se muestra con una belleza formidable sea, en realidad, un infierno innecesario para una parte tan grande de sus pobladores. Y no pueden explicarse cómo, a pesar de la existencia de tantos dioses e iglesias que pregonan la bondad y el amor por todas sus esquinas, haya tantos conflictos armados, un ambiente tan extendido de odio y revanchismo y un sentido tan escaso de la solidaridad y de la cooperación mutua.

Más que nada, en el informe que realizarán de sus descubrimientos sobre el planeta Tierra, destacarán la falta de conciencia de sus pobladores sobre su propia existencia y sobre el hecho de que conforman una civilización que se encuentra en peligro real y cercano de extinción como consecuencia de sus decisiones.

Ya de vuelta, uno de los alienígenas señaló en su tableta orgánica una de las páginas de Pensamientos despeinados, un librito de Stanislaw J. Lec que había escaneado como recuerdo en la biblioteca de unos pueblos que habían visitado.

- Aquí está lo que les pasa a estos humanos, dijo: es un planeta que "tiene la conciencia limpia; no la ha usado nunca".

La cultura, en su sentido más amplio, es una de las actividades que siempre paga en mayor medida los efectos de las crisis económicas. Como cualquier otra que consista en la producción de bienes o servicios, necesita recursos materiales y gasto procedentes de la iniciativa privada y de la pública, y ambos disminuyen notablemente cuando la economía se deteriora. Aunque, en el caso de la cultura, el daño suele ser mayor por otras razones.

Como consecuencia de la última crisis económica iniciada en 2007-2008, bajó el peso de las actividades culturales en el PIB español, el empleo, el número de empresas, el gasto total de la administración central, de las comunidades autónomas y ayuntamientos y el gasto familiar y personal, por citar sólo algunas magnitudes expresivas de su evolución. Y, cuando la mayoría de ellas todavía no había logrado recuperarse, la epidemia de la Covid-19 trae consigo una nueva crisis; ahora mucho peor, pues no sólo supondrá la disminución de la demanda y del gasto que traen consigo todas ellas, sino la imposibilidad de generar oferta durante un tiempo que, en algunas casos, puede llegar a ser literalmente letal para los productores.

Una vez rectificado el grave error inicial del ministro de Cultura, cuando al principio de esta nueva crisis descartó adoptar medidas específicas de apoyo al sector, es imprescindible que todas las administraciones pongan en marcha estrategias efectivas que impidan que, una vez más, la producción y el consumo de bienes y servicios culturales esenciales para la vida personal y social y para las democracias tan debilitadas de nuestro tiempo, vuelvan a quedar en mantillas en España.

En materia de financiación, la cultura siempre ha tenido que navegar entre dos mares. Por un lado, se la considera -con razón- una actividad industrial más y de ahí se deduce que debe financiarse a través de los mercados, en función de que sea capaz de crear la demanda suficiente. El Estado, así, puede desentenderse de ella. Por otro, y cuando no es industria en su sentido estricto, la cultura tiende a ser considerada como algo banal, tan sólo relativo al ocio y al entretenimiento, cosa de artistas, de excéntricos y bohemios que con sólo alguna ayuda ocasional pueden sobrevivir si no han conseguido, como le sucede a la gran mayoría, alcanzar el estrellato.

En España no hemos terminado de entender (ni siquiera estoy seguro de que hayamos comenzado a entenderlo) que la cultura ni es sólo

industria ni un simple pasatiempo. La cultura, en todas sus expresiones, es una pieza sin la que no puede existir vida en libertad, ni democracia, ni bienestar porque sin ella se carece de la simbología, de las ideaciones o los sueños que conforman la comunidad imaginada sin la que los seres humanos no podemos vivir. La cultura es todo lo que envuelve nuestra vida personal y social para que pueda tener sentido ante los demás y lo que le da sentido a lo que vemos de los otros. Sin cultura seríamos seres desnudos, no podríamos interpretarnos, como tampoco tendría sentido la economía de nuestro tiempo que tiene cada día más componentes inmateriales o icónicos para poder lograr que los sujetos se identifiquen con los propios objetos, aunque eso sólo sea para que sigan consumiéndolos sin descanso.

Es por eso que las constituciones modernas reconocen el acceso a la cultura como un derecho más de la ciudadanía y de ahí que los Estados no puedan limitarse a ayudar a la producción cultural, como si de una vieja obra de caridad se tratase, sino que deben considerarla como una pieza más del entramado que puede sostener las democracias bienestarristas, como puedan ser la seguridad, la salud o la justicia, es decir, como un auténtico bien de interés público cuya provisión, a través de cualquiera que sea el procedimiento, debe quedar garantizada con suficiencia y, esto es muy importante, con plena libertad.

La cultura es algo demasiado grande y no podemos dejarla caer de nuevo en esta crisis.

Con carácter inmediato, urgente, las administraciones públicas deberían tomar medidas para evitar la sangría de ingresos que están sufriendo muchas empresas culturales y trabajadores autónomos, teniendo en cuenta que la especificidad de muchas de sus actividades les dificulta acudir a las fuentes de apoyo (sobre todo crediticias) que se han aprobado en las últimas semanas. Se tiende a creer que los creadores no hacen nada en los procesos de ideación y creación y que, por ello, pueden efectivamente vivir "de la nada" durante ese tiempo. Hay que evitar que se desvanezcan los procesos creativos de mayor o menor envergadura que estén en marcha y entender que, cuando eso ocurre, se pierde valor económico exactamente igual que cuando cierra cualquier otra empresa o negocio.

Al mismo tiempo, hay que ser muy consciente de que la crisis que estamos viviendo es el inicio de un nuevo tiempo, de cambios que van a transformar la vida social en todo el planeta y no sólo por algún tiempo. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en otro tipo de espacios, con otras distancias entre nosotros; consumiremos productos que vendrán con envoltorios icónicos diferentes y que se pondrán a nuestra disposición a través de redes muy distintas a las que ahora conocemos. Cambiará el uso del tiempo, la forma de divertirnos e incluso el tipo de ropa que usemos porque vamos a comenzar a percibir y a relacionarnos a nosotros mismos

y a todo lo que está a nuestro alrededor de otras maneras. El Gran Encierro, como ya se le llama, está modificando, quizá para siempre, nuestro oikos, nuestro espacio doméstico en el más extenso sentido de la palabra. Y también el relato, como gusta decir ahora, que la cultura y no otra cosa, escribe de nuestras vidas

La cultura va a ser el instrumento que nos permita dialogar inteligible, razonable y amablemente con todos esos cambios y con quienes nos rodean para poder sobrevivir, con más o menos libertad y democracia, a los tiempos de transformación y dificultades que nos esperan. La cultura, las imágenes, los cuentos, los ideales de belleza, los sonidos que nos rodean, los sueños, lo imaginado, la música y el movimiento... son piezas sin las que no se va a poder armar el rompecabezas económico que tenemos por delante.

La cultura no es el celofán que recubre lo que nos parece que tiene valor en nuestras sociedades, una guinda de poco precio que ponemos sobre el pastel, sino un componente intrínseco del valor de las cosas que tanto apreciamos. No hay empresa sin icono, que pueda vender un producto sin dotarlo previamente de cultura, de intención o de narrativa, cualquiera que ésta sea; no hay ciudad que hoy día salga adelante sin imagen; no hay país sin marca; ni seres humanos sin sueños. No hay vida posible sin cultura.

Los gobiernos deben meterse en la cabeza que no se trata de ayudar a los culturitas, como a veces dicen los burócratas que reparten el pastel del presupuesto, sino de invertir en valor para generar un ecosistema socioprodutivo que facilite la creación y el consumo de bienes y servicios culturales, no como una actividad en el margen que sólo tiene un fin en sí misma (que también), sino como componente de todos los demás procesos de creación de riqueza. Para eso debería empezar por garantizar que exista información rigurosa y actualizada, un mapa completo de la cultura como fuente de valor en nuestra sociedad y en la economía.

Los productores culturales, por su parte, también deben entender que no precisan tan sólo de ayudas, sino que ellos mismos han de crear los tejidos, cada vez más complejos, que son necesarios para lograr que lo creado se disfrute en la mayor medida de lo posible, para que se realice finalmente y complete.

Hay que crear sinergias entre el resto de los sectores productivos y sociales y la actividad cultural, proporcionando espacios, facilitando el consumo y haciendo posible que lo que no tiene precio también se remunere.

La cultura en España necesita una auténtica política industrial que le proporcione acceso a los recursos, que anticipe financiación especializada, que contemple las singularidades productivas, financieras, fiscales,

laborales y comerciales del sector y de los mercados en donde se desarrollan la producción y el consumo de mercancías culturales. Pero también se necesita promover la política cultural, la producción y el consumo cultural, en la industria y los servicios, en toda la vida económica. Para ello hay que inventar nuevas entidades de crédito especializado, formas novedosas de mecenazgo y de financiación compartida, ocupar nuevos espacios y aprender a usar y poner en valor lo común, hacer más cultura con las nuevas tecnologías y convertir a la tecnología, con la cultura, en una práctica auténticamente liberadora, o promover con rapidez las nuevas formas de consumo de los bienes y servicios culturales que se están abriendo paso tanto en los hogares, como en las empresas y en los espacios colectivos.

Y, como he dicho, todos (administraciones, creadores y productores y consumidores) hemos de aprender a darle valor a lo que, como he dicho, no tiene precio, para que la cultura que no es industria ni exactamente una producción mercantil, pero que sí se concibe y existe para el intercambio, pueda llevarse a cabo.

Puede parecer que son palabras algo abstractas, una simple filosofía, pero lo que de verdad plantea la crisis de la Covid-19 es la necesidad de que las sociedades y las economías se rehagan, se reconstruyan dicen los políticos. Esa es la tarea de los gobiernos, de las empresas, de las familias y las personas y organizaciones de todo tipo. Pero nada ni nadie se puede rehacer ni reconstruir sin haberse imaginado previamente y esa es, justamente, la función de la cultura, hacer posible que todos nos imaginemos a nosotros mismos y nos hagamos imagen y a imagen de todo lo demás que nos rodea. Sin ella, sin cada día más, mejor y más libre cultura, seremos cada vez peores y más esclavos.

A medida que pasa el tiempo se hace más evidente el enorme coste financiero que va a suponer la pandemia de la Covid-19. Aunque todavía sea pronto para poder calcularlo con exactitud, las estimaciones más optimistas señalan que el incremento de la deuda pueda ser de un 10% del PIB para el conjunto de la Unión Europea.

Muchos economistas hemos venido diciendo desde el principio que el Banco Central Europeo podría haber evitado que la deuda aumente si hubiera hecho frente con inteligencia y decisión a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo. En lugar de proporcionar facilidades a la banca privada para que luego ésta preste (si lo hace) a las empresas y trabajadores autónomos cobrando interés, el BCE podía haberlos financiado directamente y sin intereses, al mismo tiempo que compraba deuda de los Estados para volver a emitir otra perpetua, por ejemplo. De esa manera se podría haber reducido el coste que va a suponer la epidemia, evitar el cierre o la pérdida de miles de empresas y frenar la expansión de la pobreza.

A estas alturas, ya no cabe pensar que se vaya a recurrir a fórmulas de ese tipo, salvo que haya un nuevo brote y no quede más remedio que hacer lo sensato, aunque ya más tarde y con menos efectividad, para evitar la catástrofe que, en ese caso, se produciría. Esperemos que no sea necesario.

En estos momentos, sólo sabemos que la Unión Europea financiará tarde y escasamente, a través del MEDE, aumentando así las deudas de los países que tengan que recurrir a esa vía, y que se propone generar un fondo presupuestario de reconstrucción de cuya cantidad y modo de financiarse no se sabe casi nada. Sólo que las diferentes economías tendrán que devolver las ayudas que reciban, lo que también supondrá, por tanto, incremento de la deuda.

Si se da ya por hecho que esa va a ser la forma de actuar de la Unión Europea hay que pensar en las fuentes de financiación de dicho fondo, teniendo presente que unas son más sostenibles y equitativas que otras.

Financiar la reconstrucción a base de aumentar la deuda de los diferentes países es una vía que beneficia casi exclusivamente a la banca y a los grandes patrimonios y que pagan las generaciones futuras que deberán hacerle frente. A la banca, porque hace negocio gestionando el crédito y

cobrando los intereses; y a los grandes patrimonios porque son quienes disponen del ahorro suficiente para adquirir los títulos de la deuda.

Para evitar una fórmula tan poco equitativa, los economistas Camille Landais, de la London School of Economics, y Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley, acaban de hacer una propuesta alternativa (aquí: <https://bit.ly/3gbCOv6>) para financiar la deuda que generará la Covid-19 en Europa: un impuesto temporal y progresivo sobre las grandes riquezas, precisamente porque éstas son las que se van a beneficiar de su emisión.

Suponiendo que la deuda que haya que financiar sea equivalente al 10% del PIB de toda la Unión Europea, estos economistas proponen un impuesto progresivo con una tasa del 1% para quienes tienen un volumen de riqueza superior a dos millones de euros, del 2% para quienes la tengan superior a 8 millones y del 3% a quienes tengan un patrimonio superior a 1.000 millones. Así se obtendría un ingreso anual equivalente al 1.05% del PIB de la Unión Europea. En diez años, por lo tanto, se podría tener financiado un coste de la pandemia equivalente al 10% de su PIB.

Como bien dicen, de esta forma no se afectaría al crecimiento de la actividad económica, tal y como sucederá con las medidas que hasta ahora se han adoptado, porque un impuesto de este tipo equivale a uno sobre el capital que grava la acumulación pasada pero no influye sobre los rendimientos de la inversión actual ni sobre la innovación. Y se trata, además, de tasas muy bajas, semejantes a las que tenían los impuestos sobre el patrimonio que han existido hasta hace muy poco en países como Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia, o como las del impuesto federal que se está proponiendo actualmente en Estados Unidos.

La propuesta tiene los inconvenientes de todas las políticas re-distributivas. Actúa a base de cañonazos porque se aplica cuando antes se ha permitido que se produzca una distribución previa muy concentrada y desigual del ingreso y la riqueza (y también del poder que eso lleva consigo). Y en este caso, además, cuando se ha tomado una medida anterior que aumenta innecesariamente la deuda y su coste en intereses. Sin embargo, la solución de estos economistas tiene la virtud de poner de relieve que las decisiones que toman las autoridades europeas son malas pues ni son las únicas posibles, ni las menos costosas, ni las más más equitativas. Demuestra que hay fórmulas alternativas más justas, más baratas y que no hipotecan a las generaciones futuras. Se adoptan unas u otras según a quién se quiera beneficiar y qué intereses defender.

En estos momentos, los ministros de Hacienda de todo los gobiernos de mundo andan revisando hasta la última línea de sus presupuestos para ver de dónde pueden sacar la más mínima cantidad de dinero que pueda atender la urgencia en la que nos encontramos. El del estado alemán de Hesse, Thomas Schaefer, se suicidó, según se informó, ante los problemas que estaba ocasionando la pandemia a las empresas y personas a las que tenía que ayudar. Imagínense cómo lo estarán pasando en países más pobres.

Sin embargo, justamente ayer miércoles 28 de abril, se publicó el último informe de la Red de Justicia Fiscal (aquí: <https://bit.ly/3e6FVT2>) que una vez más vuelve a poner de manifiesto que los ministros europeos se podrían evitar sus desvelos muy fácilmente, si se lograra que en la Unión Europea todos pagásemos los impuestos que nos corresponden, ni uno más ni uno menos, los que están establecidos.

Según el informe, cuatro países europeos (dos de ellos pertenecientes a la Unión Europea y a la eurozona) constituyen un eje de evasión fiscal de empresas multinacionales de Estados Unidos que hace perder, como poco, unos 27.600 millones anuales al conjunto de países miembros de la UE.

Se trata de Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos que establecen tasas impositivas muy bajas (del 0,7% en Luxemburgo al 10,5% en Reino Unido) para que las grandes empresas declaren allí los beneficios que obtienen, en realidad, en otros países. De esa forma, esos cuatro líderes de la evasión fiscal se han convertido en la cloaca por donde se pierde la mitad de la que realizan las grandes corporaciones mundiales.

El escándalo tan evidente que representa esa práctica se manifiesta si se tienen en cuenta los beneficios por empleado que reportan las grandes empresas estadounidenses en diferentes países europeos: 8,8 millones de dólares en Luxemburgo, 826.000 dólares en Suiza, 575.000 dólares en Países Bajos y 84.000 dólares en Reino Unido, mientras que las mismas empresas declaran 46.000 dólares en Alemania, 45.000 en Italia, 36.000 en Francia y 34.000 en España.

En total, en esos cuatro países se declaran tres veces más beneficios que los declarados en toda la Unión Europea por empresas multinacionales de Estados Unidos (o cuatro, si se excluye Irlanda).

Subraya el informe que son precisamente los países que están registrando un mayor impacto de la Covid-19 los que sufren más pérdidas fiscales por esta causa (Francia, casi 7.000 millones de dólares, Alemania algo más de 4.000 millones, Italia un poco menos de esta última cantidad y España más de 2.000 millones). Y Luxemburgo es el responsable de la mayor pérdida de ingreso fiscal para el resto de la Unión Europea (12.000 millones de dólares anuales), seguido de Países Bajos (10.000 millones), Suiza (3.000 millones) y Reino Unido (1.500 millones).

Se trata de pérdidas de ingreso fiscal muy elevadas pero inferiores a las que realmente se producen por la evasión fiscal de las grandes empresas multinacionales porque los datos que he mencionado solo reflejan beneficios de las estadounidenses y no los de las europeas. Y, además, porque la competencia que hacen esos países del eje es uno de los factores que provoca que los demás países europeos continuamente reduzcan sus tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas. Si se suman todas las vías de evasión fiscal que verdaderamente se producen en Europa las cifras que se alcanzan son astronómicas. Un estudio de Richard Murphy para el Grupo Socialista del Parlamento Europeo de enero de 2019 (aquí: <https://bit.ly/3cVpoRO>) estimó, con datos de 2015, que la evasión fiscal producía en Europa una pérdida de ingresos a los gobiernos de 825.000 millones de euros anuales (unos 60.000 millones en España).

Estas pérdidas de ingresos fiscales que son consentidas por las autoridades europeas deberían resultar incompatibles con la democracia más elemental en cualquier circunstancia, pero mucho más en medio de una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.

Ni siquiera se trata de reclamar más impuestos sino de exigir a las autoridades que obliguen a que todos paguen los ya existentes y que no sean ellas mismas las que abren las puertas a la evasión fiscal. El informe de la Red de Justicia Fiscal reclama tres simples medidas para atacar el caso de la evasión fiscal de las empresas multinacionales: obligarlas a pagar sobre una base imponible conformada por los beneficios globales obtenidos en Europa en función de parámetros objetivos (empleo y ventas), a que publiquen anualmente un informe, país por país, donde se indique la ubicación de su empleo, ventas, ganancias e impuestos que pagan y establecer una tasa efectiva mínima común del 25% para toda la Unión Europea.

El informe presenta finalmente una propuesta que deberían tener en cuenta todos los gobiernos a la hora de conceder las ayudas que son imprescindibles para salvar a las empresas que pierden ingresos a causa de la pandemia de la Covid-19: puesto que se las salva con dinero público, deben estar vinculadas a cumplir compromisos de protección del empleo, no pueden dedicarse a retribuir a accionistas, deben ir acompañadas de un alto grado de transparencia para poder conocer el uso que se hace de

ellas y formularlas de tal forma que incentiven, en el periodo post crisis, la formación de mercados más equilibrados, transparentes y competitivos y el compromiso de las empresas con sus obligaciones fiscales. Por último, la Red por la Justicia Fiscal propone que no se den ayudas públicas a las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos.

De momento, sólo Dinamarca, Polonia y Francia han renunciado a conceder ayudas a las empresas que utilizan los paraísos fiscales. En Inglaterra (un país oficialmente religioso y cuya monarca es la jefa de la Iglesia), el gobierno ha rechazado una petición de los obispos en este sentido y en Alemania sólo algunos Estados han evitado ayudar a las empresas que no están al día en sus obligaciones fiscales.

Las autoridades e instituciones europeas no hacen lo debido, lo que tienen fácilmente al alcance de su mano, para que la justicia fiscal, un imperativo ético de las naciones democráticas, sea una realidad en nuestro continente.

Los recortes de gasto que harán casi todos los ministros de hacienda que mencioné al principio se harán con cargo a los servicios públicos de salud, educación, cuidados o pensiones que en mayor medida necesitan las personas de menos recursos. Mientras tanto, las grandes empresas y las mayores fortunas de dentro y fuera de Europa siguen evadiendo impuestos europeas ante la actitud complaciente de esas mismas autoridades. Manga ancha para los ricos, mano dura para los pobres: Europa no tiene futuro si sigue actuando así.

Cómo serán las condiciones en que se desarrolla el trabajo humano en este planeta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene que reivindicar desde 1999 el trabajo "decente", dando a entender, con toda la razón, que lo que ocurre con docenas de millones de trabajadores en todos los países del mundo es una auténtica indecencia.

En su último informe sobre Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2020 (su Resumen ejecutivo aquí: <https://bit.ly/2ZsuroT>) se ofrecen datos reveladores de la situación laboral que más que nunca conviene tener presente un Primero de Mayo.

- 188 millones de desempleados en todo el mundo en 2019.
- 165 millones de personas tienen empleo aunque desean trabajar más horas pagadas.
- Alrededor de 120 millones de personas no están clasificadas como desempleadas, pero están marginalmente vinculadas al mercado de trabajo y podrían encontrar empleo en un futuro próximo.
- En total, por tanto, más de 470 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al trabajo remunerado como tal o se les niega la oportunidad de trabajar el número de horas deseado.
- Unos 2.000 millones de trabajadores en todo el mundo (61% de toda la fuerza laboral) están empleados de manera informal, mal remunerados y con poco o ningún acceso a la protección social y a los derechos laborales.
- 630 millones de trabajadores en todo el mundo -casi uno de cada cinco de todos los empleados- no han ganado lo suficiente para salir ellos mismos y sus familias de la pobreza extrema o moderada pues ganan menos de 3,20 dólares diarios.
- La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo era del 47 por ciento, 27 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres (74 %).
- 267 millones de jóvenes de 15 a 24 años en todo el mundo (22% de ese grupo de edad) no tienen empleo ni educación o formación. En África, la informalidad del empleo afecta al 95% de los jóvenes trabajadores.

- La proporción que representa la renta del trabajo -en contraposición a la del capital- disminuyó a nivel mundial del 54 por ciento en 2004 al 51 por ciento en 2017.

- En 2017, un trabajador perteneciente al 10% más alto de la distribución mundial de la renta del trabajo ganaba un promedio de 7.400 dólares mensuales, mientras que uno del 10% más pobre ganaba solo 22 dólares mensuales (ambas cifras en términos de paridad de poder adquisitivo). Es decir, 336 veces más.

- Si bien la desigualdad de la renta del trabajo a nivel mundial ha disminuido en los últimos quince años -como resultado de la convergencia económica impulsada por países como la India y China-, la desigualdad dentro de los países se ha estancado durante el mismo período.

Estos datos ya reflejan la indigencia de una gran parte del trabajo en el mundo, pero la pandemia que estamos viviendo va a empeorarlos hasta cifras verdaderamente inimaginables.

Si en la mayor y más potente economía del planeta, en Estados Unidos, se han perdido ya unos 30 millones de empleos por esta causa, es fácil imaginar lo que está ocurriendo en el resto del mundo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (aquí: <https://bit.ly/2yknElZ>), más de 436 millones de empresas pueden ver interrumpida su actividad (232 millones, pertenecientes al comercio mayorista y minorista, 111 millones a las manufacturas, 51 millones, a los servicios de alojamiento y servicio de comida, y 42 millones al sector inmobiliario y otras actividades comerciales). Y ese cierre de empresas y el cese de la actividad de trabajadores autónomos va a provocar que se pierdan horas de trabajo equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo y que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, casi la mitad de la población activa mundial, corra peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento.

Si no se pone remedio de manera urgente, global y efectiva a esa pérdida de ingresos estaremos a las puertas de un desastre global porque esa pérdida de ingresos vendrá seguida de hambre y de muertes.

La OIT reclama con toda la razón que las medidas de los gobiernos se centren en evitar el colapso y cierre de las empresas y en poner en marcha planes de reactivación basados en la creación de empleo con paquetes de medidas de estímulo y de alivio de la deuda basadas en la cooperación internacional.

Es el momento de recordar a los gobiernos, y también al de España y a la Unión Europea en su conjunto, que no están haciendo lo necesario para evitar que cierren miles de empresas y se salve el empleo. Por no

gastar ahora, están generando un coste financiero futuro mucho más elevado y un daño social y personal sencillamente incalculable.

Salvar ahora el empleo que destruye la crisis de la Covid-19 y aprovechar la reactivación para instaurar mejores condiciones laborales que avancen hacia el trabajo decente no es solamente un imperativo ético para salvar la vida de millones de personas (lo que ya debería ser suficiente) sino un acto de pura racionalidad económica. Actuar como están actuando la inmensa mayoría de los gobiernos, los organismos internacionales y los bancos centrales es una locura.

En el planeta hay recursos suficientes para evitar la indecencia del trabajo, para reducir sustancialmente la jornada de trabajo haciendo que puedan estar empleadas muchos millones más de personas sin que haya tantas desempleadas o en trabajos que no las sacan de la pobreza, y hay riqueza de sobra para que no se tenga que dar la desigualdad vergonzosa que hay entre las rentas salariales más altas y más bajas y entre las del capital y el trabajo.

Según los cálculos de Oxfam Intermon, los 26 individuos que acumulan las mayores fortunas del planeta poseen más dinero que el que suman en conjunto las 3.800 millones personas más pobres.

Y, hoy, un Primero de Mayo más, tendremos que seguir oyendo que no hay dinero suficiente y que el paro se produce porque las condiciones de trabajo son muy rígidas y favorables para los trabajadores o porque los salarios son demasiado elevados.

Uno de los debates más relevantes que debería abrir la actual pandemia de la Covid-19 es sobre el actual sistema de patentes de medicamentos que hay en el mundo.

En términos generales, este sistema permite a los descubridores de algún nuevo fármaco disfrutar de la exclusiva de su venta -al precio que desee- durante veinte años. Un sistema inicialmente concebido para que las empresas privadas que habían invertido mucho dinero en investigar para descubrirlo pudieran tener una compensación adecuada e incentivos para seguir haciéndolo en el futuro. Además, se decía que de esa manera se fomentaría la competencia y que los mercados se encargarían de proporcionar un flujo suficiente de innovaciones farmacéuticas para hacer frente a las enfermedades.

La experiencia, sin embargo, ha mostrado que el sistema de patentes dominantes no proporciona competencia sino una concentración muy fuerte de los mercados, a veces auténticos monopolios; es decir, una sola empresa que domina el mercado y que puede establecer precios muy por encima del coste de producción, lo que le proporciona ganancias extraordinarias a costa, sin embargo, de escasez artificial de medicamentos.

Los ejemplos de la ineficiencia que producen las patentes de los medicamentos son abundantísimos y está más que demostrado que, lejos de generar los efectos benéficos que justificaron su puesta en marcha y desarrollo legal, son la causa de millones de muertes en todo lo mundo, sobre todo, porque su alto precio los hace inaccesibles en muchos países.

Uno de los más recientes tratamientos para hepatitis C de la farmacéutica Gilead, el sofosbuvir, tiene un coste de producción de 101 dólares, según un estudio de la Universidad de Liverpool (aquí: <https://bit.ly/3cMa6Pf>). Sin embargo, se vendía en Estados Unidos a 84.000 dólares, en Francia a 61.000, en Reino Unido a 54.000 y en España a 28.000 dólares (datos aquí: <https://bit.ly/2XeDgiC>): Es decir, a un precio 832 veces más caro de lo que cuesta, en Estados Unidos, y 277 veces más, en España. Para las regiones en desarrollo, el fabricante estableció un precio medio de 2.000 dólares, más bajo pero claramente prohibitivo para la inmensa mayoría de ellos. No puede extrañar, así, que de los casi ochenta millones de enfermos de hepatitis C que hay en el mundo sólo reciban el tratamiento algo más de tres millones.

Hace un par de años se publicó un artículo en el que se analizaron los costes de obtener diez medicamentos contra el cáncer: en promedio, un tiempo de 7,3 años y 648 millones de dólares y, en total, unos 7.000 millones de dólares. Cuando se publicó el artículo habían producido ya 67.000 millones de dólares de beneficio y todavía les quedaban, en promedio, 8,3 años para seguir generando ganancias (aquí: <https://bit.ly/2ZmnVA4>).

También se ha estudiado muy a fondo el por qué de los precios tan elevados de un producto tan necesario como la insulina que impiden que miles de personas puedan tener tratamiento o tenerlo completo, incluso en un país tan rico como Estados Unidos. Allí, los precios subieron un 262% en en 2017-2018 y un 44% desde 2209, así que no es casualidad que se haya descubierto que uno de cada cuatro pacientes con diabetes encuestados experimentarían un uso insuficiente de insulina relacionado con su precio. Las empresas dicen que esos precios son debidos a los altos costes de investigación pero lo cierto es que desde 2009 han distribuido a sus propietarios 122.000 millones de dólares en dividendos o recompra de acciones (todos estos datos aquí: <https://bit.ly/2TqtSZ8>).

Esta última es la prueba de que los precios que establecen las grandes farmacéuticas no responden a sus costes, sino que son el fruto de su condición monopolista: obtienen una rentabilidad mucho mayor que la de otros sectores. En Estados Unidos, mientras las 500 empresas más grandes tienen un promedio de tasa de beneficio del 5%, las 10 empresas farmacéuticas más grandes de ese país registran un promedio del 17% de beneficios. Y eso no sólo es ineficiente sino también injusto pues se ha demostrado que la producción de medicamentos por las empresas farmacéuticas privadas conlleva un gran componente de dinero público que luego no se recupera (investigación que lo demuestra, aquí: <https://bit.ly/3cVou7S>)

No hay que olvidar tampoco, que para mantener sus privilegios monopolistas, las farmacéuticas recurren a todo tipo de malas prácticas que producen aún mayor grado de ineficiencia: acuden constantemente a los tribunales para evitar que se desarrollen productos genéricos de bajo coste, sustituyen las moléculas para producir otros medicamentos idénticos o los venden bajo otra denominación gastando cifras fabulosas en marketing. Y una de las peores consecuencias de que la producción de medicamentos esté sometida a la iniciativa privada es que, lógicamente, las empresas se dedican a producir los medicamentos que tengan demanda solvente y no a los que responden a las necesidades de las personas, por muchas que sean, sin ingresos suficientes para costearlos.

La pandemia de la Covid-19 está poniendo en primer plano este problema. Algunas empresas en posición de monopolios, como 3M en la producción de diversos tipos de mascarillas, han dificultado que se pueda

disponer de suficiente número de ellas; lo mismo ha sucedido con unos respiradores denominados N95, además de con algunos productos (remdesivir, favipiravir y lopinavir) que al parecer podían proporcionar buenas respuestas frente al virus y que están sometidos a diferentes patentes que impiden su utilización masiva.

El caso más esperpéntico que se está produciendo en las últimas semanas es el de algunas empresas fantasmas que registran patentes de kits de pruebas de detección de la Covid-19 realmente inexistentes, de modo que bloquean las que puedan ir descubriéndose y reclaman derechos millonarios por algo que, en realidad, no han descubierto previamente (información (aquí: <https://bit.ly/2LNF7GQ>)).

El derecho de patentes sobre medicamentos que hoy día existe en el mundo (e igual podríamos decir de las patentes sobre semillas u productos básicos para la vida humana) es sencillamente criminal. Los precios de monopolio que genera comportan escasez artificial de medicamentos que produce millones de muertes en todo el mundo. Es imprescindible que se modifique para que se pueda desarrollar la ciencia abierta que permite obtenerlos a precios mucho más bajos que los hagan completamente asequibles para toda la población mundial que los necesite. Aunque limitadas, ya tenemos experiencias de que eso es posible y pruebas de que, cuando se actúa de otro modo, los resultados son mejores. Así lo demuestran, por ejemplo, las redes de investigación, de laboratorios y fundaciones sin ánimo de lucro que hacen posible que todos los años dispongamos de vacunas contra la gripe, el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza de la Organización Mundial de la Salud, o el Fondo de Patentes de Medicamentos, también de las Naciones Unidas.

¿De verdad creen que algo tan fundamental como una vacuna frente a la Covid-19 puede quedar simplemente en manos de una empresa monopolista que pudiera venderla a un precio desorbitado que le permitiera obtener beneficios multimillonarios, tal y como ocurre con tantos y tantos otros medicamentos? A mí me parece una barbaridad y por eso me resulta inexplicable, salvo por razones de una torpeza tan grande en la que me cuesta trabajo creer o de pura complicidad con las grandes empresas, que los gobiernos no estén dando pasos decisivos en este sentido. Ya es hora de acabar con las normas que contemplan la vida humana en este planeta como una simple fuente de ganancias para un puñado de grandes empresas.

El gobierno ha anunciado ya las condiciones en que se producirá la desescalada material de la situación de alarma en la que nos encontramos pero las empresas y trabajadores autónomos se encuentran en una situación de enorme incertidumbre e inseguridad que incrementa peligrosamente la vulnerabilidad de nuestra economía.

Nadie puede negar que la situación a la que se está haciendo frente es sumamente difícil, que no había protocolo alguno que estableciera lo que había que hacer y lo que no en esta emergencia sanitaria y económica y que, por mucho que se quiera comparar, la situación de cada país es distinta no sólo por el acierto o desacierto de los gobiernos que, en este momento puntual, han tenido que hacer frente a la pandemia. Es seguro que de no haberse producido los recortes en servicios públicos (sobre todo, sanitarios) que se han llevado a cabo en España en los últimos años, de haber estado en otra situación nuestras residencias de mayores, por ejemplo, la evolución del daño hubiera sido distinta. Lo mismo que, pasado el tiempo, se analizará el efecto tan negativo que está teniendo la decepcionante respuesta de la Unión Europea, incapaz de actuar como lo que se supone que es, un grupo de países que unen sus esfuerzos con un destino compartido y común.

Tampoco creo que nadie pueda poner en duda la firme voluntad que está teniendo el Gobierno de España para evitar que las personas y grupos sociales más desfavorecidos sufran en mayor medida que los demás las consecuencias terribles de la pandemia, como nos consta que ocurrió en crisis anteriores.

Circunstancias como esas hay que tenerlas en cuenta, pero no se pueden utilizar para ocultar los errores que se cometan y las lagunas que se observan en las medidas que se estén aplicando. Hay que tratar de desvelarlos con lealtad y contribuir de la manera en que cada uno mejor pueda a corregirlos.

En los próximos días y semanas se va a ir produciendo la reactivación de la vida económica y, sin embargo, las empresas y trabajadores no tienen las mínimas certezas de las que hay que disponer para abrir los negocios con un mínimo de seguridad.

Esto es algo muy importante y que el gobierno quiero creer que ya habrá considerado: puede ocurrir que haya muchas empresas que decidan no volver a abrir, a pesar de poder hacerlo ya, si no disponen de

información suficiente sobre lo que vaya a suceder con las ayudas que hasta ahora estén recibiendo o con la gestión de sus plantillas.

El gobierno debe informar cuanto antes de la estrategia que va a seguir en esas materias y más vale ser cauto, poniéndose en el peor de los lugares, que no tratar de contentar a todos ofreciendo escenarios que luego no vayan a poder cumplirse, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

Miles de empresas y trabajadores autónomos están gastando su ahorro o se están endeudando para seguir pagando gastos que son ineludibles y una gran parte se empieza a encontrar en una situación límite, sin saber si van a contar con más ayudas, si el plan de desescalada será firme o si, a la vuelta, el tipo de negocio que habían desarrollado va a seguir teniendo la misma demanda o podrá llevarse a cabo en las condiciones de siempre.

Es cierto que el gobierno se enfrenta a las mismas incertidumbres y que tiene muchas más dificultades que una empresa en concreto para determinar qué va a ocurrir en el futuro más inmediato, pero, desgraciadamente, este argumento no vale en una situación de emergencia. Si se va a dejar caer a las empresas se debe decir cuanto antes porque el destrozo y el coste que sufriremos todos serán mucho mayores si, por no querer asumirlo ahora, se va dejando que sea el tiempo quien vayan pasando la cuenta.

Sigue siendo imprescindible que las empresas reciban ayuda incluso cuando se haya producido la vuelta a la actividad. Esta no va a ser ni inmediata ni completa, de modo que será un error memorable que se deje que todas las empresas y todos los trabajadores autónomos reemprendan sus negocios como si sólo se tratara del despertar de una mala noche en una mala posada. El gobierno debe ofrecer cuanto antes una estrategia de apoyo, todo lo modulada que haga falta pero efectiva y que no puede seguir pasando por fomentar su endeudamiento. En una situación como esta, es el Estado quien debe endeudarse y no miles de empresas y trabajadores autónomos. Aunque, eso sí, ese endeudamiento gubernamental debe ser entendido, asumido y apoyado por la ciudadanía como un esfuerzo imprescindible de la nación en su conjunto y que debe ser asumido por cada uno en función de nuestra particular capacidad de pago. Para lo cual es fundamental que exista liderazgo y mucha y buena pedagogía.

En concreto, creo que deben contemplarse tres cuestiones principales.

La primera, la ayuda en metálico que no sólo no puede desaparecer, sino que se debe hacer mucho más ágil y efectiva.

La segunda es el paréntesis fiscal que debe continuar, para evitar que la vuelta a la actividad produzca el ahogo definitivo de la ya de por sí

escasa liquidez de las empresas y autónomos. El calendario fiscal debe dar prioridad ahora a su salvamento y el Estado deberá cubrir -endeudándose en lo que haga falta, como acabo de decir- el roto que eso lógicamente supone para las finanzas públicas. El coste que todos tendremos que asumir más adelante si no lo hace ahora será mucho mayor.

La tercera cuestión que hay que poner sobre la mesa con carácter inmediato y urgente es la relativa a la gestión de las plantillas de las empresas. Yo he defendido y defiendo que hay que evitar que haya empresas que utilicen las ayudas recibidas del Estado para cambiar con oportunismo su plantilla (como, desgraciadamente, están haciendo muchas). Sin embargo, esa prevención no puede llevar a mantener una posición maximalista que puede tener un coste terrible en cuanto a pérdida de empleo se refiere.

Por un lado, es evidente que la vuelta a la actividad no va a ser, como he dicho, ni completa ni inmediata. Y, por otro, también lo es que muchas empresas, afortunadamente, han comenzado ya a reinventarse o lo van a hacer enseguida. Cuando abran tendrán que acomodar su negocio a los nuevos planes de gasto de los consumidores, a los miedos y nuevas pautas de consumo, a la exigencia del distanciamiento... o puede ser que incluso hayan virado completamente su actividad para poder sobrevivir. Lógicamente, todo eso tiene un efecto directo sobre su política de personal, así que no se puede pretender que, por mucha que haya sido la ayuda que hayan recibido, mantengan una misma estructura de personal idéntica a la anterior.

Entre el malgastar la ayuda recibida o utilizarla con oportunismo y el realizar esos cambios positivos que a la postre salvan empleo, hay mucha distancia y las normas, por tanto, se deben establecer con enorme flexibilidad para poder contemplar la realidad de cada caso.

Por tanto, se debe hacer lo necesario para que los ERTES se vayan resolviendo de una manera flexible y adaptada. En otro caso, se puede dar lugar a que muchas empresas que pudieran comenzar a tener actividad decidan no reiniciarla si la demanda o las nuevas condiciones del negocio no les permiten (como es lógico que les ocurra en muchos casos) asumir a la totalidad de la plantilla anterior.

Prórroga fiscal y flexibilidad laboral negociada y bien definida son, en este momento, las claves para que la vuelta a la actividad no se convierta en un verdadero desastre. Aunque no es lo único imprescindible para evitarlo.

Tampoco se puede olvidar que es fundamental dar ayuda de choque y urgente a las familias que se encuentran en situación de carencia extrema y que no están recibiendo ningún apoyo. Me temo que una vez más se ha demostrado que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tratar de

configurar en situación de emergencia un mecanismo perfeccionado de ingreso mínimo, con todas sus cautelas y garantías, quizá no haya sido la mejor idea cuando la necesidad de miles de personas apura en tan gran medida.

Además de hacer lo que acabo de señalar, el gobierno debe evitar seguir cometiendo los tres errores garrafales que empañan hasta ahora la gestión que realiza de la crisis, eso sí, con una gran preocupación social.

En primer lugar, no puede seguir actuando como El Llanero Solitario frente a la pandemia. Me resulta verdaderamente incomprensible que este gobierno no se dé cuenta del coste político tan tremendo que le está suponiendo el no haber convocado desde el primer momento y permanentemente a todas los partidos políticos, agentes sociales y autoridades autonómicas y del Estado para realizar y protagonizar conjuntamente el seguimiento de la crisis. Cada día que pasa es un paso más hacia el abismo y no sé si aún se estará a tiempo de arreglarlo, pero el gobierno debe rectificar cuanto antes en este sentido.

En segundo lugar, y por razones obvias que no voy a detenerme a comentar, el gobierno debe mejorar también la comunicación de sus estrategias.

Finalmente, también se debe corregir cuanto antes el grave error de haber circunscrito el diseño del llamado plan de reconstrucción a una comisión parlamentaria sin apenas contenido, sin el apoyo necesario, que no parece que haya comenzado a hacer algo y, en principio, como algo ajeno a la propia actuación del gobierno.

Ya casi estamos en el día después (si el destino no nos devuelve en unos pocos meses a la casilla de salida y esto sí que tiene mucho que ver con la responsabilidad de las personas corrientes) y la ciudadanía no sabe qué va a pasar (más allá de las condiciones en que se producirá la desescalada), cómo vamos a salir de todo esto y de qué manera se podrá hacer frente a un futuro económico tan incierto. También me parece mentira que este gobierno no se dé cuenta, a la hora de pensar en el futuro, de lo importante que es la complicidad social y ciudadana, la participación de todas las personas y organizaciones que llevan pensando en los problemas de España durante años e incluso resolviéndolos en el día a día. Cuanto antes, con la máxima urgencia, el gobierno debería hacer una gran convocatoria nacional que permita aflorar la creatividad y el compromiso de los españoles de todas las comunidades y nacionalidades. En otras ocasiones hemos sido capaces de poner en marcha grandes proyectos y podríamos volver hacerlo ahora que es mucho más necesario.

Los economistas, gobiernos y organismos internacionales están tratando de predecir cómo será la salida de la crisis, una vez que se haya detenido la propagación del virus.

Los más optimistas defienden un escenario esperanzador en forma de "V". Creen que a finales de este verano se habrá acabado la fase de confinamiento y que en el último trimestre todos los negocios y actividades irán volviendo a la normalidad. Estiman que eso hará que a lo largo de 2021 se produzca un rebrote considerable de la vida económica que permitirá registrar tasas de crecimiento de entre el 5% y el 10%, suficientes para que las economías se pongan en marcha de nuevo para otro periodo de expansión.

Este es el escenario que defienden como más probable el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los gobiernos y se justifica por la rapidez con que aparentemente se está recuperando la economía china, una vez que se detuvo allí la propagación del virus.

Es normal que este tipo de instituciones sean las que traten de hacernos creer que ese recorrido, tan optimista, será el que se va a dar porque son las que están aplicando políticas y, para que sean aceptadas más fácilmente por la población, necesitan convencerla de que darán los resultados más positivos.

Lo malo de esa previsión es que son justamente esas instituciones las que vienen equivocándose en mucha mayor medida a la hora de hacer predicciones desde hace décadas, así que, ya de entrada, cuesta trabajo creerlas.

Según un estudio que realiza desde hace años la escuela de negocios ESADE, el mayor error en la previsión de crecimiento del PIB de 2019 para nuestro país lo tuvieron, por este orden, el Banco de España, el BBVA, la OCDE, la Comisión Europea y el Gobierno. Aunque es verdad que el grado de acierto de casi todos ellos es muy variable a lo largo del tiempo, es bastante significativo que quien más directamente tiene que ver con la aplicación de las políticas sea quien más se ha equivocado. Así que tengamos esto en cuenta antes de creerse a pies juntillas sus previsiones.

Por otro lado, las previsiones menos optimistas señalan que la recuperación no se va a producir ni rápida, ni fuertemente, sino que la caída grande de la economía que se está produciendo vendrá seguida de una fase de depresión porque las empresas no van a volver a la actividad completa ni en las mismas condiciones que había antes del encierro, cuando

este termine. Por eso creen que la senda de salida de la crisis tendrá forma de "U": el crecimiento sólo se recuperaría después de una etapa de depresión, que sería más o menos larga dependiendo de los estímulos que se puedan dar desde los gobiernos durante y después de la crisis.

Otros economistas defienden que lo más probable es que la salida no se produzca ni en "V" ni en "U". Creen que la economía levantará cabeza rápidamente una vez que se vayan abriendo los negocios (aunque no en tan gran medida como defienden las previsiones más optimistas, es decir, no en uve mayúscula) y que, precisamente la prisa por hacer que esto se produzca cuanto antes y la previsible carencia de una vacuna hasta que no pase un largo periodo, puede llevar a que se dé un segundo brote de infección que obligue a establecer nuevas medidas de confinamiento. La economía volvería a caer de nuevo generando un recorrido de doble uve minúscula.

A mi juicio, ninguno de esos tres escenarios es el más previsible, o el que más se ajusta a la realidad económica de nuestros días.

De la crisis del coronavirus se saldrá en los próximos meses porque el confinamiento no va a ser eterno y porque los gobiernos de los países más poderosos están tomando medidas para garantizar que la mayor parte de las empresas puedan sobrevivir a esta fase de encierro. Algunos, si lo hacen bien, podrán utilizarla para reformar sus modelos de crecimiento, se adaptarán mucho mejor a las condiciones cambiantes que se están abriendo paso en la economía internacional e incluso pueden salir reforzados. Pero es muy ingenuo creer que eso es lo que va a ocurrir de manera general. Algunos, como Estados Unidos, Italia o España, por no hablar de los más débiles de América Latina o Asia, van a tener muchas dificultades para salir adelante sin un gran destrozo, pues no están adoptando todas las medidas que hubieran podido evitar la destrucción tan grande de sus aparatos productivos que se está comenzando a producir. Y, con independencia de ello, aunque todos los países hubieran tenido el acierto y la posibilidad de aplicar las mejores medidas posibles, lo cierto es que ni siquiera así se podría evitar que la salida a la crisis sea más traumática de lo que señalan las predicciones que se vienen realizando.

Lo mismo que en el planeta se padece ahora una pandemia provocada por el coronavirus, la economía internacional viene sufriendo desde los años setenta del siglo pasado otro tipo de "pandemia" de la que apenas se habla, para que no se vean las vergüenzas de las políticas económicas neoliberales que se aplican desde entonces. Me refiero a la "pandemia" de crisis financieras que se han registrado en los últimos cincuenta casi sin parar. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (aquí: <https://bit.ly/2XnnZx0>), desde 1970 a 2017 se habían producido 151 episodios de crisis bancarias sistémicas, 74 de deuda soberana y 236 de divisas en todo el mundo. Es cierto que muchas de ellas se entremezclan,

pero si se sumaran todas darían un total de 461, es decir nada más y nada menos que 9,8 crisis por año.

Las investigaciones que se han realizado sobre todas ellas han puesto de relieve una correlación estrechísima entre su frecuencia y dos factores principales: la liberalización de los movimientos de capital y la desigualdad. Cuanto más libertad tiene el capital para realizar operaciones en todo el mundo y cuanto más desigualdad se registra en el planeta, mayor número de crisis financieras se producen. Los datos no dejan lugar a dudas sobre ello. Es muy significativo, por ejemplo, que de 1945 a 1970 casi no se produjera ni una sola crisis financieras en todo el mundo (muy pocas en las economías más atrasadas y prácticamente ninguna en las avanzadas, según el mismo estudio). Algo que pudo ocurrir gracias a que había controles muy estrictos a los movimientos de capital, porque apenas se producía la especulación financiera y porque había mucha más igualdad.

En los últimos años, esos factores que van a unidos a la mayor frecuencia de crisis financieras se han reforzado: cada día hay mayor desigualdad y están aumentando las fuentes de la volatilidad de los capitales, como la deuda, la especulación bursátil, la pérdida de rentabilidad del capital material, la crisis del comercio internacional y de los sistemas monetarios, y la insolvencia generalizada de la banca internacional.

Para colmo, además de esos detonantes de crisis financieras, en los últimos tiempos se están abriendo otras fracturas en nuestras economías y sociedades que también producen crisis económicas: en especial, las que tienen que ver con el mal uso que hacemos del medio ambiente y de los recursos naturales (la pandemia de coronavirus, querámoslo o no, es una expresión de ello). El crecimiento desaforado, los deshechos y desperdicios que acumulamos, el despilfarro y la destrucción que sembramos a nuestro alrededor nos pasan una factura cada día más elevada en forma de costes reales que no contabilizamos, de desequilibrios alimentarios y productivos y de malestar que impide que podamos aprovechar la productividad que, por otro lado, nos proporciona el desarrollo tecnológico.

Nadie sabe cómo será nuestro futuro. Aunque sí podemos estar seguros de algo: mientras no se afronten estos factores continuados de perturbación, mientras no se ponga coto a la especulación financiera y a la acumulación vertiginosa de la riqueza en tan pocas manos, la salida a esta crisis no podrá ser otra que una sucesión de otras nuevas. No será ni en "V", ni en "U" y ni siquiera en "vv", sino en una sucesión de subidas y bajadas, de crisis frenéticas que pueden herir de muerte al planeta.

Afortunadamente, sabemos qué se podría hacer para evitarlo y esta misma crisis que estamos viviendo nos lo indica cuando nos muestra el valor esencial de los servicios públicos, del cuidado, de respetar las leyes de la naturaleza y no jugar con ella, de anteponer la lógica de la vida a la

del beneficio, la necesidad de contar con sistemas seguros para el aprovisionamiento de los bienes, servicios o financiación que nos resultan esenciales, o que la creación de riqueza que debemos promover es la que satisface las necesidades de los seres humanos y no sólo los privilegios de las finanzas. Sólo si tomamos conciencia de esto podremos empezar a vivir con menos sobresaltos.

La sentencia que el pasado martes promulgó el Tribunal Constitucional de Alemania sobre la actuación del Banco Central Europeo va mucho más allá de lo que se está diciendo. En realidad, viene a producir el mismo efecto de decirle al rey que estaba desnudo cuando nadie se lo había querido decir antes.

La decisión del tribunal responde a una demanda que diversos ciudadanos alemanes presentaron en 2015 alegando que el Banco Central Europeo se había excedido en las competencias que le dan los tratados cuando realizó compras masivas de deuda pública de los diferentes estados europeos y tiene, al menos, tres grandes implicaciones.

La primera es de carácter jurídico y no voy a entrar en ella, aunque es muy importante: el constitucional alemán corrige al Tribunal de Justicia Europeo y no se siente concernido por lo que éste había sentenciado en su día sobre los programas de compra de deuda pública del BCE. Desconozco qué consecuencias concretas puede tener esta posición del más alto tribunal alemán, pero sorprende que corrija de una forma tan rotunda y radical al europeo, al que acusa de "ignorar por completo" las consecuencias de dichas compras.

La segunda implicación de la sentencia tiene que ver con un asunto sobre el cual ya se había pronunciado el tribunal alemán en una demanda anterior relativa a otro programa previo de compra de deuda de los Estados.

Los demandantes volvían a plantear que el BCE podía haber infringido la prohibición de financiar a los gobiernos que está establecida en el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero, en este asunto, el constitucional ratifica su sentencia anterior y señala que "no ha podido establecer" que este nuevo programa sea contrario a ese mandato. Un juicio que, a mi modo de ver, muestra el enorme cinismo de las instituciones europeas.

Para eludir dicha prohibición, el BCE justificó la compra de deuda pública diciendo que lo hacía para luchar contra la bajada de los precios (deflación), cumpliendo así con su deber de mantener su estabilidad. Sin embargo, incluso aceptando que esa sea una actuación debida del BCE, lo cierto es que el Tratado no prohíbe que se financie a los gobiernos para unas cosas y no para otras, sino en cualquier circunstancia. Basta leerlo para comprobarlo sin ningún género de dudas. ¿Cómo se puede explicar,

si no, que los tribunales acepten que el BCE gaste cientos de miles de millones de euros en financiar a los gobiernos para que los precios no bajen del 2% y que no lo haga cuando se está produciendo una emergencia sanitaria global?

Lo cierto -por mucho que los tribunales e instituciones europeas digan otra cosa- es que el BCE financió a los gobiernos para evitar que los mercados provocaran una crisis de deuda fatal. No lo hizo directamente pero, al comprar en los llamados mercados secundarios, no sólo aseguró la financiación de los gobiernos, sino que aseguró que sería el banco quien iba a financiarlos, evitando así que los mercados siguieran afectándola. Se quiso negar lo evidente pero lo evidente está ahí: la prohibición es absurda porque hay momentos en que no hay más remedio que saltársela si no se quiere permitir que se produzca un problema económico mucho mayor y de otro modo insalvable. El BCE se la saltó y, por cierto, salvó así a la Unión Europea de una crisis de consecuencias inimaginables.

La tercera implicación de la sentencia alemana es, a mi juicio, la más sutil e importante.

Dice el tribunal que no se puede determinar si el BCE financió o no a los Estados pero que sí lo hizo provocando efectos sobre "prácticamente todos los ciudadanos", como " accionistas, propietarios, ahorradores o titulares de pólizas de seguro", generando "pérdidas considerables para el ahorro privado" debido a los bajos tipos de interés que impuso el BCE son su política de compra masiva de títulos en los mercados. En consecuencia, el tribunal alemán da tres meses al BCE para que justifique si esa política tuvo más beneficios que esos perjuicios. Si no lo hace, el banco central alemán (que es, como el resto de los bancos centrales de los diferentes países, quien realiza las compras) no sólo debería abstenerse de seguir comprando en los mercados con ese fin, sino que incluso que debería revender lo comprado. Y la sentencia llama explícitamente al parlamento y al gobierno alemanes para que sometan a juicio lo que hace el BCE y, llegado el caso, lo impugnen en la misma medida en que lo haga el tribunal, si su respuesta no fuera satisfactoria. La importancia de este criterio del constitucional alemán es grandísima por lo siguiente.

Cuando se fue a establecer la independencia de los bancos centrales, sus defensores argumentaron que la competencia de estos últimos, la política monetaria, era una cuestión puramente técnica, mantener la estabilidad de los precios, y que por eso su independencia no afectaba al principio constitucional que reserva al parlamento la toma de las decisiones fundamentales de la política económica. Afirmaban que su directivos eran como una especie de relojeros o ingenieros que simplemente cuidan de que las piezas de la maquinaria estén donde tengan que estar para que funcione correctamente, sin adoptar el tipo de decisiones "políticas" que

toma, por ejemplo, la política fiscal que sí debe ser discutida y aprobada, por esa razón, en los parlamentos.

Frente a ese argumento, muchos economistas y juristas señalamos que la independencia de los bancos centrales viola los principios esenciales del Estado de Derecho porque implica que una parte fundamental de la política económica que también afecta de lleno a la distribución de la renta y que, por tanto, tiene evidentes connotaciones políticas, quede al margen de la decisión del pueblo soberano.

A los parlamentos se les seguiría concediendo la potestad de elaborar el presupuesto (justo lo que acabó con el Estado absolutista y dio paso al democrático) pero sería una potestad formal, secuestrada, o muy limitada si el banco central se instituía como un poder independiente. Esto es así porque, con las reglas y condiciones que un banco central independiente puede establecer, los parlamentos no tienen ya capacidad efectiva para elaborar cualquier presupuesto sino sólo aquel que encaja en lo establecido por esa autoridad monetaria que está al margen de los poderes representativos. Se rompe así el principio fundacional y básico, en materia económica, de los estados democráticos (este es un tema más complejo y me limitaré a decir que, para evitar este evidente efecto, se recurrió a "constitucionalizar" las reglas de comportamiento fiscal vinculadas a signo de la política monetaria dominante). Al mismo tiempo, también se rompe con un principio básico de la teoría económica. A saber, que la política fiscal y la monetaria no son independientes entre sí, sino que lo que haga una afecta directamente a la otra y que, por esa razón, o están coordinadas o alguna de ellas se impone, como ocurre con la monetaria cuando el banco central es independiente.

Lo que acaba de hacer ahora la sentencia del Tribunal Constitucional alemán es, nada más y nada menos, que darle la razón a quienes defendemos que la actuación de un banco central no es solo una cuestión técnica sino tan política o más que cualquier otra de carácter económico y que, por tanto, debe estar sometida al control y a la decisión del pueblo soberano si se quiere vivir en una auténtica democracia.

No sé si la cuestión llegará lejos o no. Puede ser que el BCE argumente y el constitucional dé por buena su justificación, evitando así una crisis institucional. Aunque lo lógico sería que una autoridad como el BCE esté obligada a hacer efectiva su independencia y no se sienta concernida por el reclamo de un tribunal nacional (curiosa paradoja de la democracia moderna). Al fin y al cabo, eso simplemente supondría que el banco central alemán tendría que dejar de participar en los programas de compra del BCE, sin impedir que lo siguieran haciendo los demás bancos centrales, aunque sí limitaría su efecto.

La Unión Europea se ha construido a base de mucho cinismo y es especialista en hacer encaje de bolillos. La Comisión, el Parlamento o el Tribunal de Justicia europeos han sido capaces de asumir que la compra de deuda de los gobiernos en el mercado secundario no es una compra de deuda de los gobiernos para financiar a los gobiernos. Por la misma razón, ahora podrán seguir asumiendo que la política monetaria del BCE que según el constitucional afecta por desigual a los ingresos y patrimonio de "prácticamente todos los ciudadanos" es una pura cuestión técnica que para nada tiene que ver con las decisiones políticas que en una democracia deben estar sometidas al escrutinio popular.

Si yo fuese más optimista de lo que últimamente lo soy, creería que la sentencia tira por fin de la manta y que va a impedir que las instituciones europeas sigan defendiendo lo indefendible. Es decir, que los gobiernos europeos se darán cuenta de que es imposible evitar crisis y resolver bien los problemas económicos sin un banco central que los financie, para evitar que la factura de los intereses se dispare; que la política monetaria debe coordinarse con la fiscal; y que, por tanto, el banco central no puede actuar por su cuenta sino en estrecha colaboración con las instituciones democráticas que representan las preferencias ciudadanas.

Antes o después se darán cuenta y se cambiará un precepto que tanto daño está haciendo a la economía, a la ciudadanía y a la Unión Europea en su conjunto.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) es una institución que comenzó a funcionar en 2014 para garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española. El artículo que se aprobó de prisa y corriendo como imposición europea en medio de la anterior crisis y que antepone el pago de la deuda a cualquier otro objetivo de la política económica española.

La idea de que existan este tipo de autoridades independientes para velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales es muy buena. La lástima es que sólo existan específicamente para garantizar este nuevo "deber fundamental" de pagar la deuda y no para garantizar el pleno disfrute de otros derechos, como el de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y a los demás que nuestra Constitución reconoce a todos los españoles.

En cumplimiento de su misión, la AIRF publicó hace unos días un informe en el que analiza la Actualización del Programa de Estabilidad 2020- 2021 (APE) del Gobierno, un documento que conviene tener muy presente, como todos los que realiza, precisamente porque los elabora, con plena independencia de criterio, un equipo de alta cualificación profesional.

El informe parte de reconocer el "profundo impacto" de la pandemia, sus "indudables efectos negativos en las cuentas públicas" y la "extrema incertidumbre" que provoca a la hora de hacer previsiones macroeconómicas. Para analizar su efecto sobre los ingresos y gastos públicos, establece varios escenarios y no se limita a analizar a corto plazo la respuesta a la crisis sino que adopta una perspectiva temporal más amplia, para poder analizar sus posibles consecuencias sobre la sostenibilidad a medio plazo de nuestras finanzas públicas.

En general, el informe de la AIRF no se aleja sustancialmente de lo contemplado en el análisis del Gobierno, aunque lo corrija en algunos aspectos concretos, sobre todo, en relación con las previsiones fiscales. De hecho, considera que el escenario macroeconómico que éste último planteó en su Plan de Estabilidad "es razonable", aunque la extrema incertidumbre lógicamente permita contemplar algún otro. Sobre todo, porque no se pueden descartar riesgos epidemiológicos que la AIRF considera, con toda la razón, que pueden producir "daños persistentes en la capacidad productiva de la economía y en el empleo, que dificulten la

recuperación de la demanda y de la actividad cuando finalicen las restricciones".

En este artículo no voy a comentar el planteamiento de los distintos escenarios que plantea el informe y ni siquiera sus conclusiones sobre el efecto que la crisis tendrá sobre la producción y los ingresos y gastos públicos, pues me interesa más señalar las consecuencias de todo ello sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en especial, reflexionar brevemente sobre las recomendaciones que realiza. Simplemente mencionaré la que me parece que es su conclusión principal y la que posiblemente va a condicionar en mayor medida la evolución de nuestra economía en los próximos años: "La propagación de la COVID-19 va a provocar un aumento fuerte, y en principio temporal, del déficit público que a su vez acarreará un incremento permanente en el nivel de deuda pública sobre el PIB".

En concreto, el informe de la AIRF prevé un aumento en la ratio de deuda sobre PIB de entre 20 y 27 puntos en el año 2020, y de otros 2 puntos adicionales en 2021, situando la ratio de deuda sobre PIB en un rango entre el 115 y el 122%, en 2020, y entre el 117 y el 124%, en 2021.

Como dije al principio, la misión de la AIRF es garantizar el cumplimiento del principio constitucional de estabilidad presupuestaria y lo que hace su informe, en consecuencia, es señalar cuál es el horizonte en el que se van a situar las finanzas públicas para ofrecer recomendaciones que eviten que la deuda siga aumentando.

El informe responde a estas dos cuestiones de una manera clara y concreta.

Por un lado, indica que "para mantener estable en 2030 el nivel de deuda de 2021, sería necesario realizar a lo largo de la próxima década un ejercicio de consolidación fiscal similar al realizado en la década pasada, y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2030. Adicionalmente, habría que mantener el equilibrio presupuestario casi otra década para poder digerir enteramente las consecuencias de esta crisis, y volver al nivel previo de una ratio del 95,5% del PIB en 2038".

Por otro lado, las recomendaciones del informe son las siguientes: flexibilidad ante estas situaciones excepcionales y que, para ello, el Gobierno active la cláusula de excepcionalidad presupuestaria; dar prioridad a las respuestas de corto plazo frente a cualquier otra consideración; no perder de vista, sin embargo, su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas; elaborar un estrategia de salida fiscal que requiere un Plan de reequilibrio nacional que tenga en cuenta el contexto comunitario; contar con una verdadera planificación presupuestaria plurianual; y hacer un seguimiento estrecho de las medidas que no tienen un impacto inmediato en el déficit público pero que pueden tenerlo en el futuro, además

de otras que viene haciendo la AIRF respecto a su relación con el gobierno.

El planteamiento, las conclusiones y las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española me llevan a hacerme algunas preguntas.

¿Alguien puede creer de verdad que es verosímil hacer escenarios financieros a veinte años vista, tal y como evoluciona el mundo?

¿Se puede descartar que de aquí a 2040 vayan a producirse otras crisis iguales o peores que la que estamos viviendo, o cualquier otro tipo de perturbaciones económicas, para poder sostener que la consolidación fiscal y el equilibrio presupuestario continuados son una opción realista, que se pueda mantener como si nada durante dos décadas?

¿No tiene nada que comentar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre el efecto que veinte nuevos años de un ajuste fiscal basado en recortes del gasto podrían tener sobre la economía y el bienestar de los españoles? ¿No ha servido de nada lo que ha ocurrido durante y después de la última crisis?

Si se da por bueno que ha de cumplirse el precepto constitucional de la estabilidad presupuestaria (impuesto por los acreedores para mejor cobrar y no porque sea lo más conveniente para la mejor marcha de la economía y el bienestar social) ¿no tiene la AIRF ninguna consideración que hacer sobre la forma en que conviene que se logre, ninguna propuesta para evitar que esa estabilidad se convierta, de nuevo, en un freno a la actividad que produce no menos sino más déficits y deuda?

¿Acaso no se ha podido comprobar ya que las políticas de rigor presupuestario como las europeas que vigila la AIRF no disminuyen la deuda pública, sino que la aumentan? Así lo demuestran los últimos datos de Eurostat: en la UE(28) la deuda pública pasó de 10,2 billones de euros en 2010 a 13,53 en 2019; de 8,1 billones a 10 billones en la eurozona (19) y de 0,65 billones a 1,2 billones en España. Y eso teniendo en cuenta que en esta última década ha habido tipos de interés muy bajos y casi una mitad de los años con fuerte crecimiento económico.

¿Todavía no se ha dado cuenta la Autoridad que la estabilidad presupuestaria no puede ser un objetivo en sí mismo sino un instrumento para frenar el incremento de la deuda, que esta no se origina solamente por el descuadre contable de los presupuestos públicos sino que es el efecto de otros problemas?

Ante una inundación (el incremento tremendo de la deuda), lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que hay que hacer es bajar el nivel del agua (el déficit). ¡Pues claro que sí! Eso es lo que vienen diciendo esta y las demás autoridades europeas, sin haber

aprendido nada de la crisis anterior y de lo que ha ocurrido en las décadas anteriores en la economía mundial. Son bomberos que ante un incendio se dedican a decir que hay que apagar el fuego mientras dejan suelto al pirómano.

La deuda (la acumulación de déficit) no es algo que se origine sólo en las cuentas públicas sino también en las de los hogares y empresas de menor poder de mercado y es debido a causas que las autoridades no parece que quieran entender: la acumulación de riqueza en las grandes fortunas y corporaciones, el predominio de la actividad financiera, el enorme poder de los bancos, la desfiscalización, el descrédito de los impuestos, el fraude y la evasión fiscal... ¡y las políticas de estabilidad presupuestaria! cuando la iniciativa privada es incapaz de impulsar la actividad productiva porque hay excesivo ahorro de los grandes perceptores de renta y demasiada utilización improductiva de los recursos.

Poniendo su atención en el mero saldo contable de las finanzas públicas, en lugar de abordar las causas que provocan la deuda, autoridades como la AIRF hacen ellas mismas el roto que nos dicen que quieren coser.

En el buscador de su página web no hay referencia alguna a términos como fraude, evasión o elusión fiscal y entre sus estudios no he encontrado los que exploren nuevas fuentes de ingresos públicos que sean más justas y menos onerosas para quienes se dedican a crear riqueza productiva y empleo en lugar de especular en los mercados financieros. ¿Quién puede creerse que se va a reducir la deuda española de aquí a veinte años a base de reducir gasto público sin provocar un problema económico y social aún mayor que el que se trata de resolver? La experiencia, los datos, la historia nos demuestran claramente que eso, ni sería bueno, ni es posible.

En cualquier caso, es evidente que la responsabilidad por las carencias que tienen este tipo de respuestas a los problemas de nuestras finanzas públicas no sólo la tienen quienes realizan este tipo de informes, ajustados a la misión que se le encomienda a sus autores. La tienen quienes desde más arriba asumen unas políticas tan irresponsables, por infundadas, equivocadas e injustas.

Hace mucho tiempo, las montañas se hincharon haciendo un ruido estremecedor, daban señales de parir y los hombres esperaban ese parto con mucho miedo y asombro por saber qué clase de monstruo iban a abortar; al fin, resultó que el temible fruto de los montes era un ridículo ratón, lo cual causó carcajadas.

Me parece que la vieja fábula de Esopo es lo que mejor se ajusta a la definitiva decisión del Eurogrupo sobre las ayudas que la Unión Europea dará a sus socios para combatir la pandemia.

Da casi hasta vergüenza tener que repetirlo una vez más, pero no queda otro remedio: la respuesta de los líderes europeos a la situación económica más catastrófica de los últimos 75 años (si no más) es decepcionante.

Lo que ayer acordaron fue poner a disposición de los diferentes países una cantidad de hasta el 2% del PIB conjunto en forma de créditos al 0,115% de interés y a devolver en diez años. Unos créditos que sólo se podrán utilizar para hacer frente a los gastos directa o indirectamente asociados a necesidades sanitarias, a la atención médica, la cura y la prevención de la Covid-19. Los créditos se realizarán a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) aunque, en esta ocasión, no estarán sujetos al estigma de tener que aprobar planes de ajustes complementarios en los países que soliciten la ayuda.

Inmediatamente después de que se acordase esta medida, las autoridades europeas echaron las campanas al vuelo para festejar las decisión. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, decía que suponía un “gran progreso hecho por el Eurogrupo para dar forma a la ruta hacia la recuperación” y la ministra española de economía, Nadia Calviño, declaró que "es un paso más en la buena dirección para la zona euro".

A mi juicio, esas opiniones son infundadas porque la decisión es, como he dicho, decepcionante por la forma en que se ha tomado y por la que adopta, por la cantidad tan insuficiente que moviliza y por la extraordinaria torpeza e irresponsabilidad que supone no darse cuenta de sus consecuencias.

La respuesta europea es decepcionante porque llega tarde, tras casi dos meses de pandemia (sin contar el tiempo que tardarán en poder usar el dinero los países que pidan la ayuda), en un clima de insolidaridad y de incomprensión mutua, con lamentables manifestaciones de

supremacismo por parte de algunos responsables políticos y, por tanto, con una evidente falta de respeto a los europeos que han muerto o que han perdido sus negocios o empleos.

Es también decepcionante porque se adopta a través de un mecanismo de ayuda que está pensado para rescatar a las economías que se encuentran en situación de grave desequilibrio. Aunque ahora se haya evitado supeditar a la imposición de los severos programas de recorte de gasto social de otras ocasiones, lo cierto es que se recurre a un procedimiento que impone una sobrecarga que dificulta la recuperación de las economías que soliciten los créditos. Obligar a que aumente la deuda y a que haya que devolverla en diez años cuando se trata de hacer frente a un shock de dimensiones tan extraordinarias como el que estamos viviendo no es ayudar a los países miembros de la Unión, es agrandar las brechas ya por sí amplias que ha abierto el modo de actuar de las políticas europeas y, en especial, el diseño del euro.

Y vincular la ayuda exclusivamente a los gastos sanitarios es una vergüenza, cuando es evidente que la pandemia está provocando otro tipo de costes y daños económicos, incluso mucho más elevados, a todos los países en general y a algunos en mucha mayor medida.

La respuesta del Eurogrupo es decepcionante porque resulta a todas luces insuficiente. El Gobierno español y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal coinciden en la evaluación del coste de las medidas adoptadas en nuestro país para hacer frente a la pandemia: 140.000 millones de euros en números redondos. Aunque es cierto que en ese cálculo se incluyen gastos que es posible que puedan ser afrontados con otras fuentes de financiación europeas, la cifra sirve para comparar lo que en realidad supone la "ayuda" del MEDE (24.000 millones, como mucho, para España): una cantidad muy reducida, como también resulta si se compara con el gasto que van a realizar Inglaterra, Estados Unidos o los demás países europeos por su cuenta.

No es menos decepcionante que la Unión Europea siga siendo incapaz de entender que, cuando se trata de ayudar a socios en dificultades, la ayuda (además de ser generosa si de verdad se habla de conformar una unión para el progreso y la paz) debe prestarse en proporción a la necesidad. Hacer frente a un daño que se sufre por desigual en los diferentes países con el mismo criterio de ayuda para todos ellos (máximo del 2% del PIB) refleja que no se quiere entender algo tan elemental como que así sólo se consigue que aumenten las desigualdades.

Finalmente, dar este tipo de mala respuesta, a través de malos procedimientos, aumentando la deuda y con una insuficiencia que terminará ensanchando la brecha entre los diferentes países miembros de la Unión Europea, es una prueba más de irresponsabilidad y torpeza.

Es irresponsable porque no hacer todo lo posible para que países como Italia y España puedan afrontar bien los efectos de la pandemia es acercarse demasiado al abismo. No sólo provocando un desafecto creciente hacia el proyecto europeo entre sus poblaciones, sino poniendo las bases para que se produzcan problemas económicos aún más graves en el futuro.

¿Alguien puede ser tan ingenuo como para pensar que habrá algún ganador si alguno de estos dos países sufre una crisis de deuda próximamente o si se desconecta traumáticamente del resto? Con todos los respectos hacia otros países más pequeños, Italia y España no son como Grecia, Malta o Chipre. Si caen, el efecto dañará a todos los demás y a la Unión Europea en su conjunto.

La respuesta del Eurogrupo y la que, en general, están dando las instituciones europeas es, en fin, de una torpeza infinita y cuesta trabajo discernir si es el fruto de la ignorancia o de un profundo cinismo.

Los medios han informado que, precisamente al hilo de esta decisión del Eurogrupo, la presidenta del Banco central Europeo ha vuelto a recordar a los países del euro que la institución no puede suplir las carencias de una unión monetaria que cojea de su pata fiscal y que ha instado a las cancillerías a apoyar la puesta en marcha de un instrumento europeo "rápido, voluminoso y simétrico" de estímulos fiscales, de tal forma que economías como la española o la italiana no se queden rezagadas en la recuperación.

La opinión es acertada y oportuna pero uno se pregunta si la señora Lagarde es quién es o si no será una alumna de primero de cualquier facultad de económicas a quien todavía no han enseñado que, para tener una potente pata fiscal, los Estados necesitan de un banco central que actúe como prestamista en última instancia porque, si recurren a los mercados la carga de los intereses hará finalmente insoportable el peso de la deuda y se frenará sin remedio la actividad económica, la generación de ingresos y el empleo.

Es un error creer que lo que deben pedir los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, es que los demás se hagan cargo de su coste, que los financien o incluso que mancomunen el incremento de deuda resultante, aunque esto último podría beneficiar a todos en estos momentos.

Lo que deben reclamar es que la Unión Europea sea coherente consigo misma: si quiere ser una verdadera unión debe disponer de una hacienda común y de un banco central auténtico que no sirva para encarecer la deuda, sino que ayude a reducirla, como sería posible que lo hiciera muy fácilmente. Sin esos instrumentos, países como Italia y España nunca debieron entrar en el euro y ahora se encuentran en una trama de

la que no pueden salir. Estos son los verdaderos problemas y la gran irresponsabilidad de los líderes y las instituciones europeas es que no quieran o sean incapaces de verlos.

Nuestra ministra de Economía lleva razón cuando dice que se ha dado un paso más. Lo que parece que no ve es lo que tenemos por delante.

VON DER LEYEN RECUERDA A SU PAÍS QUE LA UE NO ES UNA DEMOCRACIA

Publicado en Público. es
el 11 de mayo de 2020

La reacción de la Comisión Europea a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán no se ha hecho esperar. A diferencia de lo que suele ocurrir, su presidenta Ursula von der Leyen aprovechó la pregunta de un eurodiputado del grupo de Los Verdes para defender la gestión del Banco Central Europeo reafirmando el predominio del Tribunal de Justicia Europeo sobre el alemán. Incluso llegó a decir que se podría abrir un expediente contra Alemania para imponer algún tipo de sanción frente a la supuesta infracción cometida por su más alto tribunal.

La reacción ha sido la típica de las instituciones europeas, un salto hacia adelante dando por bueno lo que se está haciendo, sin entrar en el meollo del asunto. Aunque sea volver de nuevo sobre lo que escribí hace unos días (*El Tribunal Constitucional alemán tira de la manta*), creo que vale la pena abundar en ello para comentar la respuesta de la presidenta de la Comisión y lo que, a mi juicio, implica.

La supremacía del Tribunal europeo es obvia si se trata de analizar cuestiones relativas a competencias de la Unión. Lo que ocurre es que el constitucional alemán no ha planteado una controversia sobre alguna de ellas sino sobre las que son propias de su Estado.

En su sentencia, los jueces alemanes no ponen en cuestión lo que hace el Banco Central Europeo en materia de política monetaria. No puede hacerlo y los jueces alemanes podrán ser de todo menos tontos. En términos muy claros, para que se me pueda entender mejor, lo que el constitucional alemán plantea en su sentencia es que el Banco Central Europeo no está haciendo exactamente política monetaria, sino que usa instrumentos de política monetaria para hacer política fiscal y ésta es competencia de cada Estado europeo.

La competencia del BCE es mantener la estabilidad de los precios y para ello tiene instrumentos entre los cuales no está la financiación de los gobiernos y es evidente (aunque no se quiere reconocer) que, cuando ha hecho esto último, se ha saltado dicha competencia. En todo caso, al hacerlo ha generado efectos que no son los estrictamente limitados a estabilizar los precios.

Al comprar deuda pública de los gobiernos, el BCE rescata a una economía u otra, a bancos concretos o incluso a empresas. Es algo obvio, como es obvio también que eso no entra dentro de sus competencias.

Lo que de verdad hay detrás del conflicto es que las normas que regulan la actividad del Banco Central Europeo se basan en una doble falacia: la de considerar que la política monetaria es algo que se realiza con independencia de la fiscal y de otras políticas redistributivas de los gobiernos y, por otro, la de creer que su política monetaria no genera más efectos que los que produce en los precios.

Son dos falacias que no queda más remedio que asumir para poder conceder independencia a la autoridad monetaria sin violar el principio básico del Estado democrático moderno: el Parlamento es quien tiene la capacidad de establecer cuáles son los objetivos que quiere perseguir con la política fiscal, definiendo cuáles van a ser los ingresos y las gastos del Estado.

Se puede discutir cuál es exactamente la linde que separa la política monetaria de la fiscal, lo mismo que es lícito discutir sobre el sexo de los ángeles, pero lo que es indiscutible es que ambas son interdependientes. Puede haber un ámbito más o menos difuso entre ambas pero de ninguna manera se puede decir que no se afecten una a la otra. La política fiscal genera efectos monetarios, de distinto tipo según cómo se financien los déficits (y, precisamente por eso, los bancos centrales actúan como sus "disciplinadores"). Y la política monetaria produce efectos fiscales cuando supone cargas adicionales a los sujetos económicos, cuando alivia o encarece la carga de la deuda, o cuando permite o no que se lleven a cabo más o menos gastos o que se establezcan unos u otros impuestos.

Es verdad que en las últimas décadas muchos economistas se han olvidado de ese principio elemental de la política económica, para poder justificar ideológicamente la autonomía de los bancos centrales. Pero que la sabiduría convencional se haya olvidado de ello no quiere decir que la realidad sea diferente a la que es, y eso es lo que ha puesto de evidencia el tribunal alemán.

Responder a ese planteamiento con mano dura, centrando el asunto en un conflicto de competencias jurisdiccionales es, como dije al principio, volver a dar un salto en el vacío. Es dar por hecho que la Unión Europea va a seguir basándose en supuestos que no es que sean erróneos o discutibles, sino sencillamente falsos. ¿Quién puede discutir hoy día que las políticas monetarias generan efectos sobre la distribución de la renta? Si alteran los precios, el coste de la deuda, si salvan a unas empresas u otras, si permite o no que empresas zombis sigan actuando, si establece sobrecostes o subsidia a los ahorradores, si permite o no que los gobiernos puedan invertir más o menos o realizar mucho o poco gasto social, si decide qué gobierno puede caer y cuál no... ¿cómo se puede sostener que el Banco Central Europeo no está yendo mucho más allá de mantener la estabilidad de los precios? Y si todo eso es necesario que lo haga para mantenerla ¿por qué no está reconocido así en sus funciones o

instrumentos? Y si no lo está ¿no se está entrometiendo en funciones, competencias y objetivos que son pura competencia de los Estados?

Al Tribunal Constitucional alemán se le puede callar la boca, se puede imponer una sanción a Alemania y se puede mantener por encima de cualquier otro principio la superioridad jerárquica del Tribunal de Justicia Europeo, tal y como ha recordado von der Leyen, pero lo cierto es que el BCE está generando efectos sobre un ámbito de competencias fiscales y redistributivas que son de exclusiva competencia nacional.

Cuando se diseñó el euro se sabía que iba a producir divergencias y disfunciones que, antes o después, producirían no sólo el desafecto sino el rechazo e incluso la imposibilidad de que el sistema llegara a funcionar con el debido equilibrio. ¿Cuál fue la respuesta que se ideó ante ese riesgo? Impedir que cualquier país pueda salir de la eurozona. Algo realmente inconcebible y lo que posiblemente no haya ocurrido nunca en la historia: ¿a quién se le puede pasar por la cabeza crear una asociación o grupo en cuyos estatutos no se contemple el procedimiento para que cualquier de sus miembros pueda salir de él si lo desee? A los constructores de la moneda única europea.

Lo que hace ahora von der Leyen es recurrir al mismo procedimiento. Ante el problema que, con toda razón, plantea el tribunal alemán la respuesta es la misma, evitar que se plantee. La presidenta de la Comisión Europea se limita a recordarle a su propio país que la discusión sobre quién tiene soberanía para decidir sobre el bienestar de la ciudadanía está vedado en la Unión Europea, que no está permitido poner en cuestión que haya una autoridad -el BCE- que actúa, en realidad, como un Monarca Absoluto que sustituye al Parlamento para decidir a su antojo sobre qué gastos realizan los gobiernos y quién debe pagarlos. En resumen, que en la Unión Europea no hay una auténtica democracia.

Una democracia requiere que sea el pueblo o sus representantes elegidos democráticamente quienes decida sobre lo que puede hacerse o no con los recursos comunes, sobre cómo se distribuye el ingreso y la riqueza. Algo que es imposible si la política monetaria y sus efectos fiscales no están sometidos al juicio y control del Parlamento. Eso es lo que lleva, para colmo, a la aberración de impedir que los tribunales nacionales puedan pronunciarse sobre lo que ocurre en el ámbito de competencias de sus propios Estados.

LOS MULTIMILLONARIOS, LA PANDEMIA Y NOSOTROS, LOS PAYASOS

Publicado en Público. es
el 12 de mayo de 2020

El *Institute for Police Studies* de Washington acaba de publicar un estudio sobre la situación de los multimillonarios en Estados Unidos mientras se extiende la pandemia con datos que son realmente estremecedores (puede leerse aquí: <https://bit.ly/3ghaA1O>).

En él se indica que, en el mismo periodo en el que más de 22 millones de personas perdieron sus empleos (del 18 de marzo al 10 de abril de este año), la riqueza los multimillonarios estadounidenses aumentó en 282.000 millones de dólares, un 10 por ciento. Sólo la fortuna de Jeff Bezos había aumentado en unos 25.000 millones desde el 1 de enero de 2020, un incremento de riqueza mayor que el Producto Interno Bruto de Honduras (23.900 millones en 2018).

Ese aumento impresionante de la riqueza de los multimillonarios es el que se viene dando sin parar en las últimas décadas.

Entre 2006 y 2018, casi el 7 por ciento del aumento real en la riqueza de Estados Unidos se destinó a los 400 hogares más ricos del país, los cuales tienen una riqueza acumulada equivalente a la del 64% más pobre de la población.

Desde la última crisis, concretamente de 2010 a 2020, la riqueza de quienes disponen de un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares aumentó un 80,6 por ciento, más de cinco veces la mediana del aumento de la riqueza de los hogares estadounidenses. Un incremento que es pequeño si se compara con el que se registró en los últimos treinta años: un 1.130% desde 1990, doscientas veces mayor que el crecimiento del 5,37% de la riqueza media en aquel país.

Mientras tanto, las familias sin patrimonio o con deuda neta han aumentado en Estados Unidos en todo ese tiempo. En esa situación se encontraba el 15,5% de los hogares en 1983 y el 21,2% en 2016, aunque la evolución de los hogares de personas de color fue mucho peor: del 15,5% han pasado al 21,1% en el mismo periodo.

La situación de unos y otros ante una pandemia como la que estamos viviendo se puede apreciar si se tiene en cuenta que un estudio de la Reserva Federal de 2018 indicó que el 60% de los hogares estadounidenses no tenía ahorros para aguantar más de tres meses sin ingresos. Y el 39% de ellas no estaba en condiciones de hacer frente a un gasto extraordinario de más de 400 dólares.

Las razones de que en los últimos cuarenta años se haya producido una concentración tan extraordinaria de la riqueza en los multimillonarios son diversas, aunque tienen que ver todas con el tipo de políticas neoliberales que se vienen realizando, muy particular, con la pérdida de derechos laborales y con la disminución igualmente extraordinaria de la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Entre 1980 y 2018, la carga fiscal de los multimillonarios de Estados Unidos, medida como un porcentaje de su riqueza, disminuyó un 79 %. Y también ha contribuido especialmente el que las leyes les hayan abierto la posibilidad de ocultar sus ingresos en los paraísos fiscales, donde se estima que los multimillonarios estadounidenses disponen de una fortuna equivalente a los 21 billones de dólares.

El informe del *Institute for Policy Studies* subraya que la acumulación de esa inmensa riqueza en tan pocas manos no es neutra ni mucho menos, sino que, por el contrario, supone una concentración paralela de poder que es el que precisamente ayuda decisivamente a que se aprueben las normas y leyes que les permiten incrementar si cesar sus beneficios y privilegios, tal y como han demostrado los científicos que han estudiado su comportamiento y efectos en la política y en las instituciones.

No se puede decir que todos esos multimillonarios sean ajenos a los problemas que sufren las personas normales y corrientes. La revista *Forbes* mantiene un rastreador para dar a conocer las donaciones y obras de caridad que hacen los multimillonarios de todo el mundo. Son de agradecer aunque claramente insuficientes. Las estimaciones del *Institute for Policy Studies* señalan que, en Estados Unidos y en conjunto, sólo suponen el 0,00001 por ciento de sus fortunas y, además, porque lo que se necesita no es sólo caridad y buenos sentimientos, aunque estos sean muy valiosos, sino un sistema fiscal justo, leyes que prohíban la explotación laboral y políticas económicas que fomenten la creación de riqueza y el empleo en lugar de la especulación financiera.

También hay que reconocer que muchos de esos multimillonarios comienzan a ser conscientes de lo que representa su situación en un mundo con tantas carencias y que incluso reclaman más impuestos sobre sus propias fortunas. En varias ocasiones lo han hecho en los últimos años y más recientemente, en junio del año pasado, un grupo de ellos envió una carta al presidente Trump para pedirle un impuesto del 1% sobre el patrimonio de quienes dispusieran de uno superior a los 1.000 millones de dólares. Con él, decían, se podrían obtener ingresos para "financiar el desarrollo de energías limpias, para mitigar el cambio climático, para el cuidado infantil universal, el alivio de la deuda de préstamos estudiantiles, la modernización de la infraestructura, los créditos fiscales para las familias de bajos ingresos, para dar soluciones a la salud pública y otros

recursos", todo lo cual permitiría mejorar la economía, decían, y "fortalecer nuestras libertades democráticas".

Es cierto. Cada día resulta más imprescindible pensar en fórmulas de reparto que equilibren la balanza sin necesidad de desincentivar la creación de riqueza, en normas que impidan que los más ricos dispongan de mayor capacidad de decisión política y en sistemas de derechos y obligaciones sociales que eviten que el enriquecimiento exagerado conviva con la extrema necesidad.

En España conocemos de vez en cuando los gestos caritativos de algún multimillonario, muy de agradecer en lo personal aunque insuficientes, pero estamos lejos de que entre ellos cunda la idea de que una sociedad tan asimétrica, con tantos privilegios para la minoría más poderosa y basada en la desigual contribución de unos y otros a las necesidades comunes terminará siendo un infierno para todos.

Es una significativa casualidad que haya tenido que ser justamente el diputado más rico de todos los del Congreso o, al menos, el que ha declarado un mayor patrimonio, Marcos de Quinto, quien califique al vicepresidente Pablo Iglesias de payaso por hacer propuestas como la un ingreso mínimo vital (que, con una cuantía u otra está ya en todos países de la Unión Europea), o algún tipo de impuesto sobre las grandes fortunas: "Ladran, luego cabalgamos".

LA COMISIÓN EUROPEA DINAMITA EL MERCADO ÚNICO

Publicado en Público. es
el 13 de mayo de 2020

La Unión Europea es una comunidad política que tiene como uno de sus pilares la unión económica. Esta es el mayor grado de integración al que puede llegar un grupo de economías y para que pueda existir en pureza ha de darse una condición muy estricta: la integración en uno sólo de los mercados de todos los países que la integran, para lo cual es necesario, por un lado, que desaparezcan las barreras que puedan dificultar la libre circulación de bienes, servicios y mercancías y, por otro, la armonización de las normas y políticas económicas de todos los países.

No puede existir una unión económica si los mercados funcionan en cada país a su aire, si en unos se pueden llevar a cabo actuaciones que no se pueden realizar en otros, si las empresas o los consumidores tienen derechos u obligaciones diferentes, o si reciben ayudas distintas en cada uno de los países que la conforman. Dicho de otra manera, lo que se puede hacer y lo que no en los mercados debe ser exactamente lo mismo en todos los países que constituyen una unión económica.

Por esa razón son tan importantes para la Unión Europea las reglas que garantizan la competencia en los mercados, entendiendo por competencia la situación que implica que ningún agente que participa en ellos tiene ventajas, privilegios o ayudas que no estén al alcance de cualquier otro.

Una de las causas que podrían dar lugar a que se quiebre la competencia y a que no se pueda hablar de mercado único son las ayudas estatales a las empresas. La web de la Unión Europea lo explica claramente: "En ocasiones los Gobiernos invierten dinero público en apoyo de sus propios sectores o empresas, lo que les da una ventaja injusta sobre sectores y empresas similares de otros países de la UE. Puede decirse que con ello se perjudica a la competencia y se distorsiona el comercio". Y en el mismo sitio se dice que la Comisión es la encargada de evitar estas situaciones, autorizando "exclusivamente las ayudas de auténtico interés público cuyo objetivo sea beneficiar a la sociedad o a la economía en su conjunto" (aquí: <https://bit.ly/3gcZz1J>).

Pues bien, desde marzo pasado, la Comisión Europea está autorizando una enorme cantidad de ayudas estatales a empresas que no responden a ese principio, sino que, por el contrario, están suponiendo una fractura evidente de las condiciones de igualdad y competencia que deben prevalecer en los mercados si se quiere que de verdad exista una unión económica.

Me refiero a las ayudas insertas en el denominado Marco Temporal y que los diferentes Estados de la Unión Europea están concediendo a las empresas de sus respectivos países para que puedan sobrevivir a los efectos dramáticos de la pandemia y del cierre debido al confinamiento.

Según fuentes de la Comisión (aquí: <https://bit.ly/2ZtqYXl>), hasta el momento se han autorizado 147 ayudas estatales a empresas por valor de 1,93 billones de euros y bajo formas muy diferentes: subvenciones, recortes impositivos, subsidios salariales, apoyo a la investigación, capitalización, entrada en el capital de empresas...

Todas ellas son ayudas imprescindibles. Yo mismo vengo defendiendo desde el principio de la crisis que deben darse todas las necesarias para evitar el cierre de las empresas en apuros y el ministro de Finanzas austriaco, Gernot Blumel, incluso ha reclamado que desaparezca cualquier tipo de trabas para poder concederlas. Decía que si su país ayuda con sus impuestos a otros de la Unión Europea ahora todos los demás deben darle libertad porque también "queremos ser solidarios con nuestras empresas." (aquí: <https://bloom.bg/2TvXkBu>).

Ahora bien, aunque esas ayudas son imprescindibles en este momento, el problema que plantean es que, si no existe la posibilidad de que se concedan por igual en todos los países, lo que se producirá sin remedio será una asimetría materialmente incompatible con el funcionamiento de un verdadero mercado único y, por ende, de una unión económica o, mucho menos, de una monetaria, como la eurozona.

La razón de por qué la autorización de estas ayudas dinamita el mercado único es bien sencilla: sin un marco general que posibilite su financiación sólo pueden concederlas aquellos países que dispongan de una situación financiera más saneada. Es decir, habrá países que sí puedan rescatar e impedir que se cierren miles de sus empresas y otros que no.

La prueba de esto último es evidente: de los 1,93 billones de euros aprobados en ayudas, las concedidas por Alemania representan el 52% del total, mientras que las de Italia y España, los dos países de momento más afectados por la pandemia, sólo el 17% y 2%, respectivamente. Es lógico: en ausencia de un sistema de financiación alternativo, estas ayudas sólo se pueden dar incrementando la deuda, algo que están haciendo sin límite Alemania y otros países, pero que comienza a ser prohibitivo para Italia o España, dado su nivel ya elevado de deuda pública.

Se puede decir, como siempre, que eso es así porque Alemania y otros países del norte han hecho previamente "sus deberes" fiscales mientras que los del sur no los hacemos (algo, por cierto, que es completamente falso porque tenemos menos déficits o incluso superávits primarios). Pero, sea cual sea la causa de esa desigual posibilidad de conceder ayudas a las empresas, la realidad es que poder concederlas en

condiciones diferentes es algo incompatible con la existencia de un mercado único. Es como si se pone a pelear a un púgil de 100 kg. contra otro de 45 kg. y se dice que la diferencia no afecta a la igualdad de condiciones porque la causa es que el primero se ha alimentado mejor y ha hecho más ejercicio para fortalecerse. Puede que esa sea la razón, pero la verdad es que el combate se producirá en condiciones de evidente desequilibrio.

Esto es exactamente lo que va a ocurrir en la Unión Europea. El Marco Temporal que autoriza las ayudas estatales establecido por la Comisión no garantiza que el régimen de acceso a todas ellas sea igualitario, competitivo, para todos los países y justo por eso es inevitable que produzca un incremento de la divergencia y el desequilibrio que socavan las bases de una unión económica llevándola, antes o después, al colapso.

Es una prueba más de que la supervivencia de la Unión Europea es imposible si no se garantizan -como venimos reclamando muchos economistas- fuentes de financiación adecuadas para sus políticas (como la de competencia, de la que dependen las ayudas), bien a través de una política fiscal conjunta de la Unión o del Banco Central Europeo.

Los países del norte de Europa quieren soplar (evitando mecanismos fiscales conjuntos de financiación, según dicen, para huir de la indisciplina y relajación de los del sur) y, al mismo tiempo, sorber (para quedarse con el beneficio de saltarse las normas comunes de ayuda a las empresas cuando ellos sí pueden financiar). Es una práctica imposible que puede asfixiar a quien lo intenta repetidamente.

Alrededor de doscientos vecinos del barrio de Salamanca, el de mayor renta de Madrid, salieron ayer a la calle para protestar contra el gobierno y para pedir el fin del confinamiento al grito de "Libertad, libertad".

Lo hicieron, como se puede apreciar claramente en las fotos que han publicado los medios de comunicación, sin respetar la distancia de seguridad y, muchas de esas personas, sin ni siquiera llevar mascarillas para protegerse a sí mismas y para evitar el contagio a las demás.

Que se manifiesten contra un gobierno de izquierdas, "social-comunista" lo llaman, es natural y no puede extrañar a nadie. Allí vive y vota gente rica y de derechas (a sí mismos se llaman "de bien") que siempre se han considerado los dueños de España. Nunca han ocultado que para ellos no hay otra Patria que la suya, ni otras ideas respetables que las que defienden, ni otros intereses que defender distintos a los de sus empresas y familias de rancio abolengo, que su modo de vivir es el natural y sus valores los únicos que expresan virtud y dignidad. Por eso les molesta que unos cuantos payasos, desarrapados y advenedizos se entrometan de vez en cuando en donde sólo ellos tienen derecho a estar o que decidan sobre lo que nadie más tiene derecho y capacidad para decidir.

Es normal que protesten contra un gobierno que no es el suyo; es legítimo y lo bueno es que, justo aquellos ante quienes ahora reclaman libertad (los socialistas y comunistas), son los que lucharon para que ahora puedan salir a la calle a pedir que dimitan. Lo contrario de lo que pasaba en la dictadura que arropó durante años a los vecinos del barrio de Salamanca y a la que añoran, como demuestra la proliferación de banderas preconstitucionales en la protesta que igualmente muestran los fotos.

Todo eso es normal y a nadie puede extrañarle.

Lo que sí es singular es que salgan a protestar, exponiéndose al contagio, para protestar contra las medidas sanitarias frente a una pandemia que hubiera tomado cualquier otro gobierno.

Sabemos que en los barrios más ricos el virus ha hecho menos estragos que en los más pobres, pero eso no quiere decir que allí se esté exento de la enfermedad. Seguro que han muerto de Covid-19 familiares o personas queridas de muchas de las personas que ayer estaban en la calle contagiando y contagiándose.

Eso es lo curioso y lo que constituye una auténtica y significativa metáfora.

Sería lógico que protestaran contra el encierro y que estén deseando salir a la calle las personas de baja renta que lo están sufriendo en viviendas pequeñas y mal dotadas, viendo cómo sus hijos pierden el curso porque apenas tienen medios para enseñarles o para seguir los esfuerzos a distancia de sus maestros y maestras, quienes han perdido sus trabajos y no tienen ahorros para salir adelante... pero no. Protestan más y lo hacen de forma más expresiva y sonora quien tienen viviendas de lujo, criados para servirles, ahorros de sobra, neveras y bodegas bien surtidas, comunicaciones sofisticadas con cualquier lugar del mundo y todo tipo de comodidades a su alcance mientras dure el encierro.

Es verdad que, como economista, eso no me debería extrañar. El *coste de oportunidad* del encierro (es decir, lo que dejan de ganar mientras este se produce) es mucho mayor en el caso de los ricos que en el de los pobres. Estos últimos apenas pierden nada: una vida anodina, empleos poco creativos, sueldos bajos, algunas copas en bares modestos, un coche de segunda mano, la expectativa de pasar unos pocos días en el apartamento minúsculo de alguna playa abarrotada... todo eso, en el mejor de los casos, pues el 34% de los españoles no tiene dinero para irse ni una semana de vacaciones y casi la mitad no dispone de ahorro para hacer frente a un gasto extraordinario de unos cuantos cientos de euros. Al contrario de los ricos, cuya vida fuera del encierro es mucho valiosa.

Pero ¿y la vida y la salud? ¿Vale la pena salir a la calle para pedir la dimisión del gobierno a costa de exponerse a enfermarse? ¿Hacerlo es sólo una temeridad o fruto de una convicción ideológica firmísima? ¿Se hace porque se desconoce el riesgo que eso conlleva? ¿O porque piensan que, llevado de una maldad extraordinaria, el gobierno de los rojos los encierra por gusto y que no es necesario tomar precauciones, como en todos los lugares del mundo, para evitar el contagio?

Yo creo que esa protesta es, en realidad, una metáfora. Si son los dueños de España, los dueños del mundo, si son los hijos y los nietos y biznietos de los más poderosos, de quienes siempre doblegan la voluntad de quien se opone a la suya, si su poder se puede imponer siempre y tienen dinero de sobra para conseguir todo lo que desean o les conviene, también deberán sentirse los dueños de la vida e inmunes ante los virus.

No desafían la pandemia porque sean irresponsables o porque no tengan conocimiento de lo que pasa, porque saben perfectamente lo que está pasando en todo el mundo, como a estas alturas lo sabemos todos. La desprecian porque seguramente creen que ellos también están protegidos de ella, como lo están desde hace siglos de los infortunios que padece la mayoría de la gente, los otros.

En realidad, cuando salen en grupos a la calle para pedir la dimisión del gobierno y contagiándose mutuamente, hacen igual que sus empresas cuando contaminan, exactamente lo mismo que cuando acumulan dinero y riqueza sin cesar provocando crisis económicas (alguien tan poco sospechoso como Martin Wolf escribía un artículo hace unos días en el *Financial Times* demostrando que el incremento de la deuda y las crisis que produce son la consecuencia de la concentración de la riqueza en muy pocas manos). Lo que hacen es actuar sin darse cuenta de que las consecuencias negativas de sus actuaciones les pasarán cuenta también a ellos.

Que la gente de un barrio rico actúen como si fueran inmunes a la pandemia es la prueba más excelsa de la estupidez de quienes dominan el mundo y lo destruyen día a día sin percatarse de que al hacerlo se destruyen también a sí mismos y a sus descendientes. Es cierto que el desastre o la muerte pillará a los ricos bebiendo buen whisky, renovando la cuota de cualquier selecto campo de golf o paseando en un coche o en yates lujosos (en Estados Unidos se ha multiplicado su uso, pues muchos ricos están pasando en ellos el encierro).

Los vecinos privilegiados del barrio rico de Madrid son los que, sabiéndose dueños de todo, se sienten también dueños de la realidad. Para ellos no debe existir la "realidad real" de la que habla Slavoj Žižek, sino sólo la suya, la exclusivamente propia y la que nadie tiene el derecho de interferir o tratar de modificar. Viven en la realidad virtual que implica creer que sus actos no producen los efectos que los demás sufrimos como realmente reales.

En el barrio de Salamanca ocurre lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en el mundo. Quienes nos controlan y dirigen se sienten invulnerables porque están seguros de que su poder lo puede todo y que la vida de los demás no es la vida que ellos viven. Lo mismo que la minoría que domina el mundo, los vecinos del barrio de Salamanca creen que viajan en otro barco y que a ellos no les afectan las inclemencias del viaje de los ajenos.

Por eso digo que su manifestación fue una metáfora, igual que lo es también la pandemia que estamos viviendo.

En 1966, Kenneth Boulding escribió un texto (*La economía de la futura nave espacial Tierra*) en el que describía a nuestro planeta como una nave espacial que viaja por el espacio con recursos limitados en su interior que debemos cuidar y mantener si queremos que la humanidad sobreviva dentro de ella. Y decía que había dos actitudes posibles ante ese viaje. Una era la de quienes dicen "comamos, bebamos, gastemos, explotemos y contaminemos, y seamos felices como podamos, y que la posteridad se ocupe de la nave espacial Tierra". La otra, era la opinión del propio Boulding: "el bienestar del individuo depende de la medida en

que pueda identificarse a sí mismo con los demás (...) la identidad individual más satisfactoria es la que hace al individuo sentirse parte de una comunidad no sólo espacial, sino también temporal, que se extiende desde el pasado hasta el futuro". Y en ese mismo texto recordaba las palabras de Fred Polak: "una sociedad que pierde su identificación con la posteridad y su imagen positiva del futuro pierde también su capacidad para enfrentarse a los problemas presentes, y pronto se desmoronará".

Los vecinos ricos de Madrid son la imagen vicaria de esa parte minúscula de la población que quiere apropiarse de todo y que no piensa en las consecuencias que eso tiene en los demás, en el futuro y en ella misma; la que sólo se identifica con sus propios intereses y con sus deseos más inmediatos. Tienen prisa por irse a jugar al golf mientras todo a su alrededor ha empezado a desmoronarse.

NO HAGAN CASO A JOSÉ CARLOS DÍEZ: RECORTAR AHORA EL GASTO ES SUICIDA

Publicado en Público. es
el 15 de mayo de 2020

El economista José Carlos Díez acaba de publicar un comentario en su cuenta de Twitter que obliga a criticarlo por lo que tiene de infundado e irresponsable.

En condiciones normales no me haría eco de sus observaciones. Es, posiblemente, el economista que más falló en sus análisis de la última crisis, cuando negaba que en España se estuviera produciendo una burbuja inmobiliaria o que aquí se fuese a producir una recesión económica. Y ya he demostrado en alguna ocasión que se equivoca tanto porque no tiene independencia de criterio y porque desconoce rudimentos esenciales de la teoría económica. No sabe, por ejemplo, cómo es el funcionamiento elemental de la circulación monetaria, como puse hace tiempo de manifiesto en un artículo publicado en este mismo diario (*Economistas que pierden el norte atacando a Podemos*, aquí: <https://bit.ly/3bQaXNr>). Además, siempre me ha tratado mal y con poca educación, de modo que no le tengo ningún aprecio personal. Puedo pasar por alto que alguien no sea un buen economista, pero no que sea descortés y mala persona.

En este caso, sin embargo, tengo que dedicar unos minutos a rebatir su opinión porque, como he dicho, no sólo no tiene fundamento, sino que es sumamente irresponsable y porque sería muy peligroso para España que se llevara a cabo lo que propone.

Dice Díez que "un gobierno serio asumiría que no podemos financiar un déficit del 15% del PIB y haría recortes para limitarlo este año".

Esa observación no tiene fundamento porque no se puede afirmar que sea imposible que España financie ese déficit. Si se alcanzara, nos situaría más o menos en el nivel de deuda en relación con el PIB que a finales de 2019 tenía Portugal (117,7%) o bastante por debajo de la de Italia (134,8%).

No digo ahora que alcanzar ese nivel sea bueno o malo (lo comentaré enseguida) lo que digo es que no tiene fundamento aceptar que esos dos países pueden financiar ese porcentaje de deuda y una cantidad absoluta mayor (en el caso de Italia) y España no. Sobre todo, cuando el incremento se ha producido por el efecto de una crisis sanitaria que ha obligado a que todos los gobiernos realicen gastos extraordinarios y cuando hasta el Banco Central Europeo está diciendo que pondrá el dinero que haga falta para que los bancos proporcionen el crédito necesario para evitar el colapso económico.

¿Qué tiene en la cabeza Díez para creer que los bancos centrales van a dar dinero ilimitado a los privados para que presten y que estos no van a aprovechar para conceder todo el crédito posible a los gobiernos? Otra cosa será que las consecuencias de ese endeudamiento sean muy onerosas, o incluso fatales (enseguida diré que no tiene por qué ser así), pero decir que será imposible que España se financie, cuando están prestando a países en condiciones económicas mucho peores y con mayor nivel de deuda pública, es algo que sólo puede decir quien, como Díez, ha demostrado ya en otras ocasiones que desconoce los entresijos reales de la vida económica.

Además de infundado, el juicio de Díez (si es que el comentario mereciera esta denominación) es irresponsable.

¿Quién, en plenitud de condiciones mentales, puede decir que lo que debe hacer un gobierno, en medio de una epidemia que obliga a cerrar actividades económicas en todo el mundo, es reducir el gasto?

¿Qué debe hacer el gobierno español, anular las ayudas a las empresas, cuando, en realidad, deberían haber sido aún más cuantiosas? ¿Dejar que cierren miles de ellas, que se hunda el sector turístico, que perdamos el comercio de cercanía o que se arruinen millones de trabajadores autónomos? ¿Debe anular el gobierno las prórrogas en el cobro de los impuestos que se están dejando de pagar? ¿Deja de financiar expedientes de regulación temporal de empleo? ¿Reduce el gasto sanitario en medio de una emergencia sanitaria, cuando todo indica que habrá un rebrote en el otoño o invierno? ¿Recorta el gasto educativo, justo cuando cientos de miles de estudiantes tienen más dificultades para cursar su enseñanza por el confinamiento? ¿Recorta las pensiones, para terminar de matar a nuestros padres, madres o abuelas y abuelos, o para destrozarnos todavía más las residencias en donde viven muchos de ellos? ¿Renuncia a establecer un ingreso mínimo o al subsidio de desempleo para las personas que no tienen medios de subsistencia? ¿Recorta en administración de Justicia, en cuidados, en la investigación que puede ayudar a encontrar vacunas o a fomentar la innovación que necesita nuestra economía?

Francamente, creo que hay que ser muy irresponsable para pedir que, en este año 2020, el gobierno español haga esas cosas.

Ahora no se puede recortar el gasto. Al recortar gastos públicos como los que he mencionado lo que se hace es reducir el ingreso que inmediatamente va a recibir un sector privado que en estos momentos no puede generarlos. La propuesta de recorte de Díez llevaría directamente al colapso de nuestra economía y a una crisis social sin precedentes en nuestra historia. Y eso ahora, pues no quiero ni pensar en las consecuencias de lo que propone si el virus vuelve a propagarse con más fuerza tras el verano y es necesario realizar un nuevo confinamiento.

La prueba de que recortar gasto es una irresponsabilidad es que no hay ni un sólo gobierno de países avanzados que lo haya hecho, ni una sola institución, autoridad u organización internacional que lo proponga.

En mitad de una emergencia sanitaria una persona inteligente y responsable habla como habló Ángela Merkel: "Haremos lo necesario para superar esta situación. Y luego veremos qué significa esto para nuestro presupuesto". Una irresponsable y sin conocimientos de economía dice lo que ha dicho Díez, que hay que recortar el gasto.

Díez escribe como si desconociera los efectos tan negativos que tuvo en España y en toda Europa la política de recortar gasto en plena crisis de 2008, cuando los agentes privados no generaban ingresos; y ahora, en una situación aún peor y mucho más justificada al tratarse de una crisis sanitaria, pide que se vuelva a cometer el mismo error que retrasó la recuperación, que debilitó el aparato productivo y las fuentes de generación de ingreso y que redujo el bienestar social.

El gobierno de España debe mantener las ayudas a las empresas, a autónomos y a los hogares, e incluso yo creo que debe tratar de aumentarlas y alargarlas en el tiempo lo más posible, con seguridad y certidumbre, hasta que reanuden plena y satisfactoriamente su actividad. Y no puede permitirse reducir el gasto social, ya por debajo de la media europea, ni las inversiones productivas que son necesarias para que las empresas realicen cambios imprescindibles ante las transformaciones globales que están a la vuelta de la esquina.

Otra cosa es que hay que plantear cómo financiar el incremento inevitable de la deuda. Yo vengo criticando en estos dos meses últimos la política europea al respecto pero, incluso siendo extraordinariamente crítico, no puedo dejar de reconocer que la Unión Europea y el Banco Central Europeo están proporcionando fuentes de financiación que hasta ahora no han estado a nuestro alcance; además de permitir algo tan significativo como que los países se salten las reglas de estabilidad presupuestaria. No hay un día en que sus propios dirigentes no digan que hay que hacer lo imposible por financiar las necesidades extraordinarias de los gobiernos frente a la pandemia. Y hoy viernes 15 de mayo se vota en el Parlamento Europeo una resolución conjunta reclamando por amplísima mayoría (80% de la Cámara) un paquete de actuaciones basado en transferencias y en préstamos para hacer frente a la reconstrucción. Díez, sólo por estar resabiado con Pedro Sánchez y sus equipos porque apoyó a Susana Díaz, pide que renunciemos a ello y que España haga lo contrario. Una irresponsabilidad.

Desgraciadamente, el aumento de deuda que vamos a registrar lo vamos a tener que financiar en condiciones que no van a ser ni las deseables ni las mejores que podrían darse si las autoridades europeas fuesen

sensatas y utilizaran los medios que utilizan otros gobiernos, si se monetizara aumentando la capacidad productiva (algo que no tendría por qué provocar subida de precios) o si el Banco Central Europeo aprovechara la ocasión para reestructurar la deuda de todos los gobiernos. Pero, a pesar de ello y aunque no sea en las mejores condiciones, España podrá financiar un incremento de deuda que es imprescindible que se produzca si no queremos que nuestra economía se venga abajo. Lo que deberíamos hacer todos los economistas sin distinción de ideologías es aportar ideas y apoyo para encontrar las mejores fuentes de financiación.

Y, por supuesto, todo esto tampoco quiere decir que no haya que revisar el gasto que realizan nuestras administraciones. Hay que aprovechar para auditar, para detectar el innecesario y acabar con el despilfarro que en ocasiones se produce, para aumentar los controles y ser siempre austeros, en el sentido auténtico de la expresión, a la hora de utilizar los recursos comunes. Como también hay que pensar en la otra cara del presupuesto, de la que no habla Díez. Limitarse a recortar gasto para equilibrar el presupuesto, como pregona, es una solución tan inteligente para una economía en crisis por emergencia sanitaria, como la de matar al enfermo para bajarle la fiebre. Una auténtica barbaridad. Hay que mirar también el otro lado, el de los ingresos. No para aumentar la carga fiscal general sino para bajarla, haciendo que todos paguemos en función de nuestra capacidad y no de nuestro privilegio.

Lo que menos necesita España en estos momentos es el resentimiento que lleva a enfrentarse al gobierno recurriendo a cualquier tipo de argumento, por irresponsable o infundado que sea, como el de Díez. Hay que criticar, hay que señalar lo que no se hace bien pero también es necesario pensar un poco lo que se dice, dedicar algún tiempo al estudio antes de sacar conclusiones y dejar el rencor en el armario.

"HAY COSAS MÁS IMPORTANTES QUE VIVIR"

Publicado en Público. es
el 18 de mayo de 2020

La frase entrecomillada del título de este artículo no es mía. Ni la he inventado yo. Es del vicegobernador del Estado de Texas, en Estados Unidos, Dan Patrick. La dijo exactamente como yo la he traducido ("there are more important things than living"), cuando le recriminaron haber afirmado unos días atrás que "los abuelos están dispuestos a sacrificarse" para salvar la economía de su país (aquí: <https://nbcnews.to/2Tt0Tng>).

Se trata de una idea bastante generalizada en Estados Unidos, donde el presidente Trump y el Partido Republicano defienden que la economía es lo primero que hay que salvar y que, por tanto, vale la pena soportar la pérdida de vidas humanas que eso pueda llevar consigo.

El Premio de Economía del Banco de Suecia (equiparado al Nobel) Paul Krugman se preguntaba hace unos días en uno de sus artículos en *The New York Times* sobre las razones que podrían explicar que la derecha estadounidense propugne medidas que claramente van a provocar la muerte de miles de compatriotas y daba tres posibles respuestas.

La primera es que Trump está obsesionado con el mercado de valores y tiene la firme creencia de que la lucha contra la Covid-19 le afecta negativamente, de modo que está dispuesto, dice Krugman, a dejar morir a miles de estadounidenses por el Dow Jones, el índice bursátil de las 100 más grandes empresas y equivalente a nuestro Ibex-35.

La segunda posible explicación podría ser que los republicanos crean que las personas armadas que han invadido la sede de los parlamentos en diferentes Estados o las que piden en las calles libertad y el fin del encierro son "la verdadera América", a pesar de que las encuestas sugieren que sólo una parte reducida de la población defiende las medidas tan peligrosas de reactivación que va a poner en marcha la Administración de Donald Trump.

La tercera razón que, según Krugman, puede explicar el sacrificio de vidas humanas que se va a producir en Estados Unidos tiene que ver con el fundamentalismo ideológico de la derecha. Dice Krugman que los republicanos no tienen otra agenda que la de los recortes de impuestos y la desregulación y que, fuera de eso, no saben hacer otra cosa: "no saben cómo responder a las crisis que no se ajustan a su agenda habitual".

Las tres respuestas me parece que son complementarias y perfectamente extrapolables a los demás países donde la derecha se aferra a los dogmas neoliberales en plena pandemia, entre ellos, por supuesto, el nuestro.

Lo que está ocurriendo con la derecha en casi todo el mundo es una verdadera paradoja. Se arroga la defensa del derecho a la vida como algo propio y llevan años batallando contra las mujeres que deciden abortar, acusándolas de destruir la vida de seres indefensos. Sin embargo, ahora nos dicen que los abuelos y cientos de miles de personas más jóvenes que igualmente están amenazados por el virus son población prescindible que se pueden sacrificar, pues vale la pena que mueran si así se salva la economía.

Es otro de los efectos del coronavirus: desnuda a las ideologías y deja ver lo que realmente hay detrás de ellas.

Para dar soluciones a una crisis como esta no queda más remedio que asumir que sólo el Estado puede hacer frente al gasto que evita el cierre de miles de empresas y que el mercado es completamente ineficaz para hacerle frente. Hay que aceptar que, a la hora de financiar ese gasto público imprescindible, es obligado poner sobre la mesa quién contribuye a ello en mayor o menor medida. Hay que admitir sin remedio que la cooperación y la solidaridad y no la competencia entre unos y otros es lo que proporciona estabilidad a la sociedad y sosiego a las personas en momentos como este; que la gratuidad y el don son elementos imprescindibles de la vida económica y que no todo se puede resolver buscando el lucro individual. Y, por supuesto, que no es cierto que haya una obligada elección entre la economía y la vida.

Es verdad que una pandemia como la que estamos viviendo tiene un coste económico extraordinario porque, ya lo hemos visto, obliga a cerrar miles de negocios y, cuando se alivia, a comenzar de nuevo en condiciones quizá completamente diferentes. Pero la tentación de evitar ese coste anticipando apresuradamente la apertura de la vida económica no es sólo un error trágico desde el punto de vista sanitario sino también económico. Sabemos que la mortalidad en las segundas o terceras oleadas de todas las pandemias es mucho mayor, tal y como ocurrió, por ejemplo, durante la llamada gripe española que tuvo su efecto mortal más trágico en los rebrotes posteriores al primero de 1918. Como también sabemos que el coste económico de una nueva oleada de contagios sería mucho mayor que el de ahora, pues las empresas y la economía en su conjunto estarán más debilitadas y los gobiernos habrían agotado gran parte de una munición que al final habría resultado inútil. Así lo adelantan los escenarios que contemplan todos los analistas.

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos (y lo que va a ocurrir en los próximos meses, o lo que también sucede en Inglaterra) es lo que podría pasar en España si gobernase la extrema derecha de Casado y Abascal. No es casualidad que Estados Unidos e Inglaterra tengan el peor desempeño en la lucha contra la pandemia y concentren un tercio de todas las muertes del mundo, o que entre Madrid y Cataluña (las dos

comunidades en donde ha habido políticas neoliberales de desmantelamiento del servicio público más acentuadas) tengan prácticamente la mitad de todas las muertes de España y que presionen por activar cuanto antes la economía por encima de todo.

El líder del PP, Pablo Casado, ya lo ha manifestado claramente: "Ante un rebrote no podemos volver a la excepcionalidad, hay que convivir con el virus". Y el empeño de la Comunidad de Madrid por acelerar la desescalada, en contra de la opinión de expertos o incluso de la opinión de los responsables de su propia administración sanitaria, va por el mismo camino de entender que "hay cosas más importantes que la vida". Es la misma irresponsabilidad de Trump y Boris Johnson, el mismo fundamentalismo ideológico que impide tener respuesta ante una crisis como esta porque lo único que se sabe defender -desmantelar lo público para favorecer el negocio privado y recortar impuestos para que dejen de pagarlos quienes financian a los partidos y políticos de derecha- no sirve para nada en estos momentos.

Lo sorprendente, sin embargo, no es que personas con tan poca formación y carentes de finura intelectual sean incapaces de flexibilizar sus posiciones ideológicas ante una emergencia como la que estamos viviendo. O que se queden desnudos ante la pandemia, como Casado, que ha llegado a exigir que se aplique una medida que el gobierno había puesto en vigor hacía ya mes y medio. Como tampoco extraña que las mismas personas que se lanzaban a la calle atacando a las mujeres que abortan, porque dicen defender el derecho a la vida, salgan ahora en el barrio de Salamanca de Madrid a reclamar que se acabe cuanto antes el confinamiento, la única forma efectiva de evitar que se sigan produciendo muertes por contagio. O que las mismas que critican al gobierno porque no les deja ir a Misa, critiquen o incluso insulten al Papa, el representante de su dios en la Tierra, porque defiende que salvar la vida es más importante que poner en marcha la economía. Es lógico que líderes sin preparación sólo sepan conducir sin cambiar de marcha o sin mover el volante cuando cambia la dirección de la carretera. Y es natural que personas de extrema derecha cegadas por su rencor y desprecio hacia los españoles que no pensamos como ellas creen que un gobierno de izquierdas se ha inventado la pandemia y que lo hace todo mal a propósito, para arruinar España. O que piensen que su propio Papa es el Anticristo si defiende a los pobres y valores contrarios a los suyos. Es comprensible y exactamente lo mismo que dice la derecha de Estados Unidos.

Lo verdaderamente anómalo, lo extraordinario y para mí casi inexplicable, es que los empresarios que se juegan el patrimonio y los negocios de muchos años y que se supone que deben tener una visión estratégica de los acontecimientos y del riesgo, antepongan la ideología y la simpatía política a sus propios intereses, que tengan una perspectiva tan

cortoplacista de lo que está ocurriendo y que no sean capaces de identificar el peligro tan grande y definitivo que supondría para sus empresas un segundo brote de la epidemia en el otoño o inviernos próximos. Algo que es seguro que ocurrirá si ahora se reactiva la economía mal o antes de tiempo.

Parece mentira que los dirigentes empresariales no se den cuenta de que lo conveniente ahora para sus negocios no es abrir cuanto antes y de cualquier forma sino disponer de la máxima protección y apoyo, no sólo para asegurar una vuelta a la actividad con suficiente fortaleza en los mercados sino con capacidad para hacer frente a unas condiciones que van a ser completamente diferentes a las que dejaron el día que hubo que cerrar sus empresas.

En lugar de reclamar una desescalada desordenada y a toda prisa que lleve a una situación mucho peor dentro de unos meses, lo que conviene a las empresas y a todos los españoles es hacer piña, luchar por encontrar una financiación del gasto que es imprescindible realizar para salvar a las empresas y a las personas que no hipoteque nuestro futuro, revisar con extraordinario control dónde va hasta el último euro de nuestro gasto público y asumir, como un inexcusable compromiso colectivo, el principio de que las cargas comunes que genera esta crisis hemos de soportarlas todos sin excepción y en proporción a nuestra capacidad y a nuestra riqueza, y no en función de privilegios.

Es una barbaridad plantear que la economía debe estar por delante o por detrás de la vida. Ha de estar a su servicio.

ALEMANIA Y FRANCIA SALEN DE CAZA

Publicado en Público. es
el 19 de mayo de 2020

En menos de veinticuatro horas se han producido cuatro declaraciones muy importantes que reflejan que la Unión Europea está metida en un auténtico galimatías. Se suceden las tomas de posición contradictorias y, en el río revuelto, Francia y Alemania se ponen de acuerdo para reforzar su dominio y allanar el terreno a sus grandes empresas.

La primera declaración fue del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, al que entrevistó hace unos días el diario *El País*.

Dando muestras de sensatez, Lane afirmó que para el BCE "es importante asegurarse de que existe financiación para proteger contra los riesgos y apoyar la recuperación en todos los países de la UE" y, en consecuencia, que "asegurará condiciones de financiación estables para todos los países".

Era una declaración importante porque reflejaba que el BCE es consciente de la gravedad de la situación en la que se encuentran las economías europeas y del papel imprescindible que debe cumplir si quiere que se salga con éxito de la situación. De hecho, era también una declaración polémica, pues casi reconoce que el BCE pisa la competencia prohibida de financiar a los gobiernos. ¿Qué diferencia hay, en la práctica, entre financiar a un gobierno y asegurarle que tendrá financiación estable? En el caso del BCE, sólo una sola: financia a los gobiernos dando un recoveco, comprando a la banca y los grandes fondos privados la deuda gubernamental que estos han comprado previamente, proporcionándoles así un magnífico negocio a costa de financiar con más coste a los gobiernos.

No es lo ideal, por esta última razón, pero no se puede negar que una declaración de este tipo es esperanzadora porque, al menos sobre el papel, significa que quien puede poner el dinero suficiente para que las economías europeas (y quizá el proyecto político de integración) no se vengán abajo, está dispuesto ponerlo.

Sin embargo, la declaración del economista jefe del BCE no aventura grandes horizontes porque, en una situación de emergencia como la actual, no basta sólo con hacer declaración de intenciones. Hay que ponerse en marcha y, para que el BCE lo haga en este caso, debe de tener algo que financiar. Sin que haya un movimiento en la misma dirección de los gobiernos y la Comisión Europea, es decir, en la dirección de poner sobre la mesa el amplísimo plan de gasto que es imprescindible para el conjunto de la economía europea y, en particular, para las de Italia y España que representan casi un tercio del PIB total. Para ello hace falta

coordinación y complicidad y, como esto no existe, la buena actitud del BCE que denota la declaración de su economista jefe está condenada a ser un simple canto de sirena.

En todo caso, no pasaron ni veinticuatro horas antes de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hiciese otras declaraciones que estaban en las antípodas de las anteriores. Afirmó que serían necesarios recortes de gastos y subidas de impuestos para evitar una nueva crisis de deuda.

Es difícil valorar ambas declaraciones sin caer en el desconcierto: si hay financiación segura, suficiente y estable, como dice el Banco Central Europeo que habrá, ¿por qué dice entonces el Banco de España que hay que sacrificar de nuevo a la economía para evitar una crisis que se produce, precisamente, cuando no hay financiación suficiente, segura y estable? ¿Van cada uno por un lado? ¿Están jugando a policía bueno y policía malo? ¿Cómo se puede permitir que dos instrumentos tan decisivos para la orquesta de la economía europea toquen cada uno con una partitura distinta? ¿Con qué declaración hemos de quedarnos?

La tercera declaración importante fue la de Romano Prodi, ex primer ministro italiano y ex presidente de la Comisión Europea. Es decir, alguien para nada sospecho de anti europeísmo o radicalidad. También en una entrevista realizada en los últimos días, afirmó: "Si Francia, Italia y España siguen juntas, cambiará la Unión Europea".

Llevaba mucha razón y, de hecho, eso era lo que me atrevo a creer que pensaba una buena parte de la ciudadanía frente a la cerrazón de países como Holanda y Alemania, cuando se niegan a tomar medidas cooperadoras para hacer frente a los daños que ya ha empezado a producir la pandemia en Europa.

Cabía pensar que esa idea de Prodi podría convertirse en un vector de fuerza en la política europea, capaz de impulsar un cambio efectivo de orientación. Pero semejante expectativa también duró muy poco. No pasaron ni veinticuatro horas tras su declaración cuando se anunció un encuentro entre Ángela Merkel y Emmanuel Macron que daría lugar a una cuarta declaración.

En este caso, las dos primeras potencias de la Unión Europea comunicaron su acuerdo para crear un fondo, vinculado a los presupuestos, de 500.000 millones de euros y destinado a financiar la reconstrucción de los sectores y regiones más afectados (mediante subvenciones y no créditos) orientados a impulsar y acelerar la transición ecológica y digital y el fortalecimiento de la capacidad y soberanía económica e industrial europea.

No cabe duda de que se trata de una decisión extraordinaria, pues supone un incremento sin parangón en el presupuesto de la UE aunque,

eso sí, de carácter "temporal y específico". Como también es destacable que permita financiar la reconstrucción sin necesidad de aumentar la deuda de los países que los reciban, y a pesar de que el comunicado no habla de Estados que vayan a recibir las subvenciones sino de regiones y sectores (empresas), para dar cabida así a las del norte de Europa. Pero, siendo una noticia positiva en esos aspectos, hay que decir que es inadecuada e insuficiente en el momento en el que estamos.

Sería una medida extraordinaria y quizá suficiente en tiempos normales, pero no en los de emergencia actuales. El Parlamento Europeo acaba de reclamar un fondo cuatro veces más grande, España había propuesto uno tres veces más cuantioso y alguien tan moderado como el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano había pedido hace poco el doble de dinero. ¿Cómo se explica que ahora el presidente del Parlamento, Pedro Sánchez o Garicano celebren y aplaudan un acuerdo de Merkel y Macron muy por debajo de lo que decían que era necesario? ¿Nos engañaron antes haciendo sus cálculos o ahora, aceptando una cuantía tan reducida respecto a sus pretensiones?

La dotación del fondo es a todas luces insuficiente si se toma en consideración la caída del PIB que se está produciendo en toda Europa. Aunque, si sólo fuera un primer paso que viniese acompañado de otras fuentes complementarias de financiación, eso no sería lo peor. El problema que pueden tener España e Italia es que no lleguen sanas y salvas, sino con miles de empresas menos, a la reestructuración; a diferencia de lo que ocurrirá con las economías del norte de Europa que (con la ayuda desigual de las ayudas estatales que les aprueba la Comisión Europea) están aprovechando esta crisis para capitalizar sus empresas.

Como he dicho ya en varias ocasiones, lo que ahora se necesita no es ayuda futurible para reconstruir sino garantizar desde ya que la economía no se destruya, que las empresas no mueran y puedan reactivarse, sobre todo, en Italia y España. Y eso no lo garantiza este nuevo acuerdo. El eje franco-alemán da por hecho que esas dos economías van a caer y lo que hacen Alemania y Francia es prepararse para reconquistar y reforzar su dominio en Europa.

La clave está en tres palabras del comunicado de la reunión: "soberanía económica e industrial". Un objetivo que ni las dos grandes potencias, ni las instituciones que dirigen la Unión Europea, nunca han entendido en el sentido de una soberanía europea compartida efectivamente por todos los Estados miembros, sino como la ejercida por sus exclusivos gobiernos (otro acuerdo bilateral al margen de los demás es la prueba) y por los grandes "campeones europeos", es decir, por sus grandes empresas. Lo que, una vez más, buscan Alemania y Francia no es otra cosa que allanarles el terreno en los mercados europeos aprovechando que la

Covid-19 para por Europa. Eso es lo único que les importa y lo que, en realidad, se está cociendo en los despachos europeos.

Si Francia ha renunciado a generar un eje alternativo al que gira en torno a Alemania, España, Italia, Portugal y Grecia no deberían renunciar a defender sus intereses comunes. Por dignidad nacional y por razones económicas, nos costará muy caro no hacerlo.

Publicado en Público. es
el 20 de mayo de 2020

La mayoría de la gente, incluidas las autoridades, están reaccionando ante la crisis de la Covid-19 como si se tratase de algo sobrevenido e inevitable. Pero no es así. El riesgo de una pandemia provocada por la difusión de un virus había sido contemplado en bastantes estudios prospectivos realizados en los últimos años.

Se sabe que la División de Enfermedades Infecciosas y Contrainfecciones de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos llevaba varios años anunciando la llegada de un nuevo coronavirus.

En 2017, el Pentágono, la organización de inteligencia militar de Estados Unidos, había lanzado una alerta en la que declaraba que la amenaza más probable y significativa es una nueva enfermedad respiratoria.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos había desarrollado entre enero y agosto de 2019 un ejercicio simulado de pandemia de influenza. Según informó *The New York Times*, el ejercicio se denominó Contagio Carmesí e involucró al Pentágono, al Departamento de Asuntos de Veteranos, al Consejo de Seguridad Nacional, a grupos como la Cruz Roja Americana, la Asociación Americana de Enfermeras, a compañías de seguros de salud y a grandes hospitales, como la Clínica Mayo. Según ese diario, en la pandemia ficticia, "a medida que el virus se propagó rápidamente por los Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades emitió pautas para el distanciamiento social, y a muchos empleados se les dijo que trabajaran desde casa", lo mismo que ha ocurrido ahora (fuente aquí: <https://nyti.ms/2WYsfH>).

En septiembre de 2019, una entidad independiente de la Organización Mundial de la Salud, el *Global Preparedness Monitoring Board* (GPMB), había declarado: "Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esta escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizada. El mundo no está preparado" (fuente aquí: <https://bit.ly/2A13jTr>).

A mediados de octubre también del año pasado, se celebró en Nueva York una reunión internacional (denominada Evento 201) para simular y analizar las consecuencias de una pandemia global como la que estamos

viviendo, organizado por varias fundaciones y un centro de investigación de la Universidad John Hopkins.

En España, el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa había alertado sobre del riesgo de proliferación de pandemias en el corto y medio plazo.

La pregunta, entonces, es clara: ¿para qué sirve que la gente que tiene preparación, información, conocimientos, intuición y técnicas de análisis suficientes estudie la realidad y nos diga lo que está sucediendo y lo que muy posiblemente va a suceder si seguimos haciendo lo que hacemos?

Esta es otra de las enseñanzas de la crisis de la Covid-19. No es tan difícil anticipar las consecuencias de las acciones de los seres humanos o de la naturaleza, cuando se la somete a las tensiones a las que hoy día está sometida en nuestro planeta. Sólo se necesita escuchar a quien piensa y a quien sabe.

Pero no hemos hecho caso a la inteligencia. Nos hemos dejado llevar por los impulsos, por el deseo de satisfacción inmediata, por la visión del corto plazo, por la ganancia monetaria que no contempla los costes sociales o invisibles de nuestros comportamientos, hemos despreciado el conocimiento, no hemos hecho caso de la previsión y hemos minusvalorado a la ciencia, a quien hemos dejado apenas sin recursos en muchos países o en multitud de ámbitos esenciales de la investigación, hemos maltratado a las personas que se dedican a investigar y a crear, a los innovadores, pagamos una miseria a quienes tienen saber y habilidad para resolver los problemas humanos más importantes, a quienes nos curan de la enfermedad o nos cuidan en el infortunio, y dejamos que se hagan ricos los especuladores y quienes destruyen la vida y las sociedades.

¿En qué estamos pensando cuando no nos aprovechamos el pensamiento ni valoramos la inteligencia? Estamos construyendo una sociedad que grita "Viva la Muerte" aunque eso lo hagamos con pose postmoderna y rodeados de artilugios y redes.

Si queremos sobrevivir a lo que se nos viene encima debemos replantear la mayoría de nuestras prioridades y hemos de empezar por cultivar, por respetar, por privilegiar y por valorar más que a otra cosa a la inteligencia y al conocimiento.

La mejor salvaguarda que tenemos en estos momentos complicados es movilizar a quien sabe, a quien lleva años estudiando y descubriendo soluciones, o al menos respuestas posibles, a nuestros problemas. Es sencillamente incomprensible que en medio de una incertidumbre como la que nos rodea las autoridades no hayan hecho una llamada a la movilización de los miles de científicos, de universitarios, de dirigentes sociales, empresariales, laborales, profesionales, sociales... con conocimiento,

experiencia, propuestas y capacidad creativa y de innovación. Ahora, más que nunca, necesitamos del talento que brota, afortunadamente, más fuerte y brillantemente que nunca en medio de la desgracia y las catástrofes.

El mejor seguro de vida para el futuro arriesgado y difícil que nos aguarda es la sabiduría, la inteligencia, el pensamiento y la creación, el talento. Nuestra salida es recurrir a las personas inteligentes porque, como decía Francis Bacon, son las únicas que saben encontrar oportunidades donde las demás no las ven.

Nuestras instituciones deberían estar promoviendo en todas las esquinas de España, en cualquiera de nuestros rincones, desde el negocio más sofisticado a la actividad más modesta, concursos de ideas, iniciativas y proyectos y ofrecer la ayuda, la complicidad y los medios necesarios para llevarlas a cabo. Esa es nuestra mejor, por no decir que única, tabla de salvación. Alemania, Estados Unidos... las grandes potencias están dedicando veinte o treinta veces más dinero que nosotros a salvar a las empresas y a sus economías. Nosotros no vamos a poder hacerlo en tan gran medida y lo que hagamos nos pesará luego como una losa en forma de deuda que veremos a ver si es soportable. No nos queda otro remedio que salvarnos a nosotros mismos con la iniciativa, la creación y la inventiva, dando a luz una España diferente, una economía distinta, un nuevo modo de producir, de consumir y de vivir en sociedad y en armonía con la naturaleza. La ventaja, la gran oportunidad, es que se están moviendo todas las piezas de la economía global y de todas las sociedades y que en todo el mundo se está empezando a rediseñar una nueva ubicación de los negocios y de las relaciones comerciales y financieras, que nacen nuevos medios de pago e industrias, sectores económicos y comportamientos empresariales y de consumo completamente novedosos. No vamos a estar en condiciones de aprovecharnos de ello a base de órdenes ni incluso a costa de poner mucho dinero, ni haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, sino sólo si somos capaces de pensar mucho y de otro modo, de crear y de innovar. De dejar a un lado las letanías y los credos antiguos porque, si queremos crear algo nuevo, lo primero que hemos de hacer, como decía Erich Fromm es tener el valor de desprendernos de las certezas. Y eso sólo hacerlo bien la gente que está acostumbrada a dudar, a pensar y a crear.

Hay tareas acuciantes, es preciso resolver el día a día, la agenda inmediata, sin duda ninguna. Pero si, a la hora de salir de esta crisis, no movilizamos el talento y si no ponemos a pensar a los españoles para promover la creatividad, la innovación comprometidas con los demás y con la naturaleza, es decir, la inteligencia individual y colectiva, por encima de cualquier otra cosa, habremos perdido definitivamente el futuro.

UNA MODESTA PROPOSICIÓN AL EMPRESARIADO ESPAÑOL

Publicado en Público. es
el 21 de mayo de 2020

Las empresas españolas y los trabajadores autónomos están sufriendo como nunca la crisis provocada por la Covid-19. En cualquier otra anterior, la caída de la actividad económica no fue inmediata y se pudo anticipar en alguna medida (al menos, por quien tuviese un mínimo de información estratégica), lo que permitió adoptar medidas con cierta antelación, y los daños se manifestaron a lo largo de un cierto tiempo, de modo que se pudo prolongar el periodo de adaptación a las circunstancias cambiantes. Ahora, sin embargo, se ha producido un cierre abrupto de su actividad. Para las que han sido afectadas por el confinamiento de la población, no ha habido prácticamente ninguna posibilidad de acomodarse paulatinamente: de un día para otro, los ingresos han dejado de entrar. Una catástrofe.

Al menos, esta circunstancia fatal ha traído consigo que haya una coincidencia casi total a la hora de determinar el tipo de respuesta que es preciso dar a la crisis actual: o el Estado salva a las empresas y autónomos, soportando sus costes durante el tiempo en que no van a percibir ingresos, o la economía en su conjunto se viene abajo. No queda más remedio que hacer eso para evitarlo

Todos los responsables empresariales con quienes he hablado en este periodo piden lo mismo: que el gobierno se haga cargo de los salarios, que deje de cobrarle impuestos y que les proporcione flexibilidad normativa por si es imprescindible realizar modificaciones de plantilla para ajustarse a las nuevas condiciones de los mercados durante o después de la crisis. Y esto es, realmente, lo que necesitan no sólo las empresas sino la sociedad en general, pues su desaparición en tan poco tiempo provocaría un colapso económico nunca antes visto y que afectaría a todos casi por igual.

El problema que esa solución plantea es igualmente muy claro: los gobiernos son los únicos que pueden disponer de esos recursos urgentes, extraordinarios y muy cuantiosos, pero es evidente que ningún Estado del mundo dispone de tanto dinero para ponerlo a disposición de las empresas sin endeudarse.

¿Alguien duda de que si el gobierno español o cualquiera de otro país tuviese recursos infinitos no se habría hecho cargo de todos los gastos de las empresas y trabajadores autónomos, durante el periodo de emergencia sanitaria, para evitar su cierre?

No es creíble que empresarios que están acostumbrados a sacar adelante negocios complicados, a hacer piruetas con sus finanzas y a resolver todo tipo de problemas y gestiones económicas, no sepan que para evitar que la Covid-19 los arruine para siempre es imprescindible que el Estado se endeude para disponer del dinero que necesitan y que esa deuda no la van a pagar en el futuro tan sólo las empresas, sino toda sociedad. Y también cuesta mucho trabajo pensar que personas que conocen tan directamente la realidad como los responsables de las empresas no se den cuenta del peligro brutal que supondría una gestión aventurada de la crisis sanitaria: ¿se imagina el empresariado español lo que le sucedería a sus empresas, a sus patrimonios, a sus familias, a sus descendientes... si por adelantarse imprudentemente la vuelta a la actividad tuviésemos un segundo brote en el otoño o invierno próximos? Los dirigentes empresariales saben echar cuentas muy bien y pueden calcular fácilmente cuánto costaría de más un segundo brote, en relación con el ya extraordinario coste de este primero.

Como presumo que el empresariado español es inteligente y sumamente pragmático, como debe ser quien se juega minuto a minuto su propio patrimonio y el de los demás dando satisfacción a necesidades de otras personas, me permito hacerle las modestas proposiciones que enumero a continuación y que hago extensivas al gobierno de España pues, al fin y al cabo, sería el responsable de llevarlas a cabo, o incluso a los partidos políticos, a los sindicatos y a la sociedad civil en general.

1. Las empresas saben mejor que nadie que hay unos problemas que admiten respuestas diferentes en función de los intereses, de las circunstancias o de las preferencias de cada uno, y otros que sólo se pueden resolver con criterio técnico. Algo que también ocurre con la crisis sanitaria en la que estamos. ¿Por qué no aceptan las empresas y se le propone así a toda la sociedad que sean los técnicos que conocen la evolución de las epidemias quienes decidan las actuaciones a realizar y el modo y el tiempo de llevarlas a cabo, para acabar cuanto antes y de la manera más definitiva posible con la pandemia y con el fin de evitar lo peor que nos puede pasar a todos, sufrir una segunda oleada de infecciones?

2. Si hemos aprendido ya que el riesgo de este tipo de problemas sanitarios va a seguir existiendo ¿por qué no plantean las empresas la necesidad de que el Estado disponga siempre de recursos suficientes para garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios de salud universales? Quien dirija o sea propietario de cualquier tipo de negocio sabe bien que sin vida, sin salud, no hay empresa que sobreviva.

3. Si lo que todos buscamos es salvar con seguridad a todas las empresas, ¿por qué sus responsables y dirigentes no plantean que el Estado se haga cargo (en cierta medida se está haciendo a través de los ERTES pero quizá sin toda la extensión necesaria) de todos sus costes salariales,

que les evite pagar impuestos durante el tiempo necesario y que les proporciones la máxima flexibilidad para que las empresas que lo necesiten se "reinventen" en este periodo de cierre e inmediata reactivación, para poder así ajustarse a las nuevas condiciones económicas y de mercado?

4. Si el único obstáculo que hay para que lo anterior se lleve a cabo en toda la dimensión necesaria es que el Estado debe endeudarse: ¿por qué no se ponen en movimiento las empresas españolas para reclamar que se produzca sin miedo ese endeudamiento que es, al fin y al cabo, el único modo de evitar que muchas de ellas desaparezcan y un colapso sin parangón de nuestra economía?

5. Todos sabemos que nuestra deuda es ya muy alta, pero hay todavía opción para financiar lo que ahora necesitamos, siempre y cuando se den tres circunstancias: un mínimo apoyo europeo, un plan a medio largo para reducir la deuda con eficacia y disciplina y un acuerdo nacional para asumirla como una obligación inevitable y patriótica. Entonces, ¿por qué las empresas españolas no se movilizan para reclamar un acuerdo de todos los partidos, como el de Dinamarca, en donde un plan como el que he propuesto en el punto tres fue aprobado por los diez partidos presentes en su Parlamento, desde la extrema derecha a la extrema izquierda? ¿Por qué las empresas españolas no hacen presión en Bruselas y Frankfurt para que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no tengan miedo a financiar no al gobierno como un fin en sí mismo sino su salvación, la de las empresas? ¿Por qué no piden un pacto de Estado para optimizar el gasto y los ingresos públicos que permita ir aliviando la deuda en los años venideros sin deteriorar la economía, sin acabar con más empresas por falta de gasto y sin deteriorar el bienestar social?

6. Las empresas españolas, y las de todo el mundo, tienden a actuar siempre con un sesgo de conocimiento muy peligroso: no suelen darse cuenta de que lo que es bueno a veces para una sola de ellas es muy negativo para el conjunto de las empresas. Reducir costes salariales, por ejemplo, es posible que sea bueno para una empresa (y no para todas, puesto que eso disminuye la productividad y desincentiva la innovación) pero debilita la demanda y al final todas venden menos. Para evitar ese sesgo que está en el origen del mediocre rendimiento de las economías donde baja la masa salarial, como en la nuestra, mi proposición es la siguiente: ¿por qué las empresas españolas no se plantean mejorar sus ventas y sus beneficios aumentando la demanda que reciben todas ellas en su conjunto, en lugar de tener que luchar denodadamente por meter la cabeza en un mercado interno debilitado y con una demanda empobrecida? ¿Por qué no apuestan por la competencia en lugar de dejarse dominar por el segmento empresarial muy reducido de las empresas que tienen poder de mercado y que tienen asegurados sus ingresos aunque la masa salarial total sea baja, lo que no le ocurre a la inmensa mayoría de las empresas?

¿Por qué no plantean un pacto de rentas global para que, en lugar de tener que arañar constantemente los salarios, puedan obtener incrementos de productividad, para que puedan innovar y para que puedan aprovecharse de un aparato productivo regenerado, para ganar más con una mayor demanda interna, sin el riesgo que supone el empobrecimiento continuado que produce la moderación salarial como único instrumento de competitividad?

7. Es bien sabido que la intervención del Estado es imprescindible para que las empresas puedan funcionar, pues a éstas les resultaría completamente prohibitivo hacerse cargo de los costes que supone la creación y mantenimiento de las infraestructuras, la formación de la población, la salud, la investigación básica que desencadena el avance tecnológico y la mejora del capital, el cuidado de las personas... Como también sabemos el daño que hace, a las empresas y la sociedad en su conjunto, una intervención pública ineficaz, sobrante, despilfarradora, corrupta o mal dirigida. Entonces ¿por qué no plantean las empresas españolas un pacto global para hacer del Estado español un socio transparente y limpio que les facilite la actividad, que invierta con ellas y que las ponga en la pista de despegue, en lugar de ser el protector exclusivo de las grandes fortunas, de las empresas que no compiten sino que dominan los mercados o de los bancos?

Como un modesto observador de los hechos económicos contemplo muy a menudo que el resto de la sociedad no suele apreciar lo que de bueno hacen la mayoría de las empresas y que, con demasiada frecuencia, la gente corriente y los propios trabajadores se desentienden de sus problemas, como si estos no influyeran tan directamente como influyen en todas nuestras vidas. Pero también percibo que las empresas actúan muy a menudo con clichés que les hacen mucho daño, que sus dirigentes defienden, sorprendentemente, estrategias que sólo responden a las conveniencias de un puñado de empresas oligopolísticas, de las más grandes que tienen poder sobre el mercado y que disfrutan de condiciones y privilegios que no tiene la inmensa mayoría de las empresas españolas. Como es fácil comprobar también que, en no pocas ocasiones, las preferencias políticas y los prejuicios ideológicos de sus dirigentes interfieren en las decisiones empresariales.

Los intereses de todas las personas no son los mismos, ni tampoco son iguales los de los propietarios o los trabajadores... pero España se encuentra en estos momentos en una encrucijada extraordinaria y muy difícil. Deberíamos anteponer todos el interés común (o, al menos, el de la gran parte) al de cada uno, si no queremos llegar a una situación que es muy rentable para unos pocos, pero trágica para la inmensa mayoría, no sólo de la gente corriente sino de millones de empresas y trabajadores autónomos.

Las empresas, las organizaciones sindicales, la totalidad de los partidos y el gobierno tienen una responsabilidad común: o llegamos a un acuerdo nacional, de la gran mayoría que no vive a base de privilegios, o nuestros hijos y nietos lo van a pasar muy mal. Tengo la convicción de que el empresariado español podría tener un papel decisivo para que algo así se consiga si plantea con más realismo sus propios problemas, si sabe entender que para que sus empresas salgan adelante se precisa que lo haga la economía y la sociedad en su conjunto y si, por lo tanto, opta por los acuerdos transversales en lugar de poner los huevos en la cesta de una sola corriente política.

LA GRIPE ESPAÑOLA DE 1918 Y EL ASCENSO DEL NAZISMO: TOMEN NOTA

Publicado en Público. es
el 22 de mayo de 2020

Los estudios científicos que han demostrado la alta correlación existente entre el deterioro de la vida económica y el ascenso de la extrema derecha son muy abundantes.

Más concretamente, se han podido demostrar algunos hechos que deberían ser tomados muy en cuenta por nuestros políticos y gobernantes.

En primer lugar, sabemos que el ascenso de la extrema derecha no se produce como consecuencia de cualquier tipo de crisis, sino de las financieras y cuando el periodo de recesión posterior a la crisis es duradero.

También sabemos que las políticas de austeridad, los recortes en el gasto público que llevan consigo disminución de las prestaciones sociales y deterioro de los servicios públicos, están altamente correlacionadas con el ascenso de la extrema derecha. Algo que se ha podido demostrar perfectamente en el caso alemán: tras las políticas de grandes recortes que se llevaron a cabo entre 1930 y 1932, el partido nazi multiplicó su voto, pasando de tener poco más del 2% en 1928 a casi el 45% en 1933.

Desde hace unos días sabemos un poco más sobre el ascenso del nazismo en Alemania pues un economista de la Reserva Federal de Nueva York, Kristian Blickle, ha publicado un estudio, todavía en versión preliminar, en el que se demuestra la gran influencia que la pandemia de gripe española tuvo en el éxito posterior de Adolf Hitler (puede leerse aquí: <https://nyfed.org/3d7Glc1>).

Blickle ha analizado las muertes producidas por aquella pandemia en las diferentes regiones y ciudades alemanas y ha podido comprobar que allí donde la mortalidad fue más alta se registró tiempo después un mayor apoyo electoral a los partidos de extrema derecha y particularmente al nazi.

Su análisis pone de manifiesto que las ciudades y regiones donde hubo más muertos a causa de la pandemia registraron luego más desempleo y recortes de gasto público. Estos dos factores están claramente relacionados con el ascenso de la extrema derecha, según el análisis de Blickle, aunque igualmente demuestra que ni el mayor nivel de paro ni las políticas de austeridad fueron las únicas vías por las que la pandemia terminó produciendo un aumento del voto al partido nazi. De hecho, señala que otras enfermedades, como la tuberculosis, que producían más o menos las mismas muertes que provocó la gripe española, no tuvieron el mismo efecto sobre electoral.

En su opinión, lo que ocurrió fue que aquella pandemia concentró principalmente sus efectos sobre la juventud, primero en cuanto a mortalidad se refiere y, más tarde y a consecuencia del recorte de gasto y del cambio demográfico, en la mentalidad y en las actitudes sociales. Blicke señala, por ejemplo, que los recortes afectaron a servicios disfrutados especialmente por la población más joven y que el origen foráneo del virus fomentó el resentimiento hacia los extranjeros que fueron vistos como responsables de la pandemia. De hecho, muestra que el porcentaje de votos para los extremistas de derecha aumentó particularmente en las regiones que históricamente habían culpado a las minorías de las plagas medievales.

En todo caso, el ascenso del nazismo seguramente no pueda explicarse sólo por ese tipo de razones económicas. También se ha comprobado que influyó decisivamente la enorme polarización social y política de aquel periodo. Leon Trotski retrató muy gráficamente lo que ocurría en esa Alemania donde germinaba el terror. Decía que era como una pirámide en cuyo vértice superior había una bola que la extrema derecha, por una parte, trataba de volcar hacia la izquierda para romper la espalda del movimiento obrero mientras que el partido comunista, por otra, la empujaba hacia el otro lado, para rompérsela al capitalismo.

Después de 2008 sufrimos una recesión larga y muy dura, durante unos años que han visto crecer la extrema derecha en casi todos los países del mundo, hasta el punto de que son bastantes los que están gobernados por líderes extremistas como Trump, Orban o Bolsonaro. El Royal United Service Institute, un centro de estudios inglés bastante conservador, acaba de publicar un pequeño informe en el que se indica que el nivel de amenaza del extremismo de derecha amplificado por la crisis global es alto (aquí: <https://bit.ly/2TuTvIh>). Por un lado, porque está extendiendo la idea de que "la reconstrucción de un orden mundial racialmente puro requiere avivar el caos mediante ataques masivos y tomar las armas para desencadenar una guerra racial"; y, por otro, por el riesgo de que un colapso económico provocado por las medidas necesarias para atajar la pandemia produzca disturbios civiles masivos que desestabilicen a los gobiernos y fuerzas de seguridad.

La Covid-19 no es una pandemia exactamente igual que la provocada por la gripe española, pero deberíamos tener cuidado pues sus antecedentes y la situación que se está generando tienen casi todos los ingredientes que facilitaron la llegada al poder de los nazis: el deterioro económico es evidente, los recortes ya los hemos sufrido y otros nuevos están a la vuelta de la esquina, el desprecio de la política democrática como instrumento de gestión de los asuntos públicos es extraordinario, la polarización agobiante y la xenofobia tremenda. ¿Qué se puede esperar cuando nada más y nada menos que el portavoz del Departamento de

Salud y Servicios Humanos de la primera potencia mundial, Michael Caputo, dice que la Covid-19 se produce porque "millones de chinos chupan la sangre de los murciélagos rabiosos como aperitivo y se comen el culo de los osos hormigueros", o que "los demócratas están presionando para que el virus mate a mucha gente"? (aquí: <https://cnn.it/3ef7WII>).

A mi juicio, la conclusión ante estos estudios históricos y ante la situación en la que nos encontramos es bastante clara. Hay que ser muy pragmáticos porque lo mejor suele ser enemigo de lo bueno: hay que evitar, antes que cualquier otra cosa, que la economía, la situación de las empresas y las condiciones de vida de la gente se deterioren. Y, además, hay que luchar contra la polarización política y tratar de evitarla por todos los medios. Insistir hoy día en una estrategia de confrontación entre derecha e izquierda es la forma más rápida y segura de provocar un choque social de consecuencias nefastas que sufrirán en mayor medida las clases trabajadoras y las personas menos favorecidas. Es imprescindible diseñar un proyecto político de mucha más amplia mayoría, basado en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la transparencia, la libertad, la solidaridad y la justicia; un proyecto que sólo tenga enfrente a quienes se atrincheran en el bunker de sus privilegios y de su inmenso egoísmo, y no a la mitad de la sociedad.